



Vol VIII, Nº 2, diciembre de 2014



"Manifestación", obra del artista argentino Antonio Berni. <http://www.argentina.ar/temas/historia-y-efemerides/1037-antonio-berni>, descargada el 25 de marzo de 2015.

América Latina en la última década: balances y perspectivas respecto del Estado, la conflictividad social y los movimientos sociales.

Guido Galafassi y Claudia Composto
Coordinadores

Entre 1991 y 2006, el Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos (CEIL) y el Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU) coeditaron la revista "Encuentros". En 2007, ambos Centros resolvieron continuar esa edición en versión digital y desagregada en dos revistas electrónicas: Encuentros Latinoamericanos y Encuentros Uruguayos.

REVISTA ENCUEUNTROS LATINOAMERICANOS es una publicación electrónica semestral, especializada en América Latina. Los números se publican en línea, en los meses de junio y diciembre de cada año, presentando cuatro versiones temáticas: 1) Pensamiento, Sociedad y Democracia; 2) Inmigración, Estados, Empresas, Ciencia y Tecnología; 3) Estudios de Género y 4) Estudios Agrarios.

Otras Revistas Científicas de Uruguay:

<http://revistascientificasdeuruquay.wordpress.com/>

ÍNDICE

I. Presentación

América Latina en la última década: balances y perspectivas respecto del Estado, la conflictividad social y los movimientos sociales.....1

II. Dossier

Dilemas del ecosocialismo post-neoliberal y resistencia de los movimientos sociales frente al modelo neo-extractivista en Venezuela.....3

Acumulación, conflictos sociales y políticas de Estado en América Latina en las últimas décadas. Cambios y rupturas en el escenario regional.....48

El acecho de Aguilfo y Gurdulú. Dilemas y tensiones del Estado boliviano en el siglo XXI67

Experiências de lutas em contexto dito pós-neoliberal no Brasil: 2003-2013.....99

Movimientos campesinos e indígenas en México.....170

El posneoliberalismo: apuntes para una discusión.....196

Los movimientos sociales y el Estado en Guatemala: balances y perspectivas.....216

Presentación

América Latina en la última década: balances y perspectivas respecto del Estado, la conflictividad social y los movimientos sociales.

Guido Galafassi y Claudia Composto (coordinadores)

Durante la década del `90, el neoliberalismo se consolidó en toda América Latina mediante una serie de profundas transformaciones estructurales: privatización de los activos estatales, reforma de la administración pública, desregulación, financiarización y reprimarización de las economías nacionales en base a actividades exportadoras con ventajas comparativas, rearticulación de los bloques dominantes por el creciente peso del capital transnacional y la transnacionalización de las fracciones del capital local.

No obstante, todo el período estuvo signado por el auge de masivas protestas y novedosos movimientos sociales que, a nivel regional e internacional, se levantaron contra las nefastas consecuencias que dejaban a su paso las reformas de primera y segunda generación (crecimiento exponencial del desempleo, la pobreza, la marginalidad y el despojo de los bienes comunes). Este importante ciclo de luchas sociales que, desde mediados de aquella década, tuvo lugar en varios países de América Latina (el zapatismo en México, el MST en Brasil, el Movimiento de Trabajadores desocupados en Argentina, la guerra del agua y del gas en Bolivia, etc.), desgastó rápidamente la legitimidad del modelo neoliberal y revirtió la

correlación de fuerzas sociales, aunque con características e intensidades diferentes según los contextos nacionales.

En Venezuela, Bolivia y Ecuador, dio lugar al inicio de promisorios procesos de transición política y cambio constituyente en los albores del nuevo siglo, mediante la llegada a los respectivos gobiernos centrales de actores ligados a los movimientos sociales. Por el contrario, en México, Colombia y Perú, la crisis de la gobernabilidad neoliberal fue revertida “desde arriba” – aunque con gran dificultad- mediante el disciplinamiento social, la represión directa vía militarización/paramilitarización, y la recomposición política y económica claramente conservadora. Por su parte, en Argentina, Brasil y Uruguay se produjeron ciertas inflexiones que, de cualquier modo, no llegaron a implicar una ruptura del modelo, sino más bien una mixtura entre gobiernos con discursos progresistas, medidas puntuales de desmantelamiento de determinados instrumentos y orientaciones neoliberales, y políticas estructurales de continuidad e, incluso, profundización. De modo que, con avances y retrocesos, ambivalencias y dilemas, este quiebre –por lo menos parcial- de la hegemonía neoliberal generó un panorama político latinoamericano mucho más heterogéneo que en la década del ‘90.

Durante el transcurso de una década, este escenario regional fue adquiriendo nuevos matices, asentado ciertas tendencias y abriendo potenciales bifurcaciones. Por todo ello, resulta necesario ajustar diagnósticos, revisar perspectivas y reanudar balances respecto de las continuidades y rupturas que estos procesos políticos dejaron respecto del neoliberalismo, especialmente en torno al Estado y los movimientos sociales. En este sentido, el presente dossier se propone ensayar algunas posibles respuestas críticas a los siguientes interrogantes: ¿Se ha modificado la forma Estado respecto de la etapa anterior? ¿Cuál ha sido la relación entre los gobiernos “post-neoliberales” y los movimientos sociales? ¿Ha habido cambios en las fuentes de conflictividad social? ¿Han emergido nuevos sujetos políticos? El debate está abierto...

Dilemas del ecosocialismo post-neoliberal y resistencia de los movimientos sociales frente al modelo neo-extractivista en Venezuela¹

María Pilar García-Guadilla²

Resumen

A partir de una perspectiva analítica y crítica del movimiento socio-ambiental -el cual está compuesto por la articulación entre el movimiento ambientalista, de derechos humanos e indígena-, el presente trabajo tiene como objetivo identificar las contradicciones y los altos costos sociales y ambientales del modelo “*desarrollista-extractivista*” planteado por el Socialismo del Siglo XXI en Venezuela para orientar la transición post-neoliberal durante el periodo 1999-2013. Dichas contradicciones se relacionan con los factores siguientes: a) la falta de coherencia entre la acentuación del el modelo extractivista impuesto desde arriba, que es el soporte económico del modelo político, y el discurso de la democracia participativa y del desarrollo endógeno sustentable implícitos en los planes de desarrollo de la nación y en las agendas defendidas por el gobierno venezolano en los foros internacionales; b) la incapacidad del gobierno para controlar los fuertes impactos negativos que se desprenden de la aplicación de dicho modelo de desarrollo en las comunidades indígenas y en las zonas de mayor biodiversidad y vulnerabilidad ecológica y c) el hecho que los planes y políticas de desarrollo se han diseñado sin tomar en cuenta ni los derechos constitucionales en materia ambiental e indígena ni las expectativas y demandas del movimiento socio-ambiental por lo que se generado una fuerte resistencia contra éstos. Además, en una economía rentista como la venezolana la cual está basada en la explotación de los hidrocarburos, la necesidad de ingresos para alimentar las Misiones Sociales las cuales son esenciales para reducir la pobreza y lograr la inclusión social, ha impedido transcender el capitalismo globalizador. En este contexto, el movimiento socio-ambiental se considera amenazado, no por el modelo político el cual comparten en la mayoría de los casos

¹ Trabajo presentado en el XXXI International Congress of the Latin American Studies Association (LASA). Washington D.C (29 de mayo al 1 de junio de 2013).

² Universidad Simón Bolívar. npgarcia@usb.ve

sino por la lógica que subyace al modelo de “progreso-extractivista” el cual origina elevados costos socio-ambientales.

Palabras clave: Modelo económico extractivista y neoextractivista, movimientos ambientales, indígenas y de derechos humanos en Venezuela, nuevos gobiernos de izquierda y Ecosocialismo del Siglo XXI

Abstract

From an analytical and critical perspective of the environmental movement, which is composed of the environmental, indigenous and human rights movements, study is intended to identify contradictions and the high social and environmental costs of the developmentalist and extractive" economic model posed by the 21st Century Socialism in Venezuela to guide the post-neo-liberal transition during the period 1999-2013. Such contradictions are related to the following factors: a) the lack of coherence between the accentuation of the extractive model imposed from above, which is the financial support of the political model, and the discourse of participative democracy and sustainable endogenous development implicit in the nation's development plans and agendas defended by the Venezuelan Government in international forums; b) the inability of the Government to control the strong negative impacts deriving from the application of this model of development in indigenous communities and the areas of greatest biodiversity and ecological vulnerability and, c) the fact that development policies and plans have been designed without taking into account neither the environmental and indigenous constitutional rights nor expectations and demands of the environmental movement so they have generated strong resistance. In addition, in a rentier economy based on the exploitation of hydrocarbons such as the Venezuelan, the need for revenues to feed the social missions which are essential to reduce poverty and achieve social inclusion, has prevented transcend globalizing capitalism. In this context, the environmental movement is threatened, not by the political model which share in the majority of cases, but by the logic underlying the extractive economic model which originates high social and environmental costs.

Key words: Extractive and Neoextractive Economic Model, environmental, indigenous and human rights social movements in Venezuela, New Left Governments in Latin America and 21st Century Ecosocialism

Ecosocialismo del Siglo XXI y transición post-neoliberal: antecedentes e interrogantes

A lo largo de la década de los noventa, los movimientos sociales principalmente los movimientos populares, ambientalistas e indígenas redoblaron su crítica a la democracia fundamentalmente representativa y a la políticas neoliberales y reclamaron a través de las redes que conformaron, la inclusión legal-constitucional de sus demandas, su reconocimiento como actores sociopolíticos y una mayor participación en los asuntos públicos a

través de una Reforma Constitucional profunda y en algunos casos, de un Proceso Constituyente. También en los años noventa y en respuesta a la movilización de los movimientos socio-ambientales, los gobiernos de América Latina incorporaron el discurso del desarrollo sostenible y de la democracia participativa en las agendas regionales tales como *Nuestra propia Agenda*³ donde se destacó el papel que debía jugar la democracia para el desarrollo sostenible y la necesidad de complementar la democracia representativa con la denominada "democracia participativa"⁴.

En la Cumbre sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992 tanto los gobiernos de América Latina y del Caribe como los movimientos sociales presentes identificaron a la pobreza y al subdesarrollo como los problemas ambientales más relevantes del Tercer Mundo destacando que para lograr el desarrollo sostenible, era necesario disminuir la pobreza y aumentar la equidad social a nivel nacional e internacional; también enfatizaron que la globalización económica y sus corolarios tales como el libre comercio y la privatización exacerbaban los problemas socio-ambientales en lugar de disminuirlos como argumentaban los países industrializados y las instituciones internacionales. Sin embargo, durante las tres décadas transcurridas desde la Cumbre de Río de Janeiro, estos principios y enunciados no se han expresado en los planes de desarrollo que orientan las políticas y programas de estos gobiernos.

En Venezuela, la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 dio inicio a una coyuntura crítica⁵ al definirse un nuevo proyecto sociopolítico de corte anti-

³ CDAALC, *Nuestra Propia Agenda*, New York, Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y El Caribe, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo/Banco Interamericano de Desarrollo, 1990.

⁴ GABALDÓN, Arnoldo José, "Del informe Brundtland a nuestra propia agenda", en María Pilar García-Guadilla y Jutta Blauert (eds.) *Retos al desarrollo y la democracia: movimientos ambientales en América Latina y Europa*, Caracas, Nueva Sociedad y Fundación Friedrich Ebert de México, 1994, pp.27-36

⁵ COLLIER, Ruth y COLLIER, David, *Shaping the Political Arena*, University of Notre Dame, 2002.

neoliberal y un proceso constituyente cuya constitución resultante institucionalizó la democracia participativa y las demandas de inclusión por las que venían luchando y movilizándose tanto los sectores populares como los nuevos movimientos sociales. Estos dos grupos utilizaron la oportunidad política abierta por la nueva constitución para participar activamente en los espacios generados e incorporarse como actores sociopolíticos y, en el caso del movimiento socio-ambiental que en la actualidad articula a los movimientos indígena, ambientalista y de derechos humanos, para incluir sus demandas por un modelo de desarrollo sostenible y justo. Como consecuencia de la constitucionalización de los derechos ambientales e indígenas y de la extensión y priorización de los derechos socioeconómicos y colectivos, el movimiento socio-ambiental venezolano ha venido defendiendo nuevas nociones de ciudadanía y nuevas racionalidades basadas en los derechos de las comunidades indígenas a sus territorios ancestrales y sus modos de vida y en los derechos de la naturaleza.

Sin embargo, tal como se discutirá más adelante, los planes de desarrollo económico y social de la nación y la estrategia propuesta para lograr la soberanía e integración energética latinoamericana refuerzan un modelo “*desarrollista y extractivista*” que tiene altos costos sociales y ambientales y que está basado en la importancia “*revolucionaria*” que se le asigna a los hidrocarburos. Los movimientos sociales han rechazado tal modelo no solo por los elevados costos descritos sino también porque vulnera los derechos constitucionales anteriormente descritos. La implementación de este modelo a través de los tres planes de desarrollo de la nación que se han elaborado desde el año 2001 al 2013 contradice las posiciones discursivamente críticas del gobierno contra el neoliberalismo, el capitalismo y la globalización expresadas en las diferentes cumbres ambientales, económicas y sociales y resulta incompatible con el discurso gubernamental que legitima el lenguaje de los movimientos sociales. Ello ha generado una fuerte resistencia por parte de los movimientos sociales anti-neoliberales como lo es el movimiento socio-

ambiental quienes, vienen utilizando una dinámica movilizadora para defender sus derechos y presionar de forma directa al Estado; es decir sin las mediaciones organizativas a las que acusan de “burocráticas”. El movimiento socio-ambiental se considera amenazado no por el modelo político el cual comparten en la mayoría de los casos, sino por el modelo económico que orienta los planes nacionales y las políticas de desarrollo.

A partir de una perspectiva analítica y crítica del movimiento socio-ambiental venezolano, el presente trabajo tiene como objetivo identificar las contradicciones del modelo de democracia y de desarrollo económico planteados por el Socialismo del Siglo XXI para orientar la transición post-neoliberal durante el periodo 1999-2013. Dichas contradicciones se relacionan con la falta de coherencia entre la acentuación del el modelo extractivista que es el soporte económico de este modelo político y el discurso de democracia participativa y del desarrollo endógeno sustentable implícitos en las agendas defendidas por el gobierno venezolano en los foros internacionales; la incapacidad del gobierno para controlar los fuertes impactos negativos que se desprenden de la aplicación de dicho modelo de desarrollo en las comunidades indígenas y en zonas de alta biodiversidad y vulnerabilidad ecológica y el hecho que estos planes no han tomado en cuenta las expectativas y demandas del movimiento socio-ambiental ha generado una fuerte resistencia entre estos últimos. La necesidad de generar ingresos para luchar contra el neoliberalismo y alimentar las Misiones Sociales para reducir la pobreza y lograr la inclusión social ha impedido transcender el capitalismo globalizador que cuestionan tanto los movimiento sociales como los gobiernos de las nuevas izquierdas latinoamericanas como es el caso de Venezuela.

Tales contradicciones llevan a plantear las siguientes interrogantes: ¿En qué medida los planes de desarrollo nacional y regional de Venezuela despliegan una agenda que sea coherente con el discurso anti-capitalista, anti-neoliberal, anti-globalización y pro-desarrollo sostenible del gobierno? ¿En qué medida tales planes, políticas y proyectos responden a los derechos

sancionados en la Constitución de 1999 y a las demandas de inclusión de nuevas racionalidades del movimiento socio-ambiental? ¿Puede una economía extractiva como la venezolana llegar a ser sostenible en el contexto del rentismo petrolero y la elevada polarización política e ideológica de la problemática indígena y ambiental de manera de controlar los impactos negativos de carácter ambiental y sociocultural que derivan de tal modelo productivo?

¿Rentismo y socialismo petrolero post-neoliberal?

Desde fines de los años 20 cuando el país se convirtió en exportador de petróleo, Venezuela ha tenido una economía minero-extractiva que se basa en la explotación de recursos naturales no renovables y cuya renta petrolera se ha utilizado para apuntalar el desarrollo económico y la gobernabilidad democrática; la dependencia del petróleo ha tendido a aumentar en los últimos años llegando a representar el 95% del valor total de las exportaciones para el 2010⁶.

A pesar del discurso crítico contra el capitalismo y el neoliberalismo del presidente Hugo Chávez, los planes de desarrollo del país y las políticas públicas y proyectos del denominado Socialismo del Siglo XXI para el periodo 2001-2013 continuaron apoyándose en la renta petrolera⁷, y en el modelo productivo exportador resultante produciendo fuertes impactos socio-ambientales que han dado origen a conflictos entre el Estado y el movimiento socio-ambiental venezolano. Si bien es cierto que la mayoría de los conflictos socio-ambientales más emblemáticos durante el gobierno del presidente Chávez vienen de gobiernos anteriores; éstos no solo no se han resuelto bajo

⁶ BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, *Exportaciones e importaciones de bienes y servicios según sectores. Balanza de pagos y otros indicadores del sector externo*, Caracas, Banco Central de Venezuela, 2011.

⁷ Ello se vio ayudado por el aumento vertiginoso de los precios del petróleo una vez que Hugo Chávez llegó a la presidencia.

el Socialismo del Siglo XXI sino que algunos se han agudizado. Entre estos conflictos, se pueden destacar: a) el conflicto del Tendido Eléctrico debido a la instalación de un cableado de alto voltaje eléctrico que cruzó el parque nacional Canaima y afectó la rica biodiversidad y los hábitat y culturas indígenas⁸; b) el conflicto en la Reserva Forestal de Imataca donde se aprobó la actividad minera que los planes de desarrollo nacional consideran como una actividad “sustentable” a pesar que la misma se desarrollaría en una zona de alta sensibilidad ambiental y diversidad ecológica⁹; c) los conflictos derivados de la minería, sea la explotación de oro y diamantes en la cuenca del Río Caroní tributario del río de Orinoco en el Estado Bolívar o el incremento de la explotación carbonífera en el Sierra de Perijá del Estado Zulia, hábitat originario de los Yutpas, Bari y otros grupos indígenas quienes además de denunciar los elevados impactos negativos de tal explotación demandan la demarcación y posesión de las tierras que constitucionalmente les pertenecen ancestralmente¹⁰; y d) el conflicto alrededor de la construcción de mega-infraestructuras para la exportación de hidrocarburos cuyo objetivo es lograr la soberanía energética y la integración de los países latinoamericanos y del Caribe a través de la *Iniciativa para la Integración Regional de Suramérica* (IIRSA) la cual está originando fuertes impactos negativos socio-culturales y socio-ambientales.

Puesto que la mayoría de estos conflictos se localizan en áreas sumamente sensibles desde el punto de vista ecológico las cuales por lo general se corresponden con el hábitat original de las comunidades indígenas, no es posible separar las luchas ambientales de la población indígena de los

⁸ RODRÍGUEZ, Claudia, *Conflictos indígenas y ambientales en el Estado Bolívar*, Tesis de Maestría, Caracas, Universidad Simón Bolívar, 2001.

⁹ BUROZ, María Teresa, *Concepciones y racionalidades del desarrollo sostenible. Caso: la apertura minera en la reserva forestal de Imataca, Venezuela*, Manuscrito Tesis de Licenciatura, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2001; MÉNDEZ, Diana, *Conflicto sociopolítico y socio-ambiental de la apertura minera en la Reserva Forestal de Imataca*, Manuscrito de Tesis de Licenciatura, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1999.

¹⁰ RODRÍGUEZ, Laura, *El Conflicto socio-ambiental en la Sierra de Perijá. Concepciones sobre el desarrollo y alcances de la democracia ambiental (2000-2010)*. Tesis de Maestría, Caracas, Universidad Simón Bolívar, 2012.

derechos constitucionales a su territorio y a su cultura. Tampoco es posible separar estos conflictos de la definición y aplicación de los planes de desarrollo nacional pues tanto en el *Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación 2001-2007*¹¹, el *Proyecto Nacional Simón Bolívar o Primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013*¹² e incluso el *Plan de la Patria o Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019* se vincula el desarrollo con la explotación del petróleo y otros recursos naturales no renovables¹³.

Además, se amplía el alcance geopolítico de estos planes en comparación con los planes de desarrollo de gobiernos previos, a la región Suramericana y del Caribe. Tal como se expresa en el PPSDESN: “*la política de Plena Soberanía Petrolera es una política internacional, de alianza con todos aquellos países (...) que insisten en desarrollarse como naciones*”¹⁴; por su parte, el Plan de la Patria (2013-2019) plantea la transformación de Venezuela en una “*Potencia Energética Mundial*”.

En el Plan de la Patria se destaca que la construcción del “*Socialismo Bolivariano del Siglo XXI*” el cual se propone como alternativa “*Al sistema destructivo y salvaje del Capitalismo*”, debe trascender el “*modelo rentista petrolero capitalista*”. Su objetivo es: “*alcanzar la suprema felicidad social de*

¹¹ MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, *Líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2001-2007*, Caracas, Ministerio de Planificación y Desarrollo, 2001. Disponible en: <http://www.mpd.gov.ve/pdeysn/plan.htm>. [Consultado el 11/7/2011].

¹² PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, “*Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación. 2007-2013*”, República Bolivariana de Venezuela, 2007. Disponible en: http://www.bibliotecasvirtuales.org.ve/spaw/docs/Mapa_Lineas_General_Econ_Social_Plan_2007_2013.pdf [Consultado el 11/2/2011].

¹³ Para ello, uno de los lemas de la compañía petrolera nacional PDVSA fue el rescate de los intereses transnacionales mediante la “*auténtica nacionalización*” de los hidrocarburos. Véase PDVSA, *Auténtica Nacionalización*, Caracas, Ministerio de Poder Popular de Petróleo y Minería, s/f. Disponible en: http://www.pdvs.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuprinc.tpl.html&newsid_temas=44. [Consultado el 4/4/2012]

¹⁴ PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, “*Proyecto Nacional Simón Bolívar, op. cit.*”, p.39.

pueblo, esto pasa, en primer lugar, por acelerar el cambio del sistema económico, trascendiendo del modelo rentista petrolero capitalista al modelo económico productivo socialista, dando paso a una sociedad más igualitaria y justa, rumbo al socialismo, sustentado en el rol del Estado Social y Democrático, de Derecho y de Justicia, con el fin de seguir avanzando en la plena satisfacción de las necesidades básicas para la vida de nuestro pueblo"¹⁵

No obstante, el Socialismo del Siglo XXI enfrenta dificultades estructurales para trascender el modelo rentista petrolero pues la renta petrolera se ha considerado como un recurso imprescindible para asegurar el desarrollo nacional, el desarrollo social, la equidad y la soberanía en todos los planes donde, el uso intensivo de los recursos naturales sobre todo los hidrocarburos que se considera el puntal del crecimiento económico debe activar el desarrollo humano, social y étnico-local, mejorar la calidad de la vida de la población y subvencionar las políticas distributivas o Misiones Sociales¹⁶. Implícitamente, el petróleo es también un medio para lograr mayor gobernabilidad y legitimidad social y política; los hidrocarburos desempeñan un papel dominante *"en la lucha contra la pobreza (...) y para el Desarrollo Sustentable Internacional"*¹⁷.

¹⁵ PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, *Plan Patria. Segundo Plan Socialista Económico y Social de la Nación 2013-2019*, República Bolivariana de Venezuela, 28 de septiembre 2013. Disponible en: http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/botones/bot_90998c61a54764da3be94c3715079a7e74416eba.pdf. [Consultado el 23/5/2014].

¹⁶ A fines del 2003 el presidente Chávez estimuló la creación de los programas sociales conocidos como *"las Misiones a ser implementadas en las áreas más pobres de Venezuela con la participación de los miembros de las comunidades. Se comenzó con una pequeña cantidad de misiones y hoy en día existen 26 misiones que cubren gran cantidad de necesidades sociales"* con el objetivo de aumentar la legitimidad social y política frente a la solicitud de un revocatorio presidencial por parte de la oposición política.. Véase: <http://venezuela-us.org/economia-y-desarrollo-social> [Consultado 4/4/2012].

¹⁷ PÉREZ, Jesús, *La Revolución Bolivariana. La vía venezolana hacia el Desarrollo Sustentable*, Departamento de América Latina y el Caribe, Centro de Estudios Latinoamericanos, 2007, s/p. Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/37237/Documento_completo.pdf?sequence=1. [Consultado el 1/5/2009].

Al igual que en el pasado donde la renta petrolera apuntaló la democracia representativa fundamentada en el Pacto de Punto Fijo¹⁸, hoy en día el “*proyecto socialista se impulsa y elabora a partir de la renta petrolera*”¹⁹. No obstante, bajo la Constitución de 1961, la renta petrolera se utilizó para neutralizar los conflictos entre las elites²⁰ mientras que bajo la Constitución de 1999, la renta petrolera debe servir para reducir los conflictos resultantes de la pobreza y desigualdad social y coadyuvar al logro de mayor equidad y justicia social; estos objetivos los cuales deben lograrse mediante el estímulo a las misiones sociales suponen el reforzamiento del rentismo petrolero. La contribución de PDVSA al Fondo para el Desarrollo Económico y Social del País (FONDESPA) que promueve el desarrollo integral de los venezolanos mediante el uso de la renta “*revolucionaria*” del petróleo para ayudar con la Misiones Sociales, “*es una de las formas en que PDVSA se involucra con todos los venezolanos, aspirando a un desarrollo integral del ciudadano, enmarcado en los principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*”²¹. Es por ello que el gobierno ha definido a las misiones sociales y en general, a las políticas de financiamiento de la extensa red de Consejos Comunales²² como herramientas para la inclusión.

¹⁸ KARL, Terry, *The paradox of plenty oil booms in Petro-State*, University of California Press, 1997.

¹⁹ Véase <http://historiactual.blogspot.com/2012/02/cpt-la-renta-petrolera-base-y.html> [Consultado el 1/2/2013].

²⁰ REY, Juan Carlos, *El Futuro de la democracia en Venezuela*, Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 1998.

²¹ PDVSA, *Petróleo para el pueblo*, Caracas, Ministerio de Poder Popular de Petróleo y Minería, s/f. Disponible en: http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuprinc2.tpl.html&newsid_tema_s=38 [Consultado el 1/4/2013].

²² Los “consejos comunales” son organizaciones sociales creadas en 2006 por iniciativa presidencial para lograr los cambios necesarios de modo de arribar a la revolución de bolivariana y lograr el Socialismo del Siglo XXI. La actividad principal de los 40.629 consejos comunales ha sido la formulación de los proyectos que benefician a su hábitat territorial y así recibir los recursos ofrecidos por el gobierno para la mejora de la calidad de vida y la gestión de los servicios comunitarios. CAIONE, Cecilia, “Creación de las comunas sufrió tropiezos”, en *Últimas Noticias*, Caracas, 2011. Disponible en: <http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/creacion-de-comunas-sufrio-tropiezos.aspx> [Consultado el 04/4/ 2013]; GARCÍA-GUADILLA, María Pilar, “La praxis de los Consejos Comunales: ¿poder popular o instancia clientelar?”, en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, 2008, Vol.14, N°1, pp.125-151; GARCÍA-GUADILLA, María Pilar, “Poder Popular y organizaciones comunitarias en Venezuela: alcances y límites de la

Además de ser una herramienta “*revolucionaria*” para la inclusión y contra el imperialismo y la globalización, el petróleo, el gas y demás hidrocarburos también son considerados por el gobierno como mecanismos esenciales para la integración económica, comercial, política y de la infraestructura física²³. Dentro de las políticas de distribución social, el gobierno venezolano utiliza el subsidio a las exportaciones petroleras hacia la comunidad del Caribe (CARICOM) como una forma de solidaridad internacional; tales políticas pudieran considerarse también como un arma para la deseada hegemonía de Venezuela en la región del Caribe a través de PETROCARIBE. Debe destacarse que la exportación de petróleo hacia estos países cuenta con una fuerte subvención a los precios y que el costo ambiental o los impactos ambientales negativos no han sido tomados en cuenta. También se debe señalar que la mayor parte de las instituciones para la integración regional y sub-regional tales como la CAN (Comunidad Andina de Naciones), MERCOSUR (Mercado Común del Sur), ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) y el CARICOM fueron concebidas como mecanismos para la incorporación de los países miembros en la economía global²⁴ y que tales instituciones enfatizan la necesidad de la liberalización del comercio regional y la complementación de los acuerdos económicos y comerciales con los de integración física a través de la denominada Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)²⁵.

democracia directa en el ciclo comunal”, en Antonino Opazo, Fernanda Palacios, Klaudio Duarte, Manuel Canales, Tomás Villasante (eds.) *Construyendo democracias y metodologías participativas desde el Sur*, Santiago de Chile, LOM, 2013; ÁLVAREZ, Rosangel y GARCÍA-GUADILLA, María Pilar, “Contraloría Social y clientelismo: la praxis de los Consejos Comunales en Venezuela”, en *Politeia*, 2011, Vol. 34, N°46, pp.175-207.

²³ CEPAL, “Infraestructura física e integración regional”, en *Boletín FAL*, 2009, N°280. Disponible en: <http://www.cepal.org/usi/noticias/bolfall/7/38207/FAL-280-WEB.pdf>. [Consultado el 5/3/2013].

²⁴ *Ibíd.*

²⁵ El papel estratégico del proyecto IIRSA consiste en superar los obstáculos a la integración física, fomentar el comercio inter-regional en Suramérica, estimular y reorganizar el aparato y las cadenas productivas, contribuir a una economía integrada, competitiva y dinámica en América del Sur; todo ello dentro del marco de la sustentabilidad social y ambiental de modo de estimular la participación del sector privado, armonizar las políticas públicas y el marco

La IIRSA, creada en el año 2000, contempla la consolidación de una red importante de comunicaciones mediante la construcción de la infraestructura de apoyo terrestre, fluvial y de transporte que se supone permitirá el movimiento eficiente de las mercancías, la información y la energía²⁶. Se asume que la IIRSA será financiado principalmente por instituciones regionales tales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) entre otras y estará co-financiada por cada país suramericano y otras entidades tales como la Unión Europea. Debido a la variedad de instituciones regionales que confluyen, la IIRSA constituye uno de los mecanismos principales de la Región para lograr una mayor competitividad en la explotación de recursos naturales y en la producción y el transporte de bienes y servicios así como también, para estimular el desarrollo económico mediante la ampliación del área productiva a los mercados nacionales, regionales y globales. Incluye quinientos siete proyectos (507) de infraestructura, energía y telecomunicaciones de transporte distribuidos en diez ejes de desarrollo de los cuales Venezuela participa en dos: el eje Andino con Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú y el Eje Guayanés con el Brasil, Guyana y Surinam²⁷. Una década después de su creación en el año 2000, la IIRSA fue revitalizada a

regulador entre los países y los diferentes sectores de la economía. Su objetivo final es reducir los costos comerciales y de distribución a través del desarrollo de infraestructura para el transporte, el desarrollo energético y las telecomunicaciones.

²⁶ IIRSA, "Base de datos de proyectos", en *Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana*, 2011a. Disponible en: <http://www.iirsa.org/proyectos/Proyectos.aspx> [Consultado el 4/4/2013]; IIRSA, "Cartera de Proyectos IIRSA", en *Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana*, 2011b. Disponible en: <http://www.iirsa.org/Cartera.asp> [Consultado el 4/4/2013]; IIRSA, "IIRSA 10 años después: Sus logros y desafíos", en *Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana*, 2011c. Disponible en: http://www.iirsa.org/BancoConocimiento/I/iirsa_10_anos_despues_sus_logros_y_desafios/iirsa_10_anos_despues_sus_logros_y_desafios.asp?CodIdioma=ESP [Consultado el 10/3/2012].

²⁷ PDVSA, *Informe de Gestión Anual 2009*, Caracas, Ministerio de Poder Popular de Petróleo y Minería, 2009. Disponible en: <http://www.pdvsa.com/interfase.sp/database/fichero/free/5889/1049.PDF>. [Consultado el 27/5/2012]; PDVSA, *Informe de Gestión Anual 2010*, Caracas, Ministerio de Poder Popular de Petróleo y Minería, 2010. Disponible en: <http://es.scribd.com/doc/51489238/PDVSA-Informe-Anual-Gestion-2010>. [Consultado el 27/5/2012]; PDVSA, *Informe de Gestión Anual 2011*, Caracas, Ministerio de Poder Popular de Petróleo y Minería, 2011. Disponible en: <http://static.eluniversal.com/2012/04/17/informedegestion.pdf>. [Consultado el 27/5/2012].

través del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento²⁸ de la Unión de Naciones Suramericanas

¿Continuidad o ruptura con el modelo de capitalismo global?: los planes de desarrollo del Socialismo del Siglo XXI en Venezuela

De acuerdo con las declaraciones del Presidente Chávez en la Cumbre de Copenhague en 2009, se deben “*reducir todas las emisiones que están destruyendo el planeta, eso exige un cambio de modelo económico: debemos pasar del capitalismo al socialismo*”²⁹. Sin embargo, el modelo económico venezolano vertido en los planes de desarrollo nacional 2001-2007 (PDESN) y 2007-2013 (PPSDESN) enfatizan la explotación de recursos naturales para lograr el desarrollo económico y sostienen la premisa que tal explotación puede ser ambientalmente sostenible. El PDESN destaca la intención de “*orientar la explotación hacia el aprovechamiento racional de los recursos con especial atención a su impacto ecológico como parte de un desarrollo económico sustentable para el país, a este respecto se ordenará y fortalecerá el sector minero, continuando su reactivación, aprovechando los potenciales existentes, preservando el ambiente y mejorando la situación económica y social de las regiones*”³⁰; el PDESN también destaca que se debe preservar el ambiente para lo cual es necesario “*monitorear rigurosamente el impacto ambiental de la explotación minera*”³¹.

28 COSIPLAN, *Plan de Trabajo 2012*, COSIPLAN-IIRSA, 2012. Disponible en: www.iirsa.org/.../rc_brasilia11_6_plan_de_trabajo_2012.pdf [Consultado el 5/4/2013]; COSIPLAN, *Plan de Acción Estratégico 2012-2022*, COSIPLAN-IIRSA, 2012. Disponible en: www.iirsa.org/.../rc_brasilia11_6_plan_de_trabajo_2012.pdf [Consultado el 10/2/2013].

29 GOODMAN, Amy, “Chávez: ‘Debemos pasar del capitalismo al socialismo’”. Entrevista con el presidente venezolano Hugo Chávez”, en *Libre Pensamiento*, 2 de enero 2010. Disponible en: <http://librepenicmoncjoze.blogspot.com.ar/2010/01/212010-chavez-debemos-pasar-del.html>. [Consultado el 22 de abril de 2012].

30 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, *Líneas generales del Plan de Desarrollo...*, op. cit., p. 82-83.

María Pilar García-Guadilla: *Dilemas del ecosocialismo post-neoliberal y resistencia de los movimientos sociales frente al modelo neo-extractivista en Venezuela*, (pp. 3-47)

La pretensión del PDES N de re-verdecer la economía extractiva mediante una explotación *minera ecológica resulta difícil de concretar* debido a que tal tipo de desarrollo implica la subordinación de la dimensión sociocultural y ambiental a la económica desconociéndose la magnitud y extensión de los impactos negativos ecológicos y socio-culturales que tal actividad minera viene ocasionando. De hecho, no se incorporaron en el plan pautas para resolver los potenciales conflictos socio-ambientales que efectivamente emergieron debido a que tales actividades extractivas están teniendo un impacto negativo alto en gran parte de los territorios indígenas al coincidir la minería con áreas bio-diversas y de alta fragilidad ecológica y cultural; además, el desarrollo de actividades mineras en estas zonas contradice el mandato constitucional que señala que el Estado debe de tomar en cuenta las características etno-culturales de cada comunidad para la promoción de las actividades económicas.

Otra conflicto que se observa en los planes de desarrollo nacionales es cómo combinar los intereses económicos con los sociales. La “*economía social*” que debe ser desarrollada por el Estado para apoyar sus políticas sociales distributivas, debe vincularse con la noción de justicia social y tiene como objetivo la democratización del Mercado y de la economía a través de la participación de las comunidades locales y de los trabajadores en las denominadas “*empresas alternativas*”. El conflicto deriva del hecho que los impactos negativos resultantes de las políticas económicas y de los proyectos propuestos para el desarrollo no garantizan el logro de los objetivos sociales a menos que el objetivo de crecimiento económico se equilibre con los de equidad social y sostenibilidad ambiental, hecho que no se observa en estos planes por lo que se dificulta alcanzar la justicia social.

Uno de los objetivos del PPSDES N es “*la implementación de un modelo de desarrollo (...), un modelo de producción y de consumo que ponga límites al*

³¹ *Ibíd.*, p. 83.

*crecimiento sin postergar los derechos de los pobres*³². Es decir, que los límites al crecimiento de tal modelo no pueden afectar el desarrollo de la extensa red de políticas sociales, incluidas las Misiones Sociales. Dada la estrecha vinculación que existe entre la renta petrolera y los programas sociales que se alimentan de los altos precios del petróleo que existen en la actualidad, la posibilidad de reducir la explotación de hidrocarburos parece poco probable; menos aun en el caso que el precio del petróleo disminuyera. Ello significa que si bien la diversificación productiva se incluyó en ambos planes de desarrollo nacional, dicho objetivo no se ha traducido en políticas ni proyectos concretos.

Al menos dos de los siete lineamientos generales incluidos en el PPSDESN pueden contradecirse como es el caso de diseño de una *“nueva geopolítica nacional”* y la definición de Venezuela como una *“potencia energética mundial”*³³. Mientras que la nueva geopolítica nacional destaca la protección de las áreas ecológicamente sensibles para la conservación del agua y de la biodiversidad y la definición de un modelo productivo y de acumulación que sea ambientalmente sostenible y que reduzca los impactos ambientales producto de la intervención humana, convertirse en una potencia energética mundial con base en el petróleo el cual *“no sólo puede considerarse una fuente rentística extraordinaria, sino que también puede considerarse una palanca poderosa de desarrollo industrial que va más allá de su extracción y que abarca las actividades subsiguientes, es decir, primero la refinación y luego la petroquímica”*³⁴ requiere aumentar la producción de hidrocarburos y construir mega-infraestructuras que afectarán severamente la preservación del equilibrio de los ecosistemas en aquellas áreas de explotación donde exista una alta biodiversidad.

³² PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, *Plan Patria. Segundo Plan Socialista...*, op. cit., p. 10.

³³ *Ibíd.*, p. 6.

María Pilar García-Guadilla: *Dilemas del ecosocialismo post-neoliberal y resistencia de los movimientos sociales frente al modelo neo-extractivista en Venezuela*, (pp. 3-47)

Además de los conflictos relacionados con la brecha que existe entre los planes de desarrollo y su concreción en políticas y proyectos que sean coherentes con los objetivos de estos planes, existen otros conflictos que se deben a la incapacidad del gobierno para visualizar los efectos perniciosos de la economía extractiva. Al igual que hicieron los gobiernos anteriores, un ejemplo de ello es la imagen que fue promovida por el presidente Chávez y por los medios de comunicación de que la compañía petrolera PDVSA es ambientalmente limpia; la discusión sobre los impactos negativos de la industria petrolera como por ejemplo la contaminación atmosférica o la contaminación del agua por derrames fue y sigue siendo frecuentemente ocultada o minimizada por PDVSA.

Según la organización de derechos humanos PROVEA, la divulgación en los medios de comunicación de cualquier tipo de información que el gobierno considere desestabiliza a la población está siendo incriminada por el gobierno quien ha puesto *“obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión”*³⁵ y ejercido *“acciones para penalizar la opinión crítica o disidente de periodistas, medios de comunicación”*³⁶. PROVEA destaca en su Informe de 2011 *“que desde 2004 el Estado venezolano viene implementando un articulado jurídico para criminalizar la protesta pacífica”*³⁷. Un ejemplo es el caso del derramamiento de petróleo en el Río Guarapiche en el estado de Monagas ocurrido en febrero de 2012³⁸ cuando las fuentes de agua potable se contaminaron seriamente y el gobierno emitió una medida cautelar exigiendo a

³⁴ *Ibíd.*, p. 40.

³⁵ PROVEA, *Informes Anuales 2004-2011*, Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos, 2011, pp.299. Disponible en: <http://www.derechos.org.ve/> [Consultado el 27/5/2012].

³⁶ PROVEA, “Derecho a la libertad de expresión e información”, en *Comunicación: estudios venezolanos de comunicación*, 2009, N°145, p.305.

³⁷ *Ibíd.*, p.344.

³⁸ Sobre este conflicto véase INFORME21.COM, “Emergencia en Monagas por derrame de petróleo en el Río Guarapiche”, en *Informe21.com*, 10 de febrero 2012. Disponible en: <http://informe21.com/actualidad/12/02/10/emergencia-en-monagas-por-derrame-de-petroleo-en-el-rio-guarapiche-fotos>; CARRASQUEL, Gustavo, “Azul Ambientalistas ante el derrame de petrolero sin precedentes en el Río Guarapiche de Maturín”, en *Soberanía*, 14 de febrero 2012. Disponible en: http://www.soberania.org/Articulos/articulo_7060.htm

los medios de comunicación “*que la labor informativa sobre el tema sea respaldada con informes técnicos de una entidad competente*”³⁹. Ello implicó negar a la población afectada la necesaria información sobre la calidad del agua potable pues se debían utilizar los propios informes del gobierno, quien se arrogó el monopolio para emitir la información respectiva y se inhibió de dar información a la población afectada que considerara podría dañar su imagen. Lo mismo ocurrió con la explosión del 25 de agosto de 2012 ocurrida en la Refinería de Amuay en el Oriente⁴⁰ del país unas semanas antes de las elecciones presidenciales y donde murieron más de 28 personas según fuentes oficiales pero donde ni las causas ni el número exacto de muertos y heridos fueron conocidos debido al control de la información por parte del gobierno y a la amenaza de sancionar a los medios de comunicación que emitieran cualquier información (así fuera “*veraz*” como lo definen las leyes) que pudiera causar “*desestabilización* “ entre la población o indirectamente, dañar su imagen.

Bajo el Socialismo del Siglo XXI, el Estado pasó a desempeñar un rol más activo en la economía re-nacionalizando muchas de las industrias que fueron privatizadas en los años ochenta. Sin embargo, la creciente socialización de los medios de la producción no ha servido para que el gobierno controle en mayor grado que antes los impactos negativos ambientales; por el contrario, la aplicación de las regulaciones y controles ambientales ha tendido a debilitarse.

Por otro lado, si bien el PPDESN pone énfasis en la democracia y su relación con el desarrollo, dicho plan no incluye políticas o criterios específicos para la participación de las comunidades afectadas por los problemas socio-

39 COMMITTEE TO PROTECT JOURNALISTS, “Medios privados venezolanos se debilitan bajo asedio de Chávez”, en Committee to Protect Journalists, 29 de agosto 2012. Disponible en: <http://www.cpj.org/es/2012/08/medios-privados-venezolanos-se-marchitan-bajo-ased.php>

40 WIKINOTICIAS, “Explosión en la Refinería de Amuay en Venezuela deja varios muertos y decenas de heridos”, en Wikinoticias, 25 de agosto 2012. Disponible en: http://es.wikinews.org/wiki/Explosi%C3%B3n_en_la_Refiner%C3%ADa_de_Amuay_en_Venezuela_deja_varios_muertos_y_decenas_de_heridos

ambientales en la gestión de las políticas de desarrollo a nivel nacional. A nivel local, el gobierno ha venido estimulando organizaciones comunitarias tales como los Consejos Comunales (CC) y Comunas que deben cumplir con el objetivo socio-ambiental de *“promover la calidad de vida”*. Por lo general, estas organizaciones que albergan a los Comités de Ambiente han centrado sus acciones en obtener el financiamiento gubernamental para resolver los problemas más inmediatos de acceso a los servicios básicos y de infraestructura que si bien pueden considerarse como problemas ambientales del Tercer Mundo, su resolución no se orienta de acuerdo con un plan de desarrollo estratégico y sustentable que incluya las características físicas, sociales y culturales de la comunidad⁴¹. Además, los CC frecuentemente se han movilizado políticamente a través de las Unidades de Batalla Social para apoyar al presidente Chávez tal como ocurrió en el 2012 con motivo de su candidatura a la tercera reelección presidencial; en estos casos, muchos de los miembros de tales organizaciones comunitarias han tendido a responder a las prácticas neopopulistas y neoclientelares desplegadas por el gobierno en su intento de cooptación política y han dejado de lado los objetivos originales vinculados con el mejoramiento de la calidad de vida⁴².

Los países que participan en la IIRSA han tendido a minimizar en los acuerdos firmados la importancia de los riesgos e impactos ambientales y socio-culturales de los megaproyectos contemplados; además, al igual que con los planes de desarrollo a nivel nacional, en los acuerdos y planes de desarrollo económico y de integración con Sudamérica y el Caribe, los objetivos ambientales se supeditan a los políticos dadas las pretensiones de hegemonía que Venezuela detenta en esta Región.

⁴¹ Según la Ley Orgánica de los Consejos Comunales de 2009, dicho plan debe regirse por los lineamientos metodológicos del Ciclo Comunal de manera de elaborar un plan estratégico y participativo de la comunidad. GARCÍA-GUADILLA, María Pilar, “Poder Popular y organizaciones comunitarias...”, *op. cit.*

⁴² ARENAS, Nelly y GÓMEZ CALCAÑO, Luis, *Populismo Autoritario: Venezuela 1999-2005*, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2006; ROBERTS, Kenneth, “Populism, Political Conflict, and Grass-Roots Organization in Latin America”, en *Comparative Politics*, 2006, Vol.38, N°2, pp.127-148; GARCÍA-GUADILLA, María Pilar, “La praxis de los Consejos Comunales...”, *op. cit.*; ÁLVAREZ, Rosangel y GARCÍA-GUADILLA, María Pilar, “Contraloría

Otra de las premisas de los planes de desarrollo nacional que no se sustenta en la realidad es el supuesto de que los proyectos contemplados en la IIRSA estimularán el desarrollo endógeno ya que muchos de los proyectos de interconexión física entre los países participantes se han propuesto como ejes de transporte para tener salida a los puertos del Océano Pacífico y del Atlántico lo que significa que la mayor parte de éstos se vinculan con el desarrollo exógeno. Según Gudynas, en vez de integrar los diferentes países de América del Sur, *“Las carreteras son necesarias primero para llevar insumos a regiones remotas, y luego para poder extraer minerales, cosechas y otros productos. Justamente en ese momento aparece una particularidad sudamericana: la mayor parte de las exportaciones se dirigen a destinos en otros continentes. Por lo tanto, la llamada “integración física”, antes que una “integración” para articular la producción, promueve “interconexiones” carreteras para poder alcanzar los puertos desde donde parten los navíos hacia Norteamérica, Europa o Asia. En el caso de la energía también hay interconexiones, tales como gasoductos, oleoductos y tendidos de alta tensión, antes que una estrategia energética común”*⁴³.

Más aun, existe una contradicción entre la integración geopolítica propuesta en los planes para luchar contra el *“Imperialismo”* y alcanzar la soberanía y la pérdida de territorio y biodiversidad, los desalojos y desplazamientos forzados de poblaciones vulnerables incluyendo las comunidades indígenas, y la falta de respeto al derecho constitucional que tienen las comunidades indígenas para decidir qué planes y políticas deben ser implementadas en su hábitat. En lo que respecta al marco de la democracia participativa en que se insertan estos planes de desarrollo, es preciso destacar que a pesar de la magnitud de los impactos de tales proyectos, éstos no se han consultado ni con la comunidad nacional ni con la Regional, ni con los

Social y clientelismo...”, *op. cit.*

⁴³ GUDYNAS, Eduardo, “La sopa de la integración”, en *Integración Sur*, 2007, s/p. Disponible en: <http://www.integracionsur.com/americalatina/GudynasSopaIntegracion.htm>. [Consultado el 29/5/2012].

afectados por lo que se estaría violando el derecho constitucional a tal participación.

En el año 2007 el Foro Venezolano sobre Eco-Socialismo advirtió sobre la necesidad de evaluar críticamente las experiencias del Socialismo del Siglo XX con el fin de recuperar la credibilidad del Socialismo como proyecto alternativo al Capitalismo; también recomendó que tal evaluación requería ser repensada desde un nuevo paradigma pues según se alertaba, la racionalidad o lógica de desarrollo implícita en el modelo productivo que sustenta el Socialismo del Siglo XXI, no había cambiado. Esta evaluación no se ha realizado pues a pesar del discurso del Eco-socialismo, la racionalidad implícita en los planes y políticas del gobierno, continua siendo de carácter desarrollista.

Resistencia frente al modelo extractivista: el movimiento socio-ambiental

El presidente Chávez ganó su primera elección en 1998 con los votos de una base ideológica y social diversa que incluyó los sectores populares y grupos de izquierda donde se incluían algunos intelectuales y activistas de los movimientos sociales; sin embargo muchos de estos activistas se han distanciado y han criticado que sea la Presidencia de la República quien organice a la “*gente o el soberano*” porque ello podría comprometer la autonomía de los movimientos sociales. La lógica subyacente es que la movilización anti-imperialista y anti-neoliberal presupone la existencia de un movimiento social autónomo cuya dinámica debe ser de abajo hacia arriba⁴⁴; además, dicho movimiento debe ser capaz de trascender los niveles

⁴⁴ Si bien es cierto que en Venezuela existen organizaciones sociales promovidas por el gobierno que pudieran responder a la lógica del movimiento social tal como el Movimiento Ezequiel Zamora, la Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos (AMCLA) y los comités de tierra urbanos entre otras, la mayor parte de los Consejos Comunales y sobre todo las comunas y demás bastiones organizacionales creados para promover la democracia participativa y protagónica dependen del financiamiento directo del gobierno para su existencia y la realización de sus actividades por lo que se han ligado a las misiones sociales y el partido del gobierno PSUV y han desplegado prácticas clientelares que tienen como fin la cooptación política por lo y difícilmente responden a la noción de la autonomía requerida por los movimientos sociales.

organizativos locales y micro-local e incidir en los niveles nacionales y Regional.

Según el movimiento socio-ambiental, a pesar del fuerte discurso anti-neoliberal, anti-capitalismo, anti-imperialismo y anti-globalización del gobierno, algunas de las políticas y planes que se desprenden del modelo económico propuesto en los planes de desarrollo económico y social de la Nación para los periodos 2001-2006, 2007-2012 e incluso, el actual (2013-2019) son desarrollistas y representan la continuación e, incluso, la acentuación de la lógica del capitalismo industrial y de la globalización que tantos impactos negativos ha traído en las comunidades más vulnerables⁴⁵. Paradójicamente, es este modelo que ocasiona exclusión y fuertes impactos negativos sociales y ambientales, la herramienta principal en la lucha contra el neoliberalismo. Por esta razón, su implementación ha ocasionado fuertes conflictos entre el gobierno y los movimientos sociales a pesar que muchos de sus miembros apoyan políticamente el proyecto del Presidente Chávez. Por otro lado, la creciente polarización social y política y las divergencias alrededor de la acentuación de la economía extractivista han debilitado al movimiento socio-ambiental. La vieja discusión dentro de la izquierda sobre si la toma del poder es o no un requisito previo para la construcción de un proyecto de transformación social, también ha contribuido a desmovilizar a los movimientos sociales en Venezuela sobre todo al socio-ambiental: mientras que unos grupos opinan que el poder político es útil y necesario para cualquier proyecto de transformación social, otros advierten que dicho poder se opone a cualquier proyecto de la emancipación⁴⁶.

⁴⁵ LANDER, Edgardo, "El Estado en los actuales procesos de cambio en América Latina: proyectos complementarios/divergentes en sociedades heterogéneas", en Miriam Lang y Dunia Mokrani (eds.) *Mas allá del Desarrollo*, Quito, Fundación Rosa Luxemburg/Abya Yala, 2011, pp. 121-143; GARCÍA-GUADILLA, María Pilar, "Poder Popular y organizaciones comunitarias...", *op. cit.*

⁴⁶ GARCÍA-GUADILLA, María Pilar y LAGORIO, Carlos, "La cuestión del poder y los movimientos sociales: reflexión post-Foro Social Mundial Caracas 2006", en *Revista*

Una parte importante del movimiento socio-ambiental existente antes de 1999 se desmovilizó al llegar al poder el presidente Chávez con el pretexto que la institucionalización de los derechos ambientales e indígenas junto con la existencia de un gobierno socialista, eran los garantes de tales derechos; en consecuencia, la prioridad era luchar por la revolución socialista y no por demandas o derechos específicos. Otro grupo de activistas también se desmovilizó incorporándose a la burocracia gubernamental y aceptando sin cuestionamientos las pautas y las políticas sancionadas por el gobierno; este hecho ha contribuido a inmovilizarlos a la hora de tomar posición frente a los conflictos entre el estado y las organizaciones ambientales. Incluso, algunos de los antiguos activistas han incursionado en la arena política como representantes del gobierno ante la Asamblea Nacional; este grupo piensa que el poder político es necesario para llevar a cabo las transformaciones que conduzcan al Socialismo del Siglo XXI aunque sea necesario sacrificar la autonomía. Además existen algunos activistas que se han institucionalizado y se ocupa de ejecutar los programas ambientales del gobierno (tales como la siembra de árboles, educación ambiental, reciclaje de basura, instalación luces ahorradoras de la energía,... etc., etc.); este grupo es el interlocutor privilegiado y la cara visible de las políticas del gobierno por lo que recibe una amplia cobertura por parte de los medios de comunicación oficiales y privados.

Sin embargo, dentro de este heterogéneo escenario persiste un movimiento socio-ambiental que bajo la bandera de la democracia participativa continúa movilizándose con el fin de defender los derechos constitucionales ambientales, indígenas y humanos. Este movimiento socio-ambiental⁴⁷ tiende a priorizar las luchas ambientales e indígenas sobre los conflictos ideológico-políticos y sostiene que los impactos depredadores del modelo extractivo son por lo menos iguales en el modelo de capitalismo industrial que en el Socialismo del Siglo XXI; se ha movilizó exigiendo cambios que trasciendan

Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 2006, Vol.12, N°3, pp. 53-65.

⁴⁷ Es preciso destacar que no todos los grupos que defienden los derechos indígenas o humanos se encuentran representados en este movimiento; ello se debe a que la polarización política comienza a extenderse a los movimientos de los derechos indígenas y humanos.

María Pilar García-Guadilla: *Dilemas del ecosocialismo post-neoliberal y resistencia de los movimientos sociales frente al modelo neo-extractivista en Venezuela*, (pp. 3-47)

la dicotomía Capitalismo-Socialismo y propone un cambio del paradigma y de la racionalidad implícita en el modelo de desarrollo del gobierno.

Las organizaciones sociales que se definen como el movimiento socio-ambiental porque utilizan la estrategia de la movilización para oponerse a la racionalidad productivista implícita en el actual modelo del desarrollo, son sumamente heterogéneas en cuanto a la fecha de su fundación y su afinidad ideológica. Es preciso destacar que frecuentemente los intelectuales, investigadores y profesores universitarios se han aliado con el movimiento socio-ambiental para resistir el extractivismo y denunciar sus impactos en las comunidades indígenas⁴⁸.

⁴⁸ En este grupo se encuentran las organizaciones, sociedades y fundaciones científicas centradas en lo ambiental que en el pasado se comportaron como movimiento social-ambiental incorporándose temporalmente a la extensa red que se movilizó en los conflictos con el Estado alrededor de demandas ambientales específicas (GARCÍA-GUADILLA, María Pilar, "The Venezuelan Ecology Movement", en Sonia Álvarez y Arturo Escobar (eds.) *The making of social movements in Latin America*, Boulder-Colorado, Westview Press, 1992, pp.150-170). En la actualidad, estas organizaciones concentran sus actividades en estudios y asesorías tales como el levantamiento de censos o inventarios ambientales y la realización de los estudios de impacto ambiental para el gobierno o para las corporaciones privadas. No obstante, dada la necesidad de conseguir financiamiento y dado el escenario político polarizado existente, en la actualidad, este grupo, el cual se identifica con los discursos del "desarrollo sostenible" y de la "economía verde", ha tendido a institucionalizarse de manera más permanente que en el pasado. No obstante, en caso de graves conflictos que envuelven temas científicos como la contaminación del río Guarapiche o el impacto en los tepuyes o temas indígenas como el reciente asesinato del cacique yutpa, Sabino Romero, han elevado sus voces de protesta. Por ejemplo, algunas de las organizaciones académicas y científicas que se pronunciaron sobre el asesinato del líder Yutpa Sabino Romero fueron el Centro de Antropología del IVIC y el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) -que es un grupo de investigación académica y de acción social adscrito al Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL), de la Universidad de los Andes. Algunos intelectuales y profesores de las universidades, a pesar de apoyar políticamente al Presidente Chávez, han criticado los efectos negativos de sus políticas; se trata del grupo proponente del concepto de Eco-Socialismo del Siglo XXI, término poco aceptado dentro del gobierno quien prefiere la denominación de "endógeno" porque considera lo ecológico como una deformación "petit-bourgeois" ya que la prioridad debe ser la distribución y equidad social, no el ambiente. Algunos de los miembros de este grupo son consejeros del gobierno e incluso han trabajado en "reverdecer" las corporaciones económicas tales como el PDVSA (FERGUSON, Alex, "El desarrollo sustentable, La revolución de las lógicas y los sentidos", ponencia presentada en el *Seminario Itinerante del MES, Ética, Formación Integral y Nuevos Tiempos*. Disponible en 2007, <http://www.inn.gob.ve/pdf/foro/ponencias/p01/Presentacion%20Alex%20Ferguson%20Seguridad%20Alimentaria.pdf>. [Consultado el 4/4/2013]; FERGUSON, Alex, *Venezuela: la cuestión ambiental y el desarrollo*, Caracas, Ediciones del MPPCyT, 2008; VELASCO, Francisco, "Participación en el Foro Ecosocialismo del Siglo XXI", (Conferencia grabada), Caracas, PDVS,

María Pilar García-Guadilla: *Dilemas del ecosocialismo post-neoliberal y resistencia de los movimientos sociales frente al modelo neo-extractivista en Venezuela*, (pp. 3-47)

Como en otros países suramericanos donde los movimientos sociales han desafiado el modelo extractivista de desarrollo (casos de Ecuador y Bolivia)⁴⁹, el movimiento socio-ambiental venezolano está cuestionando tal modelo desde diversas posturas que van desde la defensa del desarrollo sostenible e incluso la aceptación de la “*economía verde*” que incorpora una concepción antropocéntrica hasta la visión sobre el “*Buen Vivir*” que implica una nueva racionalidad basada en una concepción bio-céntrica y en la defensa de la democracia y autonomía como las vías para alcanzarla. Esta visión del “*Buen Vivir*”⁵⁰ incorpora las nociones del post-desarrollo⁵¹, la democracia participativa y sobre todo, el respeto al derecho ancestral que sobre su territorio tienen las comunidades indígenas⁵².

En las movilizaciones contra la intensificación del modelo extractivo realizadas en los últimos doce años, el movimiento socio-ambiental venezolano ha puesto de relieve las contradicciones e inconsistencias que existen entre el marco jurídico constitucional que promueve los derechos indígenas y del ambiente y el desarrollismo implícito en los planes nacionales

mayo 2007)

⁴⁹ DENVIR, Daniel y RIOFRANCOS, Thea, “How green is the Latin American left? A look at Ecuador, Bolivia and Venezuela”, en *Upside Down World*, 2 de abril 2008. Disponible en: <http://upsidedownworld.org/main/content/view/1203/1/> [Consultado 1/1/2012]; GUDYNAS, Eduardo, “Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo”, en *Mesa Redonda sobre Alternativas a una Economía Extractivista*, Quito, CAAP y FLACSO, 2009; GUDYNAS, Eduardo, “Estado compensador y nuevos extractivismos: las ambivalencias del progresismo suramericano”, en *Nueva Sociedad*, 2012a, N°237, pp.126-146.

⁵⁰ ACOSTA, Alberto, “El Buen Vivir, una utopía por (re)construir”, en *Casa de Las Américas*, 2009, N°257, pp. 33-46.

⁵¹ ESCOBAR, Arturo, “Latin American at a Crossroad. Alternative modernization, post-liberalism, or post-development?”, en *Cultural Studies*, 2010, N°24

⁵² El post-desarrollo supone “una re-valoración de las culturas vernáculos, la necesidad de depender menos de los conocimientos de expertos y más de los intentos de la gente común de construir mundos más humanos, así como cultural y ecológicamente sostenibles” (ESCOBAR, Arturo, “Latin American at a Crossroad...”, *op. cit.*, p.20); se caracteriza además, por la importancia que se le da a los movimientos sociales y a las movilizaciones de base. Para las comunidades indígenas, la demarcación territorial es un requisito previo para lograr “el Buen Vivir” y consideran que el gobierno viola el mandato constitucional para demarcar y otorgarles la propiedad de sus tierras ancestrales. Desde el gobierno se han esgrimido razones geopolíticas para no cumplir el mandato constitucional a la demarcación de las tierras indígenas; por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas de la Sierra de Perijá, se ha aducido la seguridad de la frontera con Colombia o la existencia de comunidades mineras o ganaderas no indígenas.

de desarrollo. Según el movimiento socio-ambiental, el paradigma del desarrollo no cambió con la llegada del presidente Chávez: la organización ambiental AMIGRANSA destaca que *“si bien ha habido un cambio en el discurso, se siguen instrumentando las viejas prácticas deterioradoras del ambiente”*⁵³ mientras que la organización ambientalista GEMA indicó que *“el modelo continúa centrándose en la explotación de recursos naturales tales como el petróleo, el oro, el carbón... y enfatiza la productividad en vez de la sustentabilidad ecológica”*⁵⁴. Por su parte, la organización ambiental ACOANA indicó que el *“desarrollo minero continúa siendo la estrategia principal de este gobierno... quien todavía favorece un modelo del desarrollo que es destructivo al ambiente.”*⁵⁵.

El activista social Santiago Arconada quien ocupó un alto cargo en el gobierno y continúa apoyándolo, criticó severamente el enfoque productivista del gobierno en una carta abierta al Presidente Chávez: *“CORPOZULIA Y PDVSA [dos de las empresas gubernamentales más importantes del país] que rezan sin vergüenza alguna la letanía extractivista de: si hay petróleo, hay que sacarlo, si hay carbón, hay que sacarlo, si hay coltán, hay que sacarlo, si hay uranio, hay que sacarlo, si hay oro, hay que sacarlo (...) a un país agobiado por las deformaciones de la economía rentista del petróleo, CORPOZULIA Y PDVSA le proponen aún más economía rentista, a pesar de la devastación ambiental que implica”*⁵⁶.

Por otra parte, en el Foro Paralelo que tuvo lugar como parte del Foro Social Mundial realizado en Caracas en 2006, el movimiento socio-ambiental

⁵³ GAUS, “Base de datos de entrevistas a las organizaciones de derechos humanos, ambientalistas y de democracia liberal”, en María Pilar García-Guadilla (ed.) *La constitucionalización de nuevas ciudadanías y racionalidades en Venezuela: actores sociales y gestión de conflictos sociopolíticos*, Caracas, Grupo Interdisciplinario de Investigación en Gestión Ambiental, Urbana y Sociopolítica, Universidad Simón Bolívar-FONACIT, 2010, E.1).

⁵⁴ *Ibíd.*, E.6.

⁵⁵ *Ibíd.*, E.2.

⁵⁶ ARCONADA, Santiago, “Carta abierta al Presidente Hugo Chávez Frías: El otro diálogo”, en *Aporrea*, 2011, s/p. Disponible en: <http://www.aporrea.org/ideologia/a116888.html> [Consultado el 2/3/2012].

venezolano criticó drásticamente el modelo del desarrollo promovido por el gobierno del presidente Chávez⁵⁷. Una de las mayores protestas y movilizaciones que resultó de este Foro Social donde participaron tanto los adeptos como los opositores del Presidente Chávez fue la marcha en apoyo de la protección de los territorios y del hábitat de las comunidades indígenas Wayuu, Yukpa y Bari, contra *“la explotación del carbón”* y contra *“la política neo-liberal del gobierno a pesar de su fuerte discurso anti-neoliberal”*⁵⁸.

Según el movimiento socio-ambiental, una de las contradicciones del rol asignado al petróleo y a los hidrocarburos dentro del Socialismo del Siglo XXI, es que la economía extractiva que según el gobierno en el pasado sirvió para *“reproducir las relaciones de dominación y de explotación”* ahora se considera clave para consolidar la soberanía nacional a pesar que excluye a los indígenas y pone de lado la protección ambiental⁵⁹. *Homo et Natura*, Soberania.com y AMIGRANSA entre otros movimientos sociales han acusado al gobierno venezolano de no decir la verdad sobre los impactos de los megaproyectos energéticos y sostienen que la acentuación de la explotación carbonífera y gasífera no responde al desarrollo endógeno-sostenible como proclaman los representantes del proyecto IIRSA sino que responde a factores exógenos; tal es el caso de la exportación de hidrocarburos como parte de *“... la estrategia del globalización del Banco Mundial (BM), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Andina de Fomento (CAF)”*⁶⁰.

“Los Proyectos IIRSA atentan contra la integridad de los recursos naturales, ponen en riesgo la soberanía de los pueblos y fronteras de Venezuela y otros

⁵⁷ GARCÍA-GUADILLA, María Pilar y LAGORIO, Carlos, “La cuestión del poder...”, *op. cit.*

⁵⁸ AMIGRANSA, “Insostenibilidad ambiental del modelo de desarrollo Bolivariano: Programa”, en *Foro Alternativo al Social Venezolano*, 2006a, E.1).

⁵⁹ Véase PORTILLO, Lusbi, “El Socialismo del Siglo XXI excluye a los indígenas y la protección ambiental”, en *Soberanía*, 21 de noviembre 2005. Disponible en: http://www.soberania.org/Articulos/articulo_1728.htm

⁶⁰ www.soberania.org/lusbi_portillo_portada-htm. (página removida en la última consulta

*países suramericanos y en algunos casos podrían transformar su geografía, como en el caso de la pretendida interconexión de los ríos Orinoco, Río Negro, Amazonas, y La Plata violentando maravillas de la naturaleza como lo es el Brazo Casiquiare en el Amazonas Venezolano, que conecta el río Orinoco con el río Negro. La Unión Latinoamericana impulsada por el Proceso Bolivariano Venezolano pretende ser integradora pero en la práctica termina siendo neo-colonizadora, al utilizar la potencialidad energética y económica de Venezuela para convertirse en el nuevo país prestamista e inversionista latinoamericano*⁶¹.

Otra crítica de los movimientos sociales es que la integración de los productos y de los mercados propuestos en el proyecto IIRSA refuerzan el papel subordinado que Suramérica tiene y ha tenido históricamente como proveedor de la materia prima para las grandes industrias transnacionales. Con relación a la meta de integración que propone el IIRSA, Portillo (2004) destaca que contrariamente a las metas de integración y de desarrollo sustentable-endógeno-local, el desarrollo del Eje Occidental del IIRSA forma parte de la estrategia del gobierno norteamericano y de las corporaciones transnacionales para imponer el Tratado de Libre Comercio para las Américas (TLC) y el Plan Puebla Panamá (PPP) de manera de controlar la demanda del mercado mundial por los recursos naturales de América Latina. Por esta razón, el desarrollo del Eje Occidental en vez de consolidar la integración multipolar según lo deseado, beneficiará a Colombia y el Brasil y a través de este último, a los Estados Unidos, países que se beneficiarán más que Venezuela. Portillo (2004) destaca también que el desarrollo del denominado Eje del Este del proyecto IIRSA beneficiará a las multinacionales brasileñas y a sus aliados, los E.E.U.U., más que Venezuela. Además, para algunas organizaciones ambientales, la promoción por parte de Venezuela de PETROCARIBE y PETROSUR es neo-colonialista porque promueve la integración mientras que

realizada).

⁶¹ AMIGRANSA, "El modelo bolivariano de desarrollo en Venezuela: Sus impactos ambientales y sociales", en *Soberanía*, 2006b. Disponible en: http://www.soberania.org/Articulos/articulo_1878.htm [Consultado el 1/02/2013].

usa su potencial energético con el fin de convertirse en un país hegemónico en América latina.

El movimiento socio-ambiental se viene movilizandoo contra la explotación del carbón en el Sierra de Perijá bajo el argumento que tal actividad en vez de ser “*una minería ecológica*” como aduce el gobierno, está generando elevados impactos socio-ambientales negativos tales como el deterioro de los bosques y la escasez de fuentes del agua potable; además, como resultado de tal explotación se sacrificaran otras actividades económicas importantes que se desarrollan en la zona como lo son la agricultura y la ganadería lo cual reducirá la soberanía alimentaria, uno de los objetivos más importantes del gobierno. Por su parte, las comunidades indígenas han destacado su afectación negativa debida a los impactos socio-ambientales y a la violación de sus derechos humanos colectivos reconocidos en la constitución. Los Yutpas de la Sierra de Perijá, una de las comunidades indígenas más afectadas por la explotación del carbón en el estado de Zulia han señalado que para ellos los recursos más importantes para la vida son los recursos de la naturaleza (el agua, las plantas y los animales) y que la explotación del carbón imposibilita la continuidad de su modo de vida tradicional y el desempeño de sus actividades económicas tales como la agricultura, la crianza de animales, la pesca, y la caza. Según los Yutpas, la explotación del carbón también reduce la disponibilidad de agua potable porque contamina los ríos y amenaza desplazarlos de sus tierras haciendo que la demarcación territorial de sus tierras ancestrales, un derecho constitucional esperado largo tiempo, sea cada vez más difícil de alcanzar⁶².

⁶² Según Laura Rodríguez, en América Latina los investigadores han alertado sobre la no sostenibilidad ambiental del proyecto IIRSA al señalar que la extracción intensiva de recursos naturales no renovables causa la destrucción de áreas ricas en biodiversidad y que la tala masiva de los árboles causa daños irreversibles a los ecosistemas, a los territorios indígenas y produce el desplazamiento de millares de gente. También contribuye al empeoramiento de la pobreza y arriesga la supervivencia de las generaciones futuras al afectar las reservas naturales existentes no solo en América Latina sino también en el planeta. RODRÍGUEZ, Laura, *El Conflicto socio-ambiental en la Sierra...*, *op. cit.*

Contrariamente con las expectativas creadas por el gobierno como el venezolano quien es el dueño de los recursos naturales y donde la creciente expropiación de los medios de producción pudiera llevar a pensar que éste ejercerá un mayor control sobre la economía, el gobierno no se ha auto-regulado en materia ambiental creándose graves conflictos con las comunidades afectadas y con el movimiento socio-ambiental; adicionalmente, el gobierno ha intentado cooptar al movimiento socio-ambiental y apropiarse discursivamente de sus banderas simbólicas de luchas. En algunos casos, en vez de utilizar la vía de la democracia participativa constitucional, el gobierno ha desplegado prácticas y políticas populistas en un intento por cooptar a los movimientos sociales que se oponen a las actividades extractivas. Esto es particularmente notorio en el caso de las comunidades indígenas las cuales se han dividido entre las que aceptan la “*caridad del gobierno*” y las que continúan luchando por la demarcación de sus territorios ancestrales y contra la minería del carbón. Tal como lo señala Portillo: “*CORPOZULIA está trabajando muy fuerte en las comunidades, regalando bolsas de comida, matando 4 o 5 vacas e invitando al pueblo a comer, dando cervezas y ofreciendo peluquería (...) Todas las misiones en la región están bajo la tutela de CORPOZULIA*”⁶³.

Cuando ha fallado la cooptación por parte del gobierno, éste ha intentado neutralizar a los movimientos sociales que no endosan el Modelo Socialista del desarrollo o como lo señala PROVEA de “*criminalizar*” a quienes critican los impactos ambientales, sociales o culturales que se desprenden de dicho modelo. Ello ha contribuido a dividir al movimiento indígena originalmente caracterizado por su integración y autonomía entre quienes apoyan el modelo de desarrollo extractivista que propone el gobierno y quienes se oponen. Los intentos de cooptación y neutralización por parte del gobierno han contribuido a la fragmentación y desmovilización de una parte del movimiento indígena venezolano; por otro lado, la apropiación de las demandas simbólicas del movimiento socio-ambiental ha reducido la eficacia de las luchas de aquellos

⁶³ PORTILLO, Lusbi, “Venezuela perderá su soberanía en los proyectos de la IIRSA”, en *Aporrea*, 2004. Disponible en: <http://www.aporrea.org/tiburon/n51606.html>. [Consultado el

que se mantienen movilizados al vaciarlas de contenido.

La polarización político-ideológica existente también ha debilitado al movimiento socio-ambiental y ha reducido las posibilidades que éste acceda y utilice los medios de comunicación masivos como herramienta para dar a conocer sus luchas; es decir, como medios para transformar sus demandas en “*hechos políticos*” como lo hicieron en el pasado⁶⁴. La mayoría de los medios de comunicación formales, sean éstos de oposición u oficiales, no han tenido interés en divulgar los conflictos que plantea el movimiento socio-ambiental por lo que ha sido a través de los medios alternativos como las radios comunitarias o las redes electrónicas, nacionales e internacionales donde el movimiento socio-ambiental ha podido politizar sus luchas. Con el fin de contar con un movimiento social en la Región que sea capaz de substituir al movimiento socio-ambiental y que sea “*revolucionario y no crítico*”, el gobierno ha creado un movimiento social “*paralelo*” como parte del ALBA el cual responde incondicionalmente a los lineamientos gubernamentales y es la cara visible y no crítica en los grandes cumbres, foros sociales y otros eventos internacionales⁶⁵.

El ejercicio de la democracia participativa en el diseño del modelo de desarrollo nacional y su expresión en políticas y proyectos concretos ha sido predominantemente discursivo puesto que la participación se ha restringido al nivel comunitario y local. Fue el Presidente Chávez y su equipo ministerial quienes diseñaron los planes y políticas de desarrollo económico para el país y quienes participaron en los convenios y acuerdos firmados con la Región y el resto del mundo. Refiriendo a esta ausencia de democracia participativa en Venezuela, Arconada señala: “*¿Cómo es el socialismo de los ministros del poder popular? ¿Ya se cuestionó la esencia capitalista de su estructura*

25/6/2012].

⁶⁴ GARCÍA-GUADILLA, María Pilar, “The Venezuelan Ecology...”, *op. cit.*

⁶⁵ El Consejo de Movimientos Sociales del Alba fue creado a través de la Declaración de Tintorero, producto del Encuentro de Movimientos Sociales que se realizó en paralelo a la V Cumbre del ALBA celebrada en Tintorero, Venezuela en abril del 2007. Meses más tarde, la Comisión Política del NO se constituyó hasta mayo del año 2011.

jerárquica, y de los privilegios que conlleva? ¿Cómo se construye el socialismo a partir de decisiones personales que no se consultan con nadie, que no tiene ningún escenario colectivo y democrático de decisión?’⁶⁶.

La resistencia del movimiento socio-ambiental venezolano contra la economía basada en la explotación de los hidrocarburos trasciende el nivel nacional y desde el año 2000 se orienta también contra el IIRSA, como instancia promotora de las políticas y proyectos de desarrollo a nivel Regional y cuyos proyectos han sido denunciados por los movimientos ambientales e indígenas de todos los países suramericanos. Por su parte, el movimiento social “*pro-oficial*” creado por el gobierno como parte del ALBA⁶⁷, el cual fue convocado en la VI Cumbre de 2008 celebrada en Venezuela, en ningún momento cuestionó los altos impacto negativos ambientales y socio-culturales que se desprenden de los megaproyectos. Ello se debe a que fueron creados con el fin de sustituir a los movimientos sociales autónomos y críticos que se oponen a estos proyectos de manera de que apoyen irrestrictamente tales proyectos en los foros regionales e internacionales del ALBA, UNASUR e, incluso, en las cumbres mundiales como Rio+20. La suplantación de los movimientos sociales autónomos por estos “*movimientos sociales*” paralelos hace aún más difícil que el movimiento socio-ambiental venezolano pueda avanzar su agenda.

La falta de consistencia entre el discurso y la praxis que manifiestan los gobiernos de la nueva izquierda latinoamericana también se encuentra presente al interior del movimiento socio-ambiental de la mayoría de los países de la Región. Mientras que los movimientos sociales latinoamericanos han rechazado discursivamente el modelo extractivo en las últimas cumbres sociales incluida la Cumbre de Los Pueblos de 2012 y han proclamado su solidaridad con los afectados por los desalojos forzados y los impactos negativos derivados de los proyectos extractivos y de las mega-infraestructuras

⁶⁶ ARCONADA, Santiago, “Carta abierta al Presidente...”, *op. cit.*

⁶⁷ BOSSI, Fernando, “Los movimientos sociales en el Alba”, en *Aporrea*, 2008. Disponible en:

de soporte, el movimiento socio-ambiental se ha dividido con respecto a si apoyar a los nuevos gobiernos de izquierda en sus políticas económicas extractivistas o apoyar las luchas indígenas contra las actividades extractivas. Esta fragmentación se puede observar no sólo en Venezuela, sino también en Bolivia y Ecuador en donde los conflictos relacionados con la economía extractiva se han intensificado porque algunos de estos gobiernos tienden a identificar las luchas contra el extractivismo como luchas contra el Socialismo del Siglo XXI a pesar de que una parte importante de las comunidades movilizadas tiende a apoyar al gobierno.

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas que tuvo lugar en las Naciones Unidas en 2008 y en el cual participaron más de trescientos indígenas urgió a los gobiernos, al Banco Mundial y a otras instituciones financieras bilaterales y multilaterales para que consideraran sistemas alternativos que utilizaran recursos naturales renovables combinados con una baja utilización del carbón para sustituir la demanda del petróleo (Morales, 2008)⁶⁸. Por su parte, la Conferencia de la Cumbre de Los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Naturaleza celebrada en Cochabamba, Bolivia en 2010 condenó el modelo capitalista porque *“impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus territorios, impidiendo la Soberanía Alimentaria y profundizando la crisis socio-ambiental”* ⁶⁹.

El informe del grupo de Articulación Internacional de la Cumbre de los Pueblos Rio + 20 por la Justicia Social y Ambiental de 2012 cuyo objetivo era *“la unidad y movilización de la gente en defensa de la vida, de los bienes*

<http://www.aporrea.org/venezuelaexterior/a61425.html> [Consultado el 15/7/2012].

⁶⁸ MORALES, Evo, “Palabras del Presidente de la República, Evo Morales Ayma, en el Foro Permanente para las cuestiones Indígenas en las Naciones Unidas. 10 mandamientos para salvar al planeta, a la humanidad y a la vida”, en *ALAI - América Latina en Movimiento*, 22 de abril 2008. Disponible en: <http://alainet.org/active/31235&lang=es>. [Consultado el 2/3/2013].

⁶⁹ ACUERDO DE LOS PUEBLOS, “Compilación de Conclusiones y Resultados”, en *Conferencia Mundial de los pueblos sobre el cambio Climático y los Derechos de la Madre*

*comunes y contra la mercantilización de la naturaleza y la economía verde*⁷⁰, fue el producto de un consenso difícil alcanzado entre los movimientos sociales. Dicho informe se caracteriza por la carencia de una crítica a las políticas extractivistas de estos gobiernos de izquierda; el documento se refiere sobre todo a la estrategia de movilización contra la “*economía verde*” y contra la organización Mundial del Comercio (OMC), el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) y el grupo de países G-20; paradójicamente, el ALBA, UNASUR o el grupo de países G-77, no fueron mencionados.

En contraste con el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1992 y con el primero de Hugo Chávez en 2002, la Cumbre de Río+20 sobre Ambiente y Desarrollo celebrada en 2012 fue la única de las tres cumbres sobre desarrollo y ambiente donde el gobierno venezolano no invitó al movimiento socio-ambiental a participar en la plataforma oficial. De hecho, en esta última Cumbre, el movimiento socio-ambiental fue excluido y desplazado por los asesores-consejeros, la burocracia oficial y los para-movimientos sociales creados al interior del ALBA; todos ellos apoyaban incondicionalmente el proyecto del Presidente Chávez⁷¹.

Sin embargo, la posición que debía llevarse a Río+ 20 según el movimiento socio-ambiental venezolano difería de la del gobierno en lo que concernía al tema del extractivismo. A finales del mayo de 2012, el eje de Ecología Social de la Fundación Rosa Luxemburgo en Venezuela organizó un debate de dos días de duración con el nombre “*Río+20: desarrollo sostenible y economía verde*” el cual convocó a las organizaciones y movimientos sociales y a otras personas interesadas en el tema. Uno de sus objetivos fue difundir el informe del Grupo Internacional de Articulación de la Cumbre de los Pueblos y

Tierra, Cochabamba, Ministro de Ambiente y Agua. 2010, p.125.

⁷⁰ GRUPO DE ARTICULACIÓN INTERNACIONAL DE LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS POR JUSTICIA SOCIAL Y AMBIENTAL, *Informe del Grupo de articulación internacional de la Cumbre de los Pueblos por Justicia Social y Ambiental*, Río de Janeiro, 12 de mayo 2012, s/p.

⁷¹ En pasadas Cumbres, algunos de estos asesores y consejeros formaron parte del movimiento socio-ambiental y fueron críticos del extractivismo; no obstante, hoy defienden la idea que el petróleo y los demás hidrocarburos son un requisito indispensable para concretar la

discutir el tema de la economía verde a la luz del modelo del desarrollo venezolano. Al encuentro promovido por la Fundación Rosa Luxemburgo no asistió personal oficial quizás debido que a menos de un mes de la realización de la Cumbre de Rio+20, se desconocía la posición que llevaría el gobierno quien tenía previsto reunirse a puerta cerrada con sus personal y consejeros el día después de concluida la reunión promovida por el Eje de Ecología Social de manera de decidir la posición oficial. A pesar que el tema del extractivismo no era el foco de la agenda del Encuentro, a lo largo del evento se hicieron severas críticas contra las políticas extractivistas del gobierno las cuales, frecuentemente, desplazaron el tema de discusión central que era la economía verde. Desafortunadamente, la baja capacidad que tiene el movimiento socio-ambiental venezolano para “*politizar*” el tema ambiental a través de los medios de comunicación tanto públicos como privados y su exclusión como interlocutor del gobierno ha tendido a reducir su importancia en la agenda nacional y en los foros internacionales.

En las tardías deliberaciones del gobierno venezolano para preparar el documento oficial que se llevaría a la Cumbre de Rio+20 celebrado a puertas cerradas y donde no fue invitado el movimiento socio-ambiental tal como se señaló, se atacó fuertemente la economía verde la cual estaba propuesta como uno de los principales acuerdos entre los países; sin embargo, el gobierno venezolano terminó firmando el documento oficial (o de los gobiernos) que emanó de dicha Cumbre y donde se legitimaba la “*economía verde*”. Por otro lado, en La Cumbre de los Pueblos convocada para preparar el documento de Rio+20, los movimientos sociales acordaron un documento reactivo contra la economía verde en vez de centrar su discurso y acciones en las consecuencias socio-ambientales negativas del modelo extractivista de desarrollo. Debe destacarse que la exclusión del movimiento socio-ambiental en la agenda y elaboración del documento que el gobierno llevaría a la Cumbre de Rio+20 junto con la baja capacidad del movimiento socio-ambiental venezolano para “*politizar*” el tema de los impactos negativos del extractivismo

Revolución Socialista del Siglo XXI y por tanto, debe reforzarse el modelo extractivista.

ante los medios de comunicación públicos y privados le impidieron alzar su voz en un foro internacional para visibilizar las contradicciones que se están dando en el Socialismo del Siglo XXI cuyos gobiernos como el venezolano tienen un discurso acorde con nuevas racionalidades ambientales pero despliegan políticas que como en el caso de los hidrocarburos tienen un alto impacto ambiental no solo a nivel nacional sino también internacional.

Dilemas y desafíos del neo-extractivismo y del movimiento socio-ambiental en el Socialismo del Siglo XXI

Si bien los planes de desarrollo nacional 2001-2007 y 2007-2013 incorporaron objetivos socio-ambientales, del análisis de contenido de éstos se desprende que sus directrices fueron el crecimiento económico potenciando la explotación petrolera e intentando convertir a Venezuela en una potencia energética mundial bajo la premisa de que puede desarrollarse “*una minería ecológica*”. La imposibilidad de un “*extractivismo verde*” ha dificultado la concreción de estos planes de desarrollo en proyectos y políticas concretas de desarrollo sustentable. Por otro lado, el movimiento socio-ambiental no sólo ha cuestionado la “*sustentabilidad*” de los planes de desarrollo que propone el Socialismo del Siglo XXI en Venezuela sino también su capacidad para constituirse en una alternativa válida al Capitalismo en la medida que no incorpora nuevos conceptos y paradigmas sobre la naturaleza y el “*buen vivir*” y que la brecha existente entre los discursos y las praxis desarrolladas por el gobierno pone de manifiesto que existe una contradicción entre ambos: en el discurso del presidente Chávez e incluso en los propios planes de desarrollo se hace alusión a “*la sostenibilidad ambiental*” pero con frecuencia las políticas y proyectos de desarrollo se instrumentan de acuerdo con una visión desarrollista que no incorpora ni la visión ambiental presente en la Constitución de 1999 ni los impactos negativos del modelo extractivo.

Por otro lado, las políticas sociales del gobierno se diferencian del Neoliberalismo porque se centran en la población más vulnerable y

desprotegida y tienen como objetivo la equidad y una distribución social más equitativa; sin embargo, su marco de la referencia continua siendo el “*rentismo neo-extractivista*” pues el petróleo y los hidrocarburos en general se consideran como indispensables para garantizar y financiar tales objetivos sociales dejando en segundo plano el criterio de la sustentabilidad ambiental de las políticas económicas. Es así que el Socialismo del Siglo XXI en Venezuela comparte con el Socialismo real del Siglo XX y con el Capitalismo la noción del crecimiento y progreso así como también el desarrollo sin fin de las fuerzas productivas ya que se subordina la naturaleza, o la dimensión ambiental, al desarrollo económico.

Desde el punto de vista discursivo, los hidrocarburos en Venezuela se consideran como una “*herramienta revolucionaria y transformadora*” que debe propender hacia múltiples objetivos: concretar el Socialismo del Siglo XXI; contribuir al desarrollo nacional endógeno y sostenible; reforzar el nacionalismo, la integración y la hegemonía regional; obtener la independencia del imperialismo, el bienestar y el empoderamiento de la gente pobre; favorecer la inclusión social y equitativa. Todos estos objetivos deberían legitimarse y concretarse mediante el ejercicio de la democracia participativa lo cual no ha ocurrido debido a que los planes, políticas y proyectos de desarrollo fueran diseñados desde arriba hacia abajo y no fueron el resultado de la democracia participativa constitucional por lo que no reflejan la visión colectiva de las comunidades sobre la “*buena vida*”. Es por esta razón que tales planes y políticas en ocasiones transgreden los derechos ambientales, indígenas, sociales y humanos básicos e impiden que los objetivos discursivos sobre el desarrollo sustentable se logren.

El dilema para los nuevos gobiernos de izquierda suramericanos y sobre todo para Venezuela es ¿cómo eliminar la alta dependencia que se tiene de la producción y exportación de combustibles fósiles de manera de lograr el desarrollo sostenible?, ¿cómo obtener suficiente ingreso para mantener las políticas sociales redistributivas que han sido tan exitosas para lograr la

legitimidad política social y política sin acentuar el modelo productivo extractivista? y ¿cómo continuar subvencionando el precio del petróleo al Caribe y a otros países latinoamericanos para legitimar las pretensiones de hegemonía en la Región sin aumentar la explotación de los combustibles fósiles y sin sacrificar el ambiente y los derechos a la identidad cultural de las comunidades indígenas?. ¿Se puede hablar de justicia, de equidad social y de solidaridad cuando el modelo de desarrollo no considera los derechos de las minorías que son generalmente las poblaciones más vulnerables y no estimula prácticas ambientales y relaciones más equitativas con las comunidades y generaciones del futuro?, ¿cuándo no se reconocen los impactos negativos de los mega-proyectos cuyos costos sociales, ambientales y culturales se ocultan en aras de la supuesta nueva visión sobre la integración latinoamericana alrededor del ALBA, UNASUR u otras instituciones regionales?, ¿es posible construir un nuevo socialismo que supere los errores del pasado, incorpore alternativas al desarrollo que sean sostenibles desde el punto de vista ambiental y social, estimule la democracia participativa e incluya a todos los actores?. Una pregunta final que queda abierta es cómo superar el “*ser proveedores de materias primas para la globalización*”⁷² y orientarse hacia una alternativa al desarrollo, post-desarrollo o proyectos “de-coloniales” (Escobar, 2010)⁷³ coherente con las visiones anti-neoliberales de justicia social y ambiental.

Frente a estas interrogantes, el discurso del Ecosocialismo del Siglo XXI⁷⁴ no ha logrado superar el nivel discursivo de manera de dar respuesta efectiva a las contradicciones y a los conflictos ambientales existentes e incorporar una visión bio-céntrica de la naturaleza. A pesar que el Socialismo del Siglo XXI pretende ser una alternativa al Capitalismo y existen marcos constitucionales que legitiman los derechos ambientales e indígenas e incluso

⁷² GUDYNAS, Eduardo, “La izquierda marrón”, en *ALAI - América Latina en Movimiento*, 2 de marzo 2012b. Disponible en: <http://alainet.org/active/53106> [Consultado el 22/4/2012].

⁷³ ESCOBAR, Arturo, “Latin American at a Crossroad...”, *op. cit.*

⁷⁴ GARCÍA-GUADILLA, María Pilar, “Ecosocialismo del siglo XXI y modelo de desarrollo Bolivariano: los mitos de la sustentabilidad ambiental y de la democracia participativa” en

planes de desarrollo nacional que incorporan una diversidad de artículos a favor de la sustentabilidad, los requisitos ambientales se siguen percibiendo tal como lo señala⁷⁵, como los obstáculos al desarrollo económico y como un freno para la reproducción del aparato del estado y la ayuda económica al más necesitado. Por todas estas razones, la lógica productivista, instrumental y desarrollista del modelo de desarrollo extractivista si bien procura romper con la herencia colonialista el pasado, ha fracasado en hacer frente a las contradicciones y conflictos sociopolíticos y en la utilización de los mecanismos de la democracia participativa para poder resolver tales contradicciones.

Las movilizaciones contra el neoliberalismo y el imperialismo en Venezuela no han desempeñado el papel crítico y transformador que la literatura le asigna a los movimientos sociales. Quizás ello se deba a que en la actualidad no existe en Venezuela un movimiento social con suficiente *Poder* para hacer las transformaciones del modelo de racionalidad. Sin embargo, es plausible que dado la heterogeneidad ideológica de los partidarios de Chávez y dada la carencia de un proyecto ideológico compartido sobre el desarrollo sustentable dentro del movimiento chavista, se puedan desplegar estrategias a favor de la sustentabilidad ambiental del modelo que implicarían ir en contra el modelo de racionalidad implícito en el modelo de desarrollo económico existente. En este sentido, el modelo bolivariano puede generar resistencia y movilización de parte de los movimientos sociales que luchan contra el neoliberalismo y la globalización sobre la base de que se trata de un modelo ambientalmente depredador que ocasiona impactos negativos socio-ambientales elevados. Ello se vería favorecido por el hecho que muchos de los miembros del movimiento socio-ambiental, independientemente de si apoyan o no políticamente al presidente Chávez, son anti-neoliberales por definición lo que facilitaría el cuestionamiento a la lógica que subyace al Modelo de Civilización y la exigencia de transformar su lógica y racionalidad.

Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 2009, Vol.15, N°1, pp.187-223.

⁷⁵ GUDYNAS, Eduardo, "Estado compensador y nuevos extractivismos...", *op. cit.*

María Pilar García-Guadilla: *Dilemas del ecosocialismo post-neoliberal y resistencia de los movimientos sociales frente al modelo neo-extractivista en Venezuela*, (pp. 3-47)

La paradoja que envuelve la propuesta gubernamental de acentuar el modelo de desarrollo basado en los hidrocarburos es que su concreción en los planes de la nación sean la clave para “*incluir a los excluidos*” a través de la generación de la renta petrolera, principal motor que alimenta las Misiones Sociales y que financia a la diversa y compleja red de las organizaciones sociales bolivarianas; otra paradoja es que sean los movimientos sociales quienes fueron los actores de la incorporación constitucional y apoyaron desde sus inicios el proyecto discursivo anti-neoliberal bolivariano quienes rechacen el modelo económico propuesto para lograr tal incorporación y por esta razón, sean excluidos de la gestión de las políticas públicas. Una última paradoja es que sea un gobierno quien se autodenomina de izquierda, quien tomó prestada la agenda de los movimientos sociales para ascender al poder y quien los reconoció constitucionalmente, quien los excluya cuando éstos mantienen una posición crítica y de autonomía para exigir los derechos constitucionales como es el caso del movimiento socio-ambiental quien defiende los derechos a la demarcación y transferencia de sus territorios, a tomar decisiones sobre su hábitat y a la protección y resguardo del medio ambiente y sobre todo, a su identidad y modos de vida.

Bibliografía

ACOSTA, Alberto, “El Buen Vivir, una utopía por (re)construir”, en *Casa de Las Américas*, 2009, N°257, pp. 33-46.

ACUERDO DE LOS PUEBLOS, “Compilación de Conclusiones y Resultados”, en *Conferencia Mundial de los pueblos sobre el cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra*, Cochabamba, Ministro de Ambiente y Agua. 2010.

ÁLVAREZ, Rosangel y GARCÍA-GUADILLA, María Pilar, “Contraloría Social y clientelismo: la praxis de los Consejos Comunales en Venezuela”, en *Politeia*, 2011, Vol. 34, N°46, pp.175-207.

AMIGRANSA, “Insostenibilidad ambiental del modelo de desarrollo Bolivariano: Programa”, en *Foro Alternativo al Social Venezolano*, 2006a.

AMIGRANSA, “El modelo bolivariano de desarrollo en Venezuela: Sus impactos ambientales y sociales”, en *Soberanía*, 2006b. Disponible en: http://www.soberania.org/Articulos/articulo_1878.htm [Consultado el 1/02/2013].

ARCONADA, Santiago, “Carta abierta al Presidente Hugo Chávez Frías: El otro diálogo”, en *Aporrea*, 2011. Disponible en: <http://www.aporrea.org/ideologia/a116888.html> [Consultado el 2/3/2012].

ARENAS, Nelly y GÓMEZ CALCAÑO, Luis, *Populismo Autoritario: Venezuela 1999-2005*, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2006.

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, *Exportaciones e importaciones de bienes y servicios según sectores. Balanza de pagos y otros indicadores del sector externo*, Caracas, Banco Central de Venezuela, 2011.

BOSSI, Fernando, “Los movimientos sociales en el Alba”, en *Aporrea*, 2008. Disponible en: <http://www.aporrea.org/venezuelaexterior/a61425.html> [Consultado el 15/7/2012].

BUROZ, María Teresa, *Concepciones y racionalidades del desarrollo sostenible. Caso: la apertura minera en la reserva forestal de Imataca, Venezuela*, Manuscrito Tesis de Licenciatura, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2001.

CAIONE, Cecilia, “Creación de las comunas sufrió tropiezos”, en *Últimas Noticias*, Caracas, 2011. Disponible en: <http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/creacion-de-comunas-sufrio-tropiezos.aspx> [Consultado el 04/4/ 2013]

CARRASQUEL, Gustavo, “Azul Ambientalistas ante el derrame de petrolero sin precedentes en el Río Guarapiche de Maturín”, en *Soberanía*, 14 de febrero 2012 . Disponible en: http://www.soberania.org/Articulos/articulo_7060.htm

CDAALC, *Nuestra Propia Agenda*, New York, Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y El Caribe, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo/Banco Interamericano de Desarrollo, 1990.

CEPAL, “Infraestructura física e integración regional”, en *Boletín FAL*, 2009, N°280. Disponible en: <http://www.cepal.org/usi/noticias/bolfall/7/38207/FAL-280-WEB.pdf>. [Consultado el 5/3/2013].

COLLIER, Ruth y COLLIER, David, *Shaping the Political Arena*, University of Notre Dame, 2002.

COMMITTEE TO PROTECT JOURNALISTS, “Medios privados venezolanos se debilitan bajo asedio de Chávez”, en Committee to Protect Journalists, 29 de agosto 2012. Disponible en: <http://www.cpj.org/es/2012/08/medios-privados-venezolanos-se-marchitan-bajo-ased.php>

COSIPLAN, *Plan de Trabajo 2012*, COSIPLAN-IIRSA, 2012. Disponible en: www.iirsa.org/.../rc_brasilia11_6_plan_de_trabajo_2012.pdf [Consultado el 5/4/2013].

COSIPLAN, *Plan de Acción Estratégico 2012-2022*, COSIPLAN-IIRSA, 2012. Disponible en: www.iirsa.org/.../rc_brasilia11_6_plan_de_trabajo_2012.pdf [Consultado el 10/2/2013].

DENVIR, Daniel y RIOFRANCOS, Thea, “How green is the Latin American left? A look at Ecuador, Bolivia and Venezuela”, en *Upside Down World*, 2 de abril 2008. Disponible en: <http://upsidedownworld.org/main/content/view/1203/1/> [Consultado 1/1/2012].

ESCOBAR, Arturo, “Latin American at a Crossroad. Alternative modernization, post-liberalism, or post-development?”, en *Cultural Studies*, 2010, N°24, pp. 1-65.

FERGUSON, Alex, “El desarrollo sustentable, La revolución de las lógicas y los sentidos”, ponencia presentada en el *Seminario Itinerante del MES, Ética, Formación Integral y Nuevos Tiempos*. Disponible en 2007, <http://www.inn.gob.ve/pdf/foro/ponencias/p01/Presentacion%20Alex%20Fergusson%20Seguridad%20Alimentaria.pdf>. [Consultado el 4/4/2013].

FERGUSON, Alex, *Venezuela: la cuestión ambiental y el desarrollo*, Caracas, Ediciones del MPPCyT, 2008.

GABALDÓN, Arnoldo José, “Del informe Brundtland a nuestra propia agenda”, en María Pilar García-Guadilla y Jutta Blauert (eds.) *Retos al desarrollo y la democracia: movimientos ambientales en América Latina y Europa*, Caracas, Nueva Sociedad y Fundación Friedrich Ebert de México, 1994, pp.27-36

GARCÍA-GUADILLA, María Pilar, “The Venezuelan Ecology Movement”, en Sonia Álvarez y Arturo Escobar (eds.) *The making of social movements in Latin America*, Boulder-Colorado, Westview Press, 1992, pp.150-170.

GARCÍA-GUADILLA, María Pilar, “La praxis de los Consejos Comunales: ¿poder popular o instancia clientelar?”, en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, 2008, Vol.14, N°1, pp.125-151.

GARCÍA-GUADILLA, María Pilar, “Ecosocialismo del siglo XXI y modelo de desarrollo Bolivariano: los mitos de la sustentabilidad ambiental y de la democracia participativa” en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, 2009, Vol.15, N°1, pp.187-223.

GARCÍA-GUADILLA, María Pilar, “Poder Popular y organizaciones comunitarias en Venezuela: alcances y límites de la democracia directa en el ciclo comunal”, en Antonino Opazo, Fernanda Palacios, Klaudio Duarte, Manuel Canales, Tomás Villasante (eds.) *Construyendo democracias y metodologías participativas desde el Sur*, Santiago de Chile, LOM, 2013.

GARCÍA-GUADILLA, María Pilar y LAGORIO, Carlos, “La cuestión del poder y los movimientos sociales: reflexión post-Foro Social Mundial Caracas 2006”, en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, 2006, Vol.12, N°3, pp. 53-65.

GAUS, “Base de datos de entrevistas a las organizaciones de derechos humanos, ambientalistas y de democracia liberal”, en María Pilar García-Guadilla (ed.) *La constitucionalización de nuevas ciudadanías y racionalidades en Venezuela: actores sociales y gestión de conflictos sociopolíticos*, Caracas, Grupo Interdisciplinario de Investigación en Gestión Ambiental, Urbana y Sociopolítica, Universidad Simón Bolívar-FONACIT, 2010.

GOODMAN, Amy, “Chávez: ‘Debemos pasar del capitalismo al socialismo’. Entrevista con el presidente venezolano Hugo Chávez”, en *Libre Pensamiento*, 2 de enero 2010. Disponible en: <http://librepenicmoncjose.blogspot.com.ar/2010/01/212010-chavez-debemos-pasar-del.html>. [Consultado el 22/4/2012].

GRUPO DE ARTICULACIÓN INTERNACIONAL DE LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS POR JUSTICIA SOCIAL Y AMBIENTAL, *Informe del Grupo de articulación internacional de la Cumbre de los Pueblos por Justicia Social y Ambiental*, Río de Janeiro, 12 de mayo 2012.

GUDYNAS, Eduardo, “La sopa de la integración”, en *Integración Sur*, 2007. Disponible en: <http://www.integracionsur.com/americalatina/GudynasSopaIntegracion.htm>. [Consultado el 29/5/2012].

GUDYNAS, Eduardo, “Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo”, en *Mesa Redonda sobre Alternativas a una Economía Extractivista*, Quito, CAAP y FLACSO, 2009.

GUDYNAS, Eduardo, “Estado compensador y nuevos extractivismos: las ambivalencias del progresismo suramericano”, en *Nueva Sociedad*, 2012a, N°237, pp.126-146.

GUDYNAS, Eduardo, “La izquierda marrón”, en *ALAI - América Latina en Movimiento*, 2 de marzo 2012b. Disponible en: <http://alainet.org/active/53106> [Consultado el 22/4/2012].

IIRSA, “Base de datos de proyectos”, en *Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana*, 2011a. Disponible en: <http://www.iirsa.org/proyectos/Proyectos.aspx> [Consultado el 4/4/ 2013].

IIRSA, “Cartera de Proyectos IIRSA”, en *Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana*, 2011b. Disponible en: <http://www.iirsa.org/Cartera.asp> [Consultado el 4/4/2013].

IIRSA, “IIRSA 10 años después: Sus logros y desafíos”, en *Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana*, 2011c. Disponible en: http://www.iirsa.org/BancoConocimiento/I/iirsa_10_anos_despues_sus_logros_y_desafios/iirsa_10_anos_despues_sus_logros_y_desafios.asp?CodIdioma=ESP [Consultado el 10/3/2012].

INFORME21.COM, “Emergencia en Monagas por derrame de petróleo en el Río Guarapiche”, en *Informe21.com*, 10 de febrero 2012. Disponible en: <http://informe21.com/actualidad/12/02/10/emergencia-en-monagas-por-derrame-de-petroleo-en-el-rio-guarapiche-fotos>

KARL, Terry, *The paradox of plenty oil booms in Petro-State*, University of California Press, 1997.

LANDER, Edgardo, “El Estado en los actuales procesos de cambio en América Latina: proyectos complementarios/divergentes en sociedades heterogéneas”, en Miriam Lang y Dunia Mokrani (eds.) *Mas allá del Desarrollo*, Quito, Fundación Rosa Luxemburg/Abya Yala, 2011, pp. 121-143.

MÉNDEZ, Diana, *Conflicto sociopolítico y socio-ambiental de la apertura minera en la Reserva Forestal de Imataca*, Manuscrito de Tesis de Licenciatura, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1999.

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, *Líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2001-2007*, Caracas, Ministerio de Planificación y Desarrollo, 2001. Disponible en: <http://www.mpd.gov.ve/pdeysn/plan.htm>. [Consultado el 11/7/2011].

MORALES, Evo, “Palabras del Presidente de la República, Evo Morales Ayma, en el Foro Permanente para las cuestiones Indígenas en las Naciones Unidas. 10 mandamientos para salvar al planeta, a la humanidad y a la vida”, en *ALAI - América Latina en Movimiento*, 22 de abril 2008. Disponible en: <http://alainet.org/active/31235&lang=es>. [Consultado el 2/3/2013].

PDVSA, *Informe de Gestión Anual 2009*, Caracas, Ministerio de Poder Popular de

Petróleo y Minería, 2009. Disponible en: <http://www.pdvsa.com/interfase.sp/database/fichero/free/5889/1049.PDF>. [Consultado el 27/5/2012].

PDVSA, Informe de Gestión Anual 2010, Caracas, Ministerio de Poder Popular de Petróleo y Minería, 2010. Disponible en: <http://es.scribd.com/doc/51489238/PDVSA-Informe-Anual-Gestion-2010>. [Consultado el 27/5/2012].

PDVSA, *Informe de Gestión Anual 2011*, Caracas, Ministerio de Poder Popular de Petróleo y Minería, 2011. Disponible en: <http://static.eluniversal.com/2012/04/17/informedegestion.pdf>. [Consultado el 27/5/2012].

PDVSA, *Auténtica Nacionalización*, Caracas, Ministerio de Poder Popular de Petróleo y Minería, s/f. Disponible en: http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuprinc.tpl.html&newsid_temas=44. [Consultado el 4/4/2012]

PDVSA, *Petróleo para el pueblo*, Caracas, Ministerio de Poder Popular de Petróleo y Minería, s/f. Disponible en: http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuprinc2.tpl.html&newsid_temas=38. [Consultado el 1/4/2013].

PÉREZ, Jesús, *La Revolución Bolivariana. La vía venezolana hacia el Desarrollo Sustentable*, Departamento de América Latina y el Caribe, Centro de Estudios Latinoamericanos, 2007. Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/37237/Documento_completo.pdf?sequence=1. [Consultado el 1/5/2009].

PORTILLO, Lusbi, “Venezuela perderá su soberanía en los proyectos de la IIRSA”, en *Aporrea*, 2004. Disponible en: <http://www.aporrea.org/tiburon/n51606.html>. [Consultado el 25/6/2012].

PORTILLO, Lusbi, “El Socialismo del Siglo XXI excluye a los indígenas y la protección ambiental”, en *Soberanía*, 21 de noviembre 2005. Disponible en: http://www.soberania.org/Articulos/articulo_1728.htm

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, “*Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación. 2007-2013*”, República Bolivariana de Venezuela, 2007. Disponible en: http://www.bibliotecasvirtuales.org.ve/spaw/docs/Mapa_Lineas_General_Econ_Social_Plan_2007_2013.pdf [Consultado el 11/2/2011].

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, *Plan Patria*.

Segundo Plan Socialista Económico y Social de la Nación 2013-2019, República Bolivariana de Venezuela, 28 de septiembre 2013. Disponible en: http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/botones/bot_90998c61a54764da3be94c3715079a7e74416eba.pdf. [Consultado el 23/5/2014].

PROVEA, *Informes Anuales 2004-2011*, Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos, 2011. Disponible en: <http://www.derechos.org.ve/> [Consultado el 27/5/2012].

PROVEA, “Derecho a la libertad de expresión e información”, en *Comunicación: estudios venezolanos de comunicación*, 2009, N°145.

REY, Juan Carlos, *El Futuro de la democracia en Venezuela*, Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 1998.

ROBERTS, Kenneth, “Populism, Political Conflict, and Grass-Roots Organization in Latin America”, en *Comparative Politics*, 2006, Vol.38, N°2, pp.127-148.

RODRÍGUEZ, Claudia, *Conflictos indígenas y ambientales en el Estado Bolívar*, Tesis de Maestría, Caracas, Universidad Simón Bolívar, 2001.

RODRÍGUEZ, Laura, *El Conflicto socio-ambiental en la Sierra de Perijá. Concepciones sobre el desarrollo y alcances de la democracia ambiental (2000-2010)*. Tesis de Maestría, Caracas, Universidad Simón Bolívar, 2012.

VELASCO, Francisco, “Participación en el Foro Ecosocialismo del Siglo XXI”, (Conferencia grabada), Caracas, PDVS, mayo 2007.

WIKINOTICIAS, “Explosión en la Refinería de Amuay en Venezuela deja varios muertos y decenas de heridos”, en *Wikinoticias*, 25 de agosto 2012. Disponible en: http://es.wikinews.org/wiki/Explosi%C3%B3n_en_la_Refiner%C3%ADa_de_Amuay_en_Venezuela_deja_varios_muertos_y_decenas_de_heridos

Acumulación, conflictos sociales y políticas de Estado en América Latina en las últimas décadas. Cambios y rupturas en el escenario regional

Guido Galafassi¹

Resumen

El objetivo de este artículo es analizar dialécticamente la correlación entre conflictos sociales y modos de desarrollo-acumulación económico-políticos. Se sostiene que las trasmutaciones económico-políticas que se han producido hacia fines de los años '70 y todo los '80 con la instauración del modelo neoliberal-posmoderno, han reconfigurado las formas relacionales de los conflictos y los procesos de movilización social. Para analizar la realidad socio-histórica latinoamericana en las últimas décadas se nos impone como tarea preliminar interrogarnos sobre los "cambios" y/o "rupturas" en el escenario regional, en correspondencia a la trama de fuerzas y componentes sociales que se articulan en el proceso relacional Neoliberalismo/conflicto/movimientos sociales sin dejar de problematizar las transformaciones en las formas y la actuación del Estado respecto de etapas anteriores.

Palabras clave: modos de acumulación, conflictos sociales, Políticas de Estado

Abstract

The objective of this article is to analyze the relationship between social conflicts, the models of accumulation and the State policies in Latin America in recent decades. It is considered that the neo-liberal policies have transformed the patterns of social conflicts appearing a greater diversity of actors and the fragmentation of the demands and protests.

Key words: social conflicts, model of accumulation, State policies

¹ CONICET y Universidad Nacional de Quilmes, Argentina

A modo de Introducción:

Partiendo del principio general de que los conflictos se relacionan dialéctica e históricamente con los modos de acumulación, se sostiene que las trasmutaciones económico-políticas que se han producido hacia fines de los años ´70 y todo los ´80 con la instauración del modelo neoliberal-posmoderno, han reconfigurado las formas relacionales de los conflictos y los procesos de movilización social. Para analizar la realidad socio-histórica latinoamericana en las últimas décadas se nos impone como tarea preliminar interrogarnos sobre los “cambios” y/o “rupturas” en el escenario regional, en correspondencia a la trama de fuerzas y componentes sociales que se articulan en el proceso relacional Neoliberalismo/conflicto/movimientos sociales sin dejar de problematizar las transformaciones en las formas, la compasión y la actuación del Estado respecto de etapas anteriores. Esto implicara analizar críticamente la dimensión dialéctica y relacional de su existencia, estructurada en un marco de relaciones dinámicas, contradictorias y en constante tensión.

El conflicto social en las últimas décadas (en relación a la diversificación de elementos identitarios e imaginarios colectivos), engloba un proceso de re-emergencia y transformación de las relaciones clásicas de protesta y movilización. A partir de los años ´80 y la emergencia de gobiernos neoliberales, se produce un crecimiento de la pobreza y la marginalidad junto a nuevas formas de coerción social que harán en muchos casos que se modifiquen las formas de gestionar las demandas de los sectores populares. Emerge una tipología de conflictos diversos junto a la aparición de “renovados sujetos sociales” participes de esos conflictos y de los numerosos procesos de movilización social.

Este escrito entonces tendrá como propuesta, el analizar el tipo de conflictividad social que emerge en los años ´80-´90 y ´2000 en relación a los cambios producidos tanto en el modo de acumulación como en la configuración y actuación del Estado así como en los imaginarios sociales.

El nuevo patrón de acumulación surgido a partir de mediados y fines de los años setenta y consolidado en los ´80-´90 junto a la crisis de los paradigmas de cambio social clásicos de la primera mitad del siglo XX (sustentados en la liberación social, la revolución y el socialismo) y la aparición de entramados culturales que ponen en entredicho ciertos valores de la modernidad engalanando, como se dijo, al individualismo como principio rector; condicionaron y definieron dialécticamente la emergencia de una tipología de conflictos sociales que se caracterizan por una relativa mutación tanto en sus formas como en los sujetos que la protagonizan.

De un explícito rechazo al proceso capitalista de modernización de los años ´60 y ´70 pasamos en la actualidad a una dilución y desdibujamiento de esta clara disyuntiva política, apareciendo una mayor diversidad de sujetos colectivos y movimientos sociales y de procesos de movilización popular en donde lo que se cuestiona es más la variante neoliberal e individualista del capitalismo que el capitalismo mismo. El acceso al poder y al Estado por parte de estos movimientos sociales -como en los casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia- interrumpiendo décadas de política neoliberal, representan el ejemplo más claro de esta tendencia. La democracia representativa y popular es vista como la vía para el cambio (ya no la revolución), cambio que consiste en intentar construir reglas básicas de justicia social dentro de un marco del llamado “socialismo del siglo XXI” que no necesariamente remite a los imaginarios clásicos del siglo XX.

Años de protesta y rebelión: entre la liberación y la revolución social

Si la Revolución Rusa primero (con sus antecedentes la Comuna de París y los movimientos sociales de fines del siglo decimonónico) y la China después fueron los momentos culminantes de un proceso creciente de rebelión anticapitalista y tuvieron como objetivo la construcción de una sociedad socialista basadas teóricamente en los principios marxistas, de los años ´60 se desprende toda una serie diversa de revueltas, rebeliones y revoluciones que

asumieron diferentes perfiles, dados tanto por el contexto regional propio como por el intento de superar los estancamientos, fracasos, traiciones y defraudaciones del devenir de las dos grandes revoluciones antes mencionadas. Es obvio que todo un debate teórico² e ideológico acompañó a estos procesos, y en parte la noción de razón instrumental en tanto imperativo que asume los fines dados de la dominación y manipulación racional del mundo, también fue puesta en el banquillo de los acusados. *¿Hasta que punto era segura aquella vida en el pensamiento de los que la vivían?* El romanticismo y el idealismo representativo de la juventud de aquellos años dejan de manifiesto que la opinión pública general buscaba evadirse, “escapar de la hipocresía” y la rigidez de las estructuras sociales impuestas por la racionalidad moderna.

Respecto a los procesos de producción de conocimiento, se advierte que tomaron un giro paulatino hacia posiciones menos críticas luego de desarrollarse en los años ´70 un importante proceso de radicalización de las ideas hacia posiciones cercanas al marxismo y ser las nociones de liberación un faro fuerte en buena parte de la academia. En las universidades y las instituciones científicas, la ciencia pragmática (llamada científicismo en los años´70) se apoderó de toda justificación y producción de conocimiento, orientándose fundamentalmente hacia fines prácticos y dedicándose primordialmente a formar mano de obra especializada según las necesidades del mercado. Olvidó así su pensar crítico adaptándose a las premisas de la sociedad neoliberal del “fin de la historia y las ideologías”. La especialización disciplinaria retomó el camino, afianzando firmemente su posición y la

² La crítica frankfurtiana apunta al problema mas radical de la sociedad industrial/burguesa/capitalista; ya que esta representa el modelo paradigmático de una sociedad opresiva, que se ha transformado en la única regla de juego para el ejercicio, ya imposible, de una humanidad integrada. Los teóricos de Frankfurt puntualizan en la necesidad de detener este modelo, antes de que aniquile el último rincón en el que aun se refugia la conciencia propia de la humanidad. En la *Crítica de la Razón Instrumental*, Horkheimer se cuestiona por el origen, el punto fundacional que hace que este sistema exista; se pregunta por el modelo paradigmático de racionalidad que sostiene a la sociedad moderna. Para más información ver o véase: Galafassi, Guido (2002). “La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y la crisis de la idea de razón en la Modernidad” en *Contribuciones desde Coatepec*. Enero-junio numero 002, Universidad Autónoma del Estado de Mexico, Toluca. Pp 4-21; Horkheimer, Max (1969). “Crítica de la Razón Instrumental”, Buenos Aires, Sur; Adorno, Theodor; Horkheimer, Max (2013) “Dialéctica del Iluminismo”, Caronte-Ensayo, Buenos Aires.

interdisciplinariedad y la multiplicidad integrada y dialéctica de miradas quedó abiertamente en el recuerdo.

A pesar de las teorías que desde el norte fueron fortaleciendo ciertas categorías e interpretaciones basadas en el individualismo metodológico y la acción colectiva³, y que desplazaban de la escena la lucha de clases y con ello el proceso de explotación; todas las series diversas de revueltas –definidas en base a los llamados “nuevos movimientos sociales”– sucedidas en Europa, Japón, EEUU, México y el resto de América Latina y el mundo en los años sesenta muy lejos estaban del supuesto carácter restringido que implica un mero “interés individualista” o una simple “búsqueda de identidad”. En el Mayo Francés, icono emblemático de estas revueltas, así como en muchas otras, el imaginario de un cambio radical guiaba las protestas, más allá que estas hubieran surgido por problemáticas puntuales del sistema identificado como “alienante”. Lo que predominaba en todas estas rebeliones era un profundo pero integral anti status quo (dado que no solo se reducía a denunciar la opresión económica sino la alienación en todos los planos de la vida social) pero también una crítica profunda a la burocratización de las izquierdas, que en el poder (ya sea sindical, como de gobierno) habían negociado un pacto de coexistencia pacífica con el liberalismo. El ecologismo, pacifismo y feminismo posterior, si bien es cierto dejaron parcialmente de lado las visiones y reivindicaciones explícitamente clasistas, apuntaban sin embargo a contradicciones inherentes a las sociedades patriarcales y productivistas de mercado, así como a los regímenes también industrialistas pero de economía centralizada autodefinidos como socialistas. Por su parte, el movimiento contracultural y el hippismo, desde una mirada más basada en las “sensaciones” que en la reflexión racional (característica de la modernidad) cuestionaba hasta los pilares más profundos de la sociedad industrial, basada en el conocimiento científico, el materialismo productivista, la lógica de la competencia individual y la disputa por el poder centralizado. En síntesis, lo que se estaba poniendo en duda era la supuesta “libertad” de las sociedades capitalistas y la supuesta “igualdad” de las sociedades de Europa del Este,

³ Cfr. Coser, 1970

autodefinidas como socialistas. La alienación en su sentido más profundo e integral y en sus diversas manifestaciones constituía el principal argumento de las denuncias y las protestas; y la superación de estas sociedades alienantes era el objetivo que motorizaba a los distintos procesos de movilización.

América Latina, que al igual que Europa mantenía una larga tradición de conflictividad social y política, renueva su potencialidad de desvanecimiento de lo estatuido fiel a su historia en tanto región en constante contradicción. Haciéndose eco de la dinámica de conflictos de los países centrales y su discusión entre capitalismo y las diversas corrientes de interpretación del marxismo, propone al mismo tiempo toda una serie de revueltas propias, asentadas en su particularidad histórica en tanto complejo entramado de acumulación agrario-industrial, con sus sujetos sociales y culturas asociadas. Se ponían cada vez más en jaque no sólo la dominación interna, sino la relación de dominación imperial histórica a la que se veía sometida. La Revolución Cubana y toda la compleja dinámica guerrillera de la época junto a las movilizaciones estudiantiles, campesinas, obreras y toda una propuesta de renovación en el arte, son solo ejemplos más que evidentes de estos procesos dialécticos.

Diferentes y muy variados procesos que provenían de largas luchas por la descolonización económica y política caracterizaban aquellos años en América Latina. El objetivo era la liberación –nacional y social- frente a lo que se identificaba como “imperialismo” definido como una aceitada maquinaria de dominación y explotación social orientada por los capitales multinacionales, y en donde los Estados Unidos de Norteamérica tenían un papel clave. La Revolución Cubana como se dijo, signó definitivamente todos los procesos de movilización, protestas, revueltas y rebeliones desde los inicios mismos de los años sesenta. La lucha armada, las guerrillas, las movilizaciones de masa, la alianza, no sin contradicciones y fricciones, entre campesinos, obreros y estudiantes constituían la clave de un proceso que se veía casi irreversible y que expresaba la lucha por la “liberación nacional y social de los pueblos latinoamericanos”, tal la identificación de la época. El marxismo en sus diversas

variantes y combinaciones era el marco teórico dominante, quedando muy lejos la discusión individualista sobre nuevos movimientos sociales y acción colectiva planteada en los países centrales.

En el territorio latinoamericano se cruzan, a lo largo de todo su historia, los debates entre desarrollo y subdesarrollo; dependencia y liberación; indigenismo y occidentalismo; imperialismo y nacionalismo, industrialismo y producción agraria; y obviamente entre capitalismo y socialismo. América Latina fue y sigue siendo un campo de disputa entre los bloques dominantes que intentan imponer modelos de apropiación de recursos naturales y humanos configurando modos de acumulación regionales, y clases subalternas que intentan resistir logrando en algunos casos torcer el rumbo. La rica y compleja diversidad cultural y política se entrecruza permanentemente con este esquema dialéctico otorgándole a cada situación histórica tendencias diferenciales que mal nos pueden llevar a hablar de procesos equivalentes y homogéneos más allá de ciertas determinaciones básicas conjuntas. Si la revolución mexicana fue una lucha antioligárquica en donde se superponían clases burguesas y movimientos subalternos de base campesina en pos de un proyecto modernizador para los primeros y liberador para los segundos; la revolución boliviana de 1952 fue un movimiento insurreccional fuertemente obrero imbuido de ideales bolcheviques en una extraña paradoja de un país básica y fuertemente campesino e indígena; que resultó finalmente en un proyecto reformista que se deshizo del componente proletario primero para corromperse luego (durante el neoliberalismo). Resurge, finalmente en nuestros días con la emergencia insurreccional del componente mayoritario campesino-indígena, esos que tuvieron una escasa presencia en las luchas de mediados de los ´50. La revolución cubana por su parte, además de sus cualidades que desandan todos los esquemas rígidos, inauguró por su parte toda una década de fuerte rebelión (no sólo política, sino teórica y cultural) en toda América Latina que necesitó finalmente de sangrientas dictaduras para imponer modelos de individualismo extremo, destruyendo redes y solidaridades históricas en el marco de modelos socioeconómicos y políticos neoliberales e ideológico-culturales neoconservadores. Lo que siempre estuvo en juego fue

un modo de acumulación concentrada y explotadora, que conjuga reproducción ampliada y acumulación originaria liderados durante décadas por la doctrina del desarrollo y la modernización (más allá del tinte más conservador-liberal o más popular-reformista de los gobiernos de turno) contra diversas estrategias de liberación y construcción de modos alternativos. Proceso complejo que fue variando a lo largo del tiempo y el espacio no sólo gracias al momento histórico y el paradigma liberador vigente sino además gracias a la estructura social y política, a la construcción cultural ideológica y a la lectura que ésta haga de la primera según las características de las clases involucradas en los procesos de conflicto.

Del Neoliberalismo a la Democracia popular y Buen Vivir. Algunas consideraciones socio-históricas

Luego de un duro y muy feroz ciclo de dictaduras y gobiernos conservadores que en los años ´70 y ´80 se encargaron de poner orden generando la transición hacia un nuevo modo de acumulación asentado en la reprimarización y la valorización financiera, toda América Latina se fue enfrentando gradualmente a un proceso de decaimiento del fervor más radical de cambio social e ideológico, quedando solo algunas experiencias de liberación, como la continuación de la guerrilla en El Salvador hasta entrado los años ´90, el conflicto armado en Colombia y la culminación del proceso rebelde en Nicaragua que finalmente logró su cometido derrocando la dictadura títere de Somoza e instaurando una experiencia que se diferencia de toda revolución anterior. Desde sus orígenes el objetivo apuntaba a la “liberación nacional” más que a la construcción de alguna variante de socialismo. Esto incluía un plan de desarrollo económico y social a partir de la puesta en marcha de un aparato productivo en donde el Estado dictaba el camino en una estructura económica en donde la burguesía conservaba parte de su poder económico y político. La premisa fundamental fue integrar el total de la población a la satisfacción de las necesidades básicas, por largas décadas excluida, intentando zanjar a su vez la abismal brecha entre ricos y pobres. Además del grave y permanente ataque de la contrarrevolución apoyada firmemente desde fuera por los Estados

Unidos y desde dentro por los sectores burgueses, el proceso sandinista no pudo dar cuenta de las contradicciones que generaba estar a medio camino al dejar intactos en términos de capacidad de operación a las clases sociales que manejaban la economía y al ser también incapaces de enfrentar las diversas controversias que generaban la presencia de pueblos originarios portadores de una cultura diferente. Solo fueron cumpliendo parcialmente algunos de sus objetivos para finalmente tener que dejar el poder cuando en el juego de la democracia representativa perdieron la elección a manos del partido que representaba justamente los intereses de la burguesía.

Mientras en Nicaragua y El Salvador los movimientos guerrilleros muñidos de alguna estrategia de cambio social daban sus últimas batallas, en el resto del subcontinente y al compás de las “revoluciones” neoconservadoras de Ronald Reagan y Margaret Tachter, el llamado modelo neoliberal (o neoconservador) se iba imponiendo a través de un complejo juego de coerción y consenso, de tal manera que para los años ´90 la mayoría de la población clamaba por las recetas de liberalización de la economía y abandono de toda práctica “estatista”.

Hay acuerdo respecto a que los preludios del neoliberalismo – en el marco de la coyuntura mundial- los podemos encontrar en el proceso político-económico gestado en Gran Bretaña en los años ´80 como epílogo de la larga crisis del modelo socialdemócrata europeo representado en este caso por el histórico laborismo. Las medidas del gobierno conservador de Margaret Thatcher han traído aparejada concepciones ideológicas (cuyas matrices teóricas) se materializarían en los primeros ensayos latinoamericanos. La contracción de la emisión monetaria, la elevación de las tasas de interés, el descenso de los controles sobre los flujos financieros han devenido en el lógico crecimiento del desempleo, que se tornó masivo. El intento de Ronald Reagan presentó matices un tanto diferentes: medidas de fuerte tendencia neoliberal se implementarían en nombre de la competencia (militar y económica) con la URSS en el marco de la Guerra Fría. Toda instrumentación económica sería válida si constituía un mecanismo para quebrar de forma definitiva la economía

soviética. Las revoluciones conservadoras han significado un severo disciplinamiento fiscal en favor de los sectores concentrados y portadores del poder político-económico.

América Latina representó una suerte de escenario experimental en el proceso de instauración de regímenes neoliberales. Las primeras experiencias del modelo neoliberal ha sido aplicadas por el gobierno dictatorial chileno, (a partir de 1973); el cual se caracterizó por una férrea ortodoxia y adscripción a los postulados liberales. Esto se tradujo en una extrema liberalización de las importaciones, reformas estructurales del sistema financiero y apertura comercial hacia el exterior. Estas políticas recesivas han devenido en la elevación del índice del desempleo, disminución de los salarios, cierre de empresas estatales etc. El neoliberalismo chileno se adelantaría una década a las medidas que, de forma ulterior, implementarían los teóricos de la “Revolución conservadora”. Un ensayo posterior se puede identificar en el intento democrático boliviano (gobierno de Víctor Paz Estenssoro) quien a mediados de la década del 80 implementó reformas en funciones claves del Estado, con el fin (desde el punto de vista discursivo) de controlar la hiperinflación. El elemento que representa una variante en este doble proceso comparativo, radica en que el modelo boliviano no constituía un sistema dictatorial sino uno de los primeros ensayos de instauración de gobiernos democráticos, pero con un claro tinte conservador. Estos dos modelos representan el mojón histórico, el origen y punto de partida para la cristalización de gobiernos netamente aperturistas cuyos modelos mas representativos se pueden identificar en la presidencia de Salinas, Mexico (1988); Carlos Menem, Argentina (1989) y Carlos Andrés Pérez (1990)

La implementación del neoliberalismo en América Latina vino de la mano con importantes cambios en el modo de acumulación, echando definitivamente por tierra la etapa sustitutiva de importaciones y reimplantando al subcontinente, básicamente como un oferente de recursos naturales en donde nuevos o renovados capitales pasaron a hegemonizar el proceso de transformación. La hegemonía económica implica necesariamente

una *dimensión organizacional*. No hay producción de hegemonía sin desarrollo de instituciones o aparatos que permitan la práctica y estructuración de dominación económica. No obstante, los clásicos parámetros de dominación económica y sociopolítica se presentaron más difusos, de manera tal que los sujetos colectivos y su accionar, en el marco de los conflictos sociales del continente, adquieran un sinnúmero de particularidades. En la extensa y compleja historia latinoamericana hemos observado que el monopolio de la coerción ha respondido a la necesidad de mantener un orden social (siempre respaldado por cierto grado de consenso) que pivoteo siempre entre gobiernos democráticos (vigilados) y dictaduras militares. Sin embargo, los ensayos democráticos que siguen a los gobiernos dictatoriales, además de lograr una continuidad inusitada (salvo algún caso puntual como el de Venezuela o Paraguay que igualmente sufrieron golpes “civiles”) radicalizarían la función de dominación-hegemonía vía el consenso, sin nunca obviamente desatender los útiles mecanismos de la coerción que quedaron fundamentalmente reservados a través del uso de fuerzas policiales-militares para la represión de conflictos y protestas focalizadas.

Para el paradigma neoliberal, la tarea democrática se convertía en un objetivo central contra un Estado autoritario, apoyado sobre todo en una “burguesía de Estado” que sustentaba el carácter corporativo y autoritario del mismo. Muy lejos de las tesis dependencistas que postulaban que los enemigos de la democracia fueron históricamente el capital internacional y su política monopolista y expropiadora de los recursos generados en los propios países latinoamericanos, el credo neoliberal ponía el acento en la lucha contra el corporativismo y su ligazón con una burguesía burocrática conservadora que, entre otras cosas, limitó la capacidad de negociación internacional de los países en el nuevo contexto de acelerado avance tecnológico y nueva división internacional del trabajo que se esbozó a partir de la década de 1970.

El consenso internacional y especialmente el apoyo de los Estados Unidos a estas políticas garantizaron una estabilidad democrática nunca antes vista en Latinoamérica que perdura hasta nuestros días. Vastos movimientos

de capital financiero vieron en América Latina su oportunidad y brindaron por algunos años la ilusión de una estabilidad y crecimiento económicos, caracterizado por: monedas fuertes (principio quebrado en México a finales de 1994); estabilidad monetaria preservada en una coyuntura mundial deflacionaria; y estabilidad fiscal obtenida a través de la privatización de las empresas públicas y el recorte de gastos estatales, pero amenazada por el aumento de la emisión de bonos de deuda pública, pagados con intereses cada vez más altos que terminaron por generar déficits públicos aun superiores a los existentes a inicios de la década de 1990.

Si bien neoliberalismo iba de la mano con un régimen político liberal-democrático, es necesario resaltar que hubo situaciones de excepción, como el caso de Perú, donde Fujimori implantó un régimen de excepción que fue tolerado por las nacientes democracias de la región. En Chile, la oposición regresó a la vida política y al gobierno a través de un difícil compromiso con la preservación de instituciones dictatoriales, entre ellas la senaduría vitalicia de Pinochet.

Pero surgieron ciertas resistencias al proyecto neoliberal, todos ellos ligados a la existencia de un Estado nacional fuerte y de un desarrollo económico de base nacional significativa. Los trabajadores industriales y de servicio se colocaron, sin embargo, en el centro de la resistencia. Todos estos sectores tienen un papel ínfimo en el proyecto neoliberal, y algunos de ellos se tornaron inútiles. Hubo también tentativas de rebelión en el seno de las fuerzas armadas argentinas y venezolanas, entre 1990 y 1993, aunque de signo radicalmente distinto. Hubo, además, el surgimiento de nuevos movimientos guerrilleros, entre los cuales se destaca esta nueva forma de política insurreccional que es el Ejército Zapatista, en México. Es importante también considerar la sobrevivencia y el fortalecimiento de las fuerzas insurreccionales en Colombia, donde la crisis del Estado se hace cada vez más aguda.

Una mirada comparativa en la Historia reciente de América Latina nos permite establecer que las transiciones democráticas de las distintas republicas

latinoamericanas no han sido sinónimo de estabilidad. La institucionalización de las elecciones constituye un episodio mínimo y limitado a la hora de establecer un análisis estructural de la mediana o larga duración. Si bien en los períodos democráticos los enfrentamientos violentos y los procesos de represión suelen disminuir relativamente, en términos socio-históricos y en el recorte especificado, proliferan múltiples conflictividades sociales, comportamientos, actitudes, manifestaciones y expectativas disímiles y heterogéneas. En esta línea, es importante destacar que los procesos dictatoriales establecieron sólidas bases en el proceso de adecuación y preparación del escenario para la instauración de un *nuevo patrón de acumulación* que claramente se consolidó en los períodos democráticos posteriores. Basado en la liberalización de la economía, sus parámetros direccionales se establecieron a partir del Consenso de Washington. El Estado, remodela su papel, transformándose en un garante del *laissez faire*; garantizando la apertura de los mercados nacionales y la libre entrada del capital externo para aprovechar los nichos temporales de mayor rentabilidad. Las democracias neoliberales, desde su génesis, constituyen un proceso histórico harto complejo. La democracia constituye un régimen político cimentado en una estructura histórica cuyas bases se articulan en mecanismos que oscilan entre la dominación y la hegemonía, entre la coerción y el consenso. En este sentido, el conflicto social es doblemente reivindicativo y expresivo, ya que hunde en sus demandas, por un lado la complejidad dialéctica y profunda de la lucha de clases y por otro, criterios más inmediatos tales como la reivindicación de una mayor participación ciudadana, libertad, mayor distribución de la riqueza y cambios en las políticas de Estado.

El neoliberalismo hará que el *individualismo* extremo y la *competencia* elevada se reflejen en perspectiva múltiple; por un lado reconfigurando las pautas de valores y subjetividades culturales, propulsándose la cultura del materialismo/consumismo; y, por otro, redefiniendo el papel que debería ocupar Latinoamérica en el mundo, pues se limitaría a destacarse como oferente de recursos naturales, en el marco de ampliación de la brecha entre los países industrializados y los que (desde la construcción hegemónica de antaño) aspiraban a serlo.

En este contexto, resurgen nuevamente rebeliones al llegar el capitalismo neoliberal a sus límites estructurales. En los países centrales emergen, por ejemplo, los movimientos anti-globalización y diversas nuevas experiencias en América Latina, que incorporan nuevos sectores sociales y fracciones de clase, desafiando así a las teorías “obreristas” de años anteriores. Al quedar intactas las causas que generaban los procesos de liberación nacional y social, los conflictos permanecieron latentes y emergieron al comenzar la crisis del sistema neoliberal. Cada uno de estos fenómenos, reaparecen obviamente resignificados de acuerdo al tiempo y lugar en que les toca vivir; pero tanto el proceso de “transformación bolivariana” de Venezuela como la rebelión y toma de poder en Bolivia por parte de las clases sociales y las etnias más postergadas y explotadas, como el levantamiento del Zapatismo Chiapaneco, las protestas y toma del poder en Ecuador, las revueltas en Oaxaca, o la revuelta en Argentina del 2001, así como el más antiguo proceso del MST en Brasil, guardan una serie de correlaciones históricas fuertes y evidentes – a pesar de sus también novedades- que solo pueden ser vistas prestando atención al proceso de la totalidad dialéctica de la realidad latinoamericana en tanto periferia subdesarrollada funcional al proceso histórico de globalización⁴. Si el proceso venezolano se presenta como el más “tradicional”, por sus ejes y problemas, el zapatismo y la liberación boliviana, más el proceso ecuatoriano, en cambio introducen un elemento renovador que no estuvo fuertemente presente en los anteriores procesos de los años ´70, debido a la fuerte presencia de un componente indígena que, si bien siempre existió como sector doblemente oprimido y explotado, no había podido encontrar su lugar en los procesos revolucionarios filo-socialistas de años anteriores. La rebelión ya no se plantea como rebelión anticapitalista en la búsqueda del socialismo sino como una multiplicidad de dimensiones de búsqueda de mejoras en las condiciones de vida de los pueblos y en procesos de reconstrucción de la identidad cultural con el objetivo básico de superación del neoliberalismo.

⁴ Una aproximación más extensa a esta problemática puede encontrarse por ejemplo en: Gaudichaud, 2010 y Farah y Vasapollo, 2011.

América Latina en las últimas décadas: Democracia, Neoliberalismo y Rebelión

América Latina transita las últimas décadas a partir de múltiples contradicciones. Por un lado la salida de las dictaduras como herramienta de dominación vía la coerción directa, instala a la democracia representativa como estrategia de gestión política más compleja en donde entran en juego de manera más libre las diversas opciones políticas. Así, los mecanismos de dominación deben complejizarse y los procesos de construcción de hegemonía se hacen cada vez más intrincados. Pero sin lugar a dudas que la instalación cultural de los valores individualistas, competitivos y altamente consumistas del neoliberalismo llevan a las sociedades latinoamericanas hacia caminos claramente diferentes a los transitados en los años ´60 y ´70. El conflicto social por un lado se enriquece a partir de demandas que involucran cuestiones de identidad y ciudadanía y por otro pierde cierto carácter antisistémico estructural al dejar de lado las dimensiones más profundas del modelo de acumulación económica y dominación socio-política.

El neoliberalismo así reconfigura por un lado las pautas de valores y subjetividades culturales, propulsándose la cultura del materialismo/consumismo; y, por otro, redefine el papel que va a ocupar Latinoamérica en el mundo, destacándose nuevamente como oferente de recursos naturales, en un marco internacional en donde crece la brecha entre los países industrializados y los que décadas atrás se definían como subdesarrollados.

En un panorama más amplio, se puede establecer que todo el tercer mundo se reconvierte una vez más (luego de los fallidos intentos de industrialización y liberación nacional de los ´50 y ´60) en casi nada más que oferente de espacios y territorios rurales para la *extracción de hidrocarburos, minerales, biodiversidad y alimentos* bajo la clásica fórmula de la división internacional del trabajo, enunciada oficialmente como el aprovechamiento de

las oportunidades en base a las ventajas comparativas. Es así que se vienen definiendo toda una serie diversa de recursos estratégicos que se relacionan dialécticamente, por cuanto por un lado son aquellos que la dinámica global del capital define como recurso demandado en un momento histórico determinado y por otro como aquellos que las condiciones ecológicas regionales determinan como aptos para ser producidos o extraídos en cada lugar. El caucho, es un ejemplo histórico en la América Tropical. Más contemporáneo, la explotación de los hidrocarburos y de minerales no deja de generar conflictos socio-políticos y territoriales, donde entran en juego intereses geoestratégicos norteamericanos, capitales multinacionales de base europea y gobiernos con orientación popular-reformista⁵

El proceso creciente de sojización de América del Sur, que arrasó con ecosistemas, agrosistemas y culturas, se ha convertido no solo en la extracción de un recurso en base a su “oportunidad” en términos de su demanda por las naciones más industrializadas (alimento de ganado y biodiesel) sino que también en la aplicación de la tecnología más concentrada y asociada a fuertes niveles de dependencia. Alienación socio-ecológica e instrumentalización de la razón están en la base y las consecuencias de todos estos procesos.

En este marco estructural, es de importancia destacar los importantes *conflictos geopolíticos* derivados por la posesión de los yacimientos de gas y petróleo en las recientes historias de Venezuela y Bolivia⁶, más la llamada

⁵ Es de importancia mencionar algunos datos estadísticos. El 25% del crudo comercializado a nivel internacional en 2005 era comprado por EEUU, quien solo representaba el 9% de la producción mundial de petróleo. La Unión Europea importa el 80% del petróleo que consume y Japón compra al exterior casi el 100%. Entre las tres potencias producen solo el 12% del total a nivel mundial, aunque en su consumo se va el 50% del producido a nivel mundial e importan el 62% del comercio internacional (cfr., Beinstein, Jorge: “Estados Unidos en el centro de la crisis mundial”, en, *Enfoques Alternativos*, nº 27, Buenos Aires, noviembre de 2004). Más concretamente, vale lo dicho por el ahora presidente saliente de los EEUU: “...America is now more dependent on foreign oil than a time in its history. In 1973, the country imported 36 percent of its oil needs. Today, the U.S. imports 56 percent of its crude oil (...) The U.S. bill for foreign oil has more than doubled from last year...” (Bush, G.W.: *On The Issues Energy*, 4president.org, <http://www.4president.org/issues/bush2000/bush2000energy.htm> 2000)

⁶ cfr. Villegas Quiroga, Carlos: “Rebelión popular y los derechos de propiedad de los hidrocarburos”, en OSAL nº12, pp. 27-34, 2003; Escobar de Pavón, Silvia: “Ajuste y liberalización, las causas del conflicto social”, en OSAL nº 12, pp. 47-56, 2004; Lander, Edgardo: “Venezuela:

Guerra del Agua, también en Bolivia⁷, o las más recientes disputas en torno a la potencial energía hidroeléctrica de los ríos patagónicos, los cuales muestran de forma elocuente lo central de esta cuestión. En el ámbito rural, el modelo de “*reprimarización económica y la explotación intensiva de los recursos naturales*” afectaría de forma irreversible la vida de las comunidades rurales. Movimientos de resistencia y oposición se consolidarían frente a la ofensiva neoliberal-conservadora. Fundamentalmente, de base campesina e indígena. Se cita a modo de ejemplo: El establecimiento de comunidades autónomas en la selva de Lancadona (1994), el surgimiento del MTS [Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra] en Brasil (1985), el conflicto del agua en Cochabamba (2000), el movimiento campesino en Paraguay (década del 90) y/o las reivindicaciones de la CONAIE, (Confederación de las nacionalidades indígenas del Ecuador).

Es decir que con el advenimiento del neoliberalismo y su crisis y la disipación del clima revolucionario de décadas pasadas, se reconfigura la política latinoamericana con una gran y renovada diversidad de matices, cristalizando correlativamente la emergencia de activos y renovados sujetos sociales de la protesta que se han levantado contra multiplicidades de problemáticas derivadas de las políticas de desigualdad y exclusión: restitución y redistribución de las necesidades básicas, acceso a la vivienda, servicios, desempleo y políticas de inclusión. Los procesos de movilización social y las protestas redefinirán su forma organizativa, su forma de lucha, sus formas de movilizarse y relacionarse con el poder. En las últimas décadas aparecen como motivaciones dominantes de las protestas, las *necesidades defensivas* de la población frente a las consecuencias sociales de las políticas neoliberales. Emergen infinidad de actores sociales colectivos que canalizaran el creciente descontento popular, mellando en muchos caos gobiernos constitucionales, transformando la política latinoamericana. Así es como surge el llamado

proceso de cambio, referéndum revocatorio y amenazas territoriales”, en OSAL, nº 13, pp. 57-66, 2004

⁷ Kruse, Thomas: “La guerra del agua en Cochabamba, Bolivia: terrenos complejos, convergencias nuevas”; en, Enrique de la Garza Toledo (comp.), *Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina*, Buenos Aires, CLACSO, 2005.

Guido Galafassi: *Acumulación, conflictos sociales y políticas de Estado en América Latina en las últimas décadas. Cambios y rupturas en el escenario regional*, (pp. 48-66)

socialismo del siglo XXI y su intento de implementación en varios países de la región.

Sin fuertes ni consolidadas organizaciones políticas antisistémicas, la disputa por un orden diferente se expresaría básicamente en las calles y los barrios. Desde viejas militancias se reorganizan los sectores populares, los más perjudicados por las políticas de los años ´90, y toman los espacios públicos (calles, rutas, plazas, etc.) para manifestar su malestar. Junto a estos procesos renovados se mantienen en forma fragmentada la más clásica resistencia obrera pero que sin embargo no logra articularse y configurar así una fuerza que pudiera liderar el ciclo de protestas y movilizaciones. Por un lado la protesta popular se moviliza dentro de los canales de representatividad de la democracia formal; pero a la vez y como se dijo, cuestionan y desplazan gobiernos nominalmente constitucionales. A diferencia de experiencias históricas anteriores, la resistencia de los sectores populares y de militancia no posee una intencionalidad clara y unívoca por la toma del poder y su posterior transformación; por el contrario, se entretienen procesos de protestas por demandas focalizadas que no implican necesariamente un cambio social importante junto a procesos que terminan derivando en cambios institucionales y de políticas de gobierno, pero que igualmente nunca llegarán al cuestionamiento profundo del sistema capitalista tal como se daba en décadas anteriores.

Es decir, que los movimientos sociales de fin de siglo entretienen complejas relaciones y formas de expresar e implementar estrategias de lucha. En este sentido, la protesta se presenta como un organismo legítimo de resistencia, que desafía (en la lucha por el ejercicio del poder hegemónico en algunos casos y solo por reformas parciales en otros) a las instituciones democráticas neoliberales en procesos de descomposición sin que esto implique, como se dijo, asimilarse a los procesos revolucionarios de los años ´60 y ´70.

Referencias bibliográficas

- ADORNO, Theodor; Horkheimer, Max (2013). *Dialéctica del Iluminismo*. Buenos Aires, Sur.
- COSER, Lewis (1970). *Nuevos aportes a la teoría del conflicto social*. Bs As. Ed Amorrortu.
- ESCOBAR DE PAVÓN, Silvia: “Ajuste y liberalización, las causas del conflicto social”, en OSAL nº 12, pp. 47-56, 2004;
- FARAH, Ivonne y Luciano VASAPOLLO (2011). *Vivir bien ¿Paradigma no capitalista?* La Paz, Bolivia, CIDES-UMSA – SAPIENZA – OXFAM.
- GALAFASSI, Guido (2002). “La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y la crisis de la idea de razón en la Modernidad” en *Contribuciones desde Coatepec*. Enero-junio numero 002, Universidad Autónoma del Estado de Mexico, Toluca. Pp 4-21.
- GAUDICHAUD, Franck (coord.) (2010). *El volcán latinoamericano. Izquierda, movimientos sociales y neoliberalismo al sur del río Bravo*. Buenos Aires, CLACSO.
- HORKHEIMER, Max (1969). *Crítica de la Razón Instrumental*. Buenos Aires, Sur
- KRUSE, Thomas (2005) “La guerra del agua en Cochabamba, Bolivia: terrenos complejos, convergencias nuevas”; en, Enrique de la Garza Toledo (comp.), *Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina*, Buenos Aires, CLACSO.
- LANDER, Edgardo: “Venezuela: proceso de cambio, referéndum revocatorio y amenazas territoriales”, en OSAL, nº 13, pp. 57-66, 2004
- VILLEGAS QUIROGA, Carlos (2003) “Rebelión popular y los derechos de propiedad de los hidrocarburos”, en OSAL nº12, pp. 27-34.

El acecho de Aguilfo y Gurdulú *Dilemas y tensiones del Estado boliviano en el siglo XXI*

Diego Martín Giller*

Resumen

El llamado Ciclo rebelde (2000-2005), inaugurado con la “guerra del agua” y el cerco indígena a la ciudad de La Paz, implicó el inicio de profundas transformaciones en la sociedad y el Estado boliviano. Hacia fines de 2005, Evo Morales Ayma era elegido presidente de la entonces república de Bolivia, convirtiéndose en el primer mandatario indígena en la historia del país andino-amazónico. Luego de un proceso de álgidas disputas sociales y políticas durante la Asamblea Constituyente, en 2009 se promulgó la nueva Constitución Política del Estado. Una de las novedades que ella incorporaba era la disolución del viejo estado colonial, republicano y racista, dando nacimiento a lo que se conoce como el Estado Plurinacional. El objetivo de este artículo es realizar un balance teórico de la experiencia del Estado Plurinacional de Bolivia, que al día de hoy lleva seis años, poniendo atención en sus dilemas, paradojas y contradicciones. Para ello, partiremos de una posible conceptualización crítica del Estado capitalista, que pueda dar cuenta de las tensiones entre una “teoría general” y las historias locales de cada Estado, y que permita, a su vez, interrogar la especificidad del Estado Boliviano.

Palabras claves: Bolivia - Estado plurinacional – Estado capitalista

Abstract

What is known as the “Rebel Cycle” (2000 -2005) that started with the “water war” and the indigenous surrounding of La Paz city, meant the beginning of important transformations of the society and of the State of Bolivia. Towards the end of 2005, Evo Morales Ayma was elected president of what was then The Republic of Bolivia becoming the first indigenous head of State in the history of the country. After a process of social and political critical disputes during the Constituent Assembly, in 2009 the new

* Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires

Political Constitution of the State was promulgated. One of the novelties that were incorporated was the dissolution of the old colonial republic and racist state, gave rise to what is known as the Plurinational State. The aim of this article is to make a theoretical evaluation of the experience of the Plurinational State of Bolivia that, along the past six years, has been focusing on its dilemmas, paradoxes, and contradictions. For that purpose, the starting point will be one possible critical conceptualisation of the capitalist State that can tell the tensions between “general theory” and the local histories of each State and that, at the same time, can question the specificity of the Bolivian State.

Keywords: Bolivia - Plurinational state – Capitalist state

Introducción

*-¡Esta sí que es buena! Este súbdito que existe pero no
Sabe que existe, y ese paladín mío que sabe que existe
Y en cambio no existe. ¡Hacen buena pareja, os lo digo yo!*
Ítalo Calvino, en “El caballero inexistente”

El llamado “Ciclo Rebelde” (2000-2005), inaugurado con la “guerra del agua” y el cerco indígena a la ciudad de La Paz, implicó el inicio de profundas transformaciones en la sociedad y el Estado boliviano. Hacia fines de 2005, Evo Morales Ayma era elegido presidente de la entonces República de Bolivia, convirtiéndose en el primer mandatario indígena en la historia del país andino-amazónico. Luego de un proceso de álgidas disputas sociales y políticas durante la Asamblea Constituyente, en 2009 se promulgó la nueva Constitución Política del Estado. Una de las novedades que ella incorporó fue la disolución del viejo estado colonial, republicano y racista, dando nacimiento a lo que hoy se conoce como el Estado Plurinacional.

El objetivo de este artículo es invitar a una reflexión sobre los dilemas, las paradojas y las contradicciones sobre las que se monta la experiencia del Estado Plurinacional de Bolivia, que hoy lleva seis años de existencia. Para ello, partiremos de una posible conceptualización crítica del Estado capitalista, que pueda dar cuenta de las tensiones entre una “teoría general” y las historias locales de cada Estado, y que permita, a su vez, interrogar la propia

especificidad del Estado Boliviano. Creemos que ese recorrido puede asistirnos en la búsqueda de una mayor comprensión de las características del “nuevo” Estado.

Algunas generalidades teóricas sobre el concepto de Estado-capitalista

Desde el inicio de la Modernidad capitalista la pregunta por el Estado ha dominado el mapa de la filosofía política. Un recorrido posible podría comenzar con Maquiavelo, proseguir con Hobbes, Locke y Rousseau; Kant, Hegel y Marx; Lenin, Weber y Gramsci; llegando a la estación Nicos Poulantzas. Puesto que resultaría imposible “despachar” en un pequeño artículo de coyuntura esas extensas y profusas reflexiones, partiremos desde la más contemporánea de las teorías mencionadas.

Formular una pregunta general es siempre una buena forma de comenzar: ¿qué es el Estado capitalista? Siguiendo a Poulantzas¹, el Estado es el garante de la relación de dominación capitalista. Dicha relación se cristaliza en aparatos de Estado (justicia, administración, ejército, policía, etc.), encargados de elaborar, inculcar y reproducir la ideología dominante². El Estado representa y organiza la/s clase/s dominante/s, estableciendo el interés político a largo plazo del *bloque en el poder*. Si bien puede afirmarse que el Estado tiene un marcado carácter de clase, esto no implica que el *bloque en el poder* sea unívoco y homogéneo; por el contrario, aquel es la condensación de una lucha entre las fracciones burguesas que lo componen. Desde esta perspectiva, el Estado, en tanto que sede privilegiada de los intereses de la fracción hegemónica dentro del *bloque en el poder*, es concebido como una condensación de contradicciones que, en rigor, son las contradicciones de clase inscritas en la estructura misma del Estado. Tales contradicciones

¹ POULANTZAS, Nicos, *Estado, poder y socialismo*, España, Siglo XXI editores, 1980 [1978].

² Esto hace referencia tanto a los que han sido denominados por Althusser como *aparatos ideológicos del Estado* –lo mismo si pertenecen al Estado que si conservan su carácter jurídico privado– como a los aparatos represivos. ALTHUSSER, Louis, *Ideología y aparatos ideológicos de Estado*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2003 [1970].

internas no suponen que las clases subalternas, excluidas del control político de sus aparatos de Estado, sean *exteriores* al propio Estado. Las luchas populares implican que el Estado sea una condensación material de una relación de fuerza entre clases y fracciones de clase. Dicho de otro modo: el Estado se encuentra desgarrado por las contradicciones entre las distintas clases³.

La posición teórica de Poulantzas se desarrolló al interior de la teoría marxista del Estado, en franca contraposición respecto de la del marxista inglés Ralph Milliband. A partir de un debate sostenido por ambos en la revista *New Left Review*, entre 1969 y 1976, Poulantzas sostuvo que no puede concebirse al Estado como un simple instrumento de la burguesía, ni como un bloque monolítico sin fisuras, donde cada clase dominante confeccionaría su propio Estado a imagen y semejanza, manipulándolo según sus propios intereses. Si la versión “instrumentalista” de Milliband partiría de un relación “exterior” entre Estado y estructura económica, para el autor de *Estado, poder y socialismo* la relación entre ambos términos es co-constitutiva: “*Las relaciones político-ideológicas desempeñan un papel esencial en la reproducción de las relaciones de producción, justamente porque están presentes desde el primer momento de la constitución de estas últimas*”⁴. El Estado se halla en el seno mismo de las relaciones de producción –que, en rigor, constituyen su fundamento último y reproducción. Vale decir, lejos de trabar una relación exterior, como si se tratase de dos polos opuestos, el Estado y la sociedad se interpenetran, siendo la relación la que le asigna su lugar a cada uno.

La teoría del Estado poulantziana tuvo una gran recepción en nuestro continente, tal como lo relató Emilio de Ípola en un artículo publicado en la Revista *Controversia* en 1980. De Ípola⁵ sostuvo que América Latina conocía mejor a Poulantzas que Poulantzas a América Latina, aludiendo al hecho de

³ *Ibíd.*

⁴ *Ibíd.*, p. 25.

⁵ DE ÍPOLA, Emilio, “La presencia de Poulantzas en América Latina”, en *Controversia*, México D.F., mayo 1980, Año 2, Nº6.

que si bien el marxista griego no desarrolló su pensamiento mirando la realidad del Estado latinoamericano, muchas de sus reflexiones sirvieron para pensar la especificidad del Estado en la región: “*Sus análisis fueron tema de discusiones, de mesas redondas, de seminarios y, más allá del ámbito académico, ejercieron una innegable influencia sobre la reflexión política de las izquierdas latinoamericanas*”⁶. Uno de los intelectuales que más y mejor recepcionó sus ideas en estas latitudes fue el argentino Guillermo O'Donnell⁷. En una cruce con la concepción weberiana del Estado –aunque criticando la idea de que el componente coercitivo debe considerarse como *legítimo*⁸-, O'Donnell⁹ concibió al Estado en tres dimensiones interpenetradas: (a) como conjunto de burocracias, que cumple el rol de dotar de *eficacia* su funcionamiento; (b) como sistema legal, encargado de la *eficiencia*; y (c) como foco de identidad colectiva en tanto productor de un “nosotros”, responsable de otorgarle *credibilidad* al Estado. Desde esta óptica, el Estado sería un “(...) *conjunto de relaciones sociales que establece un cierto orden y en última instancia lo respalda con una garantía coactiva centralizada sobre un territorio dado*”¹⁰.

En una dirección similar, Álvaro García Linera¹¹ define al Estado como una estructura de relaciones políticas territorializadas y como un flujo de

⁶ *Ibíd.*, 24

⁷ O'DONNELL, Guillermo, “Acerca del Estado en América Latina. Diez tesis para discusión”, en AA.VV., *La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas*, Buenos Aires, PNUD, 2004, pp. 11-86.

⁸ Eduardo Grüner sostiene que el componente coercitivo aparece como *legítimo* sólo después de que se oculta el fundamento (la violencia *constitutiva*) de la política y el Estado. Así, “*Sólo porque ella no aparece en tanto fundamento sino como ‘recurso extraordinario’ es que puede ser entendida como ‘legítima’*”. GRÜNER, Eduardo, *Las formas de la espada. Miserias de la teoría política de la violencia*, Buenos Aires, Colihue, 1997, p. 39-40.

⁹ O'DONNELL, Guillermo, “Acerca del Estado en América Latina. Diez tesis...”, *op. cit.*

¹⁰ O'DONNELL, Guillermo, “Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas conceptuales”, en *Desarrollo Económico*, Buenos Aires, 1993, Vol.33, N°130. Profundizando en esta definición, O'Donnell analizó al Estado como “*Un conjunto de instituciones y de relaciones sociales (la mayor parte de estas sancionadas por el sistema legal de ese estado) que normalmente penetra y controla el territorio y los habitantes que ese conjunto pretende delimitar geográficamente. Esas instituciones tienen último recurso, para efectivizar las decisiones que toman, a la supremacía en el control de los medios de coerción física que algunas agencias especializadas del mismo estado normalmente ejercen sobre aquel territorio*”. O'DONNELL, Guillermo, “Acerca del Estado en América Latina. Diez tesis...”, *op. cit.*, p. 2.

¹¹ GARCÍA LINERA, Álvaro, “El Estado en transición. Bloque de poder y punto de bifurcación”, en AA.VV. *El Estado. Campo de lucha*, La Paz, CLACSO-Muela del Diablo editores-Comuna, 2010a.

interrelaciones y de materializaciones pasadas de esas interrelaciones referidas a la dominación y legitimación política. El Estado se le aparece como el monopolio de tres dimensiones: (a) correlación política de fuerzas sociales – monopolio de la coerción-; (b) materialidad institucional –monopolio de la riqueza pública-; y (c) idea o creencia colectiva generalizada –monopolio de la legitimación política-. Mientras los dos primeros hacen referencia al Estado como relación de *dominación y conducción política*, el tercero representa a la *relación de legitimación política*, o, en palabras de Pierre Bourdieu¹², al *monopolio del poder simbólico*. Estas tres formas monopólicas se encuentran *siempre-ya* atravesados por una lucha interna. Desde esta perspectiva, el Estado no es solo una condensación de contradicciones sino también una relación paradójica: *“Por una parte, políticamente no hay nada más material (física y administrativamente) que un Estado (monopolio de la coerción, de la administración de los impuestos como núcleo íntimo y fundante), pero, a la vez, no hay nada que dependa más en su funcionamiento, que de la creencia colectiva de la necesidad (momento consciente) o inevitabilidad (momento prerreflexivo) de su funcionamiento”*¹³.

Dicho de otro modo, el Estado constituye la *contradicción* entre la materialidad y la idealidad de la acción política, la cual pretende ser superada *“(...) parcialmente mediante la conversión de la idealidad como momento de la materialidad (la legitimidad como garante de la dominación política) y la materialidad como momento del despliegue de la idealidad (decisiones de gobierno que devienen en acciones, de gobierno también, de efecto social general)”*¹⁴.

En esta reflexión se pueden advertir los trazos de su coterráneo René Zavaleta Mercado¹⁵, quien concibió al Estado como el lugar privilegiado del campo político en el que la *idea* deviene inmediatamente materia con efecto

¹² BOURDIEU, Pierre, *Razones prácticas*, España, Anagrama, 1997 [1976].

¹³ GARCÍA LINERA, Álvaro, “El Estado en transición...”, *op. cit.*, p. 12.

¹⁴ *Ibíd.*, p. 13.

¹⁵ ZAVALA, René, *El Estado en América Latina*, La Paz, Editorial Los amigos del libro, 1990 [1984a].

social general. Para el caso de América Latina, aquella “unidad problemática” mentada por José Aricó¹⁶, Zavaleta sugirió, también bajo el influjo de las ideas de Poulantzas, que el Estado no puede ser situado sin más en la “superestructura”; por el contrario, se trata de una fuerza productiva que es co-constitutiva con el acto productivo que se *realiza* en la “estructura”. Según Zavaleta, todo lo que pasa por el Estado se convierte en *materia estatal*: “*El Estado, cuando participa en el piso productivo o en la propia circulación, no lo hace como productor privado capitalista. En otros términos, si el capitalista produce zapatos, y el Estado produce zapatos, una cosa es diferente de la otra, porque el Estado produce a la vez sustancia estatal (...) si el Estado produce, produce al servicio de sus objetivos reales, que siguen siendo la calificación de la circulación de la plusvalía y la construcción del capitalista total*”¹⁷.

¿“Teoría general del Estado”?

(...) no toda nación genera un Estado nacional y, por otro lado,

Es natural que exista el hecho estatal aún antes que de que se haya

Concluido la formación de la nación. Sencillamente, el encuentro

¹⁶ ARICÓ, José, *La hipótesis de Justo*. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1999 [1980a]. En la introducción que escribiera para su libro *La hipótesis de Justo*, Aricó sugirió que “*La problematización de la categoría ‘América Latina’ encuentra así su fundamento y su explicación en su necesidad de dar cuenta de una realidad no preconstituida sino en formación (...) que puede ser posible como tal por la presencia de un terreno histórico común que se remonta a una matriz contradictoria pero única. El carácter asumido por la colonización europea y luego por la guerra de independencia, la decisiva impronta que las estructuras coloniales dejaron en herencia a las repúblicas latinoamericanas sin que éstas pudieran hoy superarla del todo; el fenómeno común de la inclusión masiva en un mercado mundial que las colocó en una situación de dependencia económica y financiera de las economías capitalistas de los países centrales; el papel excepcional desempeñado en nuestros países por los intelectuales en cuanto suscitadores y organizadores de una problemática ideológica y cultural común; las luchas que las clases populares, con todo o ambiguo y diferenciado según las épocas históricas que tiene la expresión, entablaron por conquistar para cada uno de esos países y para todos en su conjunto un espacio ‘nacional’ y ‘continental’ propio, una real y efectiva independencia nacional, son todos elementos que contribuyen a mostrar la presencia de esta matriz única sobre la que se funda la posibilidad del concepto*”. *Ibíd*, p.18.

¹⁷ ZAVALETA, René, “*El Estado en...*”, *op. cit.*, p.170.

*Entre ese conjunto de hechos objetivos que
llamamos nación y esa*

*Forma de poder político no es algo que se dé en
todos los casos y,*

*Por el contrario, lo que comentamos, pensando en
América Latina,*

*Es precisamente la manera en que esa fusión no
atina a lograrse.*

René Zavaleta Mercado en “El Estado en América
Latina”

Toda “teoría general” está conformada por un corpus sistemático de proposiciones generales que pretenden explicar diferentes problemas, en diversas circunstancias y tiempos, como expresiones singulares de un mismo objeto teórico¹⁸. En el caso específico del Estado, una “teoría general” serviría para pensar las características y finalidades de un Estado en un *modo de producción* determinado: feudalismo, capitalismo, socialismo, etc. Sin embargo, cuando se quiere analizar el Estado en la periferia capitalista, como es nuestro caso, esas generalidades se vuelven insuficientes. Una mirada rápida parece indicarnos que los Estados no se constituyen de igual modo en el centro de lo que Immanuel Wallerstein¹⁹ denominó el moderno sistema mundial, que en su periferia²⁰. Y al mismo tiempo, en la *periferia* el Estado tampoco pareciera componerse de igual modo en cada una de sus *formaciones económico-*

¹⁸ POULANTZAS, Nicos, *Estado, poder...*, op. cit.

¹⁹ WALLERSTEIN, Immanuel, *El moderno sistema mundial. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI*, México D.F., Siglo XXI, 2007 [1974].

²⁰ “Dado que los Estados son el principal escenario del conflicto político en la economía-mundo capitalista, y como quiera que el funcionamiento de la economía-mundo es tal que la composición de las clases nacionales varía considerablemente, es fácil entender por qué debe haber tantas diferencias entre la política de los Estados según su ubicación en la economía-mundo capitalista. También es fácil comprender que la utilización del aparato político de un Estado determinado para modificar la composición social y la función de la producción nacional en la economía mundial no modifica por sí misma el sistema-mundo capitalista en su conjunto”. WALLERSTEIN, Immanuel, “El conflicto de clases en la economía-mundo capitalista”, en Etienne Balibar e Immanuel Wallerstein, *Raza, nación y clase*, Madrid, Iepala Textos, 1988, p. 193.

sociales. Zavaleta²¹ cuestionó la posibilidad de construir un *modelo de regularidad* estatal, similar al que produjo Marx para referirse al modo de producción capitalista, que se reitera en las distintas formaciones estatales. Si el *modelo de regularidad* que representa el capitalismo expresa la unidad del mundo -en el sentido de lo comparable-, la superestructura señalaría la diversidad de su historia. A partir de esa asincronía, el intelectual boliviano rechazó la idea de una supuesta correspondencia entre estructura y superestructura donde la segunda sería un mero reflejo especular, un epifenómeno de la primera: “(...) *la gran generalidad de los acontecimientos y procesos de la superestructura obedece a una lógica causal propia que sólo tiene que ver de un modo diferido y remoto con las articulaciones propias del acto productivo, al cual, por otra parte, determina a su turno*”²².

Siguiendo este razonamiento, puede resultar más apropiado admitir la existencia de distintos tipos de Estado, dueños de una legalidad y una historia propia y diversa. Como sostiene Poulantzas²³, a pesar de que el “(...) *Estado capitalista presenta la misma armazón material, ésta se singulariza según las particularidades de la lucha de clases, de la organización de la burguesía y del cuerpo de intelectuales en cada Estado y país capitalista concreto*”²⁴. Dicho de otro modo, son los problemas nacionales los que singularizan las formas estatales.

Lo dicho hasta aquí supone menos el rechazo de una “teoría general” que el trazado de sus límites: no se las desecha, se las trabaja en articulación con las historias nacionales. Cada Estado estaría determinado por el modo de su constitución y de su reproducción, esto es, por el acto originario en el que se articulan y definen, en términos generales, las estructuras y la forma que van a servir para procesar la producción y reproducción del orden social, político y

²¹ ZAVALETA, René, “Las formaciones aparentes en Marx”, en René Zavaleta, *La autodeterminación de las masas*, Bogotá, Siglo del Hombre Editores – CLACSO, 2009 [1978]; ZAVALETA, René, “*El Estado en...*”, *op. cit.*

²² *Ibid.*, p.169.

²³ POULANTZAS, Nicos, *Estado, poder...*, *op.cit.*

²⁴ *Ibid.*, p. 68

cultural por un tiempo relativamente prolongado²⁵. En palabras de Zavaleta, diríamos que está determinado por su momento constitutivo. La “teoría general” “choca” con la periferia cuando se constata que aquí no se han desarrollado procesos de igualación, propios del despliegue de la subsunción real del trabajo al capital, como sí sucedió en las zonas centrales del moderno sistema mundial²⁶. El estudio de los *momentos constitutivos* en sociedades periféricas nos proporciona un método de conocimiento propio que, a partir del análisis del complejo entramado de relaciones que se produce entre sociedad y Estado, busca comprender por qué tales relaciones se desarrollan de un modo y no de otro, y por qué el Estado asume una forma y no otra: *“El conocimiento crítico de la sociedad es entonces una consecuencia de la manera en que ocurren las cosas (...) La manera de la sociedad define la línea de su conocimiento. Entre tanto, la gramática universal aplicable a formaciones diversas suele no ser más que una dogmatización. Cada sociedad produce un conocimiento (y una técnica) que se refiere a ella misma”*²⁷.

No se afirma que la preponderancia que tienen los momentos constitutivos en la historia de las sociedades suponga una hegemonía absoluta del pasado sobre el presente. Su importancia se mide por cuanto nos ayuda a ajustarnos en la relación Estado/sociedad, no ya como dos polos contrapuestos, sino como partes constitutivas de una misma relación²⁸. Para pensar en esa compleja interrelación, Zavaleta²⁹ propuso el concepto de *ecuación social* o *eje*, el cual hace hincapié sobre los diferentes momentos de

²⁵ TAPIA, Luis, “La producción teórica para pensar América Latina”, en AA. VV. Maya Aguiluz Ibarbúren y Norma de los Ríos (coord.), *René Zavaleta Mercado. Ensayos, testimonios y revisiones*, Argentina, Miño y Dávila, 2006 [2004].

²⁶ ZAVALETA, René, “Cuatro conceptos de democracia” en René Zavaleta, *La autodeterminación de las masas*, Bogotá, Siglo del Hombre Editores – CLACSO, 2009 [1981].

²⁷ ZAVALETA, René, “Las masas en noviembre” en René Zavaleta *La autodeterminación de las masas*, Bogotá, Siglo del Hombre Editores – CLACSO, 2009 [1983a].

²⁸ Desde esta perspectiva, habría tres clases de *momentos constitutivos*: el ancestral, el de la nación y el del Estado. Los tres comparten el momento de implantación hegemónica, cuyo eje central viene dado por la disponibilidad del sujeto interpelado. En tal sentido, podemos afirmar que la forma en que se interpele a la masa durante esos acontecimientos sobrevivirá en el inconsciente de una sociedad. No obstante, anticipándonos a las posibles críticas acerca del supuesto carácter teleológico que tendría dicho concepto, conviene realizar una precisión: el acto originario no determina sino que condiciona el destino, siendo los propios sujetos los encargados de torcerlo, vale decir, de convertirlo.

²⁹ ZAVALETA, René, “*El Estado en...*”, *op. cit.*

su historia relacional; vale decir, la *ecuación social* permitiría dar cuenta de lo específico de cada Estado a partir del análisis del grado en que la sociedad existe hacia el Estado y viceversa, pero atendiendo también a las formas de su separación o extrañamiento. La *ecuación social* nos dice que las formaciones estatales no se configurarían de igual modo allí donde aquella tiende más hacia el *óptimo* –relación de reciprocidad entre Estado y sociedad civil– que hacia la deficiencia –relación inorgánica entre ambos elementos.

Estructuralmente heterogéneas³⁰, las sociedades periféricas tienden hacia una baja ecuación social. Se trataría de estructuras sociales, complejas y atrasadas, en las no se produjo una separación total de lo político y lo social. Definidas por el autor de *Lo nacional-popular en Bolivia* como sociedades abigarradas, se caracterizan por poseer una superposición no combinada de diversos *modos de producción* y varias formas de diferenciación social, visiones alternativas del mundo y estructuras locales de autoridad que compiten con la forma estatal. En ellas, el Estado en su sentido moderno nunca se terminaría de constituir, configurándose de un modo aparente³¹. Esta particular forma de lo estatal se produce allí donde hallamos elementos formales del Estado moderno pero no los fundamentos de su entidad sustantiva; donde “(...) *la cantidad cartográfica no corresponde al espacio estatal efectivo ni el ámbito demográfico a la validez humana sancionable*”³².

Nuevamente pensando en América Latina como una “unidad problemática”, observamos que históricamente en sus sociedades las clases nacionales, la nación y las grandes unidades sociales propias del capitalismo no se terminan de constituir³³. Diremos que una nación es una construcción política e ideológica que es el resultado de historias, memorias y mitos³⁴, en el sentido del reconocimiento que tiene un pueblo de sentirse parte de un mismo

³⁰ LECHNER, Norbert, “Cultura política y democratización”, en *Obras Escogidas*, Santiago, Editorial Lom, 2006, Vol. 2.

³¹ ZAVALETA, René, *Lo nacional-popular en Bolivia*, Bolivia, Siglo XXI Editores, 1988 [1984b].

³² *Ibíd.*, p. 203.

³³ *Ibíd.*

³⁴ O'DONNELL, Guillermo, “Acerca del Estado...”, *op. cit.*

hábitat³⁵. La nación en tanto *yo colectivo* es una compleja construcción de cierto grado de centralización y homogeneidad en torno al mercado interno. Decía Zavaleta³⁶, que decía Marx, que al ser la nación la primera fuerza productiva se constituye en el indicador del grado de correspondencia entre el modo productivo y su colectividad: “(...) *la nación, lejos de contradecir la lógica del mercado mundial, es su requisito, su forma de organización. Pero el Estado nacional es lo que ocurre cuando la sociedad civil se ha convertido en nación y tiene un solo poder político, o sea que el Estado nacional es algo así como la culminación de la nación*”³⁷.

Si bien la cuestión nacional como universalidad es una sola, cada país latinoamericano vive una parte de ella como su núcleo problemático³⁸, y ello, porque la constitución de naciones en nuestra América se trató, en los más de los casos, de un proceso *inconcluso*. Si tenemos en cuenta que ante la ausencia de naciones preconstituidas, o bien, de “ideas nacionales” que actuasen con *eficacia*, fueron los propios Estados quienes llevaron adelante las tareas nacionales, entonces podríamos afirmar que la construcción nacional fue un hecho puramente estatal³⁹. Como hecho estatal, su premisa fue la homogeneización forzada de sus poblaciones: “*Al crear categorías uniformes y estandarizadas de ciudadanos así como sus correspondientes obligaciones, los estados también crearon lenguajes nacionales. Al crear lenguajes nacionales, también se crearon formas culturales nacionalmente certificadas. Mientras estas formas se creaban, otras formas eran relegadas a las categorías de etnicidad, dialecto y cultura*”⁴⁰.

El intento de homogeneización siempre tuvo como sustrato grandes tragedias que, o bien terminaron por eliminar cruelmente a otras generaciones

³⁵ ZAVALETA, René, *Lo nacional-popular...*, *op. cit.*

³⁶ ZAVALETA, René, “Notas sobre la cuestión nacional en América Latina”, en René Zavaleta, *La autodeterminación de las masas*, Bogotá, Siglo del Hombre Editores – CLACSO, 2009 [1983b].

³⁷ ZAVALETA, René, “Notas sobre la cuestión...”, *op. cit.*, p.359.

³⁸ ZAVALETA, René, “*El Estado en...*”, *op. cit.*

³⁹ ARICÓ, José, *Marx y América Latina*, Buenos Aires, Catálogos, 1982 [1980b]; *Ibíd.*; O'DONNELL, Guillermo, “Acerca del Estado...”, *op. cit.*

⁴⁰ TARROW, Sidney en O'DONNELL, Guillermo, “Acerca del Estado...”, *op. cit.*, p.12.

o identidades políticas, o bien intentaron asimilarlas a su propia identidad⁴¹. Atravesados por ideologías de *racismo*, xenofobia y exclusión, los Estados en América Latina –y con ello los procesos nacionales- se han constituido en una guerra permanente contra los pueblos originarios⁴². Sin embargo, el fracaso de las tareas nacionales no puede leerse solamente como una relación unidireccional -aunque sin duda profundamente asimétrica-, pues eso significaría olvidar el modo en que los propios pueblos internalizan la dominación. Como sugiere García Linera, la coerción “(...) *se materializa en instituciones (dimensión material del Estado), y se consagra o se cotidianiza por medio de la continua internalización, y aceptación pre-reflexiva de los procedimientos, por parte de los ciudadanos (dimensión ideal del Estado), se trata de unas coerciones que han sido fruto de momentos específicos de luchas, de confrontaciones sociales que han jerarquizado e impuesto determinadas visiones o necesidades de mando y control sobre otras necesidades y mandos de otros sectores sociales (el Estado como dominación –Marx- o correlación de fuerzas), y que con el tiempo se han consolidado, olvidado en su origen de imposición, y naturalizado como hábito social*”⁴³.

Respecto de la supresión de la imagen de un origen impuesto, Elías Palti⁴⁴ defendió la hipótesis de que la comunidad es el sujeto que olvida, y que al olvidar se crea y se define a sí misma. Como lo sugiere Grüner⁴⁵, lo que se fuerza a olvidar es la violencia originaria y fundadora que se encuentra en el Estado *ya constituido*, pero también, la propia *violencia popular* enfrentada a dicho Estado: “*La ‘estabilización’ del Estado y de sus leyes (‘Estado’ viene de estático, de inmóvil) requiere del olvido por parte del súbdito-ciudadano de que fue él –miles como él, reunidos en la multitud espontánea a la que aludía Spinoza- el que originariamente ejerció su autonomía de poder para fundar el*

⁴¹ *Ibíd.*, p.11.

⁴² PRADA, Raúl, “Estado periférico y sociedad interior”, en AA. VV., *Horizontes y Límites del Estado y el Poder*, La Paz, Muela del Diablo editores, 2005.

⁴³ GARCÍA LINERA, Álvaro, “El Estado en transición...”, *op. cit.*, p.11.

⁴⁴ PALTÍ, Elías, *La nación como problema. Los historiadores y la “cuestión nacional”*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003.

⁴⁵ GRÜNER, Eduardo, *Las formas de la espada...*, *op. cit.*

*Estado político que ahora lo domina (un acontecimiento que podría repetirse, y por eso precisamente debe ser olvidado)*⁴⁶.

El problema histórico del Estado latinoamericano está dado por una *legalidad* trunca y una *legitimidad* de la coerción permanentemente desafiada por su escasa *credibilidad* como realizador del bien común. Aquí, el Estado no controla ni penetra el territorio⁴⁷.

El caso de Bolivia: la “república excluyente” como huella de origen

El caballero inexistente, de Ítalo Calvino⁴⁸, es una novela que, entre muchas otras cuestiones, trata el problema de la identidad. Dos de sus protagonistas, el caballero Agilulfo y su escudero Gurdulú, componen una relación paradójica y antagónica: Agilulfo no existe, aunque cree firmemente en su existencia; Gurdulú, que sí existe, ignora su presencia en el mundo. El modo en que se relacionan ambos personajes, que para Calvino conforman una buena pareja, recuerda la relación que traban el histórico Estado boliviano y su sociedad, pero en un sentido negativo. En el país andino amazónico, el Estado existe al modo de una armadura vacía, como Agilulfo, que no tiene “realidad” – en el sentido hegeliano del término⁴⁹–, y la sociedad ignora, como el escudero Gurdulú, los términos en los que existe, esto es, que su presencia en el mundo

⁴⁶ *Ibíd.*, p.46.

⁴⁷ ZAVALETA, René, *Lo nacional-popular...*, *op. cit.*; O'DONNELL, Guillermo, “Acerca del Estado...”, *op. cit.*

⁴⁸ CALVINO, Ítalo, *El caballero inexistente*, Madrid, Ediciones Siruela, 1997 [1959].

⁴⁹ En relación a la existencia y a la realidad del Estado, Hegel afirmaba que aquel “(...) es efectivamente real y su realidad consiste en que el interés del todo se realiza en los intereses particulares. La realidad efectiva es siempre la unidad de la universalidad y de la particularidad. Si algo no presenta esta unidad, no es efectivamente real, aunque haya que admitir su existencia. Un mal Estado es un Estado que meramente existe: también un cuerpo enfermo existe, pero no tiene una realidad verdadera”. HEGEL, George, *Principios de la filosofía del derecho*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2004 [1821], p.250. Según el Marx de la *Ideología alemana*, el Estado va a existir como una “comunidad ilusoria” por una cuestión similar a la de su viejo maestro: el Estado se constituye a partir de la contradicción entre el interés común y el interés particular, pero, no obstante, el interés común aparecerá trastocado expresando intereses particulares. Ese carácter “ilusorio” no brota de la nada, por el contrario, nace sobre la base real de los vínculos existentes. MARX, Karl, *Ideología alemana*, Buenos Aires, Santiago Rueda Editores, 2005 [1846].

es estructuralmente heterogénea y diversa. La ecuación social, producto de una relación inorgánica, siempre ha sido baja, puesto que el Estado no existió nunca para su sociedad, y viceversa. Puede decirse, para seguir jugando con el “mundo Calvino”, que esa inorganicidad se estructuró al modo de un complejo, al cual llamaremos el “complejo de Agilulfo y Gurdulú”.

El nacimiento del Estado boliviano, en 1825, fue un proceso concomitante con la fundación de la República. Ambos se fundaron sobre el colonialismo que los precedió, heredando la estructura social colonial. La distribución de tierras, la estratificación social, el régimen de tributos, e incluso parte de la administración pública y el personal encargado de ejecutarla, no sufrieron cambios sustanciales. La inorgánica relación con el conjunto de poblaciones sobre las que pretendía gobernar, supuso la conformación de aquello que García Linera⁵⁰ denominó como “República excluyente”. A pesar de sus diferencias en relación con la expresión democrática de la diversidad étnica, organizativa y cultural, tanto la tradición republicana como la liberal concibieron un Estado monoétnico y mononacional que excluía de la “ciudadela política” a la mayoría indígena que poblaba el territorio. Puede decirse que la pretensión de construir una sociedad mononacional con base en la etnificación de la explotación se convirtió en el eje articulador de la cohesión estatal, y que la negación de las identidades culturales pre-hispánicas devino en huella originaria del Estado boliviano⁵¹. Teniendo en cuenta que una gran mayoría de la población se autoidentifica como parte de algún pueblo indígena, el hecho de que la República y el Estado se hayan constituido negando al indígena en tanto sujeto de derecho es un factor que merece una especial atención cuando se pretende realizar un acercamiento analítico a la realidad del país andino-amazónico.

⁵⁰ GARCÍA LINERA, Álvaro, *La potencia plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2008.

⁵¹ GILLER, Diego, “¿Un Estado para muchas naciones? Apuntes para una historia reciente de la noción de ‘Estado plurinacional’ en Bolivia”, en *Laboratorio. Revista de Estudios sobre Cambio Estructural y Desigualdad Social*, Buenos Aires, 2011, Año 12, Nº 24.

La configuración del Estado en Bolivia se produjo ignorando las características abigarradas de una sociedad que, como el escudero Gurdulú, nunca se ha reconocido en su propia diversidad, o, para decirlo en jerga hegeliana, *que no se sabe*. El indio fue concebido al modo de Alcides Arguedas⁵², esto es, como el “otro negativo”⁵³, la “parte enferma” y maldita que infecta a todo el cuerpo social⁵⁴. Producto de aquello que Aníbal Quijano⁵⁵ llamo colonialidad del poder/saber, en muchas ocasiones de su historia el indio creyó reconocerse en los trazos de la pintura arguediana. El Estado boliviano asumió los intereses inmediatos de sus clases dominantes sin inscribir en su seno a los sectores subalternos, forjándose, a través del darwinismo social, bajo la representación del indio como sujeto inferior.⁵⁶

El Estado, al recoger la lógica organizativa de una sola de sus culturas, la moderna mercantil capitalista, terminó por asumir un carácter monoétnico que entró en tensión con una sociedad estructuralmente multiétnica y multinacional. Como el caballero Aguilfo, el Estado en Bolivia existe pero no es *real*, o mejor, existe pero solo de un modo aparente, tal como sugirió Zavaleta. Se trata de un Estado que nunca terminó de unificar *realmente* bajo su órbita a su población, al poder político y al territorio⁵⁷. Y si lo hizo, fue de un modo

⁵² ARGÜEDAS, Alcides, *Pueblo enfermo*, La Paz, Librería Editorial América, 1909.

⁵³ GARCÍA LINERA, Álvaro, *La potencia plebeya...*, *op. cit.*

⁵⁴ Si bien en los hechos el único negocio estable eran los indios, para la clase dominante estos no encarnaban el alma de la nación sino su obstáculo. Constituían el único enemigo legalmente reconocido por el Estado.

⁵⁵ QUIJANO, Aníbal, “Colonialidad del poder, Eurocentrismo y América Latina”, en Edgardo Lander (ed.) *La Colonialidad del saber: Eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas Latinoamericanas*, Caracas: CLACSO, 2005 [2000].

⁵⁶ “En aquellos Estados en los que el aparato de Estado es débil, los administradores del Estado no juegan el papel de coordinar un complejo mecanismo industrial-comercial-agrícola. Más bien se convierten simplemente en un grupo de terratenientes entre los otros, con poco derecho a afirmar su legítima autoridad sobre la totalidad”. WALLERSTEIN, Immanuel, *El moderno sistema mundial*, p.501.

⁵⁷ Si coincidimos con Zavaleta en que el territorio representa lo profundo del pueblo, encarnando una de las medidas que indica hasta qué punto se ha ingresado al *ethos* final de una nación, podemos encontrar aquí otra de las razones del fracaso de la conformación nacional por parte del Estado boliviano, más teniendo en cuenta que para la oligarquía boliviana el interés por la tierra no representaba más que un fetiche. En tal sentido, ésta no quiso producir jamás un territorio *verdaderamente* nacional. La pérdida de territorio se transformó en una invariante del drama nacional. Como ejemplo de ello, Zavaleta dice que donde no existe una nación no se puede pedir a los hombres que asistan de forma nacional a una guerra, ni que tengan una sensibilidad por su propio territorio. Según él, la guerra del

puramente ilusorio. Siguiendo a Zavaleta, el Estado se configura de un modo aparente cuando constituye la unidad de lo que no está unificado realmente porque no se han dado procesos de igualación, esto es, cuando en su dimensión de idea o creencia colectiva generalizada no se constituye en el constructor de cierto grado de centralización y homogeneidad en torno del mercado interno. La constitución estatista de la nación se produjo bajo la ausencia de una clase –la burguesía– que llevase adelante una de las principales tareas nacionales: la construcción de un mercado interno. Tampoco la “burguesía boliviana” y la oligarquía lograron convocar a su pueblo a sentirse parte del *yo colectivo*⁵⁸. El momento hegemónico nunca llegó a manifestarse; o mejor, lo hizo pero a la manera de una hegemonía “negativa”⁵⁹, que refiere a aquellos actos autoritarios que crean creencias colectivas pero que no terminan por convertirse en parte del interés del dominado; creencias que no acaban por ser universalmente válidas. En suma, el Estado boliviano, manifestando la falta de voluntad de sí mismo, nunca logró formular una política estatal que pudiese garantizar las condiciones de equilibrio entre las fuerzas sociales que cohabitan en su espacio de influencia geográfica. En el Estado aparente las tres dimensiones constitutivas del Estado (monopolio de la coerción, de la riqueza pública, y de la legitimación política) son escasa o parcialmente desarrolladas.

Si la producción de una voluntad general –la universalidad– es la fuerza específica del Estado, renunciar a ella supone resignar la posibilidad de construir un *verdadero* Estado. Al mismo tiempo, en tanto “(...) *el conocimiento del mundo y la visión sin ilusiones de uno mismo es el requisito absoluto para*

Pacífico -acontecimiento que enfrentó a Chile con Perú y Bolivia entre los años 1879 y 1884– significó una pugna entre *ecuaciones sociales*. La sociedad chilena tenía un *óptimo social* superior al de Bolivia y el Perú. Al comprender mejor que sus adversarios la importancia que tiene para una nación tanto el territorio como la apropiación del excedente, es que pudo movilizar a su pueblo. Para Bolivia, en cambio, la guerra implicó –producto de la incapacidad manifiesta de sus clases dominantes por formular una política estatal– una movilización “(...) *en un país que carecía de hechos realmente nacionales*” (ZAVALETA, René, *Lo nacional-popular...*, *op. cit.*, p12.) De este modo, la derrota estaba sellada desde el comienzo. Derrota, insistimos, que significaba no sólo la pérdida del territorio, sino también la pérdida de la nación, puesto que se dilapidaba un espacio incorporado a su lógica innata. En suma, revelaba la constante incapacidad de formular un Estado nacional en acto.

⁵⁸ ZAVALETA, René, “Notas sobre la cuestión...”, *op. cit.*

⁵⁹ ZAVALETA, René, “Las masas en noviembre...”, *op. cit.*

la autodeterminación”⁶⁰, la negación de las características abigarradas de su sociedad implicó el cercenamiento de la posibilidad de constituir una nación, imputando la representación social bajo la forma de un Estado *aparente* que no sólo tiene una incapacidad para autorrepresentarse, sino que también tiene su autodeterminación como pueblo en un nivel incompleto⁶¹. Así, el “complejo de Aguilfo y Gurdulú” parece convertirse en una invariante en la historia de Bolivia.

Cuando el acecho es acechado

En abril de 2000 se iniciaron una serie de acontecimientos que amenazaron con poner en jaque a las clases dominantes bolivianas y a su Estado aparente. La llamada “guerra del agua” y el cerco indígena a la ciudad de La Paz fueron la estación inicial de un recorrido insurreccional antineoliberal que se hizo conocido como el “Ciclo Rebelde”. Estos sucesos demostraban, una vez más, que allí donde hay asimetrías producidas por la explotación, la dominación ilegítima y el *racismo* –pilar fundamental sobre el que se asentó la dominación en Bolivia-⁶², la “legitimidad” del Estado se encuentra siempre en permanente acecho por las otras entidades culturales y étnicas excluidas de los espacios públicos. Se trata de instancias políticas y culturales en las cuales el acecho de Aguilfo y Gurdulú es igualmente acechado.

El “Ciclo Rebelde” ponía de manifiesto aquello que solía afirmar Zavaleta: las hegemonías –y mucho más fácilmente las “negativas”- también se cansan, “(...) *que es lo mismo que decir que hay momentos en que el Estado*

⁶⁰ *Ibíd.*, p.68.

⁶¹ Zavaleta sostiene que habría dos modos de construir autodeterminación: o bien por vía democrática –que en su acepción más radical la concibe como un acto revolucionario- o bien por vía autoritaria de *hegemonía negativa*. ZAVALETA, René, *Lo nacional-popular...*, *op. cit.*

⁶² GILLER, Diego, *Consideraciones sobre el racismo en Bolivia. Materiales teóricos para abordar su historia reciente*, Buenos Aires, Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación, 2014. Disponible en <http://www.centrocultural.coop/descargas/tesis/consideraciones-sobre-el-racismo-en-bolivia-materiales-teoricos-para-abordar-su-historia-reciente.html>

*deja de ser irresistible (...) abriendo así un período de crisis de Estado*⁶³. La crisis emergía como la forma de revelación o reconocimiento de la realidad del todo social⁶⁴, develando la falla originaria y su estructuración como aquello que hemos dado en llamar el “complejo de Agilulfo y Gurdulú”. Se hacía visible la “(...) la incertidumbre duradera de la vida política de una sociedad, la “gelatinosidad” conflictiva y polarizada del sentido común colectivo, la imprevisibilidad estratégica de las jerarquías y mandos de la sociedad”⁶⁵. En la crisis, el Estado aparente aparece debilitado en forma simultánea en sus ya estructuralmente débiles tres niveles: (1) *eficiencia* de su legalidad efectiva, (2) *eficacia* de su aparato burocrático, y (3) *credibilidad* en tanto que agente legitimado del interés común –el *yo colectivo*–⁶⁶.

Como decíamos, la crisis del Estado aparente se inició con el “Ciclo Rebelde”. Sin embargo, ella no finalizaría con la culminación del “Ciclo”, que podría fecharse en diciembre de 2005 con el triunfo de Evo Morales en las elecciones presidenciales; a partir de ese momento se emprendía una nueva etapa. Siguiendo a García Linera⁶⁷, habrían al menos cinco etapas por las que transitó la crisis del Estado aparente: (1) *momento del develamiento de la crisis de Estado*, a partir de la aparición de un bloque social políticamente disidente con capacidad de movilización y expansión territorial –de abril de 2000 a octubre de 2003-; (2) *empate catastrófico*, producido al consolidarse aquella disidencia como proyecto político nacional, la cual, es imposible de ser incorporada en el orden y en el discurso dominante –de octubre de 2003 a diciembre de 2005-; (3) *renovación o sustitución radical de élites políticas* mediante la constitución gubernamental del nuevo bloque que asume la responsabilidad de convertir las demandas contestatarias en materia estatal –de diciembre de 2005 a septiembre de 2008-; (4) *conversión, reconversión o restitución conflictiva de un bloque de poder económico-político-simbólico a*

⁶³ GARCÍA LINERA, Álvaro, *La potencia plebeya...*, op. cit., p.344.

⁶⁴ ZAVALETA, René, “Las masas en noviembre...”, op. cit, p.214.

⁶⁵ GARCÍA LINERA, Álvaro, “El Estado en transición...”, op. cit., p.17.

⁶⁶ O'DONNELL, Guillermo, “Acerca del Estado...”, op. cit.

⁶⁷ GARCÍA LINERA, Álvaro, *Las tensiones creativas de la revolución. Quinta fase del Proceso de Cambio*, La Paz, Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 2011.

partir del Estado –de septiembre de 2008 a febrero de 2009-; y (5) *punto de bifurcación* o hecho histórico político a partir del cual la crisis de Estado es resuelta consolidando (a) un nuevo sistema político; (b) un nuevo *bloque de poder* dominante y (c) un nuevo orden simbólico del poder estatal –de febrero de 2009 hasta la fecha-.

El momento (3) significó no sólo la asunción de un presidente indígena por primera vez en la historia de Bolivia, sino la materialización estatal del momento (2), expresado en la “agenda de octubre” –convocatoria a una Asamblea Constituyente y nacionalización de los hidrocarburos-, que fuera elaborada por las fuerzas populares al calor de la “guerra del gas”, en 2003. La Asamblea Constituyente, instalada en agosto de 2006, fue el escenario en el que el pueblo boliviano se dio cita para la redacción de una nueva Constitución Política. Uno de los pilares sobre los que se asentó fue la discusión en torno a la refundación del Estado, que rápidamente fue concebido por los diferentes actores políticos como un campo de lucha, como el escenario privilegiado donde se cristalizan las contradicciones internas que son, a su vez, el resultado de las contradicciones de clase inscritas en la estructura misma del Estado. El intento de creación del “nuevo” Estado reposaba sobre una pregunta históricamente negada: qué Estado para qué sociedad. No se buscaba “(...) *saber sólo lo que el estado es, sino también para qué y para quienes –o dicho de manera equivalente, para que nación es y debería ser ese Estado en las presentes circunstancias de América Latina- (...) responder, aunque fuera aproximadamente, a las preguntas de “para qué y para quiénes” es condición necesaria para emprender reformas del Estado que sean algo más que retoques tecnocráticos*”⁶⁸.

Luego de álgidas y complejas disputas, que incluyeron intentos separatistas por parte de algunos sectores políticos representados por el Comité Cívico Pro-Santa Cruz, se promulgó, en febrero de 2009, la nueva Constitución Política del Estado. Ella incluía algo radicalmente novedoso:

⁶⁸ O'DONNELL, Guillermo, “Acerca del Estado...”, *op. cit.*, p.5.

decretaba la muerte de la República, dando nacimiento al Estado Plurinacional de Bolivia. Nuevas tensiones, contradicciones y dilemas venían consigo.

El Estado Plurinacional (2009-2014): seis años de nuevos dilemas

Aprender a mandar es quizá el problema

Más profundo que debe encarnar en cualquier

Época toda clase que quiere ser libre

René Zavaleta, en “Las masas en noviembre”

La búsqueda por superar la inorgánica relación entre el Estado aparente y la sociedad abigarrada es uno de los máximos desafíos del Estado Plurinacional, constituyéndose en uno de los más grandes intentos por detener el acecho de Aguilulfo y Gurdulú en la historia de Bolivia. No obstante, su creación viene al mundo con una paradójica huella que resulta ineludible de formular: ¿cómo construir una legitimidad histórica que arranque del pleno reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas si el Estado boliviano se constituyó a través de la negación de los mismos en tanto sujetos políticos?⁶⁹. Este dilema, que en el país andino-amazónico se traduce en la pregunta sobre la posibilidad de descolonizar al Estado desde el propio Estado⁷⁰, estaría expresando una imposibilidad lógico-teórica, una contradicción en los términos: ¿cómo podría ser posible descolonizar la sociedad y el Estado desde un Estado que es el garante de la relación de dominación capitalista? Sostenerse sobre este dilema es uno de los retos que afronta no sólo el caso particular del Estado boliviano sino de toda teoría del Estado que se pretenda crítica.

⁶⁹ TAPIA, Luis, “Una reflexión sobre la idea de estado plurinacional”, en *Revista del Observatorio Social de América Latina*, Buenos Aires, CLACSO-OSAL, 2007, N°22.

⁷⁰ SAMANAMUD ÁVILA, Jiovanny, “¿Es posible la descolonización del Estado desde el Estado?”, en *La Época*, La Paz, septiembre 2011, Año 10, N°496.

El Estado Plurinacional nace con el principio de resolución de la crisis del Estado aparente, un momento político que García Linera⁷¹ llamó *punto de bifurcación*. En ella, tras el largo y agónico triunfo del bloque indígena-campesino durante la Asamblea Constituyente, se empezó a consolidar un nuevo sistema político, un nuevo *bloque de poder* dominante y nuevo orden simbólico del poder estatal. Se trata de un proyecto político que puede leerse como un experimento que pretende producir una relación de correspondencia entre la sociedad civil y el Estado que termine por diluir a éste último en la primera. Sería el puente entre el Estado colonial, racista y excluyente y un Estado Integral, como quería Antonio Gramsci⁷², esto es, un momento en el que las clases sociales, los grupos nacionales, las regiones y las colectividades se encontrarían unidos externamente bajo un liderazgo social, político e intelectualmente activo, que no *domina* sino *dirige*, creando un sentido de pertenencia y representación –el yo colectivo– en la estructura administrativa del Estado⁷³. No sin contradicciones, dilemas y aporías, que ponen en jaque de manera repetida esta novedosa forma estatal, se busca que la *dirección* cultural e ideológica de la sociedad en su conjunto se produzca a partir de un permanente ensanchamiento de la base social del grupo *dirigente* y del apoyo de grupos aliados: campesinos, obreros, estudiantes, vecinos, profesionales, etc. Una clase dirigente que pueda llevar adelante las tareas nacionales desde el Estado –recordemos que en América Latina el Estado es el *productor* de la nación⁷⁴–, ya no en los términos de una pretendida homogeneidad abstracta que se autoconcibe “blanca” y “moderna”, sino bajo una lógica plurinacional, plurilingüe y pluricultural.

A la inversa del Estado aparente y su construcción de dominación bajo la forma de una hegemonía negativa, el Estado Integral ensaya la cimentación de

⁷¹ GARCÍA LINERA, Álvaro, “El Estado en transición...”, *op. cit.*

⁷² GRAMSCI, Antonio, *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2003.

⁷³ *Ibíd.*; GARCÍA LINERA, Álvaro, “Del Estado aparente al Estado Integral. La construcción del socialismo comunitario”, en *Discursos & ponencias del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia*, La Paz, Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 2010b, Año 3, Nº8.

⁷⁴ ZAVALETA, René, “El Estado en...”, *op. cit.*

una hegemonía en la que el interés de las mayorías se convierta en interés general; una hegemonía que “(...) *no es dominación, sino capacidad de liderar a otros sectores no iguales, de conducirlos, de recoger y apoyar sus demandas y sumarlas a las propias, es la capacidad de seducir y convencer, de hacer acuerdos prácticos y materiales*”⁷⁵. La inversión de los atributos del Estado aparente, a través del intento de configuración de un Estado articulador de la diversidad nacionalitaria, geográfica, cultural y clasista, se produce a través de cuatro pilares: (1) configuración un mercado interno; (2) constitución de un *yo colectivo* desde el Estado, incorporando a las mayorías excluidas, con el fin de acabar con la desigualdad social basada en el *racismo*; (3) integración estatal del territorio; y (4) construcción de una base material de la soberanía a partir del control común de los bienes públicos⁷⁶.

Este proyecto político se monta sobre diversos dilemas: ¿cómo resolver la contradicción entre el Estado como universalidad y la experiencia autogestionaria de las masas? ¿Cómo evitar que la tensión entre estatismo autoritario y las iniciativas de las masas populares se resuelva en favor de la primera y en desmedro de la segunda, y viceversa? Si el Estado no es, como señaló Poulantzas⁷⁷, un simple instrumento de dominación, ni un bloque monolítico y sin fisuras, sino que está desgarrado por contradicciones internas, ¿se lo puede penetrar como los troyanos y recuperar a Helena? ¿Se puede descolonizar al Estado desde el Estado? Si se entiende a la descolonización menos como un fin, un lugar al cual arribar en el que se encontrarían los sujetos puros e incontaminados y emancipados de las relaciones racistas y de dominación, y más como un proceso, esto es, como la construcción permanente de algo nuevo y propio que permita la edificación de horizontes políticos alejados de la dependencia ideológica externa, la respuesta podría ser

⁷⁵ GARCÍA LINERA, Álvaro, “Del Estado aparente...”, *op. cit.*

⁷⁶ *Ibíd.* Excedente y disponibilidad estatal establecen la *ecuación u óptimo social*, esto es, “(...) *la relación exitosa o frustránea, baja o alta entre el estado como sùmmum de todas las cuestiones del poder y la sociedad civil como el conjunto de las condiciones materiales en las que se gesta ese poder*” (ZVALETA, René, *Lo nacional-popular...*, *op. cit.*). En términos gramscianos, el *óptimo social* de una sociedad –su *momento hegemónico*– es superior cuando se produce una fuerte relación de correspondencia entre Estado y sociedad.

⁷⁷ POULANTZAS, Nicos, *Estado, poder...*, *op.cit.*

afirmativa⁷⁸. Dicha construcción que no se basa en la instrumentación de sucesivas reformas en una progresión continúa, sino a través de un proceso de rupturas efectivas cuyo punto culminante es obtener una relación de fuerzas a favor de las masas populares en el terreno del Estado⁷⁹. Descolonizar implica una lucha constante contra un racismo que estructuró a las relaciones sociales bolivianas desde su origen.

Como parte de esa lucha constante, en 2009 se creó el Viceministerio de Descolonización, desde donde se empujó a sancionar, en octubre de 2010, la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación⁸⁰. Si bien el intento de desmontaje de la matriz racista del Estado no implica, por sí mismo, la desaparición de un racismo que se arrastra desde tiempos de la conquista, su reconocimiento bajo la forma de una ley invita a desnaturalizarlo y visibilizarlo, restituyendo el problema a su lugar. En rigor, la ley existe porque hay un acto de violencia en el origen que la hace posible. Que ella persista y perdure más allá de su fundación invoca que el problema no ha sido resuelto, “(...) *pues de otra manera se hubiera hecho superflua luego de reparado el acto puntual e inicial de violencia*”⁸¹. En suma, todo proceso constituyente no se agota con la promulgación de una nueva ley sino que se continúa con su aplicación, su socialización, su materialización y su renovación. La *necesaria* participación de las masas populares en ese proceso puede evitar la constitución de un estatismo autoritario. En este sentido, uno de los desafíos del llamado “Proceso de Cambio” es que el *poder constituyente* no sea absorbido completamente por esa máquina de representación que es el Estado⁸².

⁷⁸ SAMANAMUD ÁVILA, Jiovanny, “¿Es posible la descolonización...”, *op. cit.*

⁷⁹ POULANTZAS, Nicos, *Estado, poder...*, *op. cit.*

⁸⁰ Incluso antes de la creación del Estado Plurinacional el Estado boliviano venía iniciando un camino de transformaciones. Mientras en 2006 se crean el Viceministerio de Justicia Indígena Comunitaria –hoy Justicia Indígena Originaria Campesina–, el Viceministerio de Salud Tradicional, el Viceministerio de Educación Intercultural, Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y el Viceministerio de Defensa Social, en 2010 se crea el Viceministerio de Planificación Estratégica. CHIVI VARGAS, Idón, “Descolonización y gestión pública: avances, dificultades y desafíos”, en *La Época*, La Paz, septiembre 2011, Año 10, N°496.

⁸¹ GRÜNER, Eduardo, *Las formas de la espada...*, *op. cit.*, p.32.

⁸² NEGRI, Antonio, *El poder Constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad*, Barcelona, Ediciones Libertarias-Prodhufi, 1994.

La creación del Estado Plurinacional significó un desplazamiento del antagonismo político, social y cultural: si antes de 2009 la lucha política se producía entre dos *bloques de poder*, en el que unos ejercían la conducción del Estado, y otros se encontraban por fuera de su espacio físico -lo que no quiere decir que estos últimos no constituyan al Estado; por el contrario, están *siempre ya* situados en su campo estratégico-, luego de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado ese conflicto se trasladó al interior del nuevo *bloque de poder*⁸³. Con ello, nacieron nuevas y múltiples contradicciones, algunas de las cuales se podrían formular del siguiente modo: contradicción (1) entre el Estado y los movimientos sociales; (2) entre la amplitud del proceso y la necesidad de garantizar la conducción indígena-campesina del mismo; (3) entre el interés general de toda la sociedad y el interés particular de un sector de ella; y (4) entre la necesidad y voluntad de industrialización de las materias primas y el “vivir bien”, “(...) *entendido como la práctica dialogante y mutuamente vivificante con la naturaleza que nos rodea*”⁸⁴.

El “conflicto del TIPNIS”, uno de los tantos que se sucedieron con el nacimiento del Estado Plurinacional, puede servir de ejemplo para arrojar luz sobre estas contradicciones. Nos referimos al conflicto en torno del intento por parte del gobierno de construir una carretera que atravesase el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécore (TIPNIS), en la zona de la Amazonía boliviana. Esta tentativa, cuyo objetivo era la integración estatal del territorio – uno de los pilares del Estado Plurinacional-, originó un conflicto social, político y cultural que condensó algunas de las contradicciones señaladas más arriba. A partir de él, el llamado “Pacto de Unidad”⁸⁵, soporte fundamental para llevar adelante la Asamblea Constituyente, terminó rompiéndose. Tres de las cinco

⁸³ GARCÍA LINERA, Álvaro, *Las tensiones creativas...*, *op. cit.*

⁸⁴ *Ibíd.*, p.63.

⁸⁵ El “Pacto de Unidad” estaba conformado principalmente por las siguientes cinco organizaciones: Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa (CNMCIOS-BS), Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).

organizaciones que lo componían –las “trillizas”: CSUTCB, CSCIB y CNMCIQB-BS- apoyaron la iniciativa del MAS, mientras que las dos restantes – las “mellizas”: CIDOB y CONAMAQ- se ubicaron, a partir de ese momento, en la oposición. Esta ruptura evidenció la conflictividad constitutiva entre el Estado y las masas populares, expresando el peligro que conllevan las iniciativas estatales sin una consulta previa a través de un Referéndum, como lo señala la nueva Constitución. La iniciativa estatal en este conflicto aumentó las posibilidades de derivar en un estatismo autoritario, alejado de los mismos movimientos sociales que colocaron al MAS en el gobierno, poniendo en jaque la amplitud del proceso y su necesidad de garantizar la conducción indígena-campesina. Pero sobre todo, revela las tensiones irresolubles entre la universalidad y sus partes, demostrando que en muchas ocasiones la pretensión de universalidad no es una demanda real del conjunto. Con Marx, Nietzsche y Freud sabemos que la universalidad es siempre una promesa incumplida –por imposible- de la Modernidad, pues allí donde hay alguna forma de universalidad históricamente construida existe, por definición, una particularidad que se le opone⁸⁶.

A la inversa, puede pensarse que es la propia deconstrucción del Estado la que conduce al enfrentamiento de dos lógicas contrapuestas: un gobierno que busca construir un Estado Integral, anclándose, entre otras dimensiones, en la integración de un territorio que se encontraba desmembrado para poder llegar a lugares que antes no llegaba, y ciertos sectores indígenas de tierras bajas que se muestran reacios a su inclusión en un Estado inserto en las lógicas del mercado internacional –lo que no significa una pretensión porque se los excluya-. De igual modo, el “conflicto del TIPNIS” puso de manifiesto la contradicción entre una *necesaria* industrialización y un novedoso intento por constituir esa industrialización a través de los preceptos del “vivir bien”.⁸⁷

⁸⁶ GRÜNER, Eduardo, “Introducción. El retorno de la teoría crítica de la cultura: una introducción alegórica a Jameson y Zizek”, en Fredric Jameson y Slavoj Zizek, *Estudios, Culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo*, Buenos Aires, Paidós, 2003.

⁸⁷ El conflicto del TIPNIS no fue el único conflicto que se produjo en Bolivia en tiempos del Estado Plurinacional. Entre otros, se puede mencionar la disputa entre el gobierno y la CIDOB,

Palabras (sin) finales

Cómo emprender una transformación radical del Estado

Articulando la ampliación y la profundización de las instituciones

De la democracia representativa y de las libertades (que fueron también una conquista de las masas populares) con el despliegue

De formas de democracia directa de base y el enjambre de los

Focos autogestionarios: aquí está el problema esencial de una

Vía democrática al socialismo y de un socialismo democrático

Nicos Poulantzas, en “Estado, Poder y Socialismo”

No fue objetivo de este trabajo construir un decálogo del debe y el haber del Estado Plurinacional, sino señalar algunos de los múltiples dilemas que lo constituyen. Creemos que habitar las contradicciones, por más doloroso que resulte, puede impulsarnos a desplegarlas en un sentido “creativo”, reconociéndonos en los dramas que nos son propios. Como señala García

en junio de 2010, cuando los últimos le reclamaron al gobierno el pase de las tierras fiscales en tierras bajas a propiedad exclusiva de los indígenas de esa zona. O cuando en abril de 2011 dos fracciones de la Central Obrera de Bolivia (COB) y el gobierno se enfrentaron porque los primeros se oponían a la implementación del Seguro Universal de Salud. También puede consignarse otro profundo conflicto, en diciembre de 2010, que sacó a relucir los nuevos dilemas del nuevo Estado: el “gasolinazo”. Por Decreto y sin previa consulta popular, el gobierno impulsó un aumento del valor del gas entre un 57% y un 82%. Inmediatamente, como una rememoración de las pasadas luchas populares en torno de los bienes naturales – recordemos la “guerra del agua” y la “guerra del gas”-, se inició un proceso de demandas y protestas que se extendieron a lo largo de una semana. El conflicto encontró solución cuando el gobierno, recuperando positivamente el ideario zapatista del “mandar obedeciendo”, escuchó la voz del pueblo y decretó el fin del Decreto.

Linera⁸⁸, las nuevas contradicciones tienen la potencia de la creatividad en tanto su despliegue tiende a profundizar al “Proceso de Cambio”.

La toma del poder del Estado por parte del bloque indígena-campesino – bloque que, claro está, no es unívoco ni homogéneo, y que también se encuentra desgarrado internamente por sus contradicciones- significa desarrollar una lucha de masas que pueda torcer la relación de fuerzas internas en los aparatos del Estado, que, como señala Poulantzas⁸⁹ son el campo estratégico de las luchas políticas⁹⁰. En tal sentido, la descolonización del Estado desde el Estado no se trata de reformas sucesivas en progresión continua, sino de un proceso de rupturas efectivas cuyo punto culminante es obtener una relación de fuerzas a favor de las masas populares en el terreno estratégico del Estado. La práctica descolonizadora desde el Estado no puede prescindir de las luchas populares, que se manifiestan a través del despliegue de los movimientos sociales y del conjunto de dispositivos de democracia autogestiva –las autonomías indígenas, por caso-. Es en la combinación entre ambas donde puede encontrarse un antídoto contra el estatismo autoritario⁹¹. Eso, y no otra cosa, son el “socialismo comunitario” y el “gobierno de los movimientos sociales”.

Estos seis años de vida del Estado Plurinacional desafían a las teorías críticas del Estado que sólo ven en él una maquinaria de dominación de la burguesía. Los dilemas que afronta este nuevo Estado nos obligan a pensar en la posibilidad de que él mismo adquiera dimensiones libertarias y descolonizantes en su seno. Su creación es un llamado a la invención cultural y

⁸⁸ GARCÍA LINERA, Álvaro, *Las tensiones creativas...*, op. cit.

⁸⁹ POULANTZAS, Nicos, *Estado, poder...*, op.cit.

⁹⁰ Uno de los mayores difusores de la idea del Estado como campo de lucha en Bolivia fue el *Grupo Comuna*. Conformado por Álvaro García Linera, Luis Tapia, Raquel Gutiérrez, Raúl Prada y Oscar Vega Camacho, se trata de un colectivo teórico-político originado al calor de las luchas populares producidas en los albores del siglo XXI. Tuvo la virtud de, a partir de una relectura de la historia boliviana, de poder reflexionar críticamente en simultáneo con una coyuntura sumamente novedosa. Para una profundización del Estado como campo de lucha, recomendamos AA.VV., *El Estado. Campo de lucha*, La Paz, CLACSO-Muela del Diablo editores-Comuna, 2010.

⁹¹ POULANTZAS, Nicos, *Estado, poder...*, op.cit.

teórica⁹². Como señala Horacio González “*Para postular hoy un Estado capaz de pensar la emancipación de la sociedad que lo constituye, es preciso dotarlo de formas internas paradójicas, de sectores del Estado “libertarios”, que participan en la construcción colectiva de lo social con decisiones que también se autoinhiban*”⁹³.

Seguramente, las propias exigencias histórico-concretas son las que le otorgan viabilidad a este paradójico, dilemático y contradictorio proyecto, que, más que nunca, reclama una nueva teoría del Estado.

Bibliografía

- AA.VV., *El Estado. Campo de lucha*, La Paz, CLACSO-Muela del Diablo editores-Comuna, 2010.
- ALTHUSSER, Louis, *Ideología y aparatos ideológicos de Estado*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2003 [1970].
- ARGÜEDAS, Alcides, *Pueblo enfermo*, La Paz, Librería Editorial América, 1909.
- ARICÓ, José, *La hipótesis de Justo*. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1999 [1980a].
- ARICÓ, José, *Marx y América Latina*, Buenos Aires, Catálogos, 1982 [1980b].
- BOURDIEU, Pierre, *Razones prácticas*, España, Anagrama, 1997 [1976].
- CALVINO, Ítalo, *El caballero inexistente*, Madrid, Ediciones Siruela, 1997 [1959].
- CHIVI VARGAS, Idón, “Descolonización y gestión pública: avances, dificultades y desafíos”, en *La Época*, La Paz, septiembre 2011, Año 10, N°496.
- DE ÍPOLA, Emilio, “La presencia de Poulantzas en América Latina”, en *Controversia*, México D.F., mayo 1980, Año 2, N°6.
- GARCÍA LINERA, Álvaro, *La potencia plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2008.

⁹² Al respecto, resulta interesante el espacio de reflexión teórica, titulado “Pensando el mundo desde Bolivia”, creado en 2006 por la Vicepresidencia.

⁹³ GONZÁLEZ, Horacio, “Teoría del Estado”, en *Página 12*, Buenos Aires, 7 de junio 2014, p.1. Disponible en <http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-248074-2014-06-07.html>

GARCÍA LINERA, Álvaro, “El Estado en transición. Bloque de poder y punto de bifurcación”, en AA.VV. *El Estado. Campo de lucha*, La Paz, CLACSO-Muela del Diablo editores-Comuna, 2010a.

GARCÍA LINERA, Álvaro, “Del Estado aparente al *Estado Integral*. La construcción del socialismo comunitario”, en *Discursos & ponencias del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia*, La Paz, Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 2010b, Año 3, Nº8.

GARCÍA LINERA, Álvaro, *Las tensiones creativas de la revolución. Quinta fase del Proceso de Cambio*, La Paz, Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 2011.

GILLER, Diego, “¿Un Estado para muchas naciones? Apuntes para una historia reciente de la noción de ‘Estado plurinacional’ en Bolivia”, en *Laboratorio. Revista de Estudios sobre Cambio Estructural y Desigualdad Social*, Buenos Aires, 2011, Año 12, Nº 24.

GILLER, Diego, *Consideraciones sobre el racismo en Bolivia. Materiales teóricos para abordar su historia reciente*, Buenos Aires, Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación, 2014. Disponible en <http://www.centrocultural.coop/descargas/tesis/consideraciones-sobre-el-racismo-en-bolivia-materiales-teoricos-para-abordar-su-historia-reciente.html>

GRAMSCI, Antonio, *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2003.

GRÜNER, Eduardo, *Las formas de la espada. Miserias de la teoría política de la violencia*, Buenos Aires, Colihue, 1997.

GRÜNER, Eduardo, “Introducción. El retorno de la teoría crítica de la cultura: una introducción alegórica a Jameson y Zizek”, en Fredric Jameson y Slavoj Zizek, *Estudios, Culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo*, Buenos Aires, Paidós, 2003.

GONZÁLEZ, Horacio, “Teoría del Estado”, en *Página 12*, Buenos Aires, 7 de junio 2014. Disponible en <http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-248074-2014-06-07.html>

HEGEL, George, *Principios de la filosofía del derecho*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2004 [1821].

LECHNER, Norbert, “Cultura política y democratización”, en *Obras Escogidas*, Santiago, Editorial Lom, 2006, Vol. 2.

MARX, Karl, *Ideología alemana*, Buenos Aires, Santiago Rueda Editores, 2005 [1846].

NEGRI, Antonio, *El poder Constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad*, Barcelona, Ediciones Libertarias-Prodhufi, 1994.

O'DONNELL, Guillermo, "Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas conceptuales", en *Desarrollo Económico*, Buenos Aires, 1993, Vol.33, N°130.

O'DONNELL, Guillermo, "Acerca del Estado en América Latina. Diez tesis para discusión", en AA.VV., *La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas*, Buenos Aires, PNUD, 2004, pp. 11-86.

PALTI, Elías, *La nación como problema. Los historiadores y la "cuestión nacional"*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003.

POULANTZAS, Nicos, *Estado, poder y socialismo*, España, Siglo XXI editores, 1980 [1978].

PRADA, Raúl, "Estado periférico y sociedad interior", en AA. VV., *Horizontes y Limites del Estado y el Poder*, La Paz, Muela del Diablo editores, 2005.

QUIJANO, Aníbal, "Colonialidad del poder, Eurocentrismo y América Latina", en Edgardo Lander (ed.) *La Colonialidad del saber: Eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas Latinoamericanas*, Caracas: CLACSO, 2005 [2000].

SAMANAMUD ÁVILA, Jiovanny, "¿Es posible la descolonización del Estado desde el Estado?", en *La Época*, La Paz, septiembre 2011, Año 10, N°496.

TAPIA, Luis, "La producción teórica para pensar América Latina", en AA. VV. Maya Aguiluz Ibargüen y Norma de los Ríos (coord.), *René Zavaleta Mercado. Ensayos, testimonios y re-visiones*, Argentina, Miño y Dávila, 2006 [2004].

TAPIA, Luis, "Una reflexión sobre la idea de estado plurinacional", en *Revista del Observatorio Social de América Latina*, Buenos Aires, CLACSO-OSAL, 2007, N°22.

WALLERSTEIN, Immanuel, *El moderno sistema mundial. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI*, México D.F., Siglo XXI, 2007 [1974].

WALLERSTEIN, Immanuel, "El conflicto de clases en la economía-mundo capitalista", en Etienne Balibar e Immanuel Wallerstein, *Raza, nación y clase*, Madrid, Iepala Textos, 1988.

ZAVALETA, René, "Las formaciones aparentes en Marx", en René Zavaleta, *La autodeterminación de las masas*, Bogotá, Siglo del Hombre Editores – CLACSO, 2009 [1978].

ZAVALETA, René, "Cuatro conceptos de democracia" en René Zavaleta, *La autodeterminación de las masas*, Bogotá, Siglo del Hombre Editores – CLACSO, 2009 [1981].

ZAVALETA, René, “Las masas en noviembre” en René Zavaleta *La autodeterminación de las masas*, Bogotá, Siglo del Hombre Editores – CLACSO, 2009 [1983a].

ZAVALETA, René, “Notas sobre la cuestión nacional en América Latina”, en René Zavaleta, *La autodeterminación de las masas*, Bogotá, Siglo del Hombre Editores – CLACSO, 2009 [1983b].

ZAVALETA, René, *El Estado en América Latina*, La Paz, Editorial Los amigos del libro, 1990 [1984a].

ZAVALETA, René, *Lo nacional-popular en Bolivia*, Bolivia, Siglo XXI Editores, 1988 [1984b].

Experiências de lutas em contexto dito pós-neoliberal no Brasil: 2003-2013

Roberto Leher¹

Resumo

O presente artigo analisa e produz sínteses a propósito das lutas sociais no Brasil no período 2003-2013, coloca em relevo as contradições do período que possibilitaram condições extraordinárias para a reprodução ampliada do capital e, o que é mais importante, provocaram as massivas e multitudinárias manifestações das Jornadas de Junho de 2013. No plano teórico discute o problema da periodização, a conjuntura econômica internacional do período estudado, desenvolve a problemática da relação Estado e lutas sociais e sustenta a atualidade do conceito de capitalismo dependente de Florestan Fernandes. A base empírica do estudo compreende fontes primárias: (a) sobre os conflitos e lutas do campo; (b) sobre as greves dos trabalhadores urbanos e (c) as cronologias dos conflitos sociais do Observatório Social da América Latina. O estudo apresenta os grandes números dos conflitos sociais, indica tendências das lutas e elabora aportes para pensar a correlação de forças. Discute a situação dos trabalhadores assalariados dos setores público e privado, as ocupações de terras, abrangendo as lutas pela reforma agrária e contra as expropriações no campo e os conflitos envolvendo os povos indígenas em luta contra as grandes hidrelétricas na Região Norte. Na última seção, examina as Jornadas de Junho de 2013 como expressão política dos trabalhadores precários, os novos sujeitos sociais que entram na cena das lutas sociais brasileiras no Século XXI.

Palavras-chave: Lutas sociais no Brasil, Estado ampliado, neodesenvolvimento, capitalismo dependente.

¹ Professor Titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ e de seu Programa de Pós-Graduação. Pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/ CNPq. Colaborador da Escola Nacional Florestan Fernandes/ENFF

Abstract

This article analyzes and produces summaries on social struggles in Brazil in the period 2003-2013, it highlights the contradictions of the period that allowed extraordinary conditions for expanded reproduction of capital and, more importantly, that provoked massive demonstrations on June, 2013. In the theoretical plan it discusses the problem of periodization, the international economic conjuncture of the period, it develops the problem of relationship between State and social struggles and it sustains the actuality of Florestan Fernandes' concept of dependent capitalism. The empirical basis of the study comprises primary sources (a) on conflicts and struggles from the field and (b) on urban workers' strikes and (c) the timelines of the social conflicts of the Social Observatory of Latin America. The study presents the large numbers of social conflicts, it indicates trends of struggles and it elaborates contributions to analyze the correlation of forces. It discusses the situation of employees in the public and private sectors, occupations of land, covering the struggles for agrarian reform and against the expropriations in the field and the conflicts involving indigenous people in struggle against corporations in the energy sector in the Northern Region. In the last section, it examines June 2013 journeys as a political expression of the precarious workers, the new social subjects entering the scene of Brazilian social struggles in the 21st century.

Keywords: Social Struggles in Brazil, expanded State, neo development, dependent capitalism.

Resumen

Este artículo analiza y produce resúmenes de las luchas sociales en Brasil en el período 2003-2013, pone de relieve las contradicciones de la época que permitieron condiciones extraordinarias para la reproducción ampliada del capital y, lo más importante, provocó manifestaciones masivas en las Jornadas de junio de 2013. En el plan teórico aborda el problema de la periodización, la coyuntura económica internacional del período estudiado, desarrolla el problema de la relación del estado y las luchas sociales y sostiene el concepto actual de capitalismo dependiente de Florestan Fernandes. La base empírica del estudio comprende fuentes primarias: (a) sobre los conflictos y las luchas del campo, (b) acerca de huelgas de los trabajadores urbanos y (c) las cronologías de los conflictos sociales del Observatorio Social de América Latina. El estudio presenta gran número de conflictos sociales, indica las tendencias de las luchas y elabora contribuciones para pensar la correlación de fuerzas. Analiza la situación de los trabajadores de los sectores público y privado, las ocupaciones de tierra, cubriendo las luchas por la reforma agraria y en contra las expropiaciones en el campo y los conflictos que involucran a pueblos indígenas en la lucha contra las principales compañías de electricidad en la Región Norte. En la última sección examina las manifestaciones de Junio de 2013 como la expresión política de los trabajadores precarios, los nuevos sujetos sociales que entran en la escena de las luchas sociales de Brasil en el siglo XXI.

Palabras clave: luchas sociales en Brasil, estado expandido, neo desarrollo, capitalismo dependiente.

Introdução

É um grande desafio teórico analisar e produzir sínteses a propósito das lutas sociais no Brasil no período 2003-2013. Este decênio corresponde ao tempo em que os presidentes da República (Lula da Silva, 2003-2010 e Dilma Rousseff, 2011- atual) foram eleitos por uma coalizão² encabeçada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) com partidos de centro e de direita³. A filiação dos dois presidentes do período ao PT, agremiação que, nos anos 1980 e 1990, chegou a ser concebida como a principal referência de esquerda para uma infinidade de movimentos sociais, partidos, sindicatos e militantes de diversas causas, não apenas no Brasil e na América Latina, mas em todo mundo.

A complexidade não decorre, apenas, do fato de que um partido com origem na esquerda tenha alcançado o governo e logrado êxitos eleitorais sucessivos. Existem muitos exemplos em outras partes do mundo de mandatos longevos de agrupamentos de esquerda. Nem, tampouco, a mudança programática antes e depois de chegar ao governo, tema sobejamente conhecido: do giro liberal de François Mitterrand e de Felipe González, aos governos da *concertación* no Chile, os exemplos são muitos. O mais desafiador,

² Após ser eleito com o apoio do Partido Liberal – PL (Vice-Presidente), atualmente denominado Partido da República, de direita e com fortes ligações com a Igreja Universal do Reino de Deus, por partidos que já compunham a aliança do PT, como PC do B (com origem na esquerda), PSB, PV e PDT (difusamente de centro-esquerda), Lula da Silva ampliou a sua coalizão em 2005, passando a ser composta pelo PT e PC do B, PSB e pelos partidos de direita PL, PTB, PPS, PV, PMDB. Após a crise política do “mensalão”, perdeu apoio do PPS e do PDT, mas ganhou o apoio do PP (cuja origem é a ARENA, partido da ditadura empresarial-militar) e do PSD, com origem na ARENA e no PSDB. Exceto Fernando Henrique, todos os ex-presidentes do período pós-ditatorial apoiam os governos com o PT, como José Sarney, representante da ditadura na dita transição democrática e oligarca do Maranhão, Collor de Mello, o introdutor mais sistemático da agenda neoliberal após a Constituição de 1988 e que sofreu *impeachment* por corrupção. Esta última coalizão sustenta o governo Dilma Rousseff. Em grandes números, a base governista corresponde a 60% da Câmara dos Deputados e acima de 75% do Senado. Flutuações fisiológicas podem alterar as votações no parlamento, mas todos os projetos de lei pró-capital foram amplamente aprovados e, nos dois governos de Lula da Silva, a principal derrota aconteceu quando Lula da Silva defendeu a manutenção de uma contribuição tributária sobre a movimentação financeira criada por Fernando Henrique, direcionada ao pagamento da dívida, que o parlamento rejeitou.

³ No Brasil, a localização partidária “esquerda”, “centro” e direita é imprecisa, pois o centro e a direita andam juntos em todas as matérias de interesse do capital e, nos principais embates sociais, a maioria dos partidos com origem na esquerda acompanharam o posicionamento pró-capital, a exemplo das reformas previdenciárias, das parcerias público-privadas, da privatização das bacias petrolíferas por meio de concessões. São partidos da ordem burguesa e dirigidos pelos interesses do capital monopolista.

certamente, é tornar pensáveis as contradições do período que, conforme o estudo pretende demonstrar, possibilitaram condições extraordinárias para a reprodução ampliada do capital e, o que é mais importante, provocaram as massivas e multitudinárias manifestações das Jornadas de Junho de 2013.

Periodização

O objetivo do presente artigo é examinar o período 2003-2013, contudo, a opção por estudar este período não pode deixar de ser problematizada. Um primeiro equívoco seria pressupor que 2003 inaugurou um novo período com mudanças significativas no modelo econômico. Existem argumentos consistentes que apontam em outra direção, como os de Gonçalves⁴ que caracteriza o período 1995-2013 como Liberal Periférico, recusando descontinuidades no período, problema que será examinado na seção 3.

Outro problema teórico é ignorar a conjuntura econômica internacional que transtornaram os dois governos. As crises econômicas na América Latina (México 1994-95, Argentina 2000-02), na Ásia (1997), na Rússia (1998), na Turquia (2001) e o estouro da bolha da Nasdaq (2000-2001) confirmam o agravamento da crise mundial que se expressa com especial virulência no Brasil em 1998-1999 (desvalorização brusca do Real). Uma das consequências para a economia brasileira desse quadro de crise foi a depreciação do valor das principais *commodities* exportadas pelo país. Do ponto de vista econômico, o período compreendido entre 1995 e 2002 foi muito mais adverso do que o intervalo entre 2003-2008. A deterioração da economia mundial no período do governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) reduziu o gotejamento de medidas assistenciais aos trabalhadores mais duramente atingidos pela crise, comprometendo, com isso, sua capacidade de dirigir o conjunto da sociedade, situação que provocou o debilitamento das condições de governabilidade de seu segundo mandato, favorecendo a eleição de Lula da Silva.

⁴ GONÇALVES, Reinaldo, *Desenvolvimento às avessas: verdade, má-fé e ilusão no atual modelo brasileiro de desenvolvimento*, Rio de Janeiro, LTC, 2013.

A duração do ciclo expansivo foi maior na década de 2000, especialmente entre 2004 e 2008. Neste interregno houve considerável aumento no preço internacional das *commodities*, elevadas pelas importações da China e pela expansão da economia mundial e, em especial, dos países asiáticos. Todas essas condições favoráveis possibilitaram o fortalecimento do fundo público e, como disse Lula da Silva em entrevista a Emir Sader⁵, “*distribuir pouco recursos para os pobres*” e com isso promover distribuição de renda. Entre outros fatores, esse contexto favoreceu a popularidade e a força do governo Lula da Silva.

O período 2009-2013, por sua vez, foi mais desfavorável do que o imediatamente anterior, em decorrência do agravamento da crise econômica internacional. O novo adensamento da crise econômica mundial, cuja manifestação mais visível aconteceu nos EUA em 2008 e, mais tarde, na Europa (Irlanda, Grécia, Portugal, Espanha), provocou retração econômica que deteriorou o desempenho da economia brasileira, afetando, em especial, as condições de governo da presidenta Dilma Rousseff.

Assim, em determinadas análises, o estudo indicará outra periodização de maior duração para melhor apresentar as tendências. Embora o propósito não seja realizar uma comparação entre os governos FHC e Lula da Silva, o uso de indicadores do período Cardoso é relevante, pois em seus dois mandatos os conflitos foram muito agudos, embora o número de greves, ocupações e manifestações tenha oscilado ao longo dos anos 1990, como será discutido na seção 4.1. Neste caso, a comparação com o período FHC é útil, pois pode permitir aferir se no período Lula da Silva as mobilizações sociais seguiram em crescimento e, caso negativo, se a atenuação das lutas decorreram de conquistas nas reivindicações que impulsionaram as lutas nos anos 1990 ou se expressa uma mudança na vontade política das entidades

⁵ SADER, Emir (org.), *10 anos de governos pós-neoliberais no Brasil: Lula e Dilma*, São Paulo, Boitempo, 2013.

sindicais e dos movimentos sociais em prol da manutenção da governabilidade do governo Federal.

Base empírica

A base empírica do estudo compreendeu: para a análise dos conflitos e lutas do campo (a), os indicadores da Comissão Pastoral da Terra e do DATALUTA – Banco de Dados da Luta pela Terra: Relatório Brasil – que produzem alentados relatórios anuais. No caso das greves dos trabalhadores urbanos (b), uma importante fonte é o Sistema de Acompanhamento das Greves-Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos (DIEESE) que igualmente realiza estudos anuais. Complementarmente, a pesquisa examinou as cronologias dos conflitos sociais do Observatório Social da América Latina (c) do Conselho Latino Americano de Ciências Sociais (CLACSO), seção Brasil. Neste último caso, é necessário destacar mudanças na abrangência do estudo. A cronologia dos conflitos foi editada, resumindo os principais acontecimentos, entre 1999 e 2006. A partir de 2007 passou a ser disponibilizado o arquivo com todos os registros, o que exige cuidado ao trabalhar séries históricas. Ademais, estudos acadêmicos (d) sobre as lutas sociais foram considerados e, especialmente, indicadores sobre a evolução da força de trabalho do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos (DIEESE).

1. Estado e conflitos sociais: pontuações metodológicas

Uma dificuldade de ordem prática para estudar os conflitos sociais no período decorre da amplitude da base aliada dos governos Lula da Silva e Dilma Rousseff e, principalmente, da significativa acomodação dos interesses das frações de classe que operam o bloco no poder no aparelho de Estado. A

maior complexidade decorre do fato de que, além das frações burguesas dominantes que usualmente se apropriam dos bastiões de poder do Estado, outras frações de classes, vinculadas ao trabalho, atuam dentro e fora do Estado em conformidade com o bloco no poder, por meio de sindicatos, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e movimentos sociais que agem como parte da base governista. Os referidos segmentos da classe trabalhadora, conforme o presente estudo argumenta, não compõem o núcleo sólido do Estado, entretanto, encontraram interlocutores em um grande número de nichos no interior do Estado que não ocupam lugares de poder real no aparato estatal.

No período 2003 a 2012 os numerosos confrontos entre os trabalhadores e o Estado (reforma agrária, moradia, educação, saúde) e entre o capital e o trabalho (como as greves do setor privado, a exemplo das protagonizadas pelos sindicatos dos metalúrgicos ou petroleiros) pareciam estar diluídos, atenuados e, até mesmos, fagocitados pelo Estado. Os conflitos não aconteceram na forma de um confronto aberto com o Estado em sua generalidade, pois uma das estratégias do bloco no poder, encampada pelos mencionados governos, foi a dispersão dos assuntos de interesse dos trabalhadores em aproximadamente 30 ministérios e em diversas empresas públicas e mistas. Neste período foi comum, por exemplo, a avaliação de que o ministério do Desenvolvimento Agrário (direcionado para a agricultura de menor porte) era sensível às reivindicações dos trabalhadores do campo, mas não as concretizou em virtude de resistências dos ministérios da Agricultura (dedicado ao agronegócio) e da área econômica (em nome da estabilidade das contas públicas). Muitos movimentos sustentaram a tese de que o governo Lula da Silva estava em disputa entre setores progressistas e neoliberais ou, no léxico após 2006, entre desenvolvimentistas e o setor financeiro neoliberal.

A partir do governo Lula da Silva, em 2003, importantes organizações vinculadas aos trabalhadores ecoaram o discurso governamental de que não era mais necessário empreender lutas com protagonismo da base, pois o Estado estaria aberto às reivindicações dos trabalhadores, em mesas setoriais

(universidades, reforma agrária, servidores públicos federais) que poderiam contemplar, processualmente, as suas demandas obstaculizadas no período Cardoso (1995-2002).

O colaboracionismo sindical, de OSCIP e de movimentos está assentado em dois pressupostos interrelacionados e que repercutem na análise da correlação de forças: (i) a concepção de Estado como um espaço em disputa entre, de um lado, forças que expressam os anseios dos setores dominantes e, de outro, os segmentos da classe trabalhadora e (ii) na avaliação das forças aliadas ao governo para fazer a correlação pender para o lado dos trabalhadores é necessário que as organizações dos trabalhadores colaborem com os ‘seus’ representantes no interior do Estado, em detrimento da autonomia de classe. A pressão é reconhecida como válida, mas não a luta contra as políticas do governo e, obviamente, contra o caráter geral das políticas governamentais. Desse modo, é possível verificar um giro tático dos movimentos em prol de agendas econômico-corporativas.

A concepção de Estado presente em muitos movimentos sociais, partidos com origem na esquerda da base do governo (PT, Partido Comunista do Brasil /PC do B), centrais sindicais (Central Única dos Trabalhadores/CUT, Força Sindical, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil/CTB) e seus sindicatos de base que direcionam as suas ações “dialógicas” para *loci* ‘descentralizados’ e parcelários/ setoriais do Estado (conflitos agrários, direcionados ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/INCRA nacional e às suas seções nos estados; lutas pela educação, no Ministério da Educação/MEC e nas secretarias estaduais e municipais de educação, lutas pela moradia, ao ministério das Cidades etc.) é de que o mesmo é uma federação de frações de classe, em que as classes-de-apoio ocupariam nichos de poder real e (relativamente) autônomo dentro do Estado. Assim, o Estado, neste prisma, não se configura como uma condensação de relações de forças do bloco no poder (portanto, dos setores dominantes que logram o domínio político) que, objetivamente, define os grandes balizamentos do Estado.

Esse debate é antigo e remonta, pelo menos, a II Internacional, como pode ser evidenciado na crítica de Rosa Luxemburgo a Bernstein em 1900⁶. Por que após tantos debates e críticas essa velha tese foi retomada no Brasil, no alvorecer do século XXI?

No Brasil, a perspectiva de que as reformas burguesas antecederam a luta pela revolução guiou a estratégia nacional-democrática do Partido Comunista Brasileiro/PCB no final dos anos 1950 que preconizava apoio às frações burguesas modernizadoras e industrialistas. Como contrapartida, os trabalhadores empreenderiam lutas para ampliar os direitos sociais mais fundamentais, concebidos como passíveis de serem assegurados nos marcos de uma nova revolução burguesa no Brasil que apagaria os resquícios pré-capitalistas no país. Entre essas reformas, cabe destacar reforma agrária para os camponeses, educação e saúde públicas, urbana, previdência social universal e, claro, direitos trabalhistas (no campo e na cidade) consolidados nas lutas históricas dos trabalhadores.

O golpe empresarial-militar de 1964 comprovou que as frações burguesas dominantes (inclusive os setores tidos como modernos) estavam comprometidas com o capitalismo monopolista. Nenhuma dessas frações estava envolvida em uma revolução burguesa capaz de engendrar um projeto autopropelido de nação. Longe de perceberem as reformas de base como algo constitutivo de seus projetos de classe, as frações imperializadas rapidamente se engajaram na preparação do golpe, enquanto outras logo aderiram ao mesmo, harmonizando os seus objetivos de classe com a via ditatorial.

A ditadura no Brasil foi um amálgama entre frações empresariais e os militares, sob o comando estratégico do capital monopolista. Florestan Fernandes⁷ examinou detidamente a questão, sustentando que os setores burgueses, em virtude do capitalismo dependente, são hostis às reformas, pois

⁶ LUXEMBURGO, Rosa, *Reforma ou Revolução*, Luxemburg Internet Archive, 2002. Disponível em: http://www.marxists.org/portugues/luxemburgo/1900/ref_rev/cap01.htm

⁷ FERNANDES, Florestan, *A revolução burguesa no Brasil. Ensaios de interpretação sociológica*, São Paulo, Globo, 2006.

estas são incompatíveis com os fundamentos do capitalismo dependente: as expropriações e a superexploração do trabalho. Para além da teoria, essa constatação advinda da experiência da longa ditadura e mesmo no período dito de abertura, no final dos anos 1980 e, de modo mais agudo, no período de neoliberalismo duro dos anos 1990, todos os movimentos, sindicatos autônomos e organizações da esquerda, sabiam, por experiência, que os setores dominantes são refratários às reformas. Mesmo quando forçadas à concessões democráticas, tão logo quanto possível, operam no sentido de retirar as pequenas conquistas (por meio da inflação, do congelamento salarial, da falta de apoio aos camponeses que conquistaram terra para trabalhar, por reformas do Estado etc.), restabelecendo o padrão de exploração brutal a que a maior parte da classe trabalhadora está submetida. Assim, há muito tempo essa perspectiva de que os direitos poderiam ser processualmente conquistados em virtude da existência de aliados em nichos de poder no Estado estava descartada. Este foi o sentido do novo sindicalismo surgido nas lutas do final dos anos 1970 que explicitamente recusou a tutela e a subordinação ao Estado, privilegiando a autonomia da classe trabalhadora, negando apoio ao governo da Nova República (período Jose Sarney, 1985 a 1990).

Uma hipótese que pode contribuir para explicar esse aparente anacronismo é a presença de Lula da Silva no governo, mediado pelo PT e pela CUT. É reconhecido o fato de que Lula da Silva manteve canais abertos com as principais organizações dos trabalhadores, ainda que nem sempre de modo direto (muitas vezes o acesso a Lula se dava por meio da Secretaria Geral da Presidência da República, sob responsabilidade de Gilberto Carvalho), que, na presidência, sabia distribuir de modo magistral modestas concessões aos de baixo (bolsa família, correção do salário mínimo, ajustes nos planos de carreira de parte do funcionalismo, alguma reforma agrária), ao mesmo tempo em que o grosso do fundo público – seja diretamente pelo Tesouro Nacional, seja por meio de isenções tributárias, seja por meio de empréstimos e parcerias do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social/BNDES – estava sendo direcionado para as frações rentistas (pagamento da rolagem

da dívida), para o agronegócio (turbinado pelas chamadas ‘campeãs nacionais’, como a JBS), para o extrativismo mineral, para as grandes empreiteiras e para os setores industriais mais internacionalizados, justo a base econômica do bloco no poder.

Nos termos do ex-presidente Lula da Silva, em entrevista: *“E, ao mesmo tempo, fizemos uma coisa que eu considero extremamente importante: provamos que pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de renda (...)”* e, mais adiante, para não deixar pairar dúvidas, na mesma entrevista, sintetizou: *“A teoria original: ‘Dê um pouco de recurso às camadas mais pobres da população que as coisas começam a acontecer’*. E, adiante: *“Eu não tenho raiva deles e não guardo mágoas [da oposição] (...) eles nunca ganharam tanto dinheiro na vida como ganharam no meu governo; nem as emissoras de televisão, que estavam quase todas quebradas; os jornais, quase todos quebrados quando assumi o governo. As empresas e os bancos também nunca ganharam tanto, mas os trabalhadores também ganharam”*⁸.

Como o presente artigo pretende demonstrar, determinados indicadores sociais melhoraram com essa forma de manejar o Estado, muito própria do período Lula da Silva e que, no geral, não se repetiu no governo Dilma Rousseff. É preciso examinar mais de perto quais foram os avanços sociais para podermos avaliar se, de fato, estão em curso reformas sociais estruturais, universais, ou se parte relevante delas é constituída por políticas de alívio à pobreza, nos termos bancomundialistas. Esta análise o leitor encontrará adiante. O que é preciso observar, ainda no plano teórico, é que a compreensão de que o Estado possui nichos, nódulos, lugares ocupados de modo autônomo por frações das classes trabalhadoras tem acentuados rebatimentos políticos.

Esta concepção de Estado levou as organizações dos trabalhadores que apoiam o governo a defenderem a concepção de que a macroeconomia do país no período considerado é ‘pós-neoliberal’, embora reconhecendo que os

⁸ SADER, Emir (org.), *10 anos de governos...*, op. cit.

rumos da economia e do governo (objetivamente: do Estado) estão em disputa. Com isso, a estratégia passa a ser inteiramente outra, redefinindo o papel dos sindicatos, dos movimentos e das demais organizações dos trabalhadores.

No lugar de empreender lutas autônomas, organizadas e dirigidas a partir das bases dos movimentos, traçando formas de condução da luta que fortalecessem um projeto autônomo dos trabalhadores (perspectiva anticapitalista), as principais organizações dos trabalhadores, após a eleição de Lula da Silva, passaram a priorizar negociações diretas com os seus aliados no Estado e no governo, renunciando à auto-organização dos trabalhadores. Como será visto adiante, existiram muitas lutas no período, mas, fundamentalmente, foram econômico-corporativas. O agravante é que a busca dessas conquistas se deu em detrimento do combate a formas de precarização dos direitos trabalhistas, como remuneração por desempenho, bancos de horas e a flexibilização dos direitos trabalhistas.

No setor privado prevaleceram as lutas econômicas. Muitas delas exitosas, possibilitando, ao menos, reposição de perdas inflacionárias, como será visto na seção 4. Nas reivindicações frente ao patronato, a orientação foi de estabelecer pactos, acordos, objetivando harmonizar o capital e o trabalho. Nas palavras de Lula da Silva: “*o trabalhador só pode ganhar se a empresa for bem*”⁹. Prevaleceram as reivindicações que resguardassem os interesses econômicos das corporações, buscando pactos em torno de salários e da manutenção dos empregos, ainda que às custas de flexibilização laboral.

Entretanto, em um dos setores mais importantes da economia brasileira, o automobilístico, os trabalhadores rebaixaram suas pautas (os salários médios no setor, entre 2003 e 2010, se mantiveram, em valores constantes, idênticos: em 2003, R\$ 5.791,00 e em 2010, R\$ 5.743,00), a despeito do enorme aumento da produtividade. No mesmo período a produtividade passou de um fator 217 para 343. O governo federal, mediador de tais pactos, concedeu nos anos 2000 isenções tributárias de enorme vulto. Ainda assim, sempre que a

⁹ *Ibíd.*

taxa de lucro esteve pressionada para baixo, a indústria automobilística demitiu milhares de trabalhadores.

Na perspectiva do capital, tais pactos foram vantajosos. O faturamento da indústria automobilística de São Paulo teve um incremento de 90% entre 1999 e 2010 (no Brasil, no mesmo intervalo de tempo, o incremento foi de 150%), período em que, em São Paulo, o número de trabalhadores foi basicamente o mesmo: em 2000, 46,7 mil trabalhadores e, em 2009, 46,6 mil trabalhadores; na crise econômica de 2008 e 2009, houve redução de 4,7% da força de trabalho no setor, apesar da isenção do Imposto sobre Produto Industrializado e de todo um conjunto de medidas de flexibilização laboral¹⁰.

No caso das reivindicações dirigidas ao Estado, a interlocução com o governo nas mesas setoriais, direcionando as lutas para a esfera institucional do Estado, foi um objetivo das direções da CUT e das demais centrais da base do governo. Cabe precisar, para evitar incompreensões desnecessárias, que a busca de interlocução com o governo em mesas específicas é um procedimento usual, inclusive no sindicalismo autônomo frente aos governos e ao patronato; o problema aqui apontado é o abandono da mobilização e da democracia construída a partir das bases engajadas e esclarecidas. Foram, em geral, negociações de cúpula, com escassa participação da base.

Um corolário dessas orientações é a busca permanente de espaços nos aparatos do Estado. Objetivando fortalecer suas posições, as organizações dos trabalhadores disputaram a indicação de seus próprios quadros ou de quadros que os representem para ocupar postos no Estado. No sindicalismo do serviço público federal, passou a ser comum mesas de negociação com o governo em que os representantes do governo eram, até pouco tempo, dirigentes sindicais. Como é possível depreender da análise apresentada na seção 4, os novos interlocutores não alteraram o desfecho das negociações, não apenas na questão salarial, mas também nas medidas referenciadas na reforma do

¹⁰ Todos os indicadores sobre a indústria automobilística têm como fonte MORAES, Luís Marcelo da Silva de, *Tendências recentes do emprego na indústria automobilística paulista*, Dissertação de Mestrado, Campinas, Instituto de Economia UNICAMP, 2012.

Estado, como remuneração por desempenho, por meio de gratificações, em detrimento de carreiras organizadas de modo congruente com os fins do serviço público.

As repercussões práticas são muitas. No lugar de lutas organizadas desde a base, encontros de cúpula com os representantes governamentais; no lugar de educar a base, tornando o partido, o sindicato e o movimento espaços de autoformação da classe para elevar a consciência política, o apassivamento dos militantes que devem apostar seu futuro no diálogo com representantes do Estado como os que, até recentemente, estavam na presidência da CUT¹¹. No que diz respeito às lutas por direitos sociais, tal concepção (do Estado como uma federação de nichos de poder, cada qual com certa autonomia) pressupõe, antes, a desmobilização das bases das entidades dos trabalhadores que devem nutrir uma ‘sábia resignação’ diante do alargamento quase infinito da implementação das “concessões”, sempre jogadas para o futuro, projetadas para um horizonte de tempo fugidio.

A questão que motiva estas reflexões teóricas não é o fato de que, nas lutas, as organizações dos trabalhadores frequentemente precisam direcionar as suas reivindicações para este ou aquele lócus do Estado. A luta de classes envolve o Estado. A luta pela garantia dos direitos em leis nacionais é particularmente relevante em um contexto em que muito do que era dever do Estado passou a ser fornecido por OSCIP, corporações, bancos etc. Distintamente, o fulcro da crítica incide sobre a crença assumida de que o Estado funciona como se fosse uma constelação de ministérios, órgãos e secretarias, distribuídos pelas diversas forças que apoiam o governo, cada uma delas dotada de autonomia compatível com o peso político do seu agrupamento partidário, em desconsideração com o Estado realmente existente que, conforme o estudo argumenta, a partir da apreciação das lutas no período, direcionou o grosso do fundo público ao capital, desconstituindo políticas fundamentais, como a reforma agrária.

¹¹ Ricardo Berzoini foi presidente da Confederação Nacional dos Bancários da CUT e, depois, ministro do Trabalho (23/01/04 a 12/07/05) e foi sucedido por Luiz Marinho (12/07/05 a 29/03/07), presidente da CUT.

O presente estudo recusa a ideia de que os movimentos ‘traíram’ as suas bases. O problema é de outra escala, abrangendo, inclusive, o debate estratégico. Com efeito, muitos intelectuais da classe de apoio ao bloco no poder avaliaram que o governo do PT, em decorrência de sua expressiva base parlamentar (No segundo mandato de Lula mais de 70% e, no governo Dilma, aproximadamente 60% da Câmara dos Deputados votaram com o governo na maioria das votações polêmicas. No senado o percentual a favor do governo é ainda maior, superior a 78%) que inclui o apoio dos ex-presidentes José Sarney e Fernando Collor de Mello, teria de assimilar interesses contraditórios e conflitantes (daí a tese do governo em disputa). Os diferenciais seriam a liderança de Lula da Silva e a estratégia de erigir um governo pós-neoliberal. Para isso, a ocupação de nichos no interior do Estado por quadros de confiança dos movimentos teria de ser uma prioridade. O Estado (ou, como dizem muitas das lideranças, “o governo”) poderia responder de modo eficaz às demandas sociais, ao menos naqueles nichos dirigidos pelas forças progressistas.

Lula da Silva foi, nesse aspecto, um extraordinário quadro político. Se apresenta para a massa como o guardião dos interesses populares no interior do Estado, arbitrando a favor dos subalternos nos momentos de conflitos, embora destinando os bastiões de poder do Estado aos setores dominantes que se voltam permanentemente contra os trabalhadores. Este fenômeno foi denominado por alguns analistas como ‘lulismo’¹².

Um balanço das lutas corrobora que a ocupação dos principais bastiões de poder real no aparelho estatal expressa a condensação da correlação de forças de um bloco no poder avesso aos direitos sociais, engendrando uma correlação de forças amplamente positiva para a burguesia monopolista. A atenuação da conflitividade contra o capital, pela criação das muitas janelas para que os conflitos pudessem ser institucionalizados no Estado, possibilitou

¹² SINGER, André Vitor, *Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador*, São Paulo, Companhia das Letras, 2012.

que a burguesia monopolista administrasse os conflitos capital-trabalho com baixa conflitividade, institucionalizando-os em órgãos públicos com baixo orçamento, envolvendo os dirigentes dos sindicatos e movimentos por meio de acordos e pactos nunca efetivamente concretizados. Vale sublinhar que muitos acordos firmados estão atravessados pela ideologia dominante do referido bloco (ampliação de vagas nas universidades federais e na educação tecnológica, respectivamente, por meio de contratos de gestão nos moldes da reforma do Estado e parcerias com as organizações patronais, democratização da educação superior por meio da aquisição de vagas privadas com verbas públicas, carreiras estruturadas a partir de gratificações por desempenho etc.).

No caso de movimentos e sindicatos que mantiveram a sua autonomia política frente ao governo, mantendo acesa a perspectiva de lutas que conjugam demandas imediatas, de teor econômico, com lutas políticas (contra o agronegócio, o modelo extrativista, a mercantilização da educação e da saúde etc.), o PT e a CUT, articulados a setores governamentais, estabeleceram alianças com militantes que atuam na base destes sindicatos, objetivando criar cisões nas categorias e mesmo fundando novas entidades de natureza sindical oficialistas, como ocorreu com os docentes das instituições de ensino superior públicas. É comum, nesses casos, que o interlocutor do governo nas referidas mesas de negociação sejam as entidades dissidentes, a despeito da reduzida representatividade das mesmas em diversos casos. Mais do que a luta específica, é necessário examinar a possibilidade de que tais ações contra este ou aquele sindicato ou movimento que não estão sob influência direta do governo, significam uma demonstração de que a autonomia classista não foi tolerada em nome da governabilidade geral, situação que esteve no cerne dos debates sobre os motivos pelos quais o PT e a CUT não tiveram influência sobre as Jornadas de Junho de 2013.

A forma como Lula da Silva buscou manejar os conflitos sociais, por meio de pequenas concessões para os agora reconceituados como pobres ou excluídos gerou muitas desconfianças entre os dirigentes do Estado Maior do Capital no processo eleitoral de 2002. Possivelmente, temiam que Lula da Silva

optasse por medidas “populistas” e buscasse se afirmar como um presidente pairando sobre as classes. Conforme é possível concluir da leitura da Carta aos Brasileiros, em 2002, esta mensagem foi assimilada: Lula da Silva publicou, em 22 de junho de 2002, a “Carta aos Brasileiros”¹³ que, em essência, reafirma o compromisso do futuro governo com os contratos e acordos firmados com os organismos internacionais, implicando: (a) adotar o regime de metas de inflação; (b) manter o câmbio flutuante; (c) praticar superávits primários elevados, e (d) manter altos juros. Em suma, a agenda do FMI.

Na conjuntura, os setores dominantes rapidamente mostraram considerável grau de unidade em torno do governo Lula da Silva. Após relutância de alguns setores localizados em lugares secundários do bloco no poder, apoiaram, como classe fundamental, as concessões governamentais. A unidade burguesa foi antes de tudo pragmática, em virtude dos efeitos da crise estrutural que, entre 1992 e 2002, provocou a queda de mais de uma dúzia de governos na América Latina. Os setores dominantes estavam cientes de que a manutenção da governabilidade exigia uma organização estatal capaz de absorver os efeitos das crises. O que em outros contextos parecia uma hipótese impossível, foram sendo assimiladas mudanças na gestão do Estado, agora sob a presidência de um ex-sindicalista. Na linha de frente desse processo, o setor bancário compreendeu que tal gestão poderia ser benéfica aos interesses gerais do capital, atuando junto a outras frações para que todos cerrassem fileiras ao lado do novo governo¹⁴.

Como os relatórios anuais do Banco Mundial têm reiterado de modo sistemático desde 1995, a gestão da governabilidade é funcional para os negócios. Algumas destas medidas interessavam economicamente a determinadas frações burguesas. A elevação relativa do salário-mínimo, por exemplo, favoreceu determinadas frações burguesas que atuam no mercado interno, beneficiando os bancos que intermedeiam o recebimento de salários e

¹³ Ver íntegra em www.pt.org.br

¹⁴ LEHER, Roberto; COUTINHO DA TRINDADE, Alice; BOTELHO LIMA, Jacqueline Aline y COSTA, Reginaldo, “Os rumos das lutas sociais no período 2000-2010”, *OSAL*, Buenos Aires, CLACSO, noviembre de 2010, Año 11, N° 28.

das bolsas destinadas aos mal denominados 'excluídos'. Entretanto, não foi exclusivamente pela melhoria das condições do trabalho que a gestão da governabilidade foi efetivada. A melhoria da renda do trabalho existiu apenas para uma parte da classe trabalhadora e, ainda assim, de modo muito heterogêneo. A prioridade conferida ao programa Bolsa Família, uma medida destinada a aliviar a pobreza de uma grande massa da população por meio da transferência de recursos para as famílias 'muito pobres e miseráveis' equivalentes a cerca de 20 a 30% do salário-mínimo, ilustra o modo como os setores dominantes operaram o domínio da grande massa que compõe o exército industrial de reserva. Um diferencial que expressa a natureza do bloco no poder é o fato de também as bolsas de alívio à pobreza estão sendo intermediadas pelo setor bancário. Finalmente, e não menos importante, a governabilidade é possibilitada pela postura de colaboração das organizações de esquerda que privilegiaram ações pelo alto, sem ampla convocação de suas bases, circunscrevendo suas reivindicações à agenda econômico-corporativa.

O busílis da questão é que a recomposição do bloco no poder nas três últimas décadas foi coetânea de um processo de transformação do aparelho de Estado hegemonizado pelas frações dominantes. A nova morfologia do Estado reflete a mudança na correlação de forças em favor dos dominantes, processo verificável desde a Crise da Dívida de 1982. Desde então, o lugar de poder das frações financeiras foi consolidado, passando a dirigir crescentemente as demais frações burguesas, situação que se consolidou com o Plano Real (1994) e com a ida do país ao FMI, em 1998¹⁵. O ponto débil dessa recomposição da hegemonia foi a existência de um movimento social (incluindo aqui os movimentos, os sindicatos e organizações de esquerda, como o PT) que, a despeito de sua debilidade estratégica, mostrou força em momentos decisivos, abalando a estabilidade do bloco no poder em virtude de ações que alteraram, ainda que conjunturalmente, a correlação de forças entre as classes fundamentais.

¹⁵ Entre janeiro de 2002 e julho de 2002, a relação da dívida líquida do setor público passou de 53% para 64% do PIB, somando R\$ 885 bilhões; o chamado "risco Brasil" passou de 800 para 1850 pontos e o dólar de R\$ 2,20 para R\$ 3,00 (Valor, 26-28/7/02, C1; FSP, 01/11/02, B1).

Como assinalado, o espectro das crises nos anos 1990 – que levou o Brasil a recorrer ao FMI, objetivando um empréstimo superior a U\$ 40 bilhões em 1998, e que alcançou o ápice na crise da Argentina, em 2001-2002 – atemorizava a alta burguesia e, por isso, o Estado Maior do Capital se mostrou mais aberto ao diálogo com as lideranças do PT, a principal organização política vinculada ao mundo do trabalho. Resultou desse novo momento mudanças internas no partido, abandonando a perspectiva socialista, conforme pode ser visto em Eurelino Coelho¹⁶.

A despeito das crises econômicas e políticas da segunda metade dos anos 1990, os setores dominantes conseguiram enraizar a política macroeconômica no aparelho de Estado, especialmente com a reforma do Estado (particularmente intensa no período 1994-1998). A partir das reformas constitucionais, o coração do Estado (pensado em sua materialidade) pode ser blindado, sem maiores resistências, diante dos intentos de soberania popular, por meio da “autonomia” do Banco Central e do *staff* do Ministério da Fazenda. Isso não significa, evidentemente, que o núcleo duro da área econômica seja de tipo burocrático, ao contrário, o referido *staff* tem sido constituído por quadros vindos diretamente do setor financeiro ou por prepostos deste. Por isso, os principais bastiões de poder na área econômica são irrigados por vasos comunicantes permanentes e sistemáticos com o Estado Maior do Capital, liderado pelo setor financeiro e por suas ramificações nos setores exportadores de *commodities*, nas empreiteiras e nas indústrias. Justo pela natureza de seus nexos com os setores dominantes, o núcleo duro da área econômica é refratário às manifestações da soberania popular, inclusive as debilmente mediadas pelo parlamento. Na sequencia dos operadores do setor financeiro que presidiram o Banco Central no período Cardoso, como Pedro Malan (Itaú-Unibanco), a nomeação de Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco de Boston para este posto em 2003, ilustra de modo contundente o modo como os dominantes se constituem Estado e, mais precisamente, apropriam-se do Estado.

¹⁶ COELHO, Eurelino, *Uma esquerda para o capital: o transformismo dos grupos dirigentes do PT (1979-1998)*, Salvador, UEFS/SP e Xamã, 2012.

As frações burguesas dominantes no bloco no poder nos anos 1990 e 2000, em particular das frações de classe burguesa que lograram avanços na centralização e concentração do capital (capitaneadas pelo setor financeiro), são mostradas ao público como se fossem representações da sociedade civil, externas ao Estado. Assim, disputas no interior do bloco no poder que maneja o Estado não são imediatamente visíveis, pois as frações burguesas quando operam no interior do Estado não se mostram ao público. Quando frações vinculadas à indústria se veem prejudicadas pela taxa cambial, atacam genericamente um ou outro dirigente da área econômica, mas não a autonomia do Banco Central. O fato é que no período Lula o particularismo do Estado tornou-se ainda mais difuso, pois os centros de poder do Estado, como as principais secretarias da área econômica e o Banco Central (as sedes e bastiões de poder a que se refere Nicos Poulantzas¹⁷, encontram-se blindados, protegidos por múltiplos dispositivos de poder. Estes bastiões de poder estão distantes das ações dos movimentos sociais que, em geral, direcionam suas reivindicações e críticas aos ministérios da área social. Somente quando a CUT se viu ameaçada pela contestação dos trabalhadores de base é que algumas críticas passaram a ser dirigidas à taxa de juros vigente no país, mas, como os empresários, não criticou a autonomia do Banco Central. A rigor, tais casamatas que blindam os bastiões de poder somente podem ser fraturadas seriamente em contextos de enorme agudização da luta de classes entre os dominados e os dominantes.

A irrupção das Jornadas de Junho de 2013 sugere que a forma de absorção dos conflitos sociais pelo Estado apresenta problemas. O presente estudo examina a hipótese de que a mediação das centrais sindicais, partidos com origem na esquerda e dos movimentos sociais aliados ao governo esta perdendo rapidamente a sua legitimidade, justamente por não servirem de canal efetivo para as reivindicações dos trabalhadores, inclusive no âmbito do Estado. A reforma agrária, por exemplo, está tão longe dos lugares de poder do

¹⁷ POULANTZAS, Nicos, “Estado, o poder e nós”, in: Etienne BALIBAR e Nicos, POULANTZAS, *O Estado em Discussão*, Lisboa, Edições 70, 1981.

Estado que poucos movimentos nutrem a esperança de ver a questão agrária resolvida apenas por ação do INCRA e do Movimento de Desenvolvimento Agrário/MDA. O mesmo pode ser dito sobre a educação, o transporte público, a moradia, os direitos trabalhistas. Daí o grito das Jornadas de Junho de 2013, as depredações dos ônibus e trens que não atendem às necessidades da população, as greves dos trabalhadores da educação expropriados de grande parte de suas funções intelectuais e aviltados por seus magros salários.

A interrupção do crescimento econômico a partir de 2009, o endividamento crescente das famílias, a estagnação da reforma agrária, a degradação das instituições públicas, o aumento dramático da rotatividade no trabalho e do desemprego, inclusive dos trabalhadores mais qualificados, a persistência dos baixos salários, a degradação da mobilidade urbana e o elevado custo dos serviços, entre os quais o transporte, a energia, a água etc., tudo isso produz demandas e anseios que os lugares do Estado abertos ao diálogo com os trabalhadores não podem responder. Por isso, cresce a sensação de que estas organizações não expressam os anseios dos trabalhadores. Foi perceptível a hostilidade de vários setores aos movimentos organizados nas Jornadas de Junho. Tal descolamento fragiliza os grupos provenientes do chamado campo progressista que ocupam postos no Estado, o que, em virtude do crescimento das lutas sociais no Brasil em 2012 a 2014, afeta o cimento ideológico do aparelho estatal.

Desse modo, a retomada dos protestos sociais multitudinários e massivos, sobre os quais o PT e a CUT pouco têm a dizer, evidencia que o Estado vive uma crise em seu discurso ideológico direcionado para *dentro* do Estado (sobre o serviço público, o compromisso social, o futuro da nação), provocando cisões e fissuras nos grupos que apoiam o governo e arestas, omissões e incongruências em seu discurso *para* as classes subalternas, visto o alargamento do desencontro entre a vida real dos trabalhadores e o discurso de mudança social prometida.

Um dos elementos deflagradores desse desencontro foi a realização dos megaeventos, pois as remoções forçadas e os gastos estratosféricos com os estádios ampliaram o contraste com a situação precária do serviço público de educação, saúde, segurança e com o desastre da mobilidade urbana dos moradores das áreas periféricas das megalópoles brasileiras. Embora a magnitude dos gastos com os juros da dívida, superiores a R\$ 900 bilhões em 2013, conforme os estudos do Jubileu Sul, seja muito maior do que os gastos gerais do Estado com a Copa da Fifa, estimados em 27,4 bilhões¹⁸, estes são visíveis a toda população, inclusive por seu direcionamento para os interesses privados, distintamente do complexo e opaco circuito do pagamento dos títulos da dívida.

Diante dessa situação de fraturas na ideologia dominante veiculada pelo Estado, a força relativa do governo está sendo aparentemente abalada. Por isso, o uso da coerção tem sido crescente. Muitos conflitos sociais, agrários sobretudo, saíram do âmbito do poder Executivo e tiveram seu desfecho alterado pela ação particularista do poder Judiciário, situação que se repete, cada vez mais, também nos conflitos trabalhistas. A judicialização dos conflitos e do protesto social, por reintegração de posse em áreas reconhecidamente “griladas”¹⁹, multas abusivas contra sindicatos em greve, interditos proibitórios contra militantes, demissões politicamente motivadas foram recursos crescentemente utilizados pelo Estado no decênio considerado.

¹⁸ ZAMPIER, Débora, “Gastos da Copa do Mundo sobem para R\$ 27,4 bilhões, segundo TCU, Agência Brasil”, in *Economia.ig*, 9 de junho de 2012. Disponível em: <http://economia.ig.com.br/empresas/infraestrutura/2012-06-09/gastos-da-copa-do-mundo-sobem-para-r-274-bilhoes-segundo-tcu.html>

¹⁹ Palavra que denota a falsificação de documentos para tornar-se proprietário por direito de terras devolutas ou de terceiros, em geral de camponeses que ocupam terras há muitos anos, por várias gerações. Em geral, o grileiro é um latifundiário e conta com a conivência de cartórios e de setores do judiciário.

2. Breve contextualização da atualidade do capitalismo dependente

O presente artigo pretende negar a pretensão de validade da afirmação de que os governos ‘progressistas’ – como os de Lula e Dilma – estão logrando uma saída pós-neoliberal²⁰, sustentando que tal afirmação carece de fundamentação empírica. O reexame dos indicadores econômicos e sociais, conforme já assinalado, será realizado a partir da elaboração de Florestan Fernandes, particularmente, por meio de seu conceito de capitalismo dependente.

Limites de escopo do presente artigo impossibilitam uma discussão sistemática sobre o conceito de capitalismo dependente²¹. Entretanto, como o estudo sustenta a atualidade do conceito para explicar a impropriedade da caracterização do referido período como ‘neodesenvolvimentista’, breves indicações são relevantes. O conceito foi elaborado por Florestan Fernandes em sua busca de explicação sobre os determinantes do golpe empresarial-militar de 1964. Entre 1966-1968 o sociólogo retomou a análise sobre o imperialismo e o desenvolvimento desigual do capitalismo, concluindo que, por ocasião do golpe, o Brasil já era um país plenamente capitalista e, mais precisamente, que desde meados dos anos 1950 o capitalismo monopolista era uma realidade em processo. Sua análise se diferencia da formulação do PCB expressa em sua Declaração de Março de 1958. Nesta declaração, a principal força da esquerda na época sustentava que a tarefa dos trabalhadores era empurrar, por meio de suas lutas, as frações burguesas progressistas, antilatifundiárias e potencialmente antiimperialistas, rumo a uma ‘revolução burguesa nacional-democrática’. O objetivo desta estratégia era a superação dos resquícios pré-capitalistas ou mesmo feudais supostamente existentes no país para, com isso, acumular forças para a nova etapa da luta pelo socialismo. Divergindo da estratégia do PCB e dos desenvolvimentistas em geral, Fernandes dedicou dois livros –alçados à condição de clássicos do

²⁰ SADER, Emir (org.), *10 anos de governos..., op. cit.*

²¹ O estudo de referência sobre a trajetória do conceito de capitalismo dependente foi realizado por CARDOSO, Míriam Limoeiro, *Ideologia do Desenvolvimento: Brasil: JK – JQ*, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1978.

pensamento social latino-americano— ‘Sociedade de classes e subdesenvolvimento’ (1968) e ‘Revolução burguesa no Brasil’ (2006) à compreensão da particularidade do capitalismo no Brasil e ao modo como a burguesia realizou uma revolução burguesa sem concessões ao povo.

A análise florestaniana coloca em questão a tese de que a revolução burguesa no Brasil seguiria os moldes “clássicos” europeus e dos EUA, envolvendo uma fase nacional-democrática. Conforme seus estudos, no Brasil a revolução burguesa foi *sui generis*: ocorreu em distintos momentos desde a instituição do trabalho livre, no final do Século XIX, com a chegada de imigrantes que difundiram o trabalho assalariado, no contexto de integração do capitalismo comercial e financeiro, e com a industrialização e internacionalização da economia no século XX. Entretanto, tal percurso “*não leva a uma crescente autonomização econômica, mas ao tipo mais complexo, sutil e completo de dependência econômica*”²². Existe aqui uma interessante proximidade de sua tese com a análise de Lênin sobre a *via prussiana*. Como é possível uma revolução burguesa se desenrolar, inclusive com industrialização, mas sem romper com o poder do atraso, com a coexistência de tempos desiguais e com a dependência *vis-à-vis* aos centros hegemônicos?

Fernandes²³ elaborou uma conceituação do capitalismo dependente muito precisa, situando o lugar do país periférico no capitalismo mundial (como uma totalidade e não como relação entre partes distintas), enfatizando os nexos entre os satélites e os centros hegemônicos – enfim, os motivos profundos da dependência: “(...) *A estrutura e o destino histórico de sociedades desse tipo se vinculam a um capitalismo dependente, elas encarnam uma situação específica, que só pode ser caracterizada através de uma economia de mercado capitalista duplamente polarizada, destituída de auto-suficiência e possuidora, no máximo, de uma autonomia limitada. (...) a semelhança com o modelo original começa e termina naquilo que se poderia designar como a organização formal do sistema econômico. Nos planos da estrutura,*

²² FERNANDES, Florestan, *Sociedade de classes e subdesenvolvimento*, Rio de Janeiro, Zahar, 1968, p.177.

²³ *Ibid.*

*funcionamento e diferenciação do sistema econômico, a dupla polarização do mercado suscita uma realidade histórica nova e inconfundível. Trata-se de uma economia de mercado capitalista constituída para operar, estrutural e dinamicamente: como uma entidade especializada, ao nível da integração do mercado capitalista mundial; como uma entidade subsidiária e dependente, ao nível das aplicações reprodutivas do excedente econômico das sociedades desenvolvidas; e como uma entidade tributária, ao nível do ciclo de apropriação capitalista internacional, no qual ela aparece como uma fonte de incrementação ou de multiplicação do excedente econômico das economias capitalistas hegemônicas*²⁴.

Uma dupla polarização é teorizada pelo sociólogo, destacando o protagonismo das frações burguesas locais (que em sua acepção não são vítimas involuntárias e indefesas do imperialismo) e, ao mesmo tempo, a sua integração ao mercado capitalista mundial de modo tributário, subordinado, dependente. Neste prisma, confundir o fortalecimento de frações burguesas locais (como as que ingressaram a partir dos anos 2000 no seleto grupo de bilionários da Forbes) como a afirmação de um projeto autônomo de desenvolvimento, atualmente definido como neodesenvolvimentista, somente pode ser compreendido como um estratagema ideológico.

A dimensão ideológica é ainda mais acentuada quando o debate sobre o desenvolvimento cepalino é lembrado. Como destaca Claudio Katz²⁵, a mundialização do capital no século XXI suprimiu os últimos resquícios do nacional-desenvolvimentismo dos anos 1950-1970 e o chamado ciclo de desenvolvimento dos anos 2000 foi erigido sobre os escombros provocados pelo neoliberalismo dos anos 1990: flexibilização trabalhista, lassidão da política ambiental, esvaziamento ou supressão do público, enfraquecimento do setor industrial de maior complexidade tecnológica e predominância crescente dos setores exportadores de *commodities*, hipertrofia do setor financeiro e

²⁴ *Ibid.*, p.36-37

²⁵ KATZ, Claudio, *Socialismo o neodesarrollismo*, in *La Haine*, 2006. Disponível em: http://www.lahaine.org/b2-img/katz_soc.pdf

internacionalização da economia. Em contraste com os pilares do nacional-desenvolvimentismo –industrialização substitutiva das importações, planejamento e intervenção estatal, e nacionalismo– a realidade dos anos 2000 é outra: processo de regressão da industrialização, inclusive, nos setores ditos modernos, convertidas em ‘maquilas’, e o nacionalismo foi varrido pelo incentivo à internacionalização da economia. Aqui, mais ‘neodesenvolvimento’ é, simultaneamente, maior aprofundamento do capitalismo dependente.

3. O que há de novo na economia brasileira 2003-2013?

3.1. O que seriam os avanços econômicos e sociais dos governos do PT?

O primeiro aspecto a destacar é a narrativa da inversão das prioridades, em favor do social. O Programa Bolsa Família é o grande destaque de seu governo. Destinado aos pobres – concebidos como aqueles que possuem renda *per capita* de até R\$ 140,00/mês (aproximadamente U\$ 60,00) – e aos miseráveis – os que possuem renda *per capita* de R\$ 70,00/mês (aproximadamente U\$ 30,00) – foi sendo ampliado de modo sistemático, a ponto de alcançar 13,8 milhões de famílias (2013), abrangendo indiretamente quase um quarto da população do país, a um custo anual de R\$ 18,5 bilhões em 2013. Com este programa, teria havido uma abrupta redução no número de pobres (39,3% em 2003 para 21,2% em 2011).

A taxa de desemprego aberto foi significativamente reduzida. Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)-Pesquisa Mensal de Emprego (PME), a taxa de desemprego aberto da População Economicamente Ativa (PEA) foi de 9,14% em 2002, passando para 7,65% em 2010, último ano do governo Lula, e para 5,5% em 2012. O PNAD-PME examina as seis maiores regiões metropolitanas, entrevistando 40 mil pessoas. No caso do PNAD Contínua, a base é muito maior, abrangendo 3,5 mil municípios e a amostra alcança 211 mil domicílios. Esta última pesquisa vem sendo realizada desde 2012 (7,9% de desocupados, 1º trimestre 2012), alcançando 8% no 1º

trimestre 2013 e 7,1% no 1º trimestre 2014. Pela metodologia do DIEESE, o desemprego segue muito alto, o que explicaria o temor de lutas salariais mais ásperas: 11,1% em 2012. A queda da taxa de desocupação, aferida pelo PNAD, é importante, mas é preciso lembrar que em 1995 a taxa de desemprego aberto foi de 6,1%. Outro índice importante é a redução do tempo médio de procura de emprego de 53,3 semanas em 2002 para 28,4 semanas em 2012, um intervalo ainda muito grande, mas significativamente inferior ao existente em 2002. O salário mínimo também conheceu relevante crescimento no período, aumentando 54% (2012) em relação a 2002²⁶.

As categorias com força para impor acordos coletivos conquistaram reajustes iguais ou acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 94,3% das negociações coletivas do período²⁷. Entre 2003-2011 os indicadores do IBGE (2012) assinalaram um crescimento real dos rendimentos do trabalho da ordem de 22%²⁸. Os indicadores da situação salarial, ainda que ocultem a brutal desigualdade dos trabalhadores no mercado de trabalho, consubstanciam uma situação que pode ser considerada favorável para algumas categorias profissionais, beneficiando a ação do *sindicalismo de resultados*, pois as direções podem reivindicar para si os ganhos econômicos do período. Mas a tênue recuperação salarial não altera o fundamento da condição capitalista dependente do país: dada a forma de aliança da burguesia local com as frações burguesas internacionais, a exploração do trabalho tem de ser muito grande. De fato, a remuneração média mensal nas seis regiões metropolitanas mais importantes do país (em que os salários são maiores e mais formalizados) ainda é de R\$ 1.578,00 (valor em 2011), inferior ao do salário mínimo necessário para a sobrevivência digna de um trabalhador, conforme o DIEESE (R\$ 2.194,00 para o mesmo ano).

²⁶ CHAHAD, José Paulo e POZZO, Rafaella Gutierre, “Mercado de Trabalho no Brasil na Primeira Década do Século XXI: Evolução, Mudanças e Perspectivas – Desemprego, Salários e Produtividade do Trabalho”, in *Temas de Pesquisa Aplicada*, FIPE, junho de 2013. Disponível em: http://www.fipe.org.br/publicacoes/downloads/bif/2013/6_11-29-chah-poz.pdf

²⁷ DIEESE, *Sistema de Acompanhamento de Greves*, Rio de Janeiro, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos, 2013.

²⁸ IBGE, *Indicadores IBGE. Principais indicadores, Destaques da evolução do mercado de trabalho nas regiões metropolitanas abrangidas pela pesquisa (2003-2011)*, Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2012.

Com o crescimento relativo da renda do trabalho, acrescido do crédito popular, muito mais agressivo nos anos 2000, o consumo de eletroeletrônicos e outros produtos industriais e de serviços se expandiram de modo jamais conhecido no país. Esses seriam fatores subjacentes que explicariam a redução da concentração de renda no país: o índice de GINI de Desigualdade de Renda *per Capita* passou de 0,59 em 2001 para 0,53 em 2012, situação que atestaria o caráter progressista do chamado neodesenvolvimentismo.

Não se trata de questionar a seriedade dos indicadores elencados nesta seção, mas de examinar alguns de seus fundamentos e de discutir as grandes tendências da economia brasileira recente, inclusive os períodos de maior agudização da crise estrutural, pois, sem isso, os indicadores acima referidos perdem sentido.

3.2 Sobre os indicadores socioeconômicos: alguns aportes teóricos

Em termos de método, é necessário examinar os indicadores econômicos e sociais da última década em perspectiva crítica ao arcabouço teórico das chamadas teorias da modernização (como em Walt Whitman Rostow²⁹) e, igualmente, da ideologia do desenvolvimento (examinadas criticamente por Míriam Limoeiro Cardoso³⁰), atualmente relexicalizada como neodesenvolvimentismo de cariz pós-neoliberal.

Como salientam Florestan Fernandes³¹ e Francisco de Oliveira³², no Brasil coexistem na mesma formação econômico-social o moderno e o arcaico e, entre eles, existe uma relação em que frequentemente o arcaico (as expropriações violentas, por exemplo) alimentam o lado supostamente

²⁹ ROSTOW, Walt Whitman, *Etapas do desenvolvimento econômico: um manifesto não-comunista*, Rio de Janeiro, Zahar, 1964.

³⁰ CARDOSO, Míriam Limoeiro, *Ideologia do Desenvolvimento...*, *op. cit.*

³¹ FERNANDES, Florestan, *Sociedade de classes...*, *op. cit.*; FERNANDES, Florestan, *A revolução burguesa no Brasil. Ensaio de interpretação sociológica*, São Paulo, Globo, 2006.

³² OLIVEIRA, Francisco de, *Crítica à razão dualista: o ornitorrinco*, São Paulo, Boitempo, 2003.

moderno da economia (o moderno agronegócio mundializado, baseado no uso intensivo de energia, transgênicos e cujos produtos são negociados nas bolsas de *commodities* mundiais).

Como o caso brasileiro é uma particularidade do capitalismo mundial, o estudo não considera o Estado-nação como unidade de análise bastante em si. O Brasil, tema do presente estudo, é parte do sistema capitalista, suas classes fundamentais não estão desvinculadas das relações de classes gerais do capitalismo, situação que adquire maior organicidade nos setores dominantes, por seus nexos econômicos e de formação da consciência de classe. Os trabalhadores brasileiros, embora afetados pela situação mundial do trabalho, possuem baixa vinculação internacionalista, embora o ambiente geral de lutas dos trabalhadores em diversos países esteja repercutindo na situação política da classe trabalhadora.

Em conformidade com as pontuações anteriores, os indicadores sociais apresentados ao longo do trabalho não são considerados “dados da realidade”, tal como para os positivistas e os neopositivistas, mas condensam as relações sociais contraditórias. O estudo não pode prescindir de tais indicadores, introduzidos no estudo para melhor pensar as relações de classes e a correlação de forças entre estas, mas sempre que possível apontando os seus limites. Assim, por exemplo, de pouco vale informar que o índice de GINI de Desigualdade Social de Distribuição de Renda *per Capita* melhorou, sugerindo a redução “real” da desigualdade, se não houver a indagação sobre como são apuradas as informações que estariam lastreando o referido índice. No caso, os dados obtidos pela Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD/IBGE) subestimam fortemente os rendimentos do capital (juros, aluguéis, lucros, justamente o diferencial dos que possuem controle sobre o capital!), mensurando apenas os rendimentos do trabalho, assim, as flutuações do índice não podem ser consideradas como expressões do movimento do real: este índice tem de ser examinado como termo polissêmico, objeto de disputas e conflitos. Ainda com mais razão, o estudo recusa a categorização dos

trabalhadores como “emergentes”, “nova classe média”, “classe C”, e outras expressões colocadas em circulação nos estudos apologéticos.

Deste modo, é temerário afirmar que houve redução real na desigualdade social no Brasil e que parte importante da classe trabalhadora foi deslocada para cima na pirâmide social. Com efeito, o índice de Desigualdade de Distribuição de Renda *per Capita* de 2012 é virtualmente o mesmo de 1980 (0,535)³³, ano da crise latente que explodiria dois anos mais tarde, na forma da Crise da Dívida (1982). Indicativo da concentração de renda, os 5 bilionários brasileiros que constam no topo da lista da Forbes (2013) conseguem juntar um patrimônio líquido em imóveis, plantas industriais, toda sorte de papéis financeiros e demais ativos, equivalente a 1,1 vez o total de toda a renda do trabalho apurada no país³⁴. Os indicadores secundarizam a forma atual de apropriação da mais-valia no capitalismo monopolista, sob hegemonia do capital financeiro. O mesmo pode ser dito sobre a evolução da escolarização: o fato de que um maior número de pessoas tenha nível superior não significa, *a priori*, que este contingente tenha, de fato, conhecimentos compatíveis com a formação superior, tendo em vista a desconcertante expansão de matrículas em instituições desprovidas de qualidade, de cursos de graduação a distância e mesmo de cursos superiores de curta duração.

Outro aspecto a considerar em relação à taxa de desemprego é que a redução da taxa em 2012 e 2013 deve-se, em grande parte, à redução relativa da PEA. Caso o perfil demográfico tivesse mantido a tendência histórica, no lugar de 5,5% o desemprego seria de 7,1%³⁵. Como já apontado anteriormente, é preciso considerar o tamanho da amostragem e, ainda, a consideração do

³³ . Indicadores de Distribuição de Renda coligidos por NERI, Marcelo; SOUZA, Pedro F. de e VAZ, Fábio, *Pobreza e Desigualdade: duas décadas de superação. Primeiras análises Ipea da PNAD* 2012, SAE/IPEA, 2012. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/comunicado/131001_comunicadoipea159_apresentacao.pdf

³⁴ PELIANO, José Carlos, “Deu na Forbes: o patrimônio dos brasileiros mais ricos”, in *Carta Maior*, 28 de janeiro de 2014. Disponível em: <http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Economia/Deu-na-Forbes-o-patrimonio-dos-brasileiros-mais-ricos/7/30116>

³⁵ IPEA, *Carta de conjuntura*, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, dezembro de 2013. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/cc21_mercadodetrabalho.pdf

desemprego por desalento que, embora declinante, produz uma enorme diferença, como se depreende da mensuração do PNAD-IBGE e do DIEESE, este último contemplando o desalento: enquanto o PNAD-PME apurou uma taxa de 5,5%, o DIEESE aferiu 11,1%.

Esta investigação considera necessário examinar as lutas e conflitos dos setores da classe trabalhadora inseridos no mercado formal de trabalho, isto é, os setores contratados como assalariados nos termos da legislação trabalhista e, ao mesmo tempo, as frações que podem ser conceituadas como parte do Exército Industrial de Reserva (EIR), em suas distintas modalidades (flutuante, latente, estagnado³⁶: a importância de considerar seriamente o EIR decorre do fato de que o capitalismo, em seu processo de reprodução ampliada, requer contínua expansão da força de trabalho disponível para que seja possível explorar o trabalho e extrair mais-valia. O EIR é forjado por expropriações que assumem novas formas no século XXI. Advém dessas considerações mais uma proposição teórica e de método: a opção por examinar o EIR é incompatível com o uso de categorias como “excluídos” e “pobres”.

Com efeito, em 2001, 57,3% da População em Idade Adulta (PIA) compunha o EIR. Em 2009, último ano do período expansivo da economia que foi interrompido pelo agravamento da crise agudizada em 2008, o EIR compunha 51,9% da PIA, um percentual muito alto, considerando que a metodologia oficial (IBGE) apontava uma taxa de desemprego próxima a 5%. Desagregando os percentuais por gênero, o quadro é ainda mais grave: mulheres – 2001: 70,9%, 2009: 64,8%; homens: 2001: 42,6%, 2009: 38,1%. Outra indicação importante que é possível extrair do estudo de Granato e Germer³⁷, é o elevado número de jovens que compõe o EIR nas faixas de 18-19 anos (2008: 71,7%). Neste prisma, ao longo dos anos 2000, é possível verificar que houve um assalariamento crescente da população trabalhadora,

³⁶ Granato e Germer, a partir de Marx, definem as formas distintas do EIR: EIR Flutuante = Desocupados; EIR Latente = Trabalhador doméstico + Trabalhador na produção para próprio consumo + Trabalhador na construção para o próprio uso + População não economicamente ativa, e EIR Estagnado = conta própria + Não remunerado. GRANATO NETO, N.N. GERMER, C.M. “A evolução recente do mercado de força de trabalho brasileiro sob a perspectiva do conceito de exército industrial de reserva”, in *Revista Ciências do Trabalho*, Vol.1, N°1, 2013.

³⁷ *Ibid.*

como é próprio do modo de produção capitalista, e um encolhimento dos espaços disponíveis para o EIR latente e estagnado e, logo, aumento relativo do EIR flutuante (desocupados) dentro do EIR total. O tamanho do EIR explica o motivo da proeminência das lutas empreendidas por sujeitos que o constitui, como Sem Teto, Sem Terra, favelados em luta contra a violência policial, jovens sem perspectivas de emprego regulado, vendedores ambulantes etc.

Em relação a redução do número de pobres, um dos argumentos mais reiterados pelo governo Federal e por seus intelectuais, possibilitada pelo programa Bolsa Família, se a questão for examinada mais de perto, permite concluir que dificilmente uma família que recebe R\$ 150,00 de bolsa (valor em 2013) pode ser conceituada como 'não pobre'. Mesmo com os rebaixados critérios da ONU, praticamente todas as pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família vivem "abaixo da linha da pobreza" (que é de US\$ 2, ou pouco mais de R\$ 4, por dia). A questão é preocupante, pois significa que a principal medida social dos governos Lula e Dilma, ao adotarem a tipificação do Banco Mundial, encolheu o horizonte de mudança social e, mais amplamente, de política social. O âmago da questão diz respeito a relação entre as classes e frações de classes, ao desenvolvimento das forças produtivas e às relações de produção correlacionadas. Este é o tema da subseção apresentada a seguir. A partir desta, o estudo busca compreender as lutas sociais contemplando, ao mesmo tempo, a correlação de forças *nas* e *entre* as classes e, para isso, é necessário inventariar os conflitos sociais, as greves, as mobilizações, buscando compreender as reivindicações, a quem estas foram dirigidas e o desenlace das mesmas (seção 4).

3.3. Caracterização geral do modelo econômico em curso

Em livro sobre o modelo econômico e social em curso, Gonçalves (2013) argumenta que o perfil da economia segue sendo, em linhas gerais, o

verificado nos anos 1990: “*liberalização, privatização, subordinação e vulnerabilidade externa estrutural e dominância do capital financeiro*”³⁸.

A liberalização – importação de bens e serviços, atuação de corporações estrangeiras, monetário-financeira – pode ser mensurada pelo ingresso de capital sem restrições relevantes, pelas tectônicas aquisições e fusões, pelas regras de patentes em conformidade com o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), pela débil ou nula regulação do ingresso de capital estrangeiro em domínios como a educação e a saúde, pelo desmonte do sistema previdenciário público, em benefício do regime de capitalização, pela criação de empresas públicas de direito privado para assumir parte das universidades, como os seus hospitais universitários, pela flexibilização ambiental (como no código florestal, no uso de agrotóxicos, inclusive proibidos em diversos países, transformando o Brasil no maior consumidor mundial desses produtos).

A privatização, antes criticada como expressão do período neoliberal, segue sob o manto das concessões por décadas e sem regulação estatal rigorosa, como na telefonia, portos, aeroportos, rodovias pedagiadas, energia, incluindo mega-hidrelétricas como Belo Monte, alcançando o ápice nos leilões de imensas áreas de petróleo do Pré-Sal e, também, pela indução direta do Estado em prol da expansão educação privada-mercantil, por meio do Fundo de financiamento estudantil (FIES) e do Programa Universidade para Todos (PROUNI) que concedem, respectivamente, empréstimos subsidiados aos consumidores da mercadoria educacional e quase que completa isenção tributária para o setor empresarial.

Resulta dessas orientações maior vulnerabilidade externa estrutural³⁹ que se caracteriza pela incapacidade de reagir às pressões, ataques especulativos e crises externas. A situação cambial, oscilando entre apreciação e depreciação da moeda local, e as variações da taxa de juros ao sabor da

³⁸ GONÇALVES, Reinaldo, *Desenvolvimento às avessas...*, *op. cit.*, p.57.

³⁹ *Ibíd.*, p. 58

conjuntura internacional são processos estruturais da economia brasileira. A seguir, algumas dessas tendências gerais do período são apontadas.

Em termos médios, a expansão econômica do governo Lula (variação real do Produto Interno Bruto/PIB de 4,0⁴⁰) foi superior a dos anos FHC (variação real do PIB de 2,3 entre 1995-2002). A taxa de inflação, ainda em patamar elevado, se manteve sem variações bruscas nos 8 anos de governo Lula (8,1%). Embora a crise estrutural transtorne a economia mundial de modo particularmente agudo desde 2008, suas repercussões no Brasil foram marcantes em 2009 e, depois de um ano aparentemente mais promissor (2010), voltou a se manifestar de modo severo a partir de 2011, repercutindo especialmente no governo Dilma Rousseff.

Após o ciclo expansivo, tornou-se evidente que a expansão do governo Lula não foi erigida em bases sólidas; afinal, a taxa de crescimento real no período 2011-2013 foi de reduzidos 2,0%, índice significativamente menor do que a taxa secular (1890-2014) da economia brasileira (4,4%). De fato, a taxa de crescimento foi menor do que o crescimento da economia mundial 3,5% ao ano (a.a) (taxa que reflete a crise econômica global) e inferior à metade da taxa média (simples) de crescimento do conjunto de 152 países em desenvolvimento (4,3%), situação que se repete na América Latina: a taxa média (simples) de crescimento do conjunto de 32 países da América Latina e do Caribe foi de 3,2% a.a. no mesmo período⁴¹. O presente estudo defende que é necessário olhar com atenção a redução do dinamismo econômico do período para compreender a raiz dos motivos que levaram às Jornadas de Junho de 2013.

Gonçalves⁴² sumariza as características do modelo econômico de Lula da Silva que se aprofundaram no governo Dilma Rousseff: “O MLP [*modelo*

⁴⁰ *Ibid.*, p. 75-76.

⁴¹ GONÇALVES, Reinaldo, *Governo Dilma e o desempenho da economia brasileira: Mediocridade esférica*, CORECON, 27 de fevereiro de 2014. Disponível em: http://www.corecon-rj.org.br/pdf/Governo_Dilma_e_o_PIB_Mediocridade_esferica_27_02_2014_rev.pdf

⁴² GONÇALVES, Reinaldo, *Desenvolvimento às avessas...*, *op. cit.*

liberal periférico] envolve pacto dos grupos dirigentes com os setores dominantes (empreiteiras, bancos, agronegócio e mineradoras) e cuja consequência é o aumento da concentração de riqueza e poder. O padrão de acumulação envolve, além de baixas taxas de investimento, o deslocamento da fronteira de produção na direção do setor primário-exportador. E, por fim, o padrão de distribuição limita-se à redistribuição incipiente da renda entre os distintos grupos da classe trabalhadora de tal forma que os interesses do grande capital são preservados, ou seja, não há mudanças na estrutura primária de distribuição de riqueza e renda (rendimentos da classe trabalhadora versus renda do capital)”.

Um dos pilares do padrão de acumulação no Brasil vigente é o fortalecimento das ‘campeãs brasileiras’, a rigor, multinacionais ‘brasileiras’ (empreiteiras, mineradoras e outras *commodities*) que proliferaram na América Latina e na África, ancoradas em verbas subsidiadas pelo Estado via o BNDES. Com efeito: É expressivo o número de empresas nacionais que atuam no exterior que possuem a BNDESPar como acionista; compreendem setores como agropecuária, energia elétrica, telecomunicações, mineração, bancos, papel, petroquímica, siderurgia, transportes e aviação. No exterior o BNDES tem dado suporte às aquisições das empresas brasileiras. No Uruguai, a Marfig e a JBS Friboi controlam cerca de 70% da exportação da carne uruguaia. Na Argentina, a Petrobras adquiriu a Pecom e se tornou o segundo grupo econômico do país no setor de petróleo e gás; a Ambev comprou a Quilmes; a Camargo Correa comprou a maior fábrica de cimento do país, a Loma Negra; e a JBS Friboi adquiriu as unidades da Swift na Argentina, tornando-se o maior frigorífico do mundo. No Peru, a Votorantim (hoje Fibria) comprou a maior mineradora do país, MinCo, que tem 66% das jazidas nacionais; a Gerdau comprou a SiderPeru, maior siderúrgica peruana; e a Petrobras/Pecom é a segunda maior produtora de petróleo no país. Afora, o banco criou uma subsidiária em Montevideu para tratar da América do Sul. (...) Dos 20 maiores

projetos de novas plantas das empresas brasileiras, 14 se concentram na América do Sul e um na América Central⁴³.

Na perspectiva da ideologia neodesenvolvimentista os aportes do BNDES e do fundo público para as corporações que atuam nas *commodities*, telecomunicações, as empreiteiras são uma opção pós-neoliberal, pois estariam fortalecendo o bom capitalismo (produtivo, desenvolvimentista), em detrimento do capitalismo ruim, especulativo, dirigido pelas finanças e referenciado no neoliberalismo. As bases de tal ideologia, contudo, são frágeis. Os bancos seguem como o setor líder em lucros, situação possibilitada pela cobrança abusiva de taxas de serviços, pelo manejo da dívida pública e pelos astronômicos juros cobrados aos tomadores de empréstimos, inclusive para os crediários populares, ainda os maiores do mundo. E o suporte público às corporações não está criando condições para que o parque produtivo esteja estruturado com base em cadeias produtivas complexas, que incorporam inteligência, força de trabalho qualificada, pesquisa e desenvolvimento, elevando a qualidade geral dos empregos e a relevância dos setores produtivos para o bem-estar dos trabalhadores.

Ademais, a supremacia dos bancos e dos fundos de investimentos, possibilitou a ida dos mesmos às compras. O objetivo, com as aquisições e fusões, é valorizar seus títulos, reestruturando empresas para, adiante, vendê-las com enorme margem de lucro ou, então, para monopolizar determinados setores econômicos, igualmente em nome de lucros fabulosos. A lógica é inteiramente financeira. A transferência de ativos produtivos para os bancos e fundos realimenta o circuito rentista, promovendo desemprego, esvaziamento da socialização da tecnologia e precarização generalizada dos postos de trabalho. Quando bancos e fundos saem às compras é possível antever graves problemas a médio prazo: a concentração das empresas em monopólios

⁴³ BUGIATO, Caio Martins, "A política de financiamento do BNDES à burguesia brasileira", in *Anais do V Simpósio Internacional Lutas Sociais na América Latina "Revoluções nas Américas: passado, presente e futuro"*, 10 a 13 de setembro de 2013.

promove a erosão dos fundamentos econômicos e produtivos do país, realimentando o circuito de aquisições e fusões.

Muitas dessas aquisições predatórias são subsidiadas pelos empréstimos do BNDES e por generosas isenções fiscais. Os governos Lula e Dilma correspondem a um período de desnacionalização acelerada da economia. Conforme relatório da Organização das Nações Unidas, em 2012 o país se tornou o quarto maior destino de investimentos no mundo (Estados Unidos, China e Hong Kong são os três maiores): recebeu US\$ 65,3 bilhões em 2012 e US\$ 66 bilhões em 2011. De janeiro de 2004 a novembro de 2012 entraram no Brasil US\$ 332,686 bilhões em “investimento direto estrangeiro”. Os valores são sumamente significativos, considerando que houve uma redução de 18% nos níveis globais de investimentos que alcançaram apenas US\$ 1,3 trilhão em 2012. Em 2009, o pior ano para a economia mundial desde 1929, os investimentos haviam somado apenas US\$ 1,2 trilhão⁴⁴. Resulta desse enorme deslocamento de capital, um extraordinário processo de aquisições de empresas nacionais, em especial por fundos e corporações dos Estados Unidos da América.

Conforme a empresa de consultoria KPMG, as desnacionalizações de empresas brasileiras atingiram um novo recorde em 2012 (296 empresas nacionais), suplantando os recordes de 2011 (208) e de 2010 (175). No segundo ano do primeiro governo Lula (2004), foram vendidas 69 empresas; em 2005, 89; em 2006, 115; em 2007, 143; em 2008, 110; em 2009, 91 empresas. Em síntese, desde 2004 foram desnacionalizadas 1.296 empresas. Como consequência dessa enorme desnacionalização da economia, as remessas totais de lucros para fora do país passaram de US\$ 25,198 bilhões (2004) para US\$ 85,271 bilhões (2011), um aumento de 238,4%. De 2004 a 2011, as importações aumentaram, em valor, 260%: de US\$ 62,835 bilhões para US\$ 226,233 bilhões. As filiais de multinacionais são, sobretudo,

44 CHADE, Jamil, “Brasil se transforma no 4º maior destino de investimentos do mundo”, in *Estado*, 23 de janeiro DE 2013. Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/economia+geral,brasil-se-transforma-no-4-maior-destino-de-investimentos-do-mundo-,141650.0.htm>

empresas importadoras de bens intermediários –ou seja, de componentes para a montagem de produtos finais– e, cada vez mais, passam a importar o próprio produto final, transformando a empresa desnacionalizada em mero balcão de vendas⁴⁵.

Com a supremacia dos interesses das finanças no governo, os bancos concentraram ainda mais patrimônio e capital: no início de 2000 o valor dos ativos totais dos 50 maiores bancos era igual aos ativos totais das 500 maiores empresas; em 2010, os seus ativos eram 74% mais elevados do que os ativos das 500 maiores empresas⁴⁶.

Resulta dessa forma específica de atuação das frações burguesas locais, articuladas ao sistema financeiro internacionalizado, uma complexa, dinâmica e rica imbricação entre frações locais e hegemônicas, conformando uma realidade em que o imperialismo encontra-se ainda mais entranhado nas mediações entre os países capitalistas dependentes e os centros hegemônicos. A presença das multinacionais ‘brasileiras’ possibilita uma nova etapa na ofensiva sobre novos territórios expropriáveis na América Latina e África. O fato de serem corporações sediadas no Brasil e sem um histórico de violência nesses países, concorre para servir de pelotão avançado dos interesses do imperialismo em países marcados pela história de violências da dominação estrangeira. Ao mesmo tempo, essa expansão extranacional fortaleceu as frações locais e, em menor escala, a posição geopolítica do Brasil pela diplomacia do domínio econômico. Não surpreende, portanto, que os setores agropecuário (2002 -2010: + 28,6%) e mineral (2002-2010: + 53%) conheceram enorme expansão no período Lula (*Idem*, p.91). Os bancos, as empreiteiras, as corporações de TV, os jornais etc., e os exportadores de *commodities* passam a prover novos membros da lista dos bilionários da *Forbes*: as 15 famílias mais

45 LOPES, Carlos, “Em 2012, 296 empresas nacionais passaram para controle estrangeiro”, in *Informa CUT*, São Paulo, 23 de janeiro de 2013. Disponível em <http://www.cut.org.br/acontece/22892/em-2012-296-empresas-nacionais-passaram-para-controle-estrangeiro>

46 GONÇALVES, Reinaldo, *Desenvolvimento às avessas...*, op. cit., p.149.

ricas do país possuem o equivalente a 5% do PIB do país⁴⁷. Não casualmente, o país ocupa lugar de destaque no seletto grupo dos mais desiguais do planeta⁴⁸.

As concessões e permissões de exploração de serviços públicos (Lei 8.987/1995) foram ampliadas a partir da aprovação da lei que dispõe sobre as parcerias público-privadas (PPP) (Lei 11.079/2004). Os governos Lula da Silva e Dilma Rousseff agregaram novas transferências ao setor privado, após a onda de privatizações do governo Cardoso possibilitada pelo Programa Nacional de Desestatização (PND) de 1990 (Lei 8.031/1990). Com efeito, após a Lei das PPP, as parcerias e concessões se tornaram o *modus operandi* do Estado em diversos domínios, como Bancos (do estado do Maranhão e do Ceará), rodovias (BR 116, BR 101, BR 050, Régis Bittencourt, Fernão Dias, Transbrasiliana), Ferrovia do Aço, Aeroportos (Galeão, Confins, Cumbica, Viracopos, Juscelino Kubistchek), petróleo (concessão das áreas de prospecção do Pré-Sal, como a de Libra), bem como a opção pelas PPP nas áreas de energia – como Belo Monte, um projeto de R\$ 30 bilhões subsidiado pelo BNDES –, educação, saúde etc. Ao longo da década de 2000 não houve redução das privatizações, ao contrário, o rol de atividades que, outrora, eram públicas e foram concessionadas para o controle privado foi ampliado. Programas de enorme alcance social, como o Programa Universidade para Todos, são exemplos importantes dessas mudanças. O efeito dessas parcerias é a concentração e centralização das organizações educacionais, especialmente as controladas pelos fundos de investimento e pelos bancos, a exemplo da fusão entre o grupo Kroton (fundo Advent) e Anhanguera (Fundo do Banco Pátria) formando a maior corporação educacional do mundo, com mais de 1,1 milhão de estudantes.

⁴⁷ ESTADÃO, “Quinze famílias mais ricas do Brasil são donas de 5% do PIB”, in *Estadão*, 15 de maio de 2014. Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,quinze-familias-mais-ricas-do-brasil-sao-donas-de-5-do-pib,184946e>

⁴⁸ THE FOREIGN POLICY GROUP, “Fragile States: Rankings and Map”, in *The Foreign Policy Group*, s/f. Disponível em: http://www.foreignpolicy.com/fragile-states-2014?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=Flashpoints&utm_campaign=Flashpoints_June25#highlights

Em relação ao trabalho, existe um quadro oculto de enorme precarização geral. O EIR, como assinalado, é superior a 50% da População em Idade Adulta. A taxa de rotatividade do trabalho aumentou no período. Em 2003, correspondia a elevados 43,6% e, em 2010, a 52,4%. Embora parte das demissões possa ter sido motivada pela busca de melhores empregos (o trabalhador é que se demite), mais de 70% dos trabalhadores foram sumariamente demitidos, aumentando o temor dos remanescentes da perda de seus postos de trabalho, evitando lutas pela elevação salarial. Outro fator a ser considerado é o contingente de trabalhadores do setor privado terceirizado e precário: 51,5% (2011) da força de trabalho se encontrava nesta situação de vulnerabilidade, índice melhor do que no início da década de 2000 (em 2003 60,3% eram precários; cf. indicadores do IBGE, 2012).

Embora tivessem ocorrido melhorias no padrão salarial, este segue aviltado, não apenas na área de serviços, setor que concentra os piores empregos, mas também em atividades que propiciam os melhores empregos, como na indústria automobilística. Nesta, embora os salários-médios sejam acima da média da maior parte dos trabalhadores, estes foram submetidos a congelamento salarial por uma década. A quase totalidade dos novos empregos formais criados no país é de baixa qualificação.

De acordo com os dados do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged), do Ministério do Trabalho, 82% das novas vagas criadas em maio eram referentes à faixa que compreendia uma remuneração de zero a dois salários mínimos. Quando se estende essa análise à faixa salarial seguinte (dois a quatro salários mínimos), esse percentual sobe para 95%⁴⁹.

A síntese de Pochmann, ao destacar que os novos empregos são, basicamente, na área de serviços, é importante: dos 22 milhões de empregos

⁴⁹ IPEA, “Quase metade tem carteira assinada”, in *INESC*, 2 de julho de 2008. Disponível em: <http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-gerais/2008/julho/quase-metade-tem-carteira-assinada>

que o Brasil gerou, 95% são relacionados à faixa de até dois salários mínimos mensais”⁵⁰.

A propalada conversão dos trabalhadores pauperizados em uma nova classe média, dotada de poder de compra, com acesso ao crédito, podendo frequentar *shoppings* e fazer viagens aéreas, expressa um processo que se deve menos às melhorias das condições de trabalho e de salário (nos marcos de cadeias produtivas industriais), e mais à crise de realização das mercadorias e dos serviços e ao processo de incorporação dessas frações da classe trabalhadora no mercado de crédito popular. A sustentação de que a variável que explica a ascensão social é o consumo é comprometida pelo fato de que este somente está sendo possível em virtude do contexto de crise econômica estrutural (as corporações precisam colocar em circulação mercadorias encalhadas) e, principalmente, do fato de que os bancos e financeiras estão buscando se apropriar de parte relevante da renda do trabalho, extorquindo, por meio da taxa de juros mais alta do mundo, um novo mercado: os trabalhadores pauperizados.

O governo Lula da Silva possibilitou esse mercado ao garantir aos bancos a primazia de pagamento do crédito tomado pelo trabalhador (seja nas lojas, seja nos bancos) por meio do “empréstimo consignado”. Com este, o banco tem acesso direto ao salário do trabalhador, desconta a sua fatura, e somente depois o trabalhador pode fazer uso do que sobrou de seu salário. O aumento do poder aquisitivo não decorre de uma melhor inserção no mundo do trabalho, regida por contratos e carreiras que formalizam as relações de trabalho. A crença na nova classe C ignora, por completo, que o trabalho real dessa parcela da classe trabalhadora é constituído, em sua quase totalidade, por ocupações flexíveis, instáveis e desregulamentadas e de escassa mediação simbólica.

⁵⁰ INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS, “‘Não estamos caminhando para uma sociedade homogênea, medianizada, mas para uma sociedade mais polarizada’. Entrevista especial com Márcio Pochmann”, in *Instituto Humanitas Unisinos*, 27 de junho de 2014. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/nao-estamos-caminhando-para-uma-sociedade-homogenea-medianizada-mas-para-uma-sociedade-mais-polarizada-entrevista-especial-com-marcio-pochmann/532719-nao-estamos-caminhando-para-uma-sociedade-homogenea-medi#>

Conforme será possível examinar na seção a seguir, esse padrão de acumulação dito neodesenvolvimentista ou pós-neoliberal está assentado em permanentes expropriações, incluindo territórios camponeses, indígenas e de áreas populares nas grandes cidades, em especial aquelas situadas em áreas de interesse da especulação imobiliária, como em muitas obras da Copa Mundial da FIFA, 2014, e nas chamadas revitalizações de centros históricos que sempre envolvem deslocamentos forçados de um grande número de trabalhadores ativos e também os que compõem o EIR. Isso irá se refletir na mobilização de parte desses trabalhadores do EIR que, diante das ameaças a sua sobrevivência, se lançaram em muitas frentes de luta no período.

4. Lutas e mobilizações

Nesta subseção o estudo apresenta os grandes números dos conflitos sociais, indica tendências das lutas e elabora aportes para pensar a correlação de forças. Inicialmente discute a situação dos trabalhadores assalariados dos setores público e privado, a seguir, as ocupações de terras, abrangendo as lutas pela reforma agrária e contra as expropriações no campo e, ao final, os conflitos envolvendo os povos indígenas em luta contra as grandes hidrelétricas na Região Norte. Os conflitos protagonizados pelo EIR podem ser vistos na seção 5.

4.1. Greves de trabalhadores públicos e privados

O número de greves por ano é um indicador parcial da situação das lutas da classe trabalhadora. É um importante termômetro da disposição de luta das bases, da capacidade convocatória de suas organizações e das esperanças compartilhadas quanto a possibilidade de mudar a correlação de forças pela luta. Possibilita examinar a dimensão do conflito (número de horas

paradas), a sua incidência nos setores público e privado e as suas motivações defensivas ou de ampliação de conquistas.

Trabalhando com informações da Tabela 1, é possível caracterizar um período de crescimento das lutas nos anos 1980. Nesta década os trabalhadores realizaram lutas contra a ditadura como as campanhas pelas Diretas, Já!, pela Anistia, pela constituinte soberana e exclusiva que possibilitaram considerável acúmulo de forças. No processo de constituição do “novo sindicalismo”, oposições sindicais disputaram e venceram muitas eleições contra sindicalistas pelegos e, com isso, a CUT foi sendo forjada como uma poderosa ferramenta organizativa do sindicalismo classista. Foi neste contexto que o PT foi criado, objetivando uma organização política superior dos trabalhadores. Desde então, PT e CUT passaram a compartilhar uma história entrelaçada. Em poucos anos, as greves saltaram de 250 (1983), correspondentes a 7,4 mil horas paradas, para o ápice, em 1989, ano em que ocorreram perto de 2 mil greves com impressionantes 127 mil horas paradas, processo de lutas que se estende até 1990 (1990: 1773 greves).

A derrota de Lula da Silva nas eleições de 1989, as mudanças de larga proporção nos países ditos de ‘socialismo real’ e a impetuosidade da ideologia neoliberal que já alcançara a social democracia, concorreram para a inflexão das mobilizações dos trabalhadores, já verificável em 1991 quando foram registradas 1041 greves, um montante expressivo, mas 40% menor do que no ano anterior. A grande queda se deu no ano seguinte, 1992, com 552 greves, ano em que o país encontrava-se em forte recessão e em que os sindicatos e movimentos priorizaram a exitosa luta pelo *impeachment* do então presidente Fernando Collor de Mello. As lutas voltaram a recrudescer no período 1994-1996 quando ocorreram em média 1.160 greves/ano, possivelmente motivadas pela forma de conversão dos salários para o Real (muitos segmentos tiveram perdas salariais) e, pela estabilidade de preços, por haver uma maior margem de negociação de reposições.

O Plano Real foi sustentado pela Banca Internacional, lastreado pela renegociação da dívida (Plano Brady, 1994) e com amplo apoio dos meios de comunicação. A momentânea estabilidade dos preços possibilitou a eleição de FHC em 1994 que, fortalecido pelo êxito eleitoral, enfrentou, no período 1995-1997, os servidores públicos (no contexto da reforma neoliberal do Estado) e os trabalhadores das estatais (parte deles em luta contra as privatizações, como os da Companhia Siderúrgica Nacional, em que um trabalhador foi assassinado pelas forças armadas e, também, a luta dos petroleiros que FHC quis que fosse um caso exemplar, como o dos mineiros no período Thatcher) que responderam com greves importantes, como a dos docentes das universidades federais em 1998. A média anual de greves dos três últimos anos da década (1997-1999) foi de 556 greves, perto da metade do período imediatamente anterior, correspondendo a 20,4 mil horas paradas (cerca de um terço em relação ao número de horas de 1996 e 16% em comparação com 1989).

Após vencer Lula da Silva no primeiro turno em 1998, as greves que se sucederam estiveram concentradas no serviço público. O número de greves despencou para menos da metade em relação ao seu primeiro mandato, conforme pode ser visto na Tabela 1. Apesar do agravamento da crise econômica internacional a partir de 1999, notadamente expressa na crise asiática, e no Brasil, na crise do Plano Real evidenciada pela desvalorização cambial expressiva, Cardoso seguiu mantendo um significativo apoio de diversos setores do capital e, também, entre parte dos trabalhadores organizados, como os sindicatos filiados à Força Sindical (a segunda maior Central brasileira de orientação colaboracionista, dita 'de resultados'). Chama a atenção o fato de que em seu segundo mandato os trabalhadores conheceram enorme arrocho salarial, aumento do desemprego e perda acentuada do poder de compra, mas, ainda assim, a redução das greves seguiu como tendência marcante do período. Frente aos intensos ataques contra os direitos sociais e ao arrocho salarial, é preciso indagar sobre a proporção e o significado das mudanças no sindicalismo.

Tabela 1: Número anual de greves, anos selecionados (1983-2013)

Ano	Nº de greves	Total anual de horas paradas (em mil)
1983	250	7,4
1986	1014	44,4
1989	1962	127,3
1992	556	37,9
1995	1056	48,1
1998	531	20,3
2001	416	20,8
2002	208	16,5
2003	340	15,8
2004	307	23,8
2005	299	19,7
2006	320	24,7
2007	316	30,6
2008	411	24,7
2009	518	34,7
2010	446	44,9
2011	664	63,3
2012	873	86,8
2013	Não disponível	Não disponível
Média 1º FHC/Ano	865	37,5
Média 2º FHC/Ano	414	20,3
Média 1º Lula/Ano	315	21,0
Média 2º Lula/Ano	423	33,7
Dilma (2011 e 2012)	768	75,0

Fonte: DIEESE- Sistema de Acompanhamento de Greves (2013)

O historiador Marcelo Badaró de Mattos⁵¹, estudioso das organizações dos trabalhadores, faz uma síntese densa e abrangente da questão.

Para explicar tal declínio das mobilizações organizadas dos trabalhadores, podemos elencar diversos fatores: o desemprego e a precarização das relações de trabalho decorrentes do processo de reestruturação produtiva que se acelera a partir da década de 1990; o progressivo apassivamento da maioria da direção sindical mais combativa (reunida em torno da Central Única dos Trabalhadores, a CUT), que ao longo dos anos 1990 aderiu progressivamente a uma lógica conciliatória e amoldou-se à ordem do capital e à estrutura sindical oficial; e, já nos anos 2000, a incorporação de dirigentes sindicais aos governos capitaneados pelo Partido dos Trabalhadores, acompanhada da transformação da CUT em braço sindical dos governos petistas e de sua definitiva incorporação à estrutura sindical oficial.

É possível observar um aparente paradoxo: nos anos de estabilidade econômica (1995-1997) o número de greves foi o dobro do verificado nos anos de aprofundamento da crise (1999-2002). O desemprego certamente foi uma variável importante da questão (1998, próximo a 7%, conforme o IBGE), mas é preciso lembrar que tal patamar não foi muito diferente da taxa de desemprego do primeiro mandato de FHC (desemprego aberto entre 5 e 6%, embora mais alto na indústria). Outras dimensões do problema precisam ser agregadas para compreender a redução das greves no final dos anos 1990.

Neste ponto, é recomendável retomar brevemente a história da constituição do 'Novo Sindicalismo' nos anos 1980 (de onde surgiu a CUT). A luta dos trabalhadores nos sindicatos e na oposição sindical combateu a estrutura sindical oficial ancorada nos recursos mediados pelo Estado (imposto sindical) e hierarquizada por meio de uma estrutura organizativa verticalizada

⁵¹ MATTOS, Marcelo Badaró, "Greves no Brasil: o despertar de um novo ciclo de lutas?", in *Correio da Cidadania*, 23 de maio de 2014, Disponível em: http://www.correiodacidade.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=9641&Itemid=79

(sindicatos – federações – confederações), objetivando assegurar a democracia desde os locais de trabalho. A partir de meados dos anos 1990, a Central buscou se ajustar à estrutura vigente e, mais do que isso, passou a reivindicar verbas públicas por meio do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) que, no final da década, correspondiam a cerca de 40% de seus recursos. A força política majoritária (Articulação Sindical) incorporou a ideologia de que o desemprego dos trabalhadores metalúrgicos, bancários etc. advinha da falta de qualificação, girando os sindicatos para cursos de qualificação apologéticos à reestruturação produtiva, quando o problema do desemprego estava centrado na forma de abertura da economia brasileira nos anos 1990⁵². Ao considerar as privatizações um fato consumado, os gestores dos fundos de pensão vinculados aos sindicatos da CUT passaram a investir na compra de empresas estatais nos leilões das privatizações que, desse modo, foram abraçadas pelas organizações sindicais. Essas mudanças tectônicas no sindicalismo brasileiro se deram no contexto de uma maior aproximação da CUT com a cultura sindical estadunidense, via *American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations* (AFL-CIO).

Com o *transformismo*, as diferenças entre a CUT e sua oponente, a Força Sindical (FS), foram sendo apagadas. Nos anos 1980, a CUT sustentava um sindicalismo “classista, autônomo e combativo” e a FS um “sindicalismo propositivo” e de colaboração de classes. Ambas as centrais passaram a convergir na defesa de um modelo de “sindicato-cidadão”, em que o sindicato abandona suas referências classistas, resultando em pautas cada vez menos voltadas para o conjunto da classe trabalhadora, abandonando as lutas mais universais, como as greves gerais, a educação pública (em favor de cursos de formação profissional para suas bases), a reforma agrária etc. As mudanças na sistemática de escolha de delegados encolheram a participação da base nos seus Congressos, extinguiram os espaços das oposições sindicais e

⁵² Mudanças essas que levariam a um novo modelo de ação sindical, que ficou conhecido como sindicalismo propositivo. O sindicalismo propositivo caracteriza-se pelo predomínio da ação no plano institucional, da negociação dentro da ordem, por concessões ao governo e ao capital. Nesse sentido, é bastante próximo do sindicalismo de resultados representado pela Força Sindical, já que este se caracteriza por uma prática na qual o confronto é o último recurso, pela defesa da conciliação com os governos e com o patronato, e por uma atuação pragmática, voltada para a defesa dos interesses econômicos imediatos dos trabalhadores.

aumentaram o peso das confederações dirigidas por sindicalistas que se distanciaram do mundo do trabalho concreto. Assim, gradativamente, as forças que seguiam sustentando um sindicalismo classista, autônomo e combativo foram perdendo a possibilidade de interferir na direção da Central. Embora a direção da Central seja proporcional, na prática, alijava as correntes de esquerda das decisões mais importantes. A proposta de negociação da reforma da previdência em curso no governo Cardoso por Vicente Paulo da Silva (Vicentinho), presidente da CUT entre 1994 e 2000, foi um marco político importante no giro anticlassista da Central: o apoio a contrarreforma aconteceu justo quando as correntes da esquerda estavam propondo armar a CUT para a luta.

Foi esse sindicalismo “cidadão” e, cada vez mais apensado a programas e financiamentos do Estado, que cedeu muitos de seus quadros para compor o novo governo de Lula da Silva. Entre os postos ocupados pelos dirigentes sindicais, cabe citar, por relevância, o Ministério do Trabalho e Emprego, o setor relacionado aos servidores públicos no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, postos no Conselho do Fundo de Amparo ao Trabalhador e, sobretudo, no conselho de empresas públicas e privadas em que os fundos de pensão dos sindicatos investiram seus recursos, assumindo a função de gestores dos interesses do capital.

Na condição de presidente, Lula da Silva passou a interferir sistematicamente na escolha do novo presidente da CUT. A primeira vez, na eleição de Luís Marinho (8º Congresso, 2003) em detrimento de João Felício, então presidente da Central, a despeito do fato de que ambos atuavam na mesma corrente pró-governo (Articulação Sindical). Quando Marinho foi nomeado ministro do Trabalho em 2005, Felício, então vice-presidente, assumiu a presidência da Central e pleiteou que a Articulação o apoiasse em um novo mandato. Entretanto, no 9º Congresso (2006), na convenção da Articulação (que, na prática, define a escolha do presidente da Central), as forças mais estritamente ligadas ao Presidente da República indicaram um candidato sem expressão própria (o eletricitário Arthur Henrique) e, novamente,

descartaram João Felício que foi rebaixado a um cargo sem expressão na direção política da Central. Lula da Silva vetou a reeleição de Felício não porque o representante dos trabalhadores da educação estivesse comprometido com uma posição de independência da Central em relação ao governo, mas justamente por sua vinculação com o serviço público⁵³. Na avaliação do governo, a sua vinculação com o setor público poderia criar arestas à continuidade da reforma do Estado, especialmente a reforma da previdência e a lei das parcerias público-privadas. Com o controle governamental da CUT, as mudanças que vinham sendo forçadas desde os anos 1990 ganham nova dimensão. Os últimos resquícios de independência de classe foram apagados.

Todas essas mudanças no sindicalismo repercutiram na capacidade de luta dos trabalhadores no primeiro mandato de Lula da Silva. Como é possível verificar na Tabela 1, aconteceu uma nova queda do número médio de greves (315 por ano) em relação ao segundo mandato FHC. É importante lembrar que o seu primeiro mandato foi caracterizado por maior desemprego (cerca de 9%, desemprego aberto-PNAD) e por modestas taxas de crescimento da economia (média do crescimento do PIB foi de 3,5%). Apesar das dificuldades econômicas, as greves do setor privado foram reduzidas (37%). A maior parte das greves (63%) foi protagonizada pelos trabalhadores do serviço público em luta contra a reforma da previdência do serviço público federal, extinguindo o que caracterizava o regime próprio (aposentadoria integral) em favor do regime de capitalização e, ainda, ampliando o tempo necessário para as aposentadorias em até 5 anos.

O segundo mandato de Lula da Silva (2007-2010) foi um período de maior estabilidade econômica até 2008. Neste ano, pela primeira vez na década, a maior parte das greves se deu no setor privado (54%) predominando a indústria. O total de greves foi 34% acima do verificado em seu primeiro mandato, mas se manteve perto da média do segundo mandato de FHC. Foi

⁵³ APEOESP – Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, um dos maiores sindicatos da América Latina.

um período de muitas lutas do setor público (46% das greves, 2008; 60% em 2010), especialmente frequentes nos serviços públicos estaduais.

Em seu segundo mandato as greves tiveram maior intensidade do que as verificada no primeiro mandato: o total de horas paradas foi 60% maior do que a de seu mandato anterior (33,7 mil horas/ 21 mil horas paradas) envolvendo, em 2008, mais de 2 milhões de trabalhadores em greve. Ainda assim, o número total de greves no octanato de Lula da Silva (2956) corresponderam a apenas 57% do total de greves nos oito anos de Cardoso (5116)⁵⁴. Entretanto, todos os levantamentos confirmam que prevaleceram largamente as pautas econômico-corporativas, tanto no setor privado, como no público, embora, neste último caso, algumas reivindicações assumiram novos contornos, abrangendo concepção de carreira e de serviço público. Poucas greves e mobilizações reuniram simultaneamente servidores e trabalhadores privados e trabalhadores assalariados e movimentos sociais, não sendo verificada nenhuma greve geral.

De fato, aconteceram no governo Dilma Rousseff, em 2011 e, de modo acentuado, em 2012, 2013 e 2014, as primeiras inflexões na tendência de estabilização das lutas sindicais verificada no período 2003-2010 com predomínio de greves no setor público e de lutas econômico-corporativas e com o comando efetivo das direções que as conduziram no sentido de manter a luta dentro dos marcos da colaboração de classe, no prisma do sindicalismo de resultados. Embora os indicadores de greves no governo Dilma sejam parciais (2011 e 2012), é visível a mudança de escala. Em relação ao segundo governo Lula da Silva, as greves subiram expressivos 82% e o número de horas paradas mais do que dobrou (120%). Em 2011 mais de 2 milhões de trabalhadores estiveram em greve, embora ainda majoritariamente no setor público (especialmente servidores municipais e estaduais).

⁵⁴ Dados do Sistema de Acompanhamento das Greves –DIEESE, vários anos. Adiante será apresentada a distribuição (setor público e setor privado), bem como o teor das greves (defensivas ou propositiva). Os indicadores do primeiro governo Cardoso têm como fonte NORONHA, Eduardo, “Ciclo de greves, transição política e estabilização: Brasil, 1978-2007”, in *Lua Nova*, São Paulo, 2009, N°76, p.119-168.

Em 2012 mais de 1,7 milhão de trabalhadores foram às greves, abrangendo a maior greve do serviço público federal, em que algumas categorias, como os trabalhadores da educação federal mantiveram o movimento por aproximadamente 3 meses. A exemplo de 2008, prevaleceram as greves do setor privado (53%), como a dos metalúrgicos do Paraná (reunindo 15 mil trabalhadores durante 30 dias). A greve nacional dos bancários fechou 5.130 agências em 26 estados e no Distrito Federal, articulada por 137 sindicatos que integram o Comando Nacional dos Bancários. Em suma, aconteceram greves que, no conjunto, assumiram radicalidade há muito não vista no país. As greves seguiram mais longas no setor público: 75% do número de horas paradas foi neste segmento cujas greves sempre são mais longas, visto a tática dos governos de esvaziá-las pelo seu prolongamento.

Muitas categorias derrotaram as suas direções sindicais e aprovaram greves à sua revelia, em 2012, 2013 e 2014. Situações assim aconteceram na grande greve do serviço público brasileiro, particularmente vigorosa no setor da educação federal (2012), em grandes obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e em setores privados localizados. Não é possível afirmar, *a priori*, que está ocorrendo um descolamento base-direção, mas os casos em que a base se insurge contra as direções têm aumentado de modo consistente. Nos sindicatos da construção civil, especialmente nas grandes obras, a insubordinação das bases foi a regra. Em 2011, a deflagração de greve na Usina de Jirau por radicalizados 25 dias, exigindo condições dignas de trabalho, e a seguir, na Usina de Santo Antônio, com duração de 15 dias, ambas em Rondônia, Região Norte, causaram enorme impacto pela impetuosidade dos atos políticos dos grevistas e do fato de que os trabalhadores atuaram à revelia das direções dos sindicatos. A greve no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro em 2014, com mais de 20 mil trabalhadores parados por 40 dias, em confronto aberto com a direção sindical há muito afastada da luta, ilustram a permanência desse processo, repetido na greve dos rodoviários em várias cidades (Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, Fortaleza) e nas greves dos trabalhadores do setor de limpeza urbana na cidade do Rio de Janeiro, em pleno carnaval de 2014.

O ciclo de greves na educação básica, deflagrado em mais de 19 estados da Federação, em 2011, ultrapassou as fronteiras econômico-corporativas (lutando contra a “meritocracia”, *ranking* das escolas a partir de sistemas centralizados e externos de avaliação que aferem metas impostas por organismos internacionais e por entidades empresariais). Em 2012, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior/ANDES-SN e Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica/Sinasefe (vinculados à CSP-Conlutas) e a Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil/Fasubra (que se desfilou da CUT) empreenderam a maior greve das Instituições Federais de Ensino Superior/IFES na última década, alterando qualitativamente a mobilização e a força das entidades. Em 2013, novo ciclo de greves com ampla adesão marcou as lutas educacionais, focalizando melhorias na carreira, nos salários e o combate às políticas educacionais balizadas pelas entidades empresariais que passaram a ditar as prioridades educacionais desde o Plano de Desenvolvimento da Educação, uma política federal aprovada por Lula da Silva, mas que expressa a agenda dos empresários que compõem o bloco no poder.

A coesão do Bloco no Poder possibilitou intensa ofensiva contra o trabalho. O objetivo da reforma trabalhista planejada pelo governo Federal é permitir o “negociado sobre o legislado”, o que, na prática, subordinaria os direitos trabalhistas da legislação (Acordo Coletivo Especial) ao que foi negociado. As centrais sindicais oficialistas que representam formalmente perto de 90% dos sindicalizados perderam capacidade convocatória e de mobilização, a ponto de ser uma voz desconsiderada no cálculo político do governo ao editar medidas que se referem ao mundo do trabalho. O governo Dilma operou no sentido de desconsiderar os sindicatos como sujeitos relevantes. Durante todo ano de 2012 a direção da CUT, a maior central brasileira, com vínculos estreitos e orgânicos com o PT, sequer foi recebida por Dilma Rousseff.

O processo de incipiente reorganização das lutas sindicais e populares seguiu ao longo dos anos 2000, com a conversão da CONLUTAS, estruturada em 2004, em Central Sindical e Popular (CSP-CONLUTAS) em 2010. Contudo, não houve avanço real na aglutinação das entidades sindicais que romperam com a CUT pela esquerda. A CSP-CONLUTAS segue como a principal referência de oposição ao sindicalismo oficialista, tendo influência entre servidores públicos federais e em alguns sindicatos relevantes, como o dos metalúrgicos de São Jose dos Campos, São Paulo, mas com reduzida capacidade convocatória e muitas divisões internas nos estados entre sindicatos da base e movimentos e setores da direção da Central que já provocou a saída do Movimento dos Trabalhadores sem Teto/MTST (2012), destacado movimento de luta pela moradia.

Observando as lutas dos sindicatos do setores público e privado no decênio é possível concluir que foram raras as lutas conjuntas entre ambos e, ainda mais escassas, as lutas conjuntas com os movimentos sociais, revelando as dificuldades de lutas sindicais e populares, unificadas em frentes de unidade de ação, em determinadas causas. Seria incorreto afirmar que inexiste solidariedade classista. É comum os sindicatos contribuírem financeiramente com os movimentos sociais, mas o cerne das lutas no período foi econômica e específica das categorias, embora com lampejos universalistas.

4.2. Ocupações de terras, lutas pela reforma agrária e contra as expropriações no campo

A problemática da reforma agrária compreende os movimentos sociais que lutam pela terra, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) que mudou a forma de conduzir as lutas no Brasil, combinando ação direta, por meio de ocupações de terras e de prédios públicos, com intensa ação simbólica – marchas nacionais, uso das bandeiras, vestuários, padronização das embalagens dos produtos da reforma agrária com o lema “produto da reforma agrária” –, formação educacional e política próprias, auto organizadas, mantendo vínculos estreitos com intelectuais universitários,

organizando uma importante editora (Expressão Popular) com centenas de títulos a preços populares, promovendo cursos de vários níveis (extensão, graduação, aperfeiçoamento, mestrado e doutorado) e vínculos internacionalistas (Via Campesina). Por isso, o desenrolar da luta pela reforma agrária não é uma questão que se esgota no movimento dos trabalhadores do campo, alcançando vastos setores da classe trabalhadora. Os indicadores discutidos a seguir possuem enorme importância para tornar pensáveis os dilemas das lutas e das organizações a elas associadas, incluindo as do EIR.

A evolução das ocupações de terras para fins de reforma agrária foi muito semelhante à verificada nas greves empreendidas pelos sindicatos. O número total de ocupações de terras pelos movimentos sociais do campo, em particular pelo MST, pelo Movimento de Libertação dos Sem Terra (MLST) e pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), pelos sindicatos rurais (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura/CONTAG, Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar/FETRAF), pelos movimentos indígenas, se mantiveram constantes nos governos Cardoso e Lula (respectivamente 3845 e 3864). A tendência de queda pode ser vista no número de famílias envolvidas: no governo Cardoso, 567.924, governo Lula, 493.479, 13% menor.

Indicadores recentes sugerem que as ocupações de fato perderam ainda maior folego no governo Dilma. As ocupações despencaram (2011: 226; 2012: 253) e o número médio de assentamentos por ano no primeiro biênio de seu governo corresponderam a apenas 40% da média anual do período 1995-2012, um período hostil à reforma agrária, cuja média anual de famílias por ano foi de 61,6 mil⁵⁵.

O governo Dilma, portanto, corresponde ao período de menor número de ocupações e de famílias envolvidas desde 1995. Certamente, os indicadores merecem um exame mais apurado, considerando região, tamanho da

⁵⁵ Todos os indicadores de ocupações e famílias envolvidas têm a seguinte fonte: DATALUTA – Banco de Dados da Luta pela Terra, *Relatório Brasil 2012*, Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária, São Paulo, dezembro de 2013.

propriedade reivindicada, efetividade do assentamento etc. Entretanto, ao considerar o número de famílias, a aproximação é consistente e razoável. Os indicadores não permitem confirmar a hipótese de que a redução das ocupações e das famílias envolvidas devem-se ao fato de que a reforma agrária avançou e que as ocupações, por existir negociações efetivas, foram avaliadas como desnecessárias. A consideração do quantitativo de assentamentos, como assinalado, não indica isso. No período Cardoso foram realizados 4.310 assentamentos (média de 539/ano), compreendendo 425.901 famílias (53.237 famílias/ano). No governo Lula, 3.623 assentamentos (453/ano), correspondendo a 362.085 mil famílias (45.261/ano). A tendência decrescente, acentuada desde 2007, não sofreu inflexão, ao contrário, agravou-se no governo Dilma: 2011, 111 assentamentos, 6.318 famílias; 2012, 117 assentamentos, agregando 4.854 famílias e, em 2013, apenas 10 desapropriações, compreendendo 159 famílias em todo país⁵⁶. Apenas para chamar atenção para a situação de paralisia da reforma agrária, as médias anuais de assentamentos e famílias assentadas no período 1995-2010 foram, respectivamente, de 496 assentamentos e 49.249 famílias. Como assinalou o dirigente nacional do MST, João Paulo Rodrigues, os números do governo Dilma são ainda piores do que os do governo do general Figueiredo quando foram desapropriados 152 imóveis⁵⁷. O outro lado da moeda é que a concentração da propriedade fundiária no país aumentou: (i) grande propriedade, 2003: 51,6%; 2010: 56,1% e (ii) os minifúndios tiveram redução (2003: 9,4%; 2010: 8,2%)⁵⁸.

A opção pelo agronegócio, ao contrário da narrativa governamental, significou uma opção contra a reforma agrária, fato confirmado pelos desalentadores números do governo Dilma Rousseff. Além dos assentamentos serem escassos, as desapropriações e os assentamentos estão largamente concentrados na região Norte. A meta de produzir alimentos é inviável em

⁵⁶ . Indicadores do DATALUTA, *op.cit.*, nota 4. Os dados de 2013 possuem como fonte a entrevista do dirigente João Paulo Rodrigues (ALBUQUERQUE, Luis Felipe, "2013 é o pior ano da Reforma Agrária", diz João Paulo Rodrigues", in *Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra*, 18 de dezembro de 2013. Disponível em: <http://www.mst.org.br/node/15571>)

⁵⁷ ALBUQUERQUE, Luis Felipe, "2013 é o pior ano...", *op.cit.*, nota 5.

⁵⁸ Gerson Teixeira, apud GONÇALVES, Reinaldo, *Desenvolvimento às avessas...*, *op. cit.*, p.150.

grande parte da região amazônica por estar muito afastada dos centros urbanos onde a produção agrícola poderia ser comercializada, forçando, com isso, a incorporação subordinada dos assentamentos nas cadeias do agronegócio (soja, etanol, eucalipto, gado etc.).

A opção pelo agronegócio foi aprofundada quando seu governo incorporou a reivindicação da Confederação Nacional da Agricultura, da Associação Brasileira do Agronegócio, entre outras, de empreender uma profunda reforma do Código Florestal objetivando remover obstáculos ambientais (e para expropriações) capazes de ampliar a fronteira agrícola, ainda que degradando ainda mais o ambiente⁵⁹.

Em 2012, os trabalhadores do campo e camponeses vinculados ao MST, à Via Campesina, à Federação dos Trabalhadores na Agricultura/ FETAG e à CONTAG realizaram atos e mobilizações contra o novo Código, assim como entidades científicas, como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). O Comitê Brasil em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável realizou dois atos seguidos na Esplanada dos Ministérios, em Brasília – Distrito Federal (região Centro-oeste), reunindo mais de 200 movimentos sociais, contando com o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Central Única dos Trabalhadores (CUT), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), entre outras. Entretanto, a chamada bancada do agronegócio no parlamento logrou aprovar o projeto desejado pelo agronegócio.

Após um movimento nacional que empolgou as redes sociais, promoveu manifestos, atos, *flash mobs*, seminários, o governo Dilma não atendeu a reivindicação de veto total, vetando parcialmente o Código Florestal aprovado no Congresso Nacional em setembro. Entre os retrocessos mantidos no Código,

⁵⁹ Para Luiz Zarref, dirigente do MST e da Via Campesina, “A partir de agora, os rios acima de dez metros não precisarão mais ter Áreas de Preservação Permanente (APPs) em suas margens. Nos rios abaixo de dez metros, a faixa de proteção será de 15 metros, mas antes era de 30 metros. Para os rios maiores, que precisavam de até 500 metros de floresta, agora não precisa mais nada. Isso é um crime histórico contra o meio-ambiente mundial e um retrocesso na legislação ambiental brasileira”. THUSWOHL, Maurício, “Ambientalistas querem veto ao Código Florestal e preveem embate na Rio+20”, in *Rede Brasil Atual*, 26 de abril de 2012. Disponível em: <http://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2012/04/ambientalistas-querem-veto-ao-codigo-florestal-e-preveem-embate-na-rio-20>

os mais destacados são: 1) anistia de multas; 2) redução da preservação das Áreas de Proteção Permanente; 3) possibilidade que áreas degradadas sejam recompostas com plantas que não são nativas, e 4) redução das exigências legais para a recuperação de nascentes. Assim, o Código Florestal isenta de recuperação todas as Áreas de Preservação Permanente e a grande maioria das áreas de reserva legal que tenham sido desmatadas até 2008. “Ou seja, desmatou, fica desmatado. Se havia multa, está anulada. Se a área havia sido embargada, está liberada. Isso é anistia”⁶⁰.

Um curto balanço da frente socioambiental confirma a avaliação de que o padrão de acumulação do capital requer a comodificação dos recursos naturais, conforme possibilitado pela nova lei para exploração de recursos florestais (Lei nº 12.651/2012); pela liberação dos transgênicos, a despeito de críticas realizadas por pesquisadores e movimentos sociais; pelo esvaziamento dos órgãos de fiscalização e de regulação ambiental, pelo desmembramento do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/IBAMA, órgão responsável pelo licenciamento e pelo cuidado das áreas de proteção. Dissociando as suas duas funções, o governo criou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade para cuidar da política nacional de unidades de conservação da natureza, enquanto o IBAMA cuidará do licenciamento ambiental, e pela interferência na nomeação de diretores, em favor daqueles que são favoráveis aos licenciamentos que vinham sendo contestados pelas avaliações técnicas dos referidos órgãos, situação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte ⁶¹. As interferências governamentais provocaram o efeito esperado: o crescimento do número de licenciamentos, muitos deles polêmicos, cresceu de modo extraordinário. Em 1999, o primeiro ano em que foi feito o levantamento, o governo FHC realizou

⁶⁰ ECODEBATE, “Código Florestal: O veto desenvolvimentista”, in *EcoDebate*, 6 de junho de 2012. Disponível em: <http://www.ecodebate.com.br/2012/06/06/codigo-florestal-o-veto-desenvolvimentista/>

⁶¹ Em virtude da pressão política para a liberação do processo de licenciamento da Usina de Belo Monte, no Rio Xingu (PA), o ex-coordenador geral de Infraestrutura de Energia Elétrica do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Leozildo Tabajara da Silva Benjamin, pediu demissão em dezembro de 2009. DANTAS, Pedro, “Minc nega pressão por licença ambiental de Belo Monte”, in *Portal Exame*, 7 de dezembro de 2009. Disponível em: <http://portalexame.abril.com.br/economia/minc-nega-pressao-licenca-ambiental-belo-monte-517740.html>.

131 licenciamentos, em 2002, último ano deste governo, 192. No governo Lula os licenciamentos passaram de 145 em 2003 para 278 em 2006⁶² e, mais impressionante, no governo Dilma, alcançaram 624 em 2011.

O exame dos Planos Plurianuais do Governo Federal e os empréstimos do BNDES apontam a inequívoca congruência do Programa de Aceleração do Crescimento com a Iniciativa de Integração Regional da Infraestrutura da América do Sul atualmente denominado COSIPLAN-IIRSA, cujos mapas e estratégias econômicas (grandes modais) obedecem à geopolítica estadunidense (e dos organismos internacionais afins) e das grandes corporações de apropriação de recursos energéticos, biológicos (biodiversidade), minerais, aquíferos, agropecuários e de bolsões de força de trabalho de baixo custo.

A opção pela integração em moldes capitalistas dependentes às novas fronteiras de expansão do capital é uma opção que explica o motivo pelo qual o governo Federal retirou da sua agenda política a reforma agrária, mantendo um silêncio conivente ao fechamento das quase 40 mil escolas do campo no decênio, processos que objetivam fortalecer a ideologia do esvaziamento do campo brasileiro. A partir desse suposto esvaziamento o apoio às mineradoras, ao agronegócio, à venda de enormes glebas de terra a grupos estrangeiros, tudo isso passa a ser justificado. Com isso, o processo de expropriações segue inclemente e feroz no país. Faz parte dessa produção do vazio a eliminação de lideranças e militantes camponeses. Somente entre 2003 e 2013 foram assassinados 396 camponeses, 40% deles no Pará⁶³, área de expansão do agronegócio e de mineradoras.

Nos últimos anos o MST e a CPT realizaram importantes ações de caráter nacional, porém sem um caráter massivo. Entre as ações no campo, cabe

⁶² THUSWOHL, Maurício, “Apesar das críticas, licenciamento ambiental bate recorde em 2006”, in *Carta Maior*, 8 de fevereiro de 2007. Disponível em: http://www.cartamaior.com.br/detalheImprimir.cfm?conteudo_id=12767&flag_destaque_longo_corto=L

⁶³ MOTA, Thais, “Violência no campo: uma realidade que ainda mata no Brasil”, in *Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra*, 9 de dezembro de 2013. Disponível em: <http://www.mst.org.br/node/15527>

destacar as Jornadas Nacionais de Lutas, em 2012, sob o lema “Dia Internacional da Mulher pela Reforma Agrária, Contra os Agrotóxicos e a Violência Contra a Mulher” e o “Abril Vermelho”. Estas mobilizações objetivaram pressionar o governo pela reforma agrária, frear, em vão, a reforma do Código Florestal, denunciar a criminalização dos movimentos sociais e cobrar políticas públicas no campo. Aconteceram diversas tentativas de recompor o arco de aliança em torno da reforma agrária, como em 2012, ano em que aconteceu um encontro com 33 movimentos sociais que atuam no campo, incluindo a Contag, que é a mais antiga, o MST, a Via Campesina, até o movimento dos pescadores, quilombolas etc., e construiu uma plataforma unitária de propostas de mudanças.

O MST ao longo do decênio perdeu capacidade convocatória para atrair novos militantes para o movimento; como a reforma agrária está estagnada, poucos se animam a permanecer anos a fio em acampamentos aguardando um improvável assentamento. Outros que estavam em acampamentos se afastaram do movimento, constrangidos a sobreviver com os magros recursos do Bolsa Família e de trabalhos eventuais nas periferias. Ademais, o MST apoiou a eleição de Dilma e procura se manter, ainda que com críticas, no campo governista, situação que colocou o movimento em uma situação contraditória: compõe o arco de forças de apoio ao governo do PT, mas, objetivamente, vem sendo paulatinamente destruído por este governo.

Desse modo, a força convocatória do MST está sendo dissipada, debilitando não apenas a luta pela reforma agrária, mas as iniciativas em prol de um movimento mais amplo capaz de enfrentar o estancamento da reforma agrária, a mercantilização da educação e da saúde, a privatização da infraestrutura, o agronegócio, a flexibilização trabalhista, situação que configura um problema estratégico para o conjunto dos trabalhadores.

4.3. Questão indígena: outra dimensão das expropriações capitalistas

Com o respaldo da ideologia do desenvolvimento sustentável as hidrelétricas são defendidas como a melhor alternativa para suprir as demandas de energia necessárias ao “desenvolvimento”. Segundo o projeto da Usina Belo Monte, “para alcançar as metas de crescimento anual de 5% do PIB nos próximos 10 anos, o país precisará instalar, a cada ano, cerca de 5.000 MW de capacidade adicional”. Implementadas pelo Plano de Desenvolvimento Sustentável do Xingu, a construção da Usina possui previsão de investimentos de 30 bilhões na região, conforme o BNDES⁶⁴. Os indígenas Arara, que dependem da água do Xingu para beber e cozinhar, denunciaram a situação ao Ministério Público Federal (MPF).

O Programa de Aceleração do Crescimento envolve corporações controladas por frações burguesas locais em associação com o grande capital internacional (que, a rigor, amplia seu controle dos grandes empreendimentos) que têm como negócios a exportação de *commodities*. Essa ofensiva do capital se dá sobre nova onda de expropriações das comunidades tradicionais que vêm sendo expulsas de seus territórios com extrema violência. O legislativo buscou flexibilizar ainda mais as leis em favor dos fazendeiros e grandes empresas, de modo a dificultar, em favor dos agricultores, a demarcação de terra dos povos tradicionais⁶⁵. A proposta do “Democratas” (partido da direita) de acabar com o Decreto 4887/2003, que regulamenta a demarcação das áreas ocupadas pelas comunidades quilombolas no país e a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 215/00, que prevê que o Congresso dê a palavra final sobre a demarcação de terras indígenas e de conservação ambiental, são duros ataques às comunidades tradicionais.

⁶⁴ GOULART, Josette, “As condições gerais do financiamento do BNDES ainda não foram fechadas”, in *Plataforma BNDES*, 27 Outubro de 2011. Disponível em: <http://www.plataformabndes.org.br/site/index.php/noticias/21-clipping/169-investimento-de-belo-monte-ja-alcanca-r-28-bi>

⁶⁵ No dia 19 de abril o presidente da FUNAI aprovou os estudos de identificação das terras indígenas Tenondé Porã em São Paulo (região Sudeste), Menku no Mato grosso (região Centro-oeste) e Taego Áwa no Tocantins (região Norte). No entanto, ocorreram desapropriações e medidas no legislativo que atacaram os direitos das comunidades tradicionais, como o julgamento da constitucionalidade das cotas para indígenas, no dia 26 de março, que acabou com a expulsão dos indígenas que protestavam no plenário.

As comunidades indígenas enfrentaram ataques diretos aos seus territórios. Indígenas da tribo Tupinambá, da etnia Guarani-Kaiowá, da Terra Indígena Laranjeira Nhanduru, da etnia Pataxó Hã-Hã-Hãe, empreenderam lutas por seus territórios, sendo fortemente reprimidos. Os Guajajara e Awá-guajá bloquearam um trecho da Estrada de Ferro Carajás, localizado no estado do Maranhão (região Nordeste). A violência foi denunciada pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi), que confirmou o assassinato de uma criança indígena de 8 anos da tribo Awá Guajá, na Terra Indígena Araribóia, Maranhão. A marcha unificada da Cúpula dos Povos reuniu cerca de 80 mil pessoas no centro do Rio de Janeiro para criticar o encontro oficial Rio+20 em 2012, colocando em relevo as hidrelétricas e a causa indígena. Um ato público marcou a entrega de mais de 20 mil assinaturas da campanha 'Eu Apoio a Causa Indígena' à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Além da demarcação de terras indígenas, o movimento reivindica a rejeição da Proposta de Emenda Constitucional 215/00 (que transfere do Executivo para o Congresso Nacional a demarcação de terras indígenas).

5. Jornadas de Junho de 2013

Os dilemas estratégicos da esquerda ganharam um novo capítulo com as Jornadas de Junho de 2013, pois as massivas manifestações, embora com origem na esquerda, não foram convocadas, nem organizadas e tampouco dirigidas pelas centrais e pelos partidos socialistas⁶⁶.

As contradições do padrão de acumulação do capital no contexto da crise estrutural em curso alcançaram o cotidiano de milhões de pessoas de forma insidiosa, mas efetiva. O preço abusivo dos transportes, muito alto considerando o valor do salário mínimo (lembrando que 95% dos novos empregos na última década foram de até 2 salários), obriga o trabalhador a

⁶⁶ LEHER, Roberto, "Manifestações massivas no Brasil têm origem na esquerda", *Correio da Cidadania*, Campinas, 2013, p.1-8.

dispor por mês do equivalente a metade do salário mínimo apenas para um único deslocamento entre a sua residência e o seu local de trabalho e vice-versa. Parte significativa dos trabalhadores são obrigados a utilizar mais de uma condução, frequentemente exigindo de 2 a 4 horas de deslocamentos por dia.

A violência policial contra os moradores das favelas impõe um regime de medo e sofrimento nas periferias. Em 1980, a taxa de mortalidade juvenil era de elevados 127/100 mil habitantes, em 2011 a taxa subiu para 136/100 mil. As causas externas (assassinatos) em 1980 corresponderam a 53% das mortes, em 2011 o percentual chegou a 73,2%, totalizando 46.920 óbitos. A violência ceifou 1.145.908 vidas entre 1980 e 2011, um crescimento de 4% ao ano. Muitas dessas mortes envolveram a ação policial, levando a crescentes manifestações de revolta nas favelas e periferias, com bloqueios de ruas, estradas, incêndio de ônibus e outras formas de gritos.

A expectativa de que a melhoria das condições de vida seria progressiva, após a possibilidade crescente de aquisição de alguns bens há décadas comuns aos trabalhadores nos países industrializados, como televisões, geladeiras, máquinas de lavar e, em alguns casos, automóveis, não se concretizou, em especial, após o aprofundamento da crise econômica mundial. A queda das atividades econômicas a partir de 2009 ainda não foi suficientemente dimensionada, mas é de grande proporção. Os novos empregos, grosso modo, estão localizados no setor de serviços simples, como trabalhos domésticos, no comércio e, mesmo no setor público, como educação, empregos – estes extremamente mal remunerados que exigem penosos deslocamentos – e ásperas condições de trabalho. A promessa subjacente de que afinal o Brasil se converteu em um país de classe média, sem miseráveis e extremamente pobres (para utilizar a nomenclatura governamental) encontrou limites objetivos na economia real.

Para dimensionar a queda do poder aquisitivo de grande parte dos trabalhadores, basta mencionar que consumo de produtos básicos no primeiro

bimestre de 2014 caiu 11%. Após a derrama de empréstimos para consumo popular, a inadimplência no País passou de 5,1%, em 2013, para 6,49%, em abril de 2014; a informalidade e a precarização seguem em patamar extremamente elevado, 18 milhões de pessoas trabalham sem carteira assinada e 15 milhões, por conta própria; ainda existe trabalho de crianças pequenas (90 mil, na faixa de 5 a 9 anos e 1,1 milhão na faixa 9 a 14)⁶⁷.

Prevalecem no país os protestos dos assalariados (35,2% do total, entre 2000-2009) e, entre estes, dos trabalhadores ocupados (75,6%), dos trabalhadores rurais (18,2%), de trabalhadores de rua (2,9%) e dos desempregados (2,4%), conforme dados coligidos do Observatório Social da América Latina/OSAL-Brasil por Davisson Cangussu de Souza⁶⁸. Os trabalhadores Sem Terra participaram com 26,2% do total de protestos entre 2000-2009, os estudantes com 7,6%, os Sem Teto com 4,5% e os povos indígenas com 3,5% dos protestos, conforme a mesma base de dados.

Entretanto, as lutas aparentemente moleculares – e invisibilizadas pela grande mídia – da última década, parte delas protagonizadas por trabalhadores que compõe o EIR, não deixaram de existir ao longo de toda a década. Entre estes, no período 2000-2009, a maior parte (37,8%) foi protagonizada pelo EIR latente (Sem Terra, trabalhadores rurais, índios, quilombolas, atingidos por barragens, pequenos agricultores); o pauperismo, pobres, moradores de rua e Sem Teto correspondeu a 4,4% no período, a modalidade flutuante (desempregados e demitidos) a 1% das ações de protesto, a modalidade estagnada (moradores de rua) correspondeu também a 1% e, por fim, o lúmpem (presidiários) a 0,9% do total⁶⁹. É possível trabalhar com a hipótese de que os protestos destes sujeitos assumiram novas proporções em virtude dos grandes eventos, como a Copa Mundial da FIFA,

67 INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS, “O PIB em crise, o mundo em crise”, in *Instituto Humanitas Unisinos*, 7 de junho de 2013. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/noticias/520794-o-pib-em-crise-mundo-em-crise>

68 CANGUSSU de SOUZA, Davisson, “Classe operária e superpopulação relativa nos protestos sociais no Brasil (2000-2009)”, in *História e luta de classes*, setembro de 2013, N°16.

69 *Ibid.*

particularmente devido às remoções e ao aumento da criminalização dos pobres.

Em nome da preparação das cidades para o referido evento, uma nova ofensiva de desapropriações tomou conta do país. O contraste entre os vultosos gastos para beneficiar as empreiteiras e os magros orçamentos para o social, tudo isso compôs um caldeirão alimentado pelo desaquecimento da economia, que desaguou nas ruas, nos maiores protestos desde as *Diretas, Já*. Com efeito, em 20 de Junho de 2013, aconteceram manifestações que no caso do Rio de Janeiro ultrapassou a barreira de 1 milhão de manifestantes. Neste mesmo dia, contudo, a selvagem repressão das tropas da polícia treinadas por comandantes que estagiaram no Haiti impôs, na prática, um toque de recolher com angustiante semelhança aos do dia do Golpe de Pinochet, em 11 de setembro de 1973, uma repressão desenfreada quase celebrada pelas corporações da mídia como um ato civilizatório frente à barbárie.

Entre as reivindicações, destacaram-se: “passe livre”, “educação pública não mercantil”, “saúde não é mercadoria”, laicidade versus homofobia, “fora Fifa”, “contra a privatização do Maracanã”, “Fora Eike”, “Não às remoções”, isso sem contar um tratamento crítico à corrupção que ultrapassa a questão moral, por exemplo, em cartazes que associavam o interesse das corporações na especulação imobiliária, os megaeventos e as isenções, repasses e empréstimos bilionários aos investidores operados pelos governos Dilma (PAC/BNDES), Sérgio Cabral e Eduardo Paes (os dois últimos, no Rio de Janeiro) levando milhares de manifestantes a bradar: “*abro mão da Copa, mas não da educação e da saúde públicas*”.

Os sujeitos que realizaram as primeiras convocatórias, até então não massivas, saíram às ruas para protestar contra o que pode ser considerado o estopim das manifestações: o abusivo preço das passagens de ônibus, cujo “grito” (nos termos de John Holloway⁷⁰) foi difundido pelo Movimento do Passe

⁷⁰ HOLLOWAY, John, *Agrietar el capitalismo: el hacer contra el trabajo*, Buenos Aires, Herramienta, 2011.

Livre (MPL). Ao recusar o vanguardismo e sua expressão organizativa, o substitucionismo, este movimento compõe uma forma de pensar e praticar a política que há muito está presente nas lutas antissistêmicas latino-americanas, a exemplo dos Zapatistas, do movimento estudantil que promoveu a célebre Ocupação da UNAM (México, 1999) por longos 10 meses, das Lutas da Assembleia Popular dos Povos de Oaxaca – APPO (2006), das lutas do movimento Pinguim no Chile (2006) e dos levantes da juventude pela educação pública no Chile, em 2012-2013 e as ocupações das reitorias pelos estudantes das universidades federais no Brasil, em 2006, assim como a ocupação da Universidade de São Paulo/USP em 2007.

As grandes manifestações de massa que convulsionaram o mês de junho de 2013 motivaram um grande debate nos sindicatos e outros movimentos classistas que, claramente, ocuparam um lugar secundário nessas manifestações. Houve um esforço de organizar espaços de construção entre movimentos populares, sindicatos e partidos que, até o presente, não produziram consequências duradouras. Entretanto, algumas lutas específicas foram incorporadas por vários coletivos que participaram das Jornadas, como a dos trabalhadores da educação do Rio de Janeiro que lograram importante apoio à sua luta, levando mais de 20 mil pessoas a uma de suas passeatas. A pergunta que todos os movimentos estão buscando resposta é como construir uma frente de luta com amplo protagonismo dos movimentos da classe trabalhadora⁷¹.

No plano partidário, o debate no PT segue girando em torno do governo em disputa, assentado na avaliação sobre a existência ou não de brechas reformistas no atual bloco no poder que poderia levar o governo federal a fazer concessões aos trabalhadores. A empiria disponível sugere que essas vias estão fechadas e, ao contrário, a despeito das Jornadas, o agravamento das condições econômicas permite vislumbrar que, após o pleito eleitoral de 2014

⁷¹ MATTOS, Marcelo Badaró, “A multidão nas ruas: construir a saída de esquerda para a crise política, antes que a reação imprima sua direção”, in *A Voz das Ruas*, 23 de junho de 2013. Disponível em: <http://a-voz-das-ruas.blogspot.com.br/2013/06/a-multidao-nas-ruas-construir-saida-de.html>

para a presidência da República, a despeito de seu desfecho, as medidas contra reformistas serão mais incisivas. No plano das demais forças partidárias burguesas, os partidos tradicionais da direita praticamente desapareceram, persistindo como forças relevantes o PMDB que ocupa a vice-presidência da República, uma agremiação com milhares de prefeitos e que possui a segunda maior representação no parlamento. Na oposição ao PT, restam o PSDB, o partido do ex-presidente FHC, que tem logrado cerca de 40% dos votos nas eleições presidenciais e possui bases importantes nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Na esquerda, o maior partido segue sendo o PSOL, uma agremiação com apenas um senador e 3 deputados federais, a rigor, funcionando como uma frente com diversas tendências que variam da socialdemocracia ao socialismo; o PSTU, partido de orientação trotskista, associado a LIT-QI, sem representação parlamentar, com apenas dois vereadores em todo país, e com influência no movimento estudantil das instituições públicas e em sindicatos do serviço público, de metalúrgicos e outras categorias. O PCB, igualmente sem representação no parlamento, está em processo de reconstrução, contando com apoio de intelectuais marxistas, e possui influencia esparsa no movimento estudantil e sindical.

É possível concluir a análise do decênio com a explicitação de que após um longo período de decréscimo das lutas sociais, é possível aferir o crescimento das lutas a partir de 2011, processo que culminou nas Jornadas de Junho em 2013. As principais frações burguesas seguem sustentando a coalizão que elegeu Dilma Rousseff, embora com o agravamento da crise, existam insatisfações entre frações burguesas de menor porte, o que pode ampliar o arco de apoio ao candidato do PSDB a presidência da República, embora, até o início de julho de 2014, sem abalar seriamente o apoio dos setores dominantes e de suas frações de classe de apoio, notadamente nos movimentos sindical e popular, ao referido bloco no poder (bancos, agronegócio, empreiteiras, setor mineral, frações industriais) e ao governo Dilma.

Entre os saldos positivos das referidas Jornadas: o debate estratégico sobre o esgotamento da estratégia democrático-popular; as discussões sobre as contradições do chamado neodesenvolvimentismo; as reflexões sobre o significado do público na reforma agrária, na saúde, na educação, nas cidades; o debate sobre a democracia direta e protagonica, os mandatos rotativos e revogáveis praticados na Comuna de Paris, e sobre a importância de forjar formas de debate e de unidade de ação capazes de orientar as lutas diante das forças poderosas da contrarrevolução mundial.

Referências bibliográficas

ALBUQUERQUE, Luis Felipe, "2013 é o pior ano da Reforma Agrária", diz João Paulo Rodrigues", in *Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra*, 18 de dezembro de 2013. Disponível em: <http://www.mst.org.br/node/15571>

BUGIATO, Caio Martins, "A política de financiamento do BNDES à burguesia brasileira", in *Anais do V Simpósio Internacional Lutas Sociais na América Latina "Revoluções nas Américas: passado, presente e futuro"*, 10 a 13 de setembro de 2013.

CHAHAD, José Paulo e POZZO, Rafaella Gutierre, "Mercado de Trabalho no Brasil na Primeira Década do Século XXI: Evolução, Mudanças e Perspectivas – Desemprego, Salários e Produtividade do Trabalho", in *Temas de Pesquisa Aplicada*, FIPE, junho de 2013. Disponível em: http://www.fipe.org.br/publicacoes/downloads/bif/2013/6_11-29-chah-poz.pdf

CANGUSSU de SOUZA, Davisson, "Classe operária e superpopulação relativa nos protestos sociais no Brasil (2000-2009)", in *História e luta de classes*, setembro de 2013, Nº16.

CARDOSO, Míriam Limoeiro, *Ideologia do Desenvolvimento: Brasil: JK – JQ*, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1978.

CHADE, Jamil, "Brasil se transforma no 4º maior destino de investimentos do mundo", in *Estadão*, 23 de janeiro DE 2013. Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/economia+geral,brasil-se-transforma-no-4-maior-destino-de-investimentos-do-mundo-,141650,0.htm>

COELHO, Erelino, *Uma esquerda para o capital: o transformismo dos grupos dirigentes do PT (1979-1998)*, Salvador, UEFS/SP e Xamã, 2012.

DANTAS, Pedro, “Minc nega pressão por licença ambiental de Belo Monte”, in *Portal Exame*, 7 de dezembro de 2009. Disponível em: <http://portalexame.abril.com.br/economia/minc-nega-pressao-licenca-ambiental-belo-monte-517740.html>.

DATALUTA – Banco de Dados da Luta pela Terra, *Relatório Brasil 2012*, Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária, São Paulo, dezembro de 2013.

DIEESE, *Sistema de Acompanhamento de Greves*, Rio de Janeiro, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos, 2013.

ECODEBATE, “Código Florestal: O veto desenvolvimentista”, in *EcoDebate*, 6 de junho de 2012. Disponível em: <http://www.ecodebate.com.br/2012/06/06/codigo-florestal-o-veto-desenvolvimentista/>

ESTADÃO, “Quinze famílias mais ricas do Brasil são donas de 5% do PIB”, in *Estadão*, 15 de maio de 2014. Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,quinze-familias-mais-ricas-do-brasil-sao-donas-de-5-do-pib,184946e>

FERNANDES, Florestan, *Sociedade de classes e subdesenvolvimento*, Rio de Janeiro, Zahar, 1968.

FERNANDES, Florestan, *A revolução burguesa no Brasil. Ensaio de interpretação sociológica*, São Paulo, Globo, 2006.

GONÇALVES, Reinaldo, *Desenvolvimento às avessas: verdade, má-fé e ilusão no atual modelo brasileiro de desenvolvimento*, Rio de Janeiro, LTC, 2013.

GONÇALVES, Reinaldo, *Governo Dilma e o desempenho da economia brasileira: Mediocridade esférica*, CORECON, 27 de fevereiro de 2014. Disponível em: http://www.corecon-rj.org.br/pdf/Governo_Dilma_e_o_PIB_Mediocridade_esferica_27_02_2014_rev.pdf

GOULART, Josette, “As condições gerais do financiamento do BNDES ainda não foram fechadas”, in *Plataforma BNDES*, 27 Outubro de 2011. Disponível em: <http://www.plataformabndes.org.br/site/index.php/noticias/21-clipping/169-investimento-de-belo-monte-ja-alcanca-r-28-bi>

GRANATO NETO, N.N. GERMER, C.M. “A evolução recente do mercado de força de trabalho brasileiro sob a perspectiva do conceito de exército industrial de reserva”, in *Revista Ciências do Trabalho*, Vol.1, Nº1, 2013.

HOLLOWAY, John, *Agrietar el capitalismo: el hacer contra el trabajo*, Buenos Aires, Herramienta, 2011.

IBGE, *Indicadores IBGE. Principais indicadores, Destaques da evolução do mercado de trabalho nas regiões metropolitanas abrangidas pela pesquisa (2003-2011)*, Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2012.

INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS, “O PIB em crise, o mundo em crise”, in *Instituto Humanitas Unisinos*, 7 de junho de 2013. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/noticias/520794-o-pib-em-crise-mundo-em-crise>

INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS, “‘Não estamos caminhando para uma sociedade homogênea, medianizada, mas para uma sociedade mais polarizada’. Entrevista especial com Márcio Pochmann”, in *Instituto Humanitas Unisinos*, 27 de junho de 2014. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/nao-estamos-caminhando-para-uma-sociedade-homogenea-medianizada-mas-para-uma-sociedade-mais-polarizada-entrevista-especial-com-marcio-pochmann/532719-nao-estamos-caminhando-para-uma-sociedade-homogenea-medi#>

IPEA, “Quase metade tem carteira assinada”, in *INESC*, 2 de julho de 2008. Disponível em: <http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-gerais/2008/julho/quase-metade-tem-carteira-assinada>

IPEA, *Carta de conjuntura*, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, dezembro de 2013. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/cc21_mercadodetrabalho.pdf

KATZ, Claudio, *Socialismo o neodesarrollismo*, in *La Haine*, 2006. Disponível em: http://www.lahaine.org/b2-img/katz_soc.pdf

LEHER, Roberto, “Manifestações massivas no Brasil têm origem na esquerda”, *Correio da Cidadania*, Campinas, 2013, p.1-8.

LEHER, Roberto; COUTINHO DA TRINDADE, Alice; BOTELHO LIMA, Jacqueline Aline y COSTA, Reginaldo, “Os rumos das lutas sociais no período 2000-2010”, *OSAL*, Buenos Aires, CLACSO, noviembre de 2010, Año 11, N° 28.

LOPES, Carlos, “Em 2012, 296 empresas nacionais passaram para controle estrangeiro”, em *Informa CUT*, São Paulo, 23 de janeiro de 2013. Disponível em: <http://www.cut.org.br/acontece/22892/em-2012-296-empresas-nacionais-passaram-para-controle-estrangeiro>

LUXEMBURGO, Rosa, *Reforma ou Revolução*, Luxemburg Internet Archive, 2002. Disponível em: http://www.marxists.org/portugues/luxemburgo/1900/ref_rev/cap01.htm

MATTOS, Marcelo Badaró, “A multidão nas ruas: construir a saída de esquerda para a crise política, antes que a reação imprima sua direção”, in *A Voz das Ruas*, 23 de

junho de 2013. Disponível em: <http://a-voz-das-ruas.blogspot.com.br/2013/06/a-multidao-nas-ruas-construir-saida-de.html>

MATTOS, Marcelo Badaró, “Greves no Brasil: o despertar de um novo ciclo de lutas?”, in *Correio da Cidadania*, 23 de maio de 2014, Disponível em: http://www.correiodacidade.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=9641&Itemid=79

MORAES, Luís Marcelo da Silva de, *Tendências recentes do emprego na indústria automobilística paulista*, Dissertação de Mestrado, Campinas, Instituto de Economia UNICAMP, 2012.

MOTA, Thais, “Violência no campo: uma realidade que ainda mata no Brasil”, in *Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra*, 9 de dezembro de 2013. Disponível em: <http://www.mst.org.br/node/15527>

NERI, Marcelo; SOUZA, Pedro de e VAZ, Fábio, *Pobreza e Desigualdade: duas décadas de superação. Primeiras análises Ipea da PNAD 2012*, SAE/IPEA, 2012. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/comunicado/131001_comunicado_ipea159_apresentacao.pdf

NORONHA, Eduardo, “Ciclo de greves, transição política e estabilização: Brasil, 1978-2007”, in *Lua Nova*, São Paulo, 2009, N°76, p.119-168.

OLIVEIRA, Francisco de, *Crítica à razão dualista: o ornitorrinco*, São Paulo, Boitempo, 2003.

PELIANO, José Carlos, “Deu na Forbes: o patrimônio dos brasileiros mais ricos”, in *Carta Maior*, 28 de janeiro de 2014. Disponível em: <http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Economia/Deu-na-Forbes-o-patrimonio-dos-brasileiros-mais-ricos/7/30116>

POULANTZAS, Nicos, “Estado, o poder e nós”, in: Etienne BALIBAR e Nicos, POULANTZAS, *O Estado em Discussão*, Lisboa, Edições 70, 1981.

ROSTOW, Walt Whitman, *Etapas do desenvolvimento econômico: um manifesto não-comunista*, Rio de Janeiro, Zahar, 1964.

SADER, Emir (org.), *10 anos de governos pós-neoliberais no Brasil: Lula e Dilma*, São Paulo, Boitempo, 2013.

SINGER, André Vitor, *Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador*, São Paulo, Companhia das Letras, 2012.

THE FOREIGN POLICY GROUP, “Fragile States: Rankings and Map”, in *The Foreign Policy Group*, s/f. Disponível em: <http://www.foreignpolicy.com/fragile-states->

2014?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=Flashpoints&utm_campaign=Flashpoints_June25#highlights

THUSWOHL, Maurício, “Apesar das críticas, licenciamento ambiental bate recorde em 2006”, in *Carta Maior*, 8 de fevereiro de 2007. Disponível em: http://www.cartamaior.com.br/detalheImprimir.cfm?conteudo_id=12767&flag_destaque_longo_curto=L

THUSWOHL, Maurício, “Ambientalistas querem veto ao Código Florestal e preveem embate na Rio+20”, in *Rede Brasil Atual*, 26 de abril de 2012. Disponível em: <http://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2012/04/ambientalistas-querem-veto-ao-codigo-florestal-e-preveem-embate-na-rio-20>

ZAMPIER, Débora, “Gastos da Copa do Mundo sobem para R\$ 27,4 bilhões, segundo TCU, Agência Brasil”, in *Economia.ig*, 9 de junho de 2012. Disponível em: <http://economia.ig.com.br/empresas/infraestrutura/2012-06-09/gastos-da-copa-do-mundo-sobem-para-r-274-bilhoes-segundo-tcu.html>

Movimientos campesinos e indígenas en México

Eloisa Mora¹

Resumen

Después del levantamiento zapatista de Chiapas, la movilización campesina e indígena sigue presente, aunque con menor fuerza, a pesar del avance y consolidación del neoliberalismo. En este sentido, abundan los conflictos por megaproyectos y la oposición al despojo de los bienes comunes, entre los cuales han existido casos exitosos de resistencia. Este artículo pretende hacer un recuento de algunos de los movimientos sociales más destacados del campo mexicano, posteriores al levantamiento zapatista. Particularmente el caso del Movimiento el Campo No Aguanta Más, la lucha de San Salvador Atenco por defender su tierra y el caso de la defensa de Wirikuta contra la minería rapaz. Por último, se profundiza en el caso de la policía comunitaria de Guerrero y la resistencia de los pueblos de la montaña al despojo de su territorio.

Palabras clave: Movimientos sociales, campesinos, indígenas.

Abstract

After the rising of the zapatista movement in Chiapas, the peasant and indigenous mobilization is still present, although with less strength, despite the advance and consolidation of the neoliberal model. In this way, there are many conflicts for megaprojects and the opposition to the dispossession of the commons. In those conflicts there are successful cases of resistance. This article pretends to do a count of some of the most notorious social movements of the Mexican countryside, after the Zapatista movement. Particularly, the case of the “Movimiento El Campo No Aguanta Más”, the struggle of “San Salvador Atenco” for defending its land, and the case of Wirikuta against the rapacious mining. At last, we’ll talk more deeply about the “policía comunitaria” of Guerrero and the resistance of the people of the mountain to the dispossession of its territory.

¹ Universidad Nacional Autónoma Chapingo, mora.eloisa@gmail.com.

Key words: social movements, peasants, indigenous peoples

Introducción

En una sociedad donde el discurso del desarrollo y el progreso, fue y en gran parte es aún, el paradigma dominante, el papel de los indígenas y campesinos como sujetos ligados a lo “tradicional” y/o lo “primitivo”, como “resabios” de otros modos de producción y de un pasado ajeno a los caminos del desarrollo del México actual, está en entredicho. Y no solo está en entredicho, la consolidación del neoliberalismo en nuestro país, ha significado un ataque constante a las formas de vida indígenas y campesinas. A pesar de ello el campesinado ni desaparece ni se proletariza por completo y si lo hace, esto no ha implicado que abandone su carácter de campesino, ya que por ejemplo puede ser jornalero agrícola y mantener un pequeño pedazo de tierra donde cultiva para su autoconsumo. De esta manera, podemos afirmar que a pesar de las condiciones adversas, el campesino resiste y se mantiene, bajo diversas condiciones y cambiando en cierta medida, pero sin dejar de ser campesino.

Así, hemos sido testigos de cómo la consolidación del neoliberalismo en la década de los noventas, tuvo una fuerte respuesta social que dejó claro el descontento que generó la aplicación de las fórmulas neoliberales en América Latina. En México, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se vio opacada por el levantamiento zapatista que lo puso en duda. Además de poner sobre la mesa cuestiones antes poco visibles, como el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos indios. Sin embargo, no solo la rebelión zapatista se levantó en ese periodo, en otros lugares del país también se estaban gestando importantes procesos desde los pueblos indígenas, que recibieron menos atención, como es el caso de la Coordinadora Regional de Autoridades comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en la Montaña de Guerrero, encabezada en su mayoría por indígenas de la región.

Posterior al levantamiento indígena de Chiapas, pocos movimientos sociales en México han logrado tener esa fuerza y presencia nacional, incluyendo el apoyo internacional. Sin embargo, aunque con menor impacto y poca articulación, los movimientos encabezados por indígenas y campesinos se han mantenido presentes y activos, resistiendo de una u otra manera al avance del neoliberalismo en el país y sus consecuencias en el medio rural. En este sentido, como lo menciona Bartra, ante el avance del neoliberalismo el debate sobre el campesinado (que fue muy importante en los años setenta), sobre su carácter de clase, su recampesinización o descampesinización, se reanuda de alguna manera². Así como la discusión sobre la cuestión étnica y la *emergencia de los sujetos indígenas* como fuerza política antisistémica.

Vemos así, como las reformas y modificaciones al artículo 27, el fomento a la inversión extranjera y a la participación de empresas transnacionales en sectores estratégicos como el energético o el alimentario, tienen como objetivo no solo agudizar el abandono al campo mexicano, sino despojar a campesinos e indígenas de los ejidos y comunidades aún existentes en el país. Estas tierras son un bien común objeto de interés de las grandes empresas, porque en ellas se encuentran recursos naturales indispensables para el ciclo de acumulación del capital.

Las políticas públicas dirigidas al campo mexicano se caracterizan por su asistencialismo, con el paso al neoliberalismo y la firma del TLCAN las posibilidades de los pequeños productores se han reducido al mínimo, la migración es el pan de cada día en la mayor parte de las comunidades rurales del país y no existe una organización campesina amplia e independiente que este luchando contra esta crítica situación. Sin embargo, este fenómeno es relativamente nuevo, a pesar de que siempre ha habido una relación de opresión y explotación que define al campesinado, las condiciones en que esta se da, han cambiado con el tiempo.

² BARTRA, Armando, "Reabriendo el debate latinoamericano sobre el campesinado como clase social", entrevista a Armando Bartra por Arisbel Leyva Remón, en *Textual análisis del medio rural latinoamericano*, México D.F., Universidad Autónoma Chapingo, enero-junio 2012, Nº59.

De acuerdo con Bartra, lo que se ha modificado en los últimos años en cuanto a las luchas, tiene que ver con la pérdida de los logros que se habían alcanzado en los años setentas y principios de los ochenta, periodo en el que hubo una recampesinización de las políticas públicas. Después de este periodo, a finales de los ochentas y en los noventas hubo un cambio hacia una política anticampesina, donde se abrió un proceso de descampesinización y desfondamiento de la agricultura que producía para abastecer el mercado interno. El fenómeno nuevo, es que México desfondo a su campo. Los campesinos pasaron de ser un sector sustantivo en el modelo de desarrollo (aunque explotados y subordinados), a ser relegados y marginados. Se dio un proceso de desarticulación del mundo campesino, del entorno rural y de la economía y sociedad campesina³.

Por otro lado, esta situación también nos remite a las posiciones que argumentan que el capital promueve de cierta manera y en ciertos casos a los campesinos sin convertirlos totalmente en proletarios, porque le conviene mantenerlos así y saca provecho de ello⁴. También hay otros autores como Amin Samir, que nos hablan de una sumisión de la agricultura al capital, donde la agricultura pasa a ser explotada directamente por el capital⁵. Para Bartra por ejemplo, los campesinos siguen presentes por que no son un sector en descomposición y disolución, sino más bien se encuentran en un proceso de recomposición. El campesinado se debe clasificar teóricamente no como una clase del feudalismo o de las sociedades precapitalistas, sino como una clase del capitalismo, que el propio capitalismo reproduce por que le son funcionales.

De ahí que los campesinos seguirán presentes ya sea en coyunturas favorables o desfavorables, en procesos de descampesinización o recampesinización⁶. Retomando esta postura de Bartra, podemos argumentar que por un lado el campesinado no ha desaparecido porque en cierta manera es funcional para el capital y es una clase del capitalismo, pero esta

³ *Ibíd*

⁴ Por ejemplo, Ernest Feder o Armando Bartra.

⁵ AMIN, Samir, *La cuestión campesina y el capitalismo*, México D.F., Editorial Nueva Imagen, 1977.

⁶ BARTRA, Armando, "Reabriendo el debate...", *op. cit.*, nota 2

permanencia no se puede adjudicar solo a las condiciones estructurales, sino también a las características del sujeto campesino, porque se rehúsa a desaparecer y porque en este sentido, su permanencia no depende solo de cuestiones objetivas, es decir de las determinaciones económicas o de clase, sino también de las cuestiones subjetivas, de sus características culturales y su accionar como sujeto. Bajo este entendido, es que en este artículo haremos una caracterización de los principales movimientos sociales campesinos e indígenas que se presentaron en el país desde inicios del nuevo siglo, que han hecho escuchar su voz y se presentan como una fuerza social en el país que debe tomarse en cuenta. Haremos particular énfasis en aquellos que han surgido en contra del despojo por parte de empresas trasnacionales o del propio Estado.

Estructura agraria en México

Para hablar sobre los movimientos sociales indígenas y campesinos en México, es preciso mencionar de manera breve el sustento material sobre el que se perpetúa la condición campesina, es decir la tierra. Uno de los pilares fundamentales del campo mexicano, se encuentra en la propiedad social de los núcleos agrarios, ejidos y comunidades. Esta propiedad de la tierra tiene sus orígenes en algunas de las formas prehispánicas de tenencia de la tierra. Durante la colonia, muchas comunidades lograron mantener parte de sus propiedades, pero en ese mismo periodo y en el siglo XIX, las haciendas y compañías deslindadoras fueron apropiándose de sus tierras. Esto originó un descontento que fue determinante en la revolución social de 1910-1917⁷. Así, la reforma agraria fue el resultado de la lucha revolucionaria que conquistó el reparto agrario, que tomo forma a partir del gobierno del entonces presidente Lázaro Cárdenas.

⁷ CABARLE, Bruce, CHAPELA, Francisco y MADRID, Sergio, "Introducción: El manejo forestal comunitario y la certificación", en Leticia Merino (coord.) *El manejo forestal comunitario en México y sus perspectivas de sustentabilidad*, Cuernavaca, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, 1997.

Con esta reforma, la mitad de la superficie del país, terminó siendo propiedad de los ejidos y comunidades conformados como un sector social⁸. Esto fue una de las conquistas más importantes de los pueblos indígenas en el siglo XX⁹. De esta forma, en el art. 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población comunales y se protege su propiedad sobre la tierra para asentamientos humanos y actividades productivas. Sin embargo, esta conquista ha sido parcialmente arrebatada con el avance del neoliberalismo en el país, un paso decisivo en este proceso, fue bajo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que en 1992 aprobó una reforma a este artículo para poner fin a las formas de propiedad colectivas que representaban 103.5 millones de hectáreas de tierra, esto con la finalidad de incorporar ese volumen de tierra a las leyes del libre mercado¹⁰. Entre las principales medidas legales aprobadas podemos señalar: la conclusión del reparto agrario, la apertura del campo a asociaciones y sociedades mercantiles, la enajenación y renta de los derechos agrarios y la posibilidad de cambiar de régimen de propiedad¹¹.

En este periodo se crean el PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos y Titulación de Solares) y PROCECOM (Programa de Certificación de Derechos Comunales), que fueron parte importante de esta reforma. Tuvieron como objetivo promover mayor autonomía en el proceso de decisiones a nivel de núcleo agrario y permitir que los ejidatarios tuvieran la libertad de rentar o vender sus tierras, con lo cual se buscaba incentivar la inversión en tierras agrícolas. Estos programas han certificado y titulado más del 90% del total de los núcleos agrarios del país.¹² Muchas veces generando

⁸ DE ITA, Ana, *México. Impactos del PROCEDE en los conflictos agrarios y la concentración de la tierra*, México D.F., Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, 2003.

⁹ BOEGE, Eckart, *El patrimonio Biocultural de los pueblos indígenas de México, Hacia la Conservación in situ de la biodiversidad y agrodiversidad de los territorios indígenas*, México D.F., Instituto Nacional de Antropología e Historia: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2008.

¹⁰ MEDINA, Susana, *La reforma al artículo 27 constitucional y el fin de la propiedad social de la tierra en México*, México D.F., El Colegio Mexiquense, 2006.

¹¹ VENTURA, María del Carmen, "Nueva reforma agraria neoliberal y multiculturalismo. Territorios indígenas, un derecho vuelto a negar", en *Pueblos y Fronteras Digital*, México D.F., junio-noviembre 2008, Nº5. Disponible en: http://www.pueblosyfronteras.unam.mx/a08n5/art_06.html.

¹² BRAÑA, Josefina y MARTÍNEZ, Adán, "El PROCEDE y su impacto en la toma de decisiones sobre los recursos de uso común", en *Gaceta Ecológica INE*, México D.F., Instituto Nacional de

conflictos agrarios o agudizando los ya existentes, debilitando también a las asambleas ejidales y comunales.

A pesar de esto, los campesinos e indígenas propietarios de esas tierras colectivas, no han cedido, este cambio en las leyes no ha implicado que ejidos y comunidades vendan sus tierras, pocos lo han hecho. Sin embargo, si ha facilitado la entrada de las empresas a las comunidades, permitiéndoles dividir a las asambleas, organizaciones y movimientos sociales, convenciendo a ejidatarios a lo individual de vender sus tierras y oponiéndolos con quienes no están dispuestos a vender.

Habiendo esto hecho este breve recuento de las características de la propiedad colectiva en México, es momento de abordar los casos de movilización campesina e indígena.

El campo no aguanta, el campo se levanta

Podemos destacar como uno de los movimientos campesinos más importantes en la última década en el país el caso del “Movimiento El Campo No Aguanta Más” (MECNAM). Cuando se pensaba que los movimientos campesinos eran cosa del pasado, el MECNAM irrumpe en la escena, unificando a diversas organizaciones campesinas, para alzar su voz en contra del desfondamiento y abandono del campo mexicano.

El movimiento inicia en noviembre del 2002 cuando doce organizaciones campesinas (AMUCSS, ANEC, CCC, CEPCO, CIOAC, CNOC, CNPA, CODUC, FDCCh, Red Mocaf, Unofoc y UNORCA) lanzan una serie de propuestas para la salvación del campo. De entre ellas, destacaban la moratoria al capítulo agropecuario del TLCAN y una nueva política rural, pero incluían también más presupuesto al campo, seguridad e inocuidad

Ecología, 2005, Nº75, pp. 35-49; VENTURA, María del Carmen, “Nueva reforma agraria neoliberal...”, *op. cit.*

alimentarias y el reconocimiento de los pueblos indios¹³. Respecto al TLCAN, la inconformidad surge por las implicaciones para el campo mexicano que este tratado implica. Por un lado abre la puerta a la importación de productos agrícolas que se producen en México (ejemplo maíz y frijol), y en la que los pequeños productores mexicanos, no pueden competir contra la producción extranjera, por ejemplo la de Estados Unidos que tiene una actividad agrícola más avanzada y con fuertes subsidios y protección del Estado.

En el caso del MECNAM, no podemos hablar de que emerge un nuevo sujeto político, por el contrario, vemos más bien un resurgimiento, aunque sea breve, del campesinado. Con demandas directamente relacionadas a la cuestión de la producción agrícola, aunque también incluyendo otros aspectos importantes. Por su composición y el carácter de sus demandas, se puede clasificar como un movimiento con demandas fuertemente campesinas, en comparación por ejemplo a las del levantamiento zapatista, aunque con el punto común de la oposición al TLCAN. Sin embargo, el MECNAM también incluyó una demanda propia del movimiento indígena que tomó fuerza en la década del noventa, la demanda por el reconocimiento de los pueblos indios. Esta es la demanda que podemos identificar como novedosa, ya que no tiene una relación directa con la producción agrícola. Sin embargo, aunque el MECNAM hizo suya esta reivindicación, el propio EZLN decidió no sumarse a este esfuerzo.

Este movimiento logró agrupar a diversas organizaciones campesinas, independientes y no independientes, pero también logró movilizar a diversos sectores, incluyendo a los obreros de la UNT (Unión Nacional de Trabajadores), logrando así una confluencia obrero-campesina temporal. A pesar de esto, no logró uno de sus principales objetivos, que era la moratoria del apartado agropecuario del TLCAN. Lo que sí logró, fue la firma del Acuerdo Nacional para el Campo, en donde se contemplaban algunas de las demandas del movimiento relacionadas con mayor presupuesto, actualización de algunos programas, entre otras.

¹³ BARTRA, Armando, "De rústicas revueltas", en: *El nuevo movimiento campesino mexicano*, México D.F., Fundación Heberto Castillo Martínez A.C., 2004.

La respuesta gubernamental fue clara, a pesar de que la movilización logró hacer que el gobierno se sentará a negociar con las organizaciones campesinas. No cedió en el punto respecto del TLCAN y dejó a medias muchos de los lineamientos firmados en el Acuerdo Nacional para el Campo, como lo menciona Blanca Rubio: *“el gobierno había firmado el acuerdo como una estrategia para contener y desmovilizar a las organizaciones y cedería a cuenta gotas y bajo presión los recurso pactados... en resumen las demandas centrales que enarboló el movimiento y fueron traducidas a acciones por parte del gobierno en el ANC, han sido dejadas de lado. La aplicación del presupuesto de emergencia para el campo ha sido parcial y no hay avances claros en las modificaciones a la normatividad que fue incluida en el Acuerdo”*¹⁴.

Así, el gobierno del PAN con Vicente Fox como presidente, dejó claro que no tenía interés alguno en resolver las exigencias de los campesinos, ni en modificar el apartado agropecuario del TLCAN, tan dañino para la producción campesina. El movimiento finalmente terminó desgastándose en las trabas burocráticas que le impuso el gobierno, sin haber logrado sus principales objetivos, pero dejando claro que el campesinado sigue presente como fuerza social en el país, capaz de hacer que el gobierno los escuchará y se sentará a dialogar con ellos.

A la fecha, el campo mexicano sigue en crisis, las demandas que levanto este movimiento siguen vigentes y desde el MECNAM no ha habido un movimiento campesino que agrupe a las diversas organizaciones campesinas y otros sectores, y que tenga esa fuerza. Sin embargo, como parte de luchas relacionadas con el tema agropecuario, también ha estado presente la lucha en contra de la aprobación de cultivos de maíz transgénico en el país y contra Monsanto (México es centro de origen y diversificación del maíz), lucha que en cierta medida tiene un fuerte componente campesino e indígena, junto con

¹⁴ RUBIO, Blanca, “¡El campo no aguanta más! A un año de distancia”, en *El Cotidiano*, marzo-abril 2004, Año 19, Nº124, pp. 36-39.

otros sectores como los ecologistas y las ONG's, aunque ha tenido una menor articulación y desarrollo.

¡Atenco no se olvida!

Otro movimiento social con carácter campesino, que destaco porque logro su objetivo, a pesar de haber sido víctima de una brutal represión, fue el de los ejidatarios de San Salvador Atenco que se opusieron a ser despojados por la construcción de un aeropuerto a las afueras de la Ciudad de México. El 22 de octubre del 2001 se dio a conocer el decreto expropiatorio que afectaba a 13 núcleos agrarios ubicados en la zona metropolitana de la ciudad de México. A partir de la emisión de este decreto, los ejidatarios afectados empezaron a realizar diferentes movilizaciones, desde bloqueos de carreteras, movilizaciones al zócalo, hasta la defensa legal. En su proceso de lucha, los ejidatarios se enfrentaron en múltiples ocasiones a las fuerzas represivas del Estado, dejando un saldo de varios heridos, muertos y detenidos.

Este movimiento se conformó principalmente por ejidatarios y pobladores de San Salvador Atenco, pero también se nutrió de otros sectores que lo apoyaron, desde grupos estudiantiles y obreros, defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, zapatistas, entre otros. Su demanda central era la cancelación del decreto expropiatorio. Dentro de esta demanda, como un eje fundamental, está la cuestión de la defensa de la tierra como medio para cultivar, como el propio nombre del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) lo señala, está presente también un componente "ambientalista" relacionado con las severas afectaciones ecológicas que la construcción del aeropuerto implicaría, considerando que la zona lacustre de Texcoco es hábitat de varias especies de aves migratorias, entre otras. En este sentido, los propios ejidatarios argumentaban la defensa de la tierra como una "madre" que da vida.

La lucha de los campesinos atenquenses, rindió frutos. Los decretos expropiatorios fueron abrogados en agosto del 2002. Este movimiento logró

frenar el que era uno de los proyectos más importantes impulsados durante el sexenio de Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN). Sexenio con mucha relevancia por ser el primer gobierno de transición después de 70 años de dictadura del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sin embargo, Atenco pagó caro el haber frenado tan importante proyecto.

En el año 2006 elementos policiacos de Texcoco (entonces a cargo del PRD) impidieron la instalación de floricultores en la plaza municipal, lo que generó enfrentamientos en los que participaron miembros del FPDT. Este conflicto derivó en el cercamiento policiaco militar del pueblo y posteriormente en una brutal represión por parte de la policía federal, estatal y municipal, en la que hubo dos jóvenes muertos, deportaciones, más de 200 detenidos y muchos heridos, además de varias acusaciones de vejaciones sexuales. Cabe resaltar que uno de los principales responsables de esa represión es el entonces gobernador del estado de México y actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En junio del 2010, fueron liberados los presos políticos que aún estaban en prisión. Sin embargo, para los protagonistas de la propia lucha social, esta salvaje represión fue una manera en que los gobiernos federal y estatal hicieron pagar al pueblo de Atenco el haber frenado su proyecto del aeropuerto, además de mandar un mensaje contundente a quienes pensarán seguir los pasos del FPDT para defender su tierra.

A pesar de haberse enfrentado al gobierno federal, estatal y municipal, de los tres partidos políticos oficiales (PRI, PAN, PRD), los campesinos de Atenco frenaron el despojo de su tierra. Sin embargo, el Estado no ha abandonado la intención de hacer un megaproyecto en esa zona, ya que en una asamblea reciente se modificó el régimen de propiedad comunitaria, dando pie a la compra-venta de tierras que tan arduamente defendieron los ejidatarios¹⁵. Ante lo cual el FPDT se pone una vez más en pie de lucha. Vemos así, que en términos de despojar a los campesinos, no hubo diferencia entre los tres partidos políticos, ni en la gestión del PAN cuando estuvo en la

¹⁵ LA JORNADA, "Atenco, otra vez en pie de lucha", en *La Jornada*, 8 de junio 2014. Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2014/06/08/politica/002n1pol>

presidencia y ahora la del PRI, que mantiene su intención de despojar a los campesinos atenquenses.

Cherán y la defensa de los bosques

Del lado de los movimientos con una presencia indígena mucho más definida y posterior al levantamiento zapatista en Chiapas, destaca el levantamiento de Cherán en defensa de sus bosques. Este proceso es también una oposición al despojo, en este caso personificado por el crimen organizado. En este movimiento, la principal protagonista es la comunidad *p'urhépecha* de *Cherán K'eri*, cabecera municipal y comunidad indígena.

El levantamiento en Cherán, se dio en abril del 2011, para hacer frente a la tala clandestina del bosque que estaba acabando con su patrimonio y sus lugares sagrados, todo esto frente a las propias autoridades municipales que en vez de enfrentar al crimen organizado que robaba el bosque, no hacían nada e incluso encubrían a los narcotraficantes. Este conflicto inicial derivó en la organización de lo que llamaron “rondas comunitarias”, que fue la manera en que la comunidad se organizó para vigilar su territorio, y posteriormente en una lucha por el reconocimiento de la autonomía de Cherán bajo sus propios sistemas jurídicos y normativos, dejando fuera a los partidos políticos.

La reivindicación central de los pobladores de Cherán, era muy clara, no permitir que los narco-talamontes acabaran con sus bosques y que los extorsionaran. En esta lucha encontramos por una parte, la defensa de sus recursos naturales por los beneficios materiales que les significan, pero también el componente ecológico, al evitar la tala clandestina y que se sigan degradando los ecosistemas de los que dependen; por último esta la defensa de su identidad indígena, que está profundamente ligada a su territorio, pero también en el sentido de reivindicar sus propias formas de gobierno y su derecho a la autodeterminación. Además de esto, resalta el tema de la falta de seguridad y justicia, que el Estado promueve al permitir que esos criminales

actúen impunemente. De acuerdo con Mejía: *“Las demandas de la comunidad son: seguridad, justicia y reconstitución del bosque”*.¹⁶

Los comuneros de Cherán consiguieron sus objetivos, lograron sacar a los narco-talamontes de su territorio y mantienen sus rondas comunitarias. Además el pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la facultad de la comunidad indígena de Cherán, de elegir mediante usos y costumbres a sus autoridades e incluso tiene la posibilidad de demandar cuando considere que alguna reforma viola los derechos de los indígenas que habitan en su territorio¹⁷. Esto, evidentemente no ha sido un proceso sencillo, desde que llegaron los talamontes hubo varios comuneros muertos por hacerles frente. Sin embargo, Cherán ha sido un proceso exitoso que ha sido tomado como ejemplo en otros lugares del país. Particularmente en el propio estado de Michoacán en la región de Tierra Caliente, donde la presencia del narcotráfico es muy fuerte, tomando el ejemplo de Cherán y de las policías comunitarias de Guerrero, se levantaron varios grupos de autodefensa para expulsar a los carteles que ocupaban la región. Este proceso a pesar de haber conseguido replegar a la mafia del narcotráfico, terminó siendo absorbido por el Estado, al convertir a una buena parte de estas autodefensas en una policía rural que depende del gobierno. Cherán por el contrario, con sus problemas y limitaciones, pero ha mantenido su autonomía.

Movimientos en contra de la explotación minera

En un sentido similar al del levantamiento de Atenco y Cherán, en oposición a un megaproyecto o simplemente en contra del despojo de sus bienes comunes, ha habido en la última década toda una serie de conflictos relacionados con el rechazo a un determinado proyecto, hidroeléctricas,

¹⁶ MEJÍA, Marco, “CHERÁN K’ERI identidad y acción colectiva”, en *Sujetos, organizaciones y movimientos sociales en el campo mexicano II*, J. De la Fuente (coord.), México D.F., Universidad Autónoma Chapingo, 2013, p.203.

¹⁷ LA JORNADA, “Avala SCJN facultad de Cherán para elegir autoridades por usos y costumbres”, en *La Jornada*, 26 de mayo 2014. Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/05/26/avala-scn-facultad-de-cheran-para-elegir-autoridades-por-usos-y-costumbres-9286.html>

parques eólicos, aeropuertos, complejos inmobiliarios, megaproyectos turísticos, entre otros; destacan los casos de oposición a empresas mineras. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina identifica 32 conflictos en México relacionados con la minería¹⁸. En gran parte de estos conflictos vemos por un lado a empresas transnacionales, respaldadas por el Estado o incluso al Estado mismo, contra poblaciones en su mayoría rurales y en muchos casos indígenas. Tomaremos 2 casos como ejemplo. El primero es el del pueblo *wixárika* en contra de la minera canadiense First Majestic Silver corp. y sus filiales mexicanas, y por último el caso donde más profundizaremos es el de los pueblos indígenas de la montaña de Guerrero en contra de la explotación minera en su territorio y del proyecto de reserva de la biósfera impulsado por el Estado.

La defensa de Wirikuta

El conflicto por Wirikuta, inicia en Julio de 2010, con el objetivo de defender un territorio sagrado reconocido por la UNESCO, frente a la entrada de diversas empresas mineras. Una gran parte de este territorio estaba concesionado a las empresas mineras First Majestic Silver corp., Revolution Resources Corp., Quality Minerals y US Antimony de México. Sin embargo, en febrero del 2012 se logró la suspensión de toda acción que llevara a la exploración o explotación de las concesiones otorgadas a First Majestic y en septiembre del 2013 se amplió la suspensión para salvaguardar todo Wirikuta¹⁹.

Los protagonistas del conflicto son los huicholes o *wixárika*, que aunque no habitan la zona afectada por la actividad minera, ésta es considerada por ellos como parte de su territorio, ya que en su cosmovisión, Wirikuta es un lugar sagrado al cual hacen peregrinaciones anuales y donde llevan a cabo diferentes ritos. De esta forma, una de sus reivindicaciones exige su “derecho a

¹⁸ OCMAL, “Conflictos mineros en América Latina”, OLCA. Disponible en: http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=lista&idpais=

¹⁹ CONSEJO REGIONAL WIXÁRIKA, *Boletín de prensa*, 27 de febrero 2014. Disponible en: <http://www.frenteendefensadewirikuta.org/?p=5938>.

lo sagrado”²⁰. En este caso, no se tiene una demanda relacionada con beneficios materiales o con la obtención de recursos, por el contrario es una reivindicación, del derecho a existir como pueblos indígenas y a que su cultura y cosmovisión sean respetadas y reconocidas no sólo en los tratados internacionales, sino directamente frente a las empresas mineras. Además, el territorio afectado por la minería es una reserva ecológica estatal ubicada en Real de Catorce, en el estado de San Luis Potosí, por lo que una vez más tenemos un componente “ambientalista”, donde la lucha de los wixárika, implica también resguardar una zona ecológica importante.

A este movimiento se incorporaron no sólo la etnia wixárika, sino también otros sectores, desde académicos, estudiantes, y principalmente ONG’s. En sus formas de lucha se incluyen, movilizaciones, estrategias jurídicas e incluso solicitaron el apoyo de organismos internacionales. También llevaron a cabo el Wirikuta fest, un festival donde varios músicos y artistas dieron su solidaridad a la causa y se difundió el conflicto. Finalmente, esta lucha ha sido parcialmente ganada, pero la amenaza en este caso también se mantiene latente.

La policía comunitaria y la defensa del territorio en la Montaña y Costa Chica de Guerrero

La región conocida como Montaña de Guerrero, comprende los municipios de Acatepec, Alcozauca de Guerrero, Alpoyec, Atlamajalcingo del Monte, Atlixac, Copanatoyac, Cualac, Huamuxtitlán, Malinaltepec, Metlatónoc, Olinalá, Tlacoapa, Tlaxiqlaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuetlán y Zapotitlán Tablas. En ella habitan principalmente 4 pueblos originarios: tlapanecos, mixtecos, amuzgos y nahuas.

Respecto a las luchas indígenas, destacan en la región durante la década de los noventa, la participación indígena en el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia y el surgimiento y consolidación de la Coordinadora

²⁰ *Íbid.*

Regional de Autoridades Comunitarias (antes Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas, CAIN)/Policía Comunitaria (CRAC/PC). La región también es conocida por haber sido foco de actividad guerrillera en los años setentas.

El 4 de enero de 2011, se publicó en el periódico La Jornada que las mineras de capital extranjero Hochschild México, Camsim Minas y Minera Zalamera, estaban interesadas en zonas depauperadas de Guerrero, donde se descubrieron yacimientos de oro, plata, zinc y otros metales en un área de 500 km². Esto, en municipios que se caracterizan por tener conflictos agrarios, altos niveles de pobreza, analfabetismo, insalubridad, desempleo y migración, así como presencia de grupos paramilitares, e insurgentes²¹.

El mismo día, también se informó que la oposición a dichos proyectos se empezaba a organizar, por parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de la Montaña. La CRAC dejó su posición muy clara: no permitirán el establecimiento de las empresas mineras en sus territorios. Además denunció que nunca se consultó a la población sobre la entrega de estas concesiones. Como tácticas de resistencia, la CRAC-PC se encargó de realizar asambleas y brigadeos informativos en diferentes regiones de la montaña y se lanzó una campaña llamada “*A corazón abierto, defendamos nuestra madre tierra*”.

Además de este conflicto con las mineras, en septiembre del 2012 se presentó el “Estudio Previo Justificativo para el establecimiento del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Montaña de Guerrero” en el cual la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y la CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) proponen crear una Reserva de la Biosfera en los municipios de Atlamajalcingo del Monte, Cochoapa el Grande, Iliatenco, Malinaltepec y San Luis Acatlán con una

²¹ LA JORNADA, “Apuntan mineras extranjeras a zonas depauperadas de Guerrero”, en *La Jornada*, 4 de enero 2011. Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2011/01/04/estados/023n1est>.

superficie de 157, 205.54 hectáreas. Parte de los terrenos que se pretenden decretar como “Reserva de la Biosfera” son terrenos en donde están las concesiones mineras. Incluso en el propio estudio se encuentra especificado que existen *subzonas de aprovechamiento especial*, donde hay recursos naturales que se consideran *esenciales* para el desarrollo nacional y estatal que se pueden explotar sin *deteriorar el ecosistema*. En la propia Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) se menciona que puede haber actividades de exploración y explotación mineras, siempre y cuando se cumpla con ciertas reglamentaciones. Además, el establecimiento de una Reserva de la biosfera en la región, implica también que el control directo del territorio donde se encuentra la reserva, pasa a manos de la CONANP, uno de los motivos principales por los que la población se opuso al proyecto.

En este caso, podemos ver como el Estado a partir de las instancias que están destinadas a realizar tareas de “desarrollo sustentable” y “conservación biológica”, busca modificar la relación de los pueblos con su territorio, e incluso reducir su capacidad de gestión y decisión sobre del mismo. Peor aún, crea instrumentos para la conservación de la biodiversidad del país bajo una legislación ambigua que permite que actividades tan destructivas como la minería a cielo abierto coincidan con territorios que se deben destinar a la conservación por la importancia de sus características físicas y biológicas. Además, cabe resaltar que los municipios en donde se dieron las concesiones mineras y en donde se pretende implementar la Reserva de la Biósfera, coinciden en ser los municipios con mayor densidad de población indígena de la región e incluso del estado. Vemos así como el despojo, es parte de las políticas dirigidas a la población indígena.

Cabe señalar que el proyecto de reserva de la biosfera, fue promovido por la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG) que se encuentra en la región. Sin embargo, a partir del contacto con gente de Chiapas y de conocer lo ocurrido en Montes Azules, respecto a cómo los proyectos de conservación biológica pueden esconder el despojo y la expulsión de las poblaciones originarias, un sector de la población guerrerense de la

montaña, acuerda oponerse al proyecto. Esta oposición incluso derivó en la toma de las instalaciones de la UIEG y en la destitución de su rector que había acordado promover el proyecto. A partir de esto, el proyecto se suspendió y posteriormente el encargado de la Secretaría de Medio Ambiente estatal, declaró que se buscaría promover el establecimiento de reservas ecológicas comunitarias que estuvieran bajo la gestión local. A pesar de que el proyecto de la reserva se encuentra temporalmente suspendido, se siguen realizando actividades de difusión sobre sus implicaciones.

Como parte de las medidas de resistencia y de rechazó a la minería, se acordó que las asambleas de los diferentes núcleos agrarios en la región presentarán ante el Registro Agrario Nacional las actas de asamblea donde se acuerda el rechazó a la minería y a la reserva de la biosfera. Además se nombró el “Consejo de Autoridades Agrarias contra la Reserva de la Biosfera” conformado por autoridades de toda la región y que se ha encargado de realizar foros en varias comunidades, en donde se hace pública la problemática y se conmina a los pobladores a rechazar la entrada de estos proyectos.

En algunas comunidades, la posibilidad de que las empresas mineras entren de la mano de algún proyecto gubernamental, ha llevado a la decisión de rechazar todos los programas gubernamentales, dejando únicamente los que ya estaban en operación desde hace tiempo. En otras comunidades como Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, incluso se han asignado de manera voluntaria áreas para la conservación y se ha buscado echar andar proyectos de embellecimiento urbano, agroecología y ecotecnias, que a partir de estrategias definidas de manera comunitaria, permitan tener un menor impacto ambiental y conservar los bienes comunes.

En este caso, vemos como la lucha y organización de los pueblos de la montaña, les ha permitido frenar el avance del neoliberalismo en su región. Se enfrentan contra el crimen organizado, las empresas trasnacionales y el propio Estado. Su lucha ha frenado el despojo, la degradación ambiental, el narcotráfico y el crimen. A ello le han antepuesto, sus formas de impartición de justicia y de garantizar la seguridad; sus formas de conservación y

aprovechamiento de los ecosistemas; y sus usos y costumbres. Lograron que se suspendiera el proyecto de la reserva de la biosfera, y han replegado a las empresas mineras que acechan su territorio. Sin embargo, que las empresas aún no hayan podido entrar más que a una de las comunidades de la montaña, no quiere decir que hayan desistido de sus fines. Tan es así, que la propia CRAC/PC, uno de los principales obstáculos para que entren las mineras, está siendo fragmentada.

La amenaza que ataca desde adentro

Una de las particularidades del escenario donde se desenvuelve el conflicto con la minería, es la presencia de la CRAC-PC y la Unión de pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG). La CRAC-PC como una institución comunitaria abocada a la impartición de justicia y al resguardo del territorio comunitario, y la UPOEG como un vehículo de expresión de las demandas de los pueblos de Guerrero al Estado. Ambas organizaciones, comparten zonas de influencia y muchos de los dirigentes que fundaron la CRAC-PC, contribuyeron a la formación de UPOEG y participan activamente en ella. Sin embargo, desde 2012 se han presentado una serie de enfrentamientos entre un sector de la CRAC-PC y la UPOEG, habiendo acusaciones mutuas de ser agentes del gobierno y/o grupos paramilitares.

El desenvolvimiento de estas pugnas internas ha derivado en la división de la CRAC-PC. Donde un sector incluso ha aceptado la credencialización, que implica una subordinación del sistema comunitario al sistema estatal, y ha recibido fondos por parte del gobierno estatal. Incluso existen dos sedes principales de la CRAC-PC, una en San Luis Acatlán con sus respectivos 4 coordinadores regionales y otra en Santa Cruz del Rincón en la que se nombraron otros coordinadores.

Detrás de estas pugnas internas, se encuentran dos visiones distintas, por un lado de un sector que discursivamente se posiciona en contra del gobierno y la entrada de las empresas mineras, pero que en los hechos se ha

acoplado y ha pactado con el gobierno perdiendo autonomía; y otro sector que busca seguir administrando su territorio de manera comunitaria y ve en las asambleas comunitarias el máximo órgano de decisión y acción de las comunidades.

Cabe señalar que esta división interna y esta fractura de la organización comunitaria, implica un debilitamiento de la resistencia y la oposición a los proyectos mineros. De tal manera que es más fácil para las empresas mineras entrar en la región y ahondar estas divisiones. Incluso es probable que haya injerencia de las empresas y del gobierno estatal, en estas pugnas internas, para provocarlas y/o acentuarlas, acabando así con la fuerza principal que tienen estos pueblos contra el despojo: su organización.

La cruzada contra el hambre y la militarización

Como otra de las tácticas de penetración en el territorio comunitario, varios dirigentes y académicos que laboran en la zona, han identificado a la cruzada contra el hambre²², como un pretexto para ocupar militarmente y hacer labores prospectivas en la región, para llegado el momento desarmar a las policías comunitarias. Bajo el planteamiento de abrir comedores comunitarios para contribuir a acabar con el hambre en la región, la milicia entra en territorios donde antes no podía. Lo que se cuestiona principalmente es que los comedores sean gestionados y atendidos por militares, cuando existen pobladores locales que bien podrían cumplir con estas tareas.

Además de estos hechos, los recientes fenómenos climatológicos ocurridos en la región (durante los meses de septiembre y octubre del 2013), han provocado una mayor vulnerabilidad de la población local, los derrumbes, la pérdida de cultivos, la destrucción de caminos y carreteras, etc., han dejado a la población con pocos alimentos e incomunicada. Mientras que el gobierno

²² La cruzada contra el hambre es uno de los proyectos centrales del actual gobierno del presidente de la República (2012-2018), Enrique Peña Nieto, como parte del “Pacto por México” firmado por los tres principales partidos políticos del país (PAN, PRD, PRI).

tomo como prioritaria la ayuda a las principales ciudades como Chilpancingo y Acapulco, la región de la Costa-Montaña fue relegada, la ayuda fue poca y en muchos casos ninguna.

El caso de san Miguel del Progreso

Particularmente el caso de la comunidad indígena *me'phaa* San Miguel del Progreso (*Júba Wajíin*), de la región de la montaña, es muy importante ya que por medio de estrategias legales, respaldándose en sus derechos de propiedad social, lograron ampararse frente a la minera inglesa. En una asamblea general de comuneros el 17 de Abril del 2011, rechazaron la exploración y explotación minera en su territorio, y dieron de alta esa acta en el Registro Agrario Nacional. También interpusieron una demanda de amparo donde argumentan que esa concesión contraviene lo establecido en la Constitución y los Tratados Internacionales²³. Este amparo prohíbe cualquier tipo de actividad ya sea de exploración o explotación minera en el territorio de la comunidad.

Posteriormente, un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Económico del estado de Guerrero, declaró que la empresa minera inglesa Hochschild Mining, quien tenía la concesión “Corazón de Tinieblas” en la Montaña, ya se había retirado de Guerrero. Sin embargo en la cartografía minera de Guerrero, la concesión aparece como vigente, aunque en la demarcación de otro municipio²⁴.

Las autodefensas de la Costa Chica

Como un fenómeno que se ha esparcido a varios lugares de México, los grupos de autodefensa se han levantado en varios puntos del país en contra de

²³ LA JORNADA, “La comunidad me'phaa de San Miguel del Progreso”, en *La Jornada*, 19 de noviembre 2013. Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2013/11/19/opinion/022a1pol>.

²⁴ EL SUR ACAPULCO, “Abandonó Guerrero la empresa minera inglesa que pretendía explotar mina de La Montaña: Seder”, en *El Sur Acapulco*, 21 de noviembre 2013. Disponible en: <http://suracapulco.mx/archivos/120355>

las vejaciones cometidas por el narcotráfico y la complicidad del gobierno. En la región de la Costa Chica, que colinda con la región de la montaña, se da un proceso muy cercano (pero distinto) al de la policía comunitaria de la montaña de Guerrero. En poblaciones del medio rural tanto indígenas como mestizas, siguiendo el ejemplo de la montaña, a inicios del año 2013 varios grupos de autodefensa se enfrentaron al narcotráfico que tenía controlada la región, que los extorsionaba, cobraba derecho de piso a los comerciantes, profesionistas, etc., y mantenía en un miedo constante a la mayoría de los habitantes.

Estas autodefensas lograron expulsar al narcotráfico de sus pueblos. Sin embargo, algunas de ellas ya han sido incorporadas al gobierno, por medio de su incorporación a la policía rural. Esto implica el posible regreso del narcotráfico e incluso que en un futuro estas sean utilizadas como grupos paramilitares en contra de la propia población. Ya que, antes de su levantamiento, era clara la complicidad que había entre el Estado y algunos grupos de narcotraficantes, por la impunidad en la que les permitían operar y en muchos casos hasta los protegían.

Algo similar puede ocurrir con la CRAC-PC, si se incorpora por completo a la policía rural. Sin embargo, la gran diferencia es que el proyecto de la CRAC ya lleva 18 años y tiene un sistema propio de impartición de justicia que ha sido construido a lo largo de su trayectoria, que incluye un proceso de “reeducación” de quienes cometen delitos, además de una tradición de toma de decisiones colectiva y un sistema de cargos. Así es como los policías comunitarios cumplen con su papel sin recibir dinero a cambio. Este proyecto hoy se encuentra severamente amenazado, ya no sólo por el Estado y su constante asedio, sino también por las empresas trasnacionales que buscan dismantelar el tejido comunitario y la organización regional, para poder aprovechar sus recursos naturales.

Conclusiones

A pesar de que el avance de la modernidad (ahora posmodernidad) capitalista, auguraba la desaparición de los campesinos e indígenas, estos siguen presentes y siguen luchando, aún bajo un modelo económico neoliberal que atenta constantemente contra su forma y medios de vida. Aunque después del levantamiento zapatista de 1994, no ha existido un movimiento social campesino o indígena con tanto impacto a nivel nacional e internacional, las movilizaciones indígenas y campesinas se han mantenido y muchas de ellas han logrado sus objetivos, aunque con poca articulación y con demandas muy localistas, a excepción del Movimiento El Campo No Aguanta Más.

La última década de neoliberalismo en México, ha tenido una oposición desde el medio rural, que puede ser caracterizada como un periodo de resistencia, de un ¡NO! al despojo representado por tal o cual trasnacional o por un determinado megaproyecto. En este periodo ha habido algunas victorias por parte de la lucha campesina. Sin embargo, estas victorias parciales se mantienen en constante amenaza de ser arrebatadas. Mientras el modelo económico neoliberal se mantenga e incluso se agudice²⁵, la amenaza sobre los territorios campesinos e indígenas, el desmantelamiento del campo y la entrada del capital trasnacional, difícilmente se detendrán.

Las estrategias de defensa jurídica, han probado ser funcionales en algunos casos, pero casi siempre estas han sido acompañadas por movilizaciones y otras formas de presión social. Sin embargo, ante el constante aumento de los proyectos de despojo y los conflictos por los bienes comunes en todo el país e incluso a nivel América Latina, destaca la falta de un punto de confluencia para la acción. Considerando que existe una base común a esos conflictos y que el trasfondo de sus demandas es oponerse a un modelo económico que opera a partir del despojo y particularmente a las formas que este modelo toma en el país (las modificaciones a las leyes, en favor del capital

²⁵ En el sexenio de Enrique Peña Nieto se han aprobado reformas de tinte neoliberal como la energética, laboral, fiscal, educativa y en telecomunicaciones. Particularmente la energética implica un grave retroceso, al abrir paso a la privatización de Petróleos Mexicanos (PEMEX), columna vertebral del desarrollo económico del país.

privado, el uso de la policía y el ejército para reprimir a la población, la criminalización de la protesta social, etc.), se hace clara la necesidad de una articulación de todas esas luchas locales, más allá de los espacios donde se intercambian experiencias y se da apoyo.

La falta de un referente campesino e indígena a nivel nacional, que enfrente no sólo los problemas locales sino también las modificaciones a las leyes, que perjudican directamente a los pueblos campesinos e indígenas, ha permitido que la mayoría de estas reformas sea aprobada sin gran oposición. Es el caso reciente de la reforma energética y sus leyes secundarias, entre las cuales se encuentra una iniciativa que legaliza la expropiación de ejidos y comunidades, en las situaciones donde las trasnacionales y los pueblos no puedan llegar a un acuerdo, se puede recurrir a la expropiación, cuando existan yacimientos de petróleo, gas, o para hacer instalaciones eléctricas. Esto implica una afectación directa a los pobladores del medio rural en el país. A pesar de esto, más allá de algunas declaraciones de organizaciones campesinas, no hay una respuesta organizada para evitar la aprobación de tales leyes, ni en el campo ni en la ciudad. En este sentido, ha sido escasa también la articulación entre las luchas del campo y de la ciudad.

En términos de los protagonistas de las luchas en el campo, los pueblos indígenas han tomado la delantera y han hecho escuchar su voz, con reivindicaciones viejas y nuevas, la tierra sigue siendo algo fundamental, pero también se habla de proteger el ambiente, y defender su identidad. Por otro lado, la cuestión de la seguridad se ha vuelto un tema fundamental en el medio rural, ante el avance de los carteles del narcotráfico y principalmente ante la incapacidad del Estado de controlar estos grupos, las policías comunitarias y las autodefensas han sido la forma organizativa que los pueblos han tomado para protegerse. Tomar las armas para defenderse ha implicado tener que enfrentarse ante el Estado que busca desarmarlos o institucionalizarlos, pero también implica estar preparados para no permitir la entrada de las empresas trasnacionales a sus territorios.

Los conflictos por el territorio y los recursos naturales van en aumento, el surgimiento de movimientos sociales en oposición también. Las reformas y modificaciones a la constitución, se ponen cada vez más del lado del capital trasnacional, las estrategias jurídicas por tanto, van perdiendo fuerza si se sigue legalizando el despojo. Las luchas campesinas e indígenas, van a seguir presentes.

Bibliografía

AMIN, Samir, *La cuestión campesina y el capitalismo*, México D.F., Editorial Nueva Imagen, 1977.

BARTRA, Armando, “De rústicas revueltas”, en: *El nuevo movimiento campesino mexicano*, México D.F., Fundación Heberto Castillo Martínez A.C., 2004.

BARTRA, Armando, “Reabriendo el debate latinoamericano sobre el campesindio como clase social”, entrevista a Armando Bartra por Arisbel Leyva Remón, en *Textual análisis del medio rural latinoamericano*, México D.F., Universidad Autónoma Chapingo, enero-junio 2012, N°59.

BOEGE, Eckart, *El patrimonio Biocultural de los pueblos indígenas de México, Hacia la Conservación in situ de la biodiversidad y agrobiodiversidad de los territorios indígenas*, México D.F., Instituto Nacional de Antropología e Historia: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2008.

BRAÑA, Josefina y MARTÍNEZ, Adán, “El PROCEDURE y su impacto en la toma de decisiones sobre los recursos de uso común”, en *Gaceta Ecológica INE*, México D.F., Instituto Nacional de Ecología, 2005, N°75, pp. 35-49.

CABARLE, Bruce, CHAPELA, Francisco y MADRID, Sergio, “Introducción: El manejo forestal comunitario y la certificación”, en Leticia Merino (coord.) *El manejo forestal comunitario en México y sus perspectivas de sustentabilidad*, Cuernavaca, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, 1997.

CONSEJO REGIONAL WIXÁRIKA, *Boletín de prensa*, 27 de febrero 2014. Disponible en: <http://www.frenteendefensadewirikuta.org/?p=5938>.

DE ITA, Ana, *México. Impactos del PROCEDURE en los conflictos agrarios y la concentración de la tierra*, México D.F., Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, 2003.

EL SUR ACAPULCO, “Abandonó Guerrero la empresa minera inglesa que pretendía explotar mina de La Montaña: Seder”, en *El Sur Acapulco*, 21 de noviembre 2013. Disponible en: <http://suracapulco.mx/archivos/120355>

LA JORNADA, “Apuntan mineras extranjeras a zonas depauperadas de Guerrero”, en *La Jornada*, 4 de enero 2011. Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2011/01/04/estados/023n1est>.

LA JORNADA, “La comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso”, en *La Jornada*, 19 de noviembre 2013. Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2013/11/19/opinion/022a1pol>.

LA JORNADA, “Avala SCJN facultad de Cherán para elegir autoridades por usos y costumbres”, en *La Jornada*, 26 de mayo 2014. Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/05/26/avala-scn-facultad-de-cheran-para-elegir-autoridades-por-usos-y-costumbres-9286.html>

LA JORNADA, “Atenco, otra vez en pie de lucha”, en *La Jornada*, 8 de junio 2014. Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2014/06/08/politica/002n1pol>

MEDINA, Susana, *La reforma al artículo 27 constitucional y el fin de la propiedad social de la tierra en México*, México D.F., El Colegio Mexiquense, 2006.

MEJÍA, Marco, “CHERÁN K’ERI identidad y acción colectiva”, en *Sujetos, organizaciones y movimientos sociales en el campo mexicano II*, J. De la Fuente (coord.), México D.F., Universidad Autónoma Chapingo, 2013.

OCMAL, “Conflictos mineros en América Latina”, OLCA. Disponible en: http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=lista&idpais=

RUBIO, Blanca, “¡El campo no aguanta más! A un año de distancia”, en *El Cotidiano*, marzo-abril 2004, Año 19, Nº124, pp. 36-39.

VENTURA, María del Carmen, “Nueva reforma agraria neoliberal y multiculturalismo. Territorios indígenas, un derecho vuelto a negar”, en *Pueblos y Fronteras Digital*, México D.F., junio-noviembre 2008, Nº5. Disponible en: http://www.pueblosyfronteras.unam.mx/a08n5/art_06.html.

El posneoliberalismo: apuntes para una discusión

Pablo Dávalos¹

Resumen

El concepto de “posneoliberalismo” hasta el momento está asociado a los gobiernos progresistas latinoamericanos que se han desmarcado de la colonización monetarista del neoliberalismo en su versión del FMI y del Banco Mundial, y que proponen la recuperación del Estado para provocar una redistribución del ingreso en beneficio de obra pública, inclusión social y redistribución del ingreso. Sin embargo, estos gobiernos llevan adelante políticas de extractivismo que implican la desposesión de territorios con la consecuente criminalización social. En consecuencia, es necesario una deconstrucción teórica y epistémica del concepto de “posneoliberalismo” y otorgarle mayor espesor teórico para evitar su utilización ideológica que encubre la violencia de la acumulación por desposesión.

Palabras clave: posneoliberalismo, extractivismo, acumulación por desposesión.

Abstract

The concept of "post-neoliberalism" so far is associated with progressive Latin American governments that have distanced himself from the monetarist colonization of neoliberalism in its version of the IMF and World Bank. However, these governments carry out extractive policies involving the dispossession of territories with the consequent social criminalization. Consequently, a theoretical and epistemological deconstruction of the concept of "post-neoliberalism" is necessary to understand the violence of accumulation by dispossession.

Key words: posneoliberalism, extractivism, accumulation by dispossession

¹ Economista ecuatoriano. Asesor de los movimientos sociales del Ecuador. Su más reciente libro es: *Alianza País o la reinención del poder. Siete ensayos sobre el posneoliberalismo en el Ecuador* (2014), Ediciones Desde Abajo, Colombia.

El espejismo de la política y la política de los espejismos

Al parecer, América Latina (*Abya Yala*, en la definición que utilizan los movimientos indígenas de la región) estaría ingresando en una época novedosa caracterizada por la recuperación de su soberanía y en un contexto de participación ciudadana, democracia directa, y renovación política, de la mano de “gobiernos progresistas” y de “izquierda”, que tratan de recuperar su soberanía y, al mismo tiempo, emprender una amplia y profunda redistribución del ingreso a través de fuertes inversiones en educación, salud y bienestar social, que comienzan a revertir las dinámicas de la explotación laboral, la discriminación étnica y la violencia de clase. Este proceso estaría avalado y respaldado por fuertes movimientos sociales y una gran popularidad y credibilidad de estos gobiernos progresistas que, a pesar de los afanes golpistas que existen, han sido mantenidos a raya por pueblos y sociedades que apoyan mayoritariamente a estos gobiernos con excepción de Honduras².

Se trataría casi de un cuento de hadas que es difícil de digerir porque un contexto tan idílico daría cuenta que la compleja, difícil y desgarradora historia de América Latina (*Abya Yala*), de alguna manera, ha podido superarse y que la región ha empezado, y quién lo habría de creer, de la mano de la democracia liberal, a transitar por aquellas alamedas de las cuales alguna vez habló Salvador Allende.

² Véase al respecto: GAUDICHAUD, Franck, *El volcán latinoamericano. Izquierdas, movimientos sociales y neoliberalismo al sur del Río Bravo. Balance de una década de luchas*, ALAI – América Latina en Movimiento, 2010. Disponible en: <http://alainet.org/active/40895>; GAUDICHAUD, Franck, *Emancipaciones en América Latina*, Quito, IAEN-Pensamiento Radical, 2013. Sobre la supuesta línea de continuidad entre Alianza País y el movimiento indígena, en especial el Partido Pachakutik, véase: RAMÍREZ GALLEGOS, Franklin, “Perspectivas del proceso de democratización en el Ecuador. Cambio político e inclusión social (2005-2010)”, en Anja Dargatz y Moira Zuazo (ed.), *Democracias en transformación. ¿Qué hay de nuevo en los nuevos Estados andinos?*, Bolivia-Ecuador-Venezuela: FES-ILDIS, 2012. Para este autor: “(...) con el acceso de Rafael Correa al poder se amplía el proceso de integración política de las izquierdas al ejercicio del Gobierno democrático.” (*Ibid.*, p.112). Véase también: RAMÍREZ, René, *Izquierda postsocialista*, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010; HARNECKER, Martha, *Ecuador: Una nueva izquierda en busca de la vida en Plenitud*, Quito, Abya Yala, 2011; SENPLADES (2010) *Los nuevos retos de América Latina: socialismo y sumak kawsay*, Quito, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010. Disponible en: <http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Socialismo-y-Sumak-Kawsay.pdf>

Empero de ello, y contrariamente a lo que pueda creerse y esperarse, *Abya Yala* está entrando más bien en una de las etapas más dramáticas de la acumulación del capitalismo. Si el neoliberalismo fue la avanzada de la guerra monetaria y económica en contra de la región, aquello que se está vislumbrando ahora en el horizonte amenaza con ser más traumático y tenebroso, en un proceso al que puede denominarse como ***posneoliberalismo***.

En el momento posneoliberal, *Abya Yala* está regresando en el reloj de su historia a los primeros siglos de la acumulación del capital. A esa etapa en la cual el capitalismo no tenía ningún escrúpulo, ninguna frontera, ninguna cortapisa. Ese mundo en el cual no había ninguna ontología del hombre, ninguna moral y todo era permitido. Un mundo que fue descrito por Marx en los tintes más sombríos y, justamente por ello, realistas. Es ese mundo el cual se está perfilando en el horizonte de la región pero, lo más grave por las paradojas que encierra, para legitimarse y sostenerse está acudiendo al expediente de los discursos emancipatorios de la izquierda y de los movimientos sociales.

Es un tiempo de la historia paradójico y contradictorio el cual está creando estas opciones políticas que, aparentemente, adscriben a tesis críticas con el sistema pero que, finalmente, son muy funcionales al poder, al capitalismo, a la modernidad occidental. Marx tenía razón: es el ser social el que determina la conciencia social y las ideas dominantes de una época son las ideas de la clase dominante. La crisis del capitalismo le obliga a la burguesía a un retorno al principio de realidad, y en ese principio de realidad consta la necesidad ineludible de transferir los costos de la crisis y de salvarse a sí misma, incluso al coste de ceder espacios simbólicos.

En el momento actual quizá sea más conveniente que la fisonomía del poder tenga el rostro dulcificante de gobiernos progresistas y de “izquierda”. Pero esos rostros dulcificantes del poder no atenúan la perversidad inherente a

la acumulación del capital y de las tensiones generadas por lo que la teoría política define como lucha de clases. Quizá por ello, haya de considerar a los denominados “gobiernos de izquierda”, o “gobiernos progresistas” de la región, como el nuevo *locus* en el cual situar las luchas y las resistencias sociales.

En todos estos gobiernos progresistas hay una especie de metodología en construcción que se sustenta y se apoya en los discursos y en las prácticas de resistencia y movilización sociales, para manipularlas y metabolizarlas en función del nuevo poder, inscrito ahora en las coordenadas del posneoliberalismo. Puede ser que se exagere, pero extraña el hecho que en las retóricas oficiales y en sus discursos laudatorios, casi no se mencionen ni al PPP (Plan Puebla Panamá, ahora Plan Mesoamericano), ni a la iniciativa IIRSA-COSIPLAN, como los nuevos peligros que afronta la región y que más bien se los presente como oportunidades a no desperdiciar.

También es extraño que en la retórica oficial, en las campañas electorales y en los programas de gobierno de estos gobiernos progresistas y de izquierda, nada se diga del avance incontenible del monocultivo sustentado en transgénicos y orientados a la producción de biocombustibles que se está produciendo en vastas regiones de Paraguay, de Argentina, de Brasil, un proceso que implica, además, una contrarreforma agraria sustentada en la criminalización de las resistencias sociales, y todo con el aval de estos nuevos gobiernos progresistas. Tampoco nada se dice del avance incontenible de la minería en Ecuador, Perú, Bolivia, Centroamérica, Brasil, Chile, Argentina; de la profundización de la industria de los servicios ambientales en toda la región, la creación de campos de concentración para la población indígena de la Amazonía ecuatoriana conocidos como “ciudades del milenio”, etc. Por ello, quizá sea importante esbozar las categorías de base de lo que podría ser el momento posneoliberal de la *Abya Yala*.

Del neoliberalismo al posneoliberalismo

Para comprender al posneoliberalismo quizá sea necesario trazar una línea demaratoria con el concepto de “neoliberalismo”; este está relacionado con Friedrich Hayek, Milton Friedman, F. Knight, Ludwig Von Mises, entre otros, y la “Sociedad del Monte Peregrino”. El concepto de *neoliberalismo* nace en Europa luego de la segunda guerra mundial como una necesidad de renovar al discurso del liberalismo clásico y ponerlo a tono en un contexto en el cual el Estado liberal asume el formato de “Estado de Bienestar” y la existencia de economías socialistas centralmente planificadas³. La discusión teórica sobre el concepto “neoliberalismo” es abundante y se ha convertido, de hecho, en el *mainstream* del pensamiento económico, político, ideológico y social de la globalización. Las críticas al neoliberalismo son, asimismo, prolíficas.

El concepto de “posneoliberalismo”, por el contrario y hasta el momento, solo tiene sentido y significación en el debate político latinoamericano. En efecto, esta noción nace desde América Latina y como una necesidad de caracterizar el tiempo histórico de los gobiernos latinoamericanos que surgieron desde las luchas sociales en contra del neoliberalismo y que configuraron los denominados “gobiernos progresistas” en referencia a Hugo Chávez y la “Revolución Bolivariana” en Venezuela; Evo Morales y el “Movimiento Al Socialismo” (MAS) en Bolivia; Rafael Correa y la “Revolución Ciudadana” en Ecuador; Néstor y Cristina Kirchner en Argentina; Lula Da Silva y Dilma Rousseff y el “Partido de los Trabajadores”, en Brasil; Tabaré Vázquez y José Mujica y el “Frente Amplio” en Uruguay, principalmente.

Fue una expresión utilizada por Emir Sader, Atilio Borón⁴, Carlos Figueroa Ibarra, entre otros⁵, para marcar una distancia con aquellos gobiernos

³ Véase: DÁVALOS, Pablo, “El proyecto político de la Sociedad del Monte Peregrino”, mimeo. Disponible en: <http://pablo-davalos.blogspot.com>; COCKET, Richard, *Thinking the Unthinkable. Think Tanks and the Economic Counter Revolution 1931-1983*, London, Harper Collins Publisher, 1994. Sobre una historia exhaustiva del neoliberalismo, véase también: AUDIER, Serge, *Néoliberalisme(s) Une archéologie intellectuelle*, Paris, Grasset, 2012.

⁴ BORÓN, Atilio, “El pos-neoliberalismo: un proyecto en construcción. En *La trama del neoliberalismo*”, en Emir Sader y Pablo Gentili (comp.), *Mercado, crisis y exclusión social*, Buenos Aires, CLACSO, 2003.

neoliberales adscritos a la agenda del Consenso de Washington. Con el concepto de “posneoliberalismo” se trataba de ubicar en la nueva geopolítica a los regímenes latinoamericanos que surgían en disputa con EEUU y fuertemente críticos con el modelo neoliberal. Estos gobiernos cambiaron el sentido de las políticas públicas hacia políticas más inclusivas y con mayor sensibilidad social, preocupándose por la inversión social y la lucha contra la pobreza. En un inicio, algunos de estos gobiernos latinoamericanos incluso acudieron a la ideología del socialismo para legitimarse⁶.

Sin embargo, las derivas extractivistas de estos gobiernos y su creciente separación con los movimientos sociales hasta llegar al punto de la confrontación abierta, entre otras señales, ameritan una reflexión adicional sobre la significación real del “posneoliberalismo”. ¿Se trata de una nueva categoría económica y política que rompe radicalmente con la tradición del neoliberalismo en América Latina o más bien es una continuación de este? y, además, ¿Por qué llamarlo *posneoliberalismo*? ¿Qué sentido tiene añadir una preposición a un prefijo?

Para Carlos Figueroa y Blanca Cordero, por ejemplo, en “*el posneoliberalismo, el Estado vuelve a adquirir la dimensión de agente rector de la vida social y lo público se coloca encima de lo privado*”⁷ pero no se problematiza sobre el retorno del Estado ni tampoco sobre el sentido que tiene “lo público”. Es decir, se asume que toda recuperación del Estado es ya una ruptura fuerte con el neoliberalismo. Se asumen las formas que asume la

⁵ Véase por ejemplo: FIGUEROA Ibarra, Carlos y CORDERO DÍAZ, Blanca (ed.), *¿Posneoliberalismo en América Latina? Los límites de la hegemonía neoliberal en la región*, México D.F., Universidad de Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélaz Pliego”, 2011; SADER, Emir, *Refundar el Estado. Posneoliberalismo en América Latina*, Buenos Aires, Instituto de Estudios y Formación de la CTA, 2008. Existe una crítica a Emir Sader desde una posición teórica cercana a lo planteado en el presente texto, realizada por la politóloga mexicana STOLOWICZ, Beatriz (2011) “El posneoliberalismo no es más que un manual táctico conservador para apuntalar al gran capital”, en *Rebelión*, 2011. Disponible en: <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=120994>

⁶ Hans Dieterich acuñaría el término de “socialismo del siglo XXI” para caracterizarlos. DIETERICH, Hans (s.f.), “El socialismo del Siglo XXI”, en *Rebelión*. Disponible en: <http://www.rebelion.org/docs/121968.pdf>.

⁷ FIGUEROA Ibarra, Carlos y CORDERO DÍAZ, Blanca (ed.), *¿Posneoliberalismo en América Latina?...*, op. cit., p.13.

política como criterios determinantes para calificar el tiempo político de los “gobiernos progresistas”.

Empero, más allá de las formas que puede asumir el Estado, sobre todo con referencia a los “gobiernos progresistas” latinoamericanos, pienso que es necesario darle un mayor contenido analítico y espesor epistemológico al concepto de “posneoliberalismo”, porque este concepto corre el riesgo de convertirse en un tópico ideológico destinado a encubrir y legitimar prácticas gubernamentales que lesionan los derechos de los trabajadores, destruyen el tejido social, cooptan a las organizaciones sociales en el interior del aparato del gobierno, expanden la frontera extractiva, criminalizan las disidencias, entre otros fenómenos, y que son invisibilizados porque provienen desde los “gobiernos progresistas”. La discusión sobre el significado del “posneoliberalismo”, en realidad, no es académica sino política. La delimitación y aclaración de este concepto puede ayudar a visibilizar y comprender de mejor manera las resistencias de los movimientos sociales de la región.

Para el efecto, es necesario comprender que América Latina como región ha sido integrada al sistema-mundo capitalista desde una relación asimétrica y desigual que corresponde a las nociones de centro-periferia y que los discursos políticos e ideológicos también forman parte de esa relación centro-periferia. Los países capitalistas más avanzados conforman el centro del sistema-mundo e imponen sus condiciones a la periferia por medio de diferentes mecanismos, entre ellos, el intercambio desigual, o la colonización económica y monetaria del cual fue garante y condición el FMI, por la vía de los programas de ajuste económico⁸; pero también crean las ideas, los conceptos y los marcos teóricos que definen y estructuran la comprensión de Lo Real. Como en esos países no consta entre sus prioridades el debate teórico sobre el “posneoliberalismo” entonces este debate no existe. Es necesario, en consecuencia, visibilizar ese debate, descolonizarlo de las relaciones de poder/saber centro-periferia y vincularlo con los procesos recientes del

⁸ Cfr. DÁVALOS, Pablo, *La democracia disciplinaria*, Quito, CODEU, 2011.

capitalismo como sistema-mundo desde aquello que Boaventura de Souza Santos denomina las “Epistemologías del Sur”⁹.

Posneoliberalismo, financiarización y gestión de riesgo en el sistema-mundo

Existen importantes mutaciones del capitalismo del siglo XXI que es necesario advertir y que marcan transiciones importantes en la regulación del sistema capitalista. La emergencia del discurso del neoliberalismo, de hecho, está asociada a los cambios en los patrones de la acumulación del sistema-mundo, desde la industrialización hacia la financiarización y la especulación. El discurso del neoliberalismo y su apelación a la liberalización de los mercados de capitales y la flexibilización de los mercados de trabajo correspondía, precisamente, a esa transición del capitalismo desde la industrialización hacia la financiarización. El neoliberalismo era el discurso que encubría y legitimaba las formas de ganancia especulativa financiera y la desarticulación del poder de los sindicatos por restablecer la capacidad adquisitiva de los salarios. Esa transición está caracterizada por las nuevas formas de propiedad y de gestión de las grandes corporaciones transnacionales¹⁰.

Empero, la caída del muro de Berlín y la implosión de los países socialistas significó la emergencia de un capitalismo global de *laissez-faire* que no tenía como límites sino a sí mismo. El capitalismo de financiarización, en esta coyuntura, produce un pliegue sobre sí mismo y pasa a gestionar el riesgo de la especulación y la financiarización como dinámica global en el sistema-mundo. Aquello que irrumpe es una situación de riesgo sistémico asociado a la financiarización y centralización del capital a escala mundial en un contexto de debilidad política de los sindicatos, pérdida de sentido emancipatorio para los partidos de izquierda y movimientos sociales en busca de marcos interpretativos más amplios.

⁹ DE SOUZA SANTOS, Boaventura, *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Santiago de Chile, Ediciones Trilce, 2013.

¹⁰ AGLIETTA, Michel y REBÉRIOUX, Antoine, *Dérives du capitalisme financier*, París, Albin Michel, 2004.

El capitalismo del siglo XXI apuesta al riesgo, lo produce, lo genera y lo establece como condición de posibilidad de la economía mundial, porque la gestión de riesgo le permite crear niveles de rentabilidad jamás imaginados y que superan incluso la rentabilidad de la especulación financiera. Para que se tenga una idea, en el mes de junio del año 2013 la especulación en productos financieros derivados alcanzó los 692.9 billones de USD, una cantidad diez veces más importante que toda la riqueza mundial medida en términos de P.I.B.¹¹. De estos instrumentos, aquellos dedicados específicamente a provocar las crisis financieras y monetarias, y que se conocen con el nombre de Credit Default Swaps (CDS) en el mismo periodo fueron de 24.47 billones de USD, el doble del P.I.B. de la Unión Europea en su conjunto para el mismo año¹².

Toda la política monetaria de EEUU, Canadá, la Unión Europea y Japón, entre las economías más importantes del sistema-mundo, están condicionadas y definidas desde la dinámica de la especulación financiera y la gestión del riesgo de esa misma especulación. Los bancos centrales del mundo se han convertido en prestamistas de última instancia y garantes del juego de casino del capitalismo financiero en donde, paradójicamente y gracias a los instrumentos financieros complejos como los derivados, ahora es más lucrativo provocar una crisis que resolverla.

En la gestión y administración del riesgo financiero-especulativo ya no es la capacidad productiva de una sociedad la que se integra a los circuitos de la especulación y financiarización sino el conjunto de la sociedad en cuanto sociedad. Aspectos que antes estaban por fuera del mercado y de la especulación ahora pertenecen a él. El mercado financiero-especulativo integra en sus propios circuitos al conjunto de la sociedad más allá de cualquier referencia a la producción, la distribución o el consumo.

¹¹ Véase: BANCO DE PAGOS INTERNACIONALES, *Statistical release. OTC derivatives statistics at end-June 2013*, Monetary and Economic Department, 2013. Disponible en: www.bis.org

¹² *Ibíd.*

El marco teórico del neoliberalismo clásico resulta insuficiente para comprender esa mercantilización e incorporación de toda la vida social a los circuitos financiero-especulativos y de gestión del riesgo de esa especulación, porque su episteme está acotada a los mecanismos monetarios y mercantiles de la circulación y la producción. Es un marco teórico muy restringido para las derivas que asume la especulación financiera internacional. Es necesario, por tanto, un marco teórico más comprehensivo, más inter y transdisciplinario y que surja desde la misma episteme neoliberal, porque aquello que se integra a los circuitos especulativos del mercado mundial es el conjunto de la vida social.

El plexo social se pliega en los circuitos financieros y de gestión de riesgo especulativo en su totalidad y la forma por la cual el nuevo discurso económico comprende este pliegue de la vida social en la financiarización es a partir de las *instituciones*.

Las *instituciones* son la respuesta teórica creada desde la episteme neoliberal para ampliar su propio marco teórico, pero no por cuestiones académicas sino por razones pragmáticas. No se trata de aquellas instituciones que fueron estudiadas por Castoriadis¹³, por poner un ejemplo, y en la cual subyace la complejidad de las sociedades; en absoluto, se trata de la visión liberal de las sociedades en las cuales las instituciones representan las reglas de juego de actores individuales que tienden a maximizar su egoísmo. En consecuencia, el marco teórico que emerge en la financiarización y administración del riesgo es, precisamente, aquel que toma como referencia a las *instituciones* como conjunto de la vida social e histórica.

El neoliberalismo tradicional y monetarista se transforma en un “neoliberalismo institucional”. Es decir, en un discurso más complejo, más vasto, más comprehensivo. Un discurso que incluso entra en contradicción y conflicto con la misma teoría tradicional del neoliberalismo. Es una transformación provocada y exigida desde las formas especulativas y

¹³ CASTORIADIS, Cornelius, *La Institución imaginaria de la sociedad*. Argentina, Buenos Aires, Tusquets Editores, 2010.

financieras de la acumulación del capitalismo que integra a las instituciones de la vida social al juego de casino mundial.

Existe, por tanto, una presión desde los circuitos de la especulación y la gestión de riesgo de esa especulación, por involucrar a todas las instituciones sociales en su juego especulativo. Estas transformaciones en la regulación del capitalismo alteran al sistema-mundo de forma importante porque generan presiones a la periferia que nacen desde la regulación por financiarización y la privatización de las instituciones que sostienen y estructuran a la vida social.

Estas imposiciones producen en los países de la periferia del sistema-mundo capitalista una dinámica de despojo de territorios, de saqueo de recursos, de destrucción de las solidaridades y reciprocidades existentes, de expoliación a las sociedades y de uso estratégico de la violencia que, de cierta manera, repiten las formas primitivas de violencia que existieron durante la acumulación originaria del capital de los siglos XVIII y XIX.

Es como si esa violencia originaria, y que constituyó al capitalismo históricamente, fuese la condición de posibilidad del capitalismo en su periferia pero en forma permanente y continua. A más desarrollo capitalista en los países del centro, más violencia, más saqueo, más despojo en las regiones de la periferia. Es como si el capitalismo tuviese dos relojes: en el primer reloj las regiones del centro del sistema-mundo tienen un tiempo hacia delante, mientras que en la periferia ese mismo reloj las lleva al pasado.

A este proceso que repite las formas primitivas y originarias de violencia de la acumulación capitalista en las regiones de la periferia del sistema-mundo, la economía política lo ha denominado como “acumulación por desposesión”¹⁴

¹⁴ La “*acumulación por desposesión*” es una hipótesis originalmente propuesta por Rosa Luxemburg y que ha sido retomada por el geógrafo marxista David Harvey, quien recoge la afirmación de Marx por la cual el denominado periodo de la acumulación originaria del capitalismo estuvo conformada por momentos de explotación, saqueo, violencia, como por ejemplo las *Enclosure Acts*, la sobreexplotación salarial, o la conquista Europea de América. Para David Harvey, estas dinámicas de saqueo y violencia aún continúan vigentes en el capitalismo contemporáneo. Cfr. HARVEY, David, *The New Imperialism*, Nueva York, Oxford University Press, 2003.

y están asociadas a las nuevas formas de regulación por financiarización y gestión de riesgo especulativo a escala global.

La trama institucional del posneoliberalismo: hacia el neoliberalismo institucional

Ahora bien, la acumulación por desposesión se inscribe en el interior de una trama institucional que sirve de soporte a la financiarización y la gestión de riesgo del capitalismo especulativo. La trama institucional es clave para ese proceso especulativo porque a partir de ella se crean nuevas oportunidades y nuevas condiciones de posibilidad para la especulación. El eje más importante de esa trama institucional es, definitivamente, el Estado.

Sin el Estado no hay soporte para esa trama institucional y sin esa trama la especulación financiera y la gestión de riesgo perderían una de sus principales bazas. Por ejemplo, el mercado de carbono que involucra a los principales bancos del mundo y que generó en el año 2012 instrumentos derivados por cerca de 200 mil millones de USD¹⁵, sería imposible sin la existencia del Estado y las regulaciones de cambio climático. De igual manera con toda la industria de los “servicios ambientales”, sería imposible sin la regulación que la codifica, estructura y establece. El “neoliberalismo institucional” necesita del Estado como actor fundamental de la economía global.

El retorno del Estado es una necesidad económica de la globalización financiera y la privatización de las instituciones de la vida social. El retorno del Estado fue ya propuesto por el Banco Mundial en su Informe de Desarrollo Humano del año 1997. Para el Banco Mundial, no se trataba de saber si el Estado tenía que formar parte activa de la economía sino la medida de esa participación. Ese informe del Banco Mundial, de hecho, tuvo como consultor

¹⁵ LOHMANN, Larry, *Mercados de carbono. La neoliberalización del clima*, Quito, Abya Yala, 2012.

principal a Douglass North, premio “Nobel” de economía y teórico importante del “neoliberalismo institucional”.

El nuevo marco teórico del “neoliberalismo institucional” articula conceptos y categorías que parecen alejadas del neoliberalismo tradicional pero que, en realidad, lo continúan a otro nivel, como por ejemplo: elecciones y conducta no-racional, costos de transacción, acción colectiva, economía de la información, derechos de propiedad, seguridad jurídica, inversión extranjera directa, externalidades, incertidumbre, contractualidad, organización económica, principal y el agente etc., es decir, el discurso del neoinstitucionalismo económico¹⁶.

El retorno del Estado a la economía no es una iniciativa de los “gobiernos progresistas” latinoamericanos sino una dinámica que se inscribe en el interior de la acumulación del capitalismo y su necesidad de ampliar la mercantilización y la especulación hacia la trama institucional de la sociedad. La recuperación de la violencia legítima del Estado tenía también por objeto garantizar la transferencia de la soberanía política del Estado hacia las corporaciones transnacionales y hacia la finanza corporativa mundial en el formato de los Acuerdos Internacionales de Inversión que tienen en la Organización Mundial de Comercio (OMC) su instancia más importante.

El “neoliberalismo institucional” tiene como centro de gravedad de sus preocupaciones teóricas, precisamente, los derechos de propiedad, y la institución que vigila y protege los derechos de propiedad en el ámbito internacional es, justamente, la OMC. La mayor parte de los Estados-nación en la globalización están articulando y armonizando sus leyes internas en función

¹⁶ Sobre el neoinstitucionalismo véase: DÁVALOS, Pablo, *Neoinstitucionalismo y reforma estructural*, ALAI – América Latina en Movimiento, 2010. Disponible en internet: <http://alainet.org/active/42669&lang=es>. Véanse también los textos ya clásicos de NORTH, Douglas, *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico*, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1993; MARCH, James y OLSEN, Johan, *El Redescubrimiento de las Instituciones. La base organizativa de la política*, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1997.

de lo establecido desde la OMC, a este proceso lo denomino “convergencia normativa”.

El Estado y la violencia posneoliberal

La vinculación de la trama institucional a los circuitos de especulación y de gestión de riesgo financiero-especulativo desgarran el tejido social. Produce una violencia que se extiende por todo el sistema-mundo. Ya no se trata solamente de la violencia de la producción mercantil sino la desestructuración de instituciones ancestrales que habían servido de soporte para la vida de las sociedades desde su misma conformación histórica.

Un ejemplo de esa tensión provocada desde la especulación y la gestión de riesgo especulativo es la incorporación de los territorios a los circuitos financieros especulativos internacionales. Millones de seres humanos son desalojados de sus territorios ancestrales porque ahora estos territorios son fichas importantes en el juego de casino mundial, el extractivismo es una forma de esa violencia. Para procesar esa violencia el Estado no solo es fundamental sino también estratégico.

Efectivamente, el rol del Estado es clave porque desde ahí se fundamenta la legitimidad de la violencia de los modelos de dominación política. Se trata, en consecuencia, de otorgar al Estado la suficiente fuerza política que permita absorber a su interior toda la energía social y permitir, de esta forma, la acumulación por desposesión; con esa energía política el Estado puede disciplinar a sus sociedades desde una matriz de violencia sustentada en el discurso de la ley y el orden.

Pero la violencia de la desposesión se invisibiliza. El retorno del Estado se asume como un triunfo político en contra del neoliberalismo tradicional. El posneoliberalismo crea esa invisibilización de la violencia de la desposesión, porque utiliza mecanismos de control social que aparecen como medidas

económicas en beneficio de los más pobres, como por ejemplo las políticas de inclusión social de las transferencias monetarias condicionadas, o la política fiscal en salud, educación, o “inclusión social” como la llama el Banco Mundial. Mas, en realidad, son dispositivos estratégicos que encubren la violencia de la desposesión¹⁷.

De todos esos dispositivos quizá el más importante porque al tiempo que encubre la violencia la legítima, es aquel de la “lucha contra la pobreza” y su correlato del “financiamiento al desarrollo”. Los denominados “gobiernos progresistas” de América Latina fueron los instrumentos, por así decirlo, más idóneos para encubrir la violencia de la desposesión. Su discurso de financiar la lucha contra la pobreza a través del extractivismo fue el argumento legitimante de esa violencia y que se expresó de múltiples formas¹⁸. Por ello, muchos críticos con el neoliberalismo y que provenían de la izquierda fueron conniventes con la violencia de la desposesión que desplegaron los “gobiernos progresistas” latinoamericanos, porque nunca visibilizaron esa violencia y consideraron que el momento posneoliberal era una ruptura definitiva con la violencia del neoliberalismo¹⁹.

¹⁷ Sobre la violencia de las Transferencias Monetarias Condicionadas del Banco Mundial y que ahora forman parte de las políticas de “inclusión social” de los gobiernos latinoamericanos, sean estos progresistas o no, véase ZIBECHI, Raúl, *América Latina: Contrainsurgencia y pobreza*, Bogotá, Desde Abajo, 2010.

¹⁸ En su discurso de posesión como Secretario de UNASUR, el 11 de junio de 2012, el venezolano Alí Rodríguez Araque, expresaba claramente los contenidos del discurso extractivista y posneoliberal: “Yo no tengo duda en afirmar, que precisamente, si la mayor fortaleza de la que disponemos, es ese gigantesco reservorio de recursos naturales, es la fortaleza que debemos aprovechar para combatir la pobreza, para generar empleo, que a su vez expande al mercado interno, que crea el primer paso para combatir la pobreza, que genera en consecuencia un conjunto de resultados positivos para toda la región. Entonces se trata de trazar una estrategia que tenga como gran objetivo el óptimo aprovechamiento de esos recursos naturales, con varios objetivos, desde luego está la necesidad de obtener ingresos para los Estados, y para ello incluso, es necesario tomar en cuenta otro factor, todo recurso natural está alojado en la tierra, y al estar en la tierra su explotación comporta ocupamiento territorial y eso lleva el suyo a plantear el problema de la soberanía ...” RODRÍGUEZ ARAQUE, Alí (2012) “Discurso de posesión como Secretario de UNASUR”, 2012. Disponible en: <http://www.unasursg.org/uploads/77/cd/77cd2a99a9fd1432bc75b0070fb43b08/Discurso-Ali-Rodriguez-Posesion-Secretaria-General.pdf>.

¹⁹ Véase por ejemplo, a este respecto, la posición connivente de Marta Harnecker en relación al proceso ecuatoriano y el partido de gobierno Alianza País: HARNECKER, Martha, *Ecuador: Una nueva izquierda...*, op. cit. Martha Harnecker ganó en el año 2014 uno de los premios más importantes para los intelectuales que legitiman y justifican a los “gobiernos progresistas” latinoamericanos e instituido en el año 2005 por el gobierno venezolano: “Premio Libertador para el Pensamiento Crítico 2013”

Ahora bien, la invisibilización de la violencia de la desposesión es un fenómeno más complejo, porque apela a universos simbólicos, imaginarios sociales y mecanismos de control y disciplina a la sociedad que dan cuenta de una estrategia de dominación política con un alto contenido heurístico. Es decir, a medida que la sociedad resiste que su trama institucional sea privatizada y crea nuevas formas de resistencia, la estrategia de dominación política trata de estar siempre un paso por delante de esas resistencias, trata de anticiparlas para anularlas, controlarlas y destruirlas. A esa capacidad política de controlar las resistencias que tienen ahora los Estados que emergen desde la transición del neoliberalismo tradicional hacia el neoliberalismo institucional, la denomino “modelos heurísticos de dominación política” y son consustanciales del posneoliberalismo.

A todos estos procesos que configuran una nueva racionalidad política sustentada en mecanismos liberales de la política, como las elecciones, y que tienen como sustento cambios institucionales profundos con el objetivo de situar la trama institucional de la sociedad en el interior de los circuitos de financiarización y gestión de riesgo especulativo, con Estados fuertes y modelos de dominación social y política que invisibilizan la violencia de la desposesión la denomino *posneoliberalismo*.

Acudo a esta denominación para distinguir el neoliberalismo del Consenso de Washington y la imposición colonial del Fondo Monetario Internacional, en especial durante la década de los años ochenta, de aquellas formas diferentes que asume la política en las etapas posteriores al ajuste del FMI porque, aparentemente, propone una ruptura con las recomendaciones del Consenso de Washington, pero continúa con los cambios institucionales y sociales imprescindibles para garantizar la acumulación en el capitalismo tardío. En consecuencia, me desprendo de la interpretación hecha, entre otros, por Emir Sader o Atilio Borón, que ven en el posneoliberalismo una ruptura con el neoliberalismo clásico.

Más bien al contrario, considero al posneoliberalismo como un proceso complejo y que integra varias dimensiones que continúan, profundizan, consolidan y extienden la violencia neoliberal. Existen varias dimensiones que configuran al posneoliberalismo, como por ejemplo, las reformas estructurales de tercera generación, la convergencia normativa, los modelos heurísticos de dominación política, la criminalización social, la ampliación de la frontera extractiva, etc.

La noción de posneoliberalismo nos permite comprender esa aparente contradicción entre los cambios políticos que se suscitaron en la región, muchos de ellos de la mano de gobiernos aparentemente críticos con el FMI y con el neoliberalismo, con respecto a las relaciones de poder que emergen desde la acumulación por desposesión, con la consecuente tensión y conflictividad social que ahora utiliza el recurso de criminalizar a la sociedad para proteger el sentido y la dinámica de la acumulación capitalista. El posneoliberalismo nos permite estar alertas de esa intención de poner a la economía entre paréntesis y provocar cambios políticos sin alterar un milímetro el sentido de la acumulación y las relaciones de poder que le son correlativas.

La noción de posneoliberalismo problematiza la tradicional topología de la política entre partidos y organizaciones de “izquierda”, de “derecha” y de “centro”, porque las convierte en meros dispositivos ideológicos de la acumulación del capital en el interior de los modelos heurísticos de dominación política. En el momento posneoliberal, para la acumulación por desposesión y la violencia que suscita, el hecho de que un gobierno sea de “izquierda” o de “derecha” es irrelevante. Su relevancia proviene de la forma por la cual administra la dialéctica consenso/disenso en el interior de los modelos de dominación política. Fuera de esta dialéctica, su importancia es prácticamente nula.

Ahora se puede comprender que los “gobiernos progresistas” fueron la forma política que asumió la acumulación capitalista en momentos del colapso de una variante del neoliberalismo, aquel del ajuste macrofiscal del FMI. El

ajuste fondomonetarista, al menos en el caso de los países latinoamericanos, finalmente se agotó, pero cedió sus posibilidades hacia una variante del neoliberalismo que tiene su interés en las instituciones de la vida social en el sentido más amplio del término y en la disciplina y control a las sociedades.

Aquello que está en disputa no es la colonización monetaria y fiscal que realizó el FMI sino la puesta en valor de las instituciones por la vía del extractivismo minero, de las industrias de los servicios ambientales, transgénicos, agro-combustibles, ejes multimodales de transporte, etc. Esta puesta en valor de las instituciones de la vida social implica violencia y criminalización social²⁰.

El posneoliberalismo permite comprender varias dinámicas básicas, como por ejemplo, la acumulación por desposesión, el cambio institucional del Estado y del mercado, y los modelos de dominación política, en el interior de un solo proceso histórico signado por la mutación del capitalismo desde la financiarización hacia la gestión del riesgo especulativo. Es cierto que este proceso comprende al Estado de forma diferente al neoliberalismo del Consenso de Washington, pero no significa que implique una ruptura con este. Es por esto que la referencia al posneoliberalismo, debe verse no como una fractura del modelo neoliberal sino como su continuación lógica en su variante de “neoliberalismo institucional” y, en consecuencia, se considera a los “gobiernos progresistas” latinoamericanos como la forma política que asume el posneoliberalismo.

Referencias bibliográficas

AGLIETTA, Michel y REBÉRIOUX, Antoine, *Dérives du capitalisme financier*, París, Albin Michel, 2004.

AUDIER, Serge, *Néoliberalisme(s) Une archéologie intellectuelle*, Paris, Grasset, 2012.

²⁰ Con relación a las disputas sobre los territorios en América Latina puede consultarse: GONÇALVES, Carlos Walter, *Territorialidades y lucha por el territorio en América Latina. Geografía de los movimientos sociales en América Latina*, Caracas, Ediciones IVIC, 2009.

BANCO DE PAGOS INTERNACIONALES, *Statistical release. OTC derivatives statistics at end-June 2013*, Monetary and Economic Department, 2013. Disponible en: www.bis.org

BORÓN, Atilio, “El pos-neoliberalismo: un proyecto en construcción. En *La trama del neoliberalismo*”, en Emir Sader y Pablo Gentili (comp.), *Mercado, crisis y exclusión social*, Buenos Aires, CLACSO, 2003.

CASTORIADIS, Cornelius, *La Institución imaginaria de la sociedad*. Argentina, Buenos Aires, Tusquets Editores, 2010.

COCKET, Richard, *Thinking the Unthinkable. Think Tanks and the Economic Counter Revolution 1931-1983*, London, Harper Collins Publisher, 1994.

DÁVALOS, Pablo, *La democracia disciplinaria*, Quito, CODEU, 2011.

DÁVALOS, Pablo, “El proyecto político de la Sociedad del Monte Peregrino”, mimeo. Disponible en: <http://pablo-davalos.blogspot.com>.

DÁVALOS, Pablo, *Neoinstitucionalismo y reforma estructural*, ALAI – América Latina en Movimiento, 2010. Disponible en internet: <http://alainet.org/active/42669&lang=es>

DE SOUZA SANTOS, Boaventura, *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Santiago de Chile, Ediciones Trilce, 2013.

DIETERICH, Hans (s.f.), “El socialismo del Siglo XXI”, en *Rebelión*. Disponible en: <http://www.rebelion.org/docs/121968.pdf>.

FIGUEROA Ibarra, Carlos y CORDERO DÍAZ, Blanca (ed.), *¿Posneoliberalismo en América Latina? Los límites de la hegemonía neoliberal en la región*, México D.F., Universidad de Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélaz Pliego”, 2011.

GAUDICHAUD, Franck, *El volcán latinoamericano. Izquierdas, movimientos sociales y neoliberalismo al sur del Río Bravo. Balance de una década de luchas*, ALAI – América Latina en Movimiento, 2010. Disponible en: <http://alainet.org/active/40895>

GAUDICHAUD, Franck, *Emancipaciones en América Latina*, Quito, IAEN-Pensamiento Radical, 2013.

GONÇALVES, Carlos Walter, *Territorialidades y lucha por el territorio en América Latina. Geografía de los movimientos sociales en América Latina*, Caracas, Ediciones IVIC, 2009

HARNECKER, Martha, *Ecuador: Una nueva izquierda en busca de la vida en Plenitud*, Quito, Abya Yala, 2011.

HARVEY, David, *The New Imperialism*, Nueva York, Oxford University Press, 2003.

LOHMANN, Larry, *Mercados de carbono. La neoliberalización del clima*, Quito, Abya Yala, 2012.

MARCH, James y OLSEN, Johan, *El Redescubrimiento de las Instituciones. La base organizativa de la política*, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1997.

NORTH, Douglas, *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico*, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1993.

RAMÍREZ, René, *Izquierda postsocialista*, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010.

RAMÍREZ GALLEGOS, Franklin, "Perspectivas del proceso de democratización en el Ecuador. Cambio político e inclusión social (2005-2010)", en Anja Dargatz y Moira Zuazo (ed.), *Democracias en transformación. ¿Qué hay de nuevo en los nuevos Estados andinos?*, Bolivia-Ecuador-Venezuela: FES-ILDIS, 2012.

RODRÍGUEZ ARAQUE, Alí (2012) "Discurso de posesión como Secretario de UNASUR", 2012. Disponible en: <http://www.unasursg.org/uploads/77/cd/77cd2a99a9fd1432bc75b0070fb43b08/Discurs-o-Ali-Rodriguez-Posesion-Secretaria-General.pdf>

SADER, Emir, *Refundar el Estado. Posneoliberalismo en América Latina*, Buenos Aires, Instituto de Estudios y Formación de la CTA, 2008.

SENPLADES (2010) *Los nuevos retos de América Latina: socialismo y sumak kawsay*, Quito, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010. Disponible en: <http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Socialismo-y-Sumak-Kawsay.pdf>

.STOLOWICZ, Beatriz (2011) "El posneoliberalismo no es más que un manual táctico conservador para apuntalar al gran capital", en *Rebelión*, 2011. Disponible en: <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=120994>

ZIBECHI, Raúl, *América Latina: Contrainsurgencia y pobreza*, Bogotá, Desde Abajo, 2010.

Los movimientos sociales y el Estado en Guatemala: balances y perspectivas

Ileana Valenzuela¹

Resumen

A pesar de que la destrucción y desintegración de la autonomía, organización, solidaridad y trabajo conjunto ancestrales, precursores de una sociedad sin explotación ni destrucción, fueron uno de los objetivos del conflicto armado que por 35 años vivió Guatemala, después de más de cinco siglos de dominación, el pueblo guatemalteco sigue valientemente en pie, luchando contra el pillaje de su territorio, la explotación de su fuerza de trabajo y la destrucción de su medio cultural y natural. Después de los Acuerdos de paz, sin embargo, sus luchas y movimientos han sido encajonados en un marco reformista y una pantalla de democracia burguesa mientras que, El Estado sigue utilizando tanto la violencia como la manipulación ideológica para controlarlos, y la mayoría de los líderes sigue teniendo una gran ilusión en dicha democracia, lo que vacía a los movimientos y luchas de su potencial transformador. De manera casi invisible, sin embargo, la revolución se está llevando a cabo todos los días en el país, por medio de múltiples iniciativas y trabajos subterráneos que salen de la lógica del sistema capitalista. El desafío ahora es sacarlos del marco reformista en que se encuentran, de manera a dar un salto cualitativo, comenzar a definir estrategias de acción político-económicas y crear una correlación de fuerzas favorable a un cambio social global e integral. Esto es necesario si se quiere salir del caos en el que se encuentra el país y contrarrestar la violencia y la represión con una fuerza popular, construir estrategias solidarias con objetivos claros, sin lo cual serán nuevamente presa del Estado y de las políticas reformistas. Un movimiento social conciente, organizado y subterráneo, conformado por personas y organizaciones comprometidas, que rompan con las divisiones que lo debilitan y lo constituyan en una fuerza política lo suficientemente potente como para cambiar el sistema, es el reto: Trabajar muy duro para informarnos, estudiar y construir la nueva sociedad todos juntos (a partir del contexto capitalista en el que nos encontramos), uniéndonos con aquellos que caminan en la misma dirección. Darnos cuenta de la ficción en la que vivimos y expulsar de nuestras mentes la alienación en la que nos han mantenido

¹ Investigadora independiente, Asesora ASAPP, ileanaval@yahoo.com.

desde que nacimos para trabajar unidos a nivel nacional e internacional y derribar al discurso, las ficciones, el engranaje y la inercia que nos han impuesto, mientras contribuimos a la construcción del nuevo mundo.

Palabras clave: revolución subterránea, economía solidaria, cambio social radical

Abstract

Despite the destruction and disintegration of autonomy, organization, solidarity and work together, ancestral precursors of a society without exploitation and destruction, were one of the objectives of the armed conflict that Guatemala lived for 35 years, after more than five centuries domination, the Guatemalan people is still standing bravely struggling against pillage of its territory, the exploitation of their labor and the destruction of their cultural and natural environment. After the Peace Accords, however, struggles and movements have been encased in a reformist framework and screen while the State continues to use both violence and ideological manipulation to control them, and most of the leaders have still a great illusion on that democracy, which empties the movements and the struggles of its transformative potential. Almost invisibly, however, a revolution is taking place every day in the country, through multiple underground initiatives, leaving the logic of the capitalist system. The challenge now is to remove them from the reformist framework in which they are, so to make a qualitative leap, start defining political-economic strategies of action and create a favorable correlation of forces to a global and comprehensive social change. This is necessary if we want to leave the chaos, violence and repression with a popular strength, build supportive strategies with clear objectives, without which they will be prey of the State and reformist policies again. A conscientious, organized and underground social movement made up of people and organizations involved, to break with the divisions that weaken and constitute a powerful enough system to change the political force, is the challenge: Working hard to tell, study and build a new society together (from capitalist context in which we are), uniting with those who walk in the same direction. Realize the fiction in which we live and expel from our minds alienation in which they have kept us from birth to work together at national and international levels and break down the speech, the fictions, the gear and the inertia imposed on us while we contribute to the construction of the new world.

Keywords: underground revolution, solidarity economy, radical social change

Introducción

Si tomamos como movimiento social toda aquella manifestación y/o lucha colectiva en la que las clases dominadas expresan su inconformidad en contra de regímenes dominantes que monopolizan el poder, al mismo tiempo que aspiran a una sociedad diferente, podemos afirmar que, debido a la rebeldía y dignidad inherentes a los seres humanos, han existido movimientos

sociales en todas las épocas históricas en las que ha existido dominación e injusticia y en las que ha existido un Estado para refrendarlas. Durante miles de años, sin embargo, estos movimientos raramente han logrado acabar con los regimenes de dominación y, aún cuando lo han logrado solamente ha sido para que surja una nueva clase dominante, nuevas instituciones de poder y nuevas formas de injusticia, de despojo y explotación.

Guatemala, pequeño país de 109,890 kilómetros cuadrados con una población actual estimada alrededor de 15 millones de habitantes es un ejemplo del proceso de cambio que desde la conquista española han tenido los diferentes movimientos de lucha de los pueblos y las diferentes formas que en ese proceso ha tomado el Estado, en tanto que construcción social que cambia históricamente según las formas de producción y organización del trabajo en cada sociedad de dominación. Desde la independencia en 1821 hasta el Estado democrático/populista/totalitario actual, pasando por el Estado Liberal, se han ido consolidando las instituciones burguesas y se formaron los mercados nacionales. Después de la Segunda guerra mundial, el Estado nación que se supone soberano, independiente y sujeto a una Constitución y a sus normas específicas se consolida en el país. Pero, esto no ha sido el resultado de un proceso interno de desarrollo capitalista ni de la lucha entre la burguesía contra instituciones medioevales sino el resultado de la imposición de un modelo externo de capitalismo dependiente y sus instituciones, que se calcan sobre formas de servidumbre, a menudo esclavistas, y una clase dominante que basa su poder económico en la exportación de productos principalmente agrícolas.

A pesar del carácter democrático que siempre ha querido mostrar, incluyendo al Estado benefactor, el Estado-nación ha sido siempre en Guatemala un Estado represor; Salvo bajo los gobiernos revolucionarios de Arevalo y Arbenz, en los que tanto el gobierno como la población creyeron realmente en la posibilidad de construir una democracia al servicio del pueblo en el marco del sistema capitalista. A parte ese caso, la función del Estado ha sido siempre aniquilar todos los intentos de instituir una democracia progresista

(identificada como comunismo), al mismo tiempo que sostiene política y económicamente a las clases dominantes, nacionales e internacionales. Ya sea, combatiendo a la guerrilla, que a sus inicios a principios de los años 60 del siglo XX se planteaba la substitución del sistema capitalista por el socialismo, mismo si este estaba inspirado en la Unión Soviética y Cuba, ya sea instituyendo una terrible represión a la guerrilla y a la población principalmente indígena durante los años 70-80, ya sea como actualmente, reprimiendo violentamente, bajo la pantalla de la democracia y el combate al crimen organizado a los grupos que se oponen pacíficamente a los megaproyectos o defienden sus territorios. Incluso, cuando se creyó que la naturaleza del Estado podía cambiar con los Acuerdos de paz (1996), en los que la ficción democrática y el dinero de la cooperación extranjera y organizaciones internacionales como las Naciones Unidas (ONU) hicieron creer a la población que el Estado es el representante del pueblo y tiene la obligación de resolver sus problemas, la violencia del Estado contra el pueblo y principalmente contra los indígenas y campesinos ha estado siempre presente.

Las clases dominantes, ya sea por medio de la violencia y la represión, ya sea por medio de la manipulación ideológica, la institucionalización del poder y cooptación de los líderes han logrado bajo las diferentes formas estatales crear una relación de fuerzas a su favor y desarmar los movimientos y luchas, utilizando ambas (violencia y/o manipulación) según las circunstancias concretas y el contexto histórico en que se encuentran. Al mismo tiempo que, las clases dominadas, que en determinado momento llegaron a creer que la dominación podía llegar a ser substituida por una sociedad sin dominación, cuando se tomara el poder a través de la violencia revolucionaria y se internacionalizara la lucha de los pueblos, fueron perdiendo poco a poco sus convicciones y reduciendo sus movimientos a formas puntuales, corporativistas y reformistas vacías de todo objetivo de cambio social.

En el discurso desapareció toda alusión al imperialismo, al colonialismo, a la opresión, a la explotación y al cambio radical de sistema socio-económico y surgieron categorías de análisis como globalización, inversión extranjera,

competitividad, etc. El discurso de las organizaciones internacionales y ONG se impuso sobre las aspiraciones del pueblo: mesas de dialogo, concertación, lucha contra la pobreza, distribución de las riquezas, objetivos del *milenium*, Estado de Derecho, etc.

Las movilizaciones y protestas no conducen a ninguna parte, desmovilizan al pueblo y lo vuelven apático e indiferente. La izquierda y los intelectuales de izquierda no han nunca hecho una crítica ni una auto-crítica profundas de su actuación a partir del periodo que viene desde los acuerdos de paz en 1996 hasta ahora. Tampoco han buscado alternativas que salgan no solamente de la violencia/democracia burguesas, sino remetan en causa los objetivos y formas de funcionamiento de los movimientos sociales durante ese periodo. Sin embargo, todos los elementos para construir esas alternativas y esa estrategia existen desde ya y se manifiestan en forma subterránea. Su construcción es un proceso revolucionario inédito en el que el cambio de paradigma socio-económico va más allá de los conceptos de revolución y lucha de clases del siglo XIX para adecuarlos a la realidad que se está viviendo en Guatemala y en el mundo en el siglo XXI, involucrando a todas las personas, comunidades y pueblos que están siendo explotados, despojados y oprimidos por el capitalismo: *“la lucha de clases resta el motor de esta estrategia disociativa pero aquí igualmente la lógica de la diversidad debe impregnar nuestra reflexión: Al situamos a nivel del sistema mundial debemos ensanchar nuestros conceptos tradicionales, como el concepto de lucha de clases que debe ser singularmente profundizado para explicar la diversidad de las clases dominadas”*.²

I Antecedentes históricos

Las relaciones entre el Estado, la conflictividad social y los movimientos sociales en Guatemala en la última década (2003-2013) no pueden entenderse

² MELLAH, Faouez, “L’Etat dans les formations sociales périphériques: éléments pour un débat”, en *Cahiers de l’IUED: Les espaces du prince, L’Etat et son expansion dans les formations sociales dependantes*, París, PUF, 1977, p.48 [traducción propia].

sin analizar, aunque sea brevemente, las diferentes formas que toma el Estado en tanto que estructura de dominación desde la llegada de los españoles con la dominación de los Reyes de España, los motines en los pueblos indios y las rebeliones, fuertemente reprimidas, de los indígenas contra el Estado colonial. Con la independencia que se lleva a cabo pacíficamente en 1821, Guatemala se convierte en república independiente, conducida por los criollos que dejan intacto el régimen de explotación de los indígenas y la estructura administrativa y política de la colonia: *“El Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1821 no introdujo cambios a las estructuras del poder colonial, salvo la mención que la figura del rey dejó de ser factor de legitimidad; el sentido conservador del acto explica que el español Capitán General del Reino de Guatemala Gabino Gainza fuera nombrado como el jefe del nuevo Estado. En consecuencia, el Estado independiente que la sociedad guatemalteca empieza a desarrollar en la segunda década del siglo XIX, contiene instituciones, (iglesia, ejército, burocracia), formas económicas, ideologías propias del poder español dominante”*³.

Después de un periodo de luchas entre conservadores y liberales, los regímenes surgidos 50 años después, crearon un Estado Liberal (1871), dependiente ya sea de los capitales ingleses, alemanes o estadounidenses, basado en la filosofía democrática liberal y sostenido por aparatos de justicia y ejércitos nacionales. Un Estado oligárquico al que se le ha dado el nombre de Estado-finquero, basado en la producción y exportación de café producido en grandes latifundios en los que se hacía y todavía se hace una fuerte explotación de la fuerza de trabajo indígena. Toda una serie de dictadores se encargan de reprimir los levantamientos del pueblo, hasta llegar a la revolución de octubre 1944, en la que un grupo de personas creyendo en el discurso de libertad y democracia de la postguerra trató de construir un Estado capitalista/democrático/progresista con el fuerte apoyo de los maestros, estudiantes, obreros, campesinos, parte del ejército y clases medias.

³ TORRES RIVAS, Edelberto, *El Estado en Guatemala: ¿orden con progreso?*, Guatemala, PNUD, 2010.

El objetivo de los gobiernos revolucionarios (1944-1954) fue el de implementar una economía capitalista, que tomara en cuenta a todos los partidos (incluyendo al comunista) y beneficiara a toda la población, sobre todo a los obreros y campesinos, aboliendo la servidumbre, apoyando al movimiento sindical y a los derechos de la mujer, construyendo infraestructura e implementando la reforma agraria. Esto no pudo durar mucho tiempo, en cuanto el segundo gobierno de la revolución (1950-1954) intentó tocar los intereses de los Estados Unidos éstos hicieron correr a nivel nacional e internacional la voz de que Guatemala era un país comunista y había que derrocar al gobierno de Arbenz. Lo que hicieron con el apoyo de una parte del ejército guatemalteco y de la CIA, propiciando en 1954 una invasión desde Honduras y poniendo a la cabeza del gobierno a un militar a su servicio que implementó una ficción de democracia representada por toda una sucesión de gobiernos militares electos constitucionalmente sumamente represores de los movimientos sociales⁴. Siendo desde entonces la historia de los movimientos sociales en Guatemala un ciclo en los que, en su parte ascendente la lucha se fortalece (periodo que los militares aprovechan para identificar a los líderes comprometidos y honestos), mientras que en su parte descendente se desata la represión y los militares aprovechan para eliminarlos.

En 1962 surgió la primera guerrilla conformada por jóvenes militares, estudiantes, maestros, trabajadores y campesinos descontentos que se declararon en guerra con El Estado al que claramente conceptualizaban como el instrumento de las clases dominantes y del imperialismo. Así se desencadenó el conflicto armado que debía durar 35 años entre las organizaciones guerrilleras y el Estado de Guatemala.

Esta primera guerrilla localizada en el oriente del país fue eliminada durante los años '70 pero resurgió en el norte y occidente a finales de esa

⁴ “Dentro de esa estrategia política de la militarización, la primera característica de los partidos es la de ser la fachada que aparente el juego democrático, ocultado el verdadero centro de poder político que se ubica en el ejército. Este es el verdadero árbitro que, de acuerdo a su estrategia y a las conveniencias de la clase dominante y el imperialismo, decide quienes son los partidos que van a participar y en que grado, en las tareas políticas del sistema”. IEPALA, *Guatemala: un futuro próximo*, Madrid, Iepala, 1980, p.136).

década. *“No obstante, la dominación de Guatemala por el ejército, y por las prosperas elites económicas no permaneció sin desafíos. La movilización popular continuó a lo largo de toda la década de los años 70 a niveles cada vez mayores [...]. A principios de los años 80, el terrorismo de Estado fue institucionalizado a un nivel sistemático. Más de cien mil guatemaltecos, especialmente campesinos indígenas, fueron asesinados [...]. Para cubrir las apariencias, el sistema político de dominación de la población fue cambiado a mediados de la década de 1980. En 1984 se efectuaron elecciones para la integración de una Asamblea Constituyente, realizándose en 1985 elecciones presidenciales relativamente limpias y libres”*⁵, siendo uno de los objetivos de esta violencia no solamente despojar a los indígenas de sus tierras sino también, erradicar de raíz su cultura, sus conocimientos y tradiciones, razón por la que la violencia se dirigió muy especialmente hacia las mujeres y los ancianos, receptáculos de dicha cultura. Paralelamente, el rol del Estado fue también en esa época el de asegurar el proceso modernizador de la economía (Mercado Común Centroamericano, substitución de importaciones, revolución verde, incursiones de las compañías petroleras y mineras, etc.).

Los Acuerdos de Paz que pusieron fin a los sangrientos conflictos político-militares pretendían no solamente poner un término a la guerra sino que también querían sentar las bases para que se estableciera una mayor democracia y justicia social en el país. En realidad, con un discurso reformista, apolítico e ahistorico (que no pone en causa los fundamentos del capitalismo) los Acuerdos de Paz promueven el crecimiento económico y la modernización del Estado, sosteniendo que dichos crecimiento y modernización son indispensables para el progreso y desarrollo del país. En contra de los hechos históricos que muestran que esto no es cierto y de las críticas que se les hacen a los Acuerdos de Paz en el país, la izquierda siguió afirmando hasta muy recientemente (2014) la validez y vigencia del proceso de paz como única alternativa para el futuro de Guatemala: *construir la democracia y lograr el desarrollo económico y social en un clima de seguridad que el Estado*

⁵ CAMBRANES, Julio Castellanos (edit.), *500 años de lucha por la tierra: estudios sobre propiedad rural y reforma agraria en Guatemala*, Guatemala, FLACSO, 1992, Tomo 2, pp. 29-30.

*guatemalteco tenía la obligación de garantizar. Se pasó de una posición radical en la que se afirmaba que sólo la lucha armada era la solución a los problemas del país a otra en la que: se plantea como uno de los objetivos *abrir paso a la democracia y transitar hacia la modernización sentando bases de justicia social*⁶.*

Una vez firmados los Acuerdos de paz, tuvieron como resultado indirecto la organización de las comunidades, la discusión de muchos temas que no se tocaban durante los gobiernos militares y el valor del trabajo conjunto, lo que hizo que surgiera, de forma muy incipiente, en las organizaciones indígenas/campesinas una importante reflexión. Empieza a plantearse a su interior la necesidad de una política en la que ellas mismas tomen en mano la construcción de su futuro sin dejar dicha responsabilidades en manos del Estado. Como dicen Isabel Solís y Lourdes Rodas en su artículo sobre la Tercera Cumbre Continental efectuada en la ciudad de Ixim Che del 26 al 30 de marzo 2007: *“fue la actoría de los pueblos indígenas como sujetos políticos que se tradujo en el lema del encuentro ‘de la resistencia al poder’. Esta participación política es crítica en su actuación, en cuanto advierten ‘no estamos para folklorizar democracias’, por el contrario, **sus planteamientos se orientan a trastocar el orden establecido** [...] El reto que se plantea es construir el poder desde los pueblos, contra los patrones y lógicas capitalistas que se propagan bajo el discurso de la globalización”⁷.*

Sin embargo, durante los años 90, los principales movimientos sociales se desarrollan tratando de parar el neoliberalismo aportado por los Megaproyectos del Plan Puebla Panamá y el Tratado de libre comercio entre Centro América, el Caribe y los Estados Unidos (CAFTA). Se realizan foros a nivel centroamericano, se empieza a identificar el neoliberalismo en tanto que nueva política de invasión del capital extranjero y explotación de los recursos naturales y de las comunidades y se comparten experiencias a nivel

⁶ URNG, *Guatemala, Propuesta a la sociedad, cuatro objetivos, nueve cambios, cuatro prioridades*, Guatemala, URNG, 1995.

⁷ SOLÍS, Isabel y Lourdes Rodas, “Colonizaron nuestros pensamientos. Pero no nuestros corazones”, en *ALAI - América Latina en Movimiento*, 15 de mayo del 2007. Disponible en: <http://alainet.org/active/17471&lang=es>

internacional con otros pueblos que están sufriendo la misma explotación, de manera que surge una nueva solidaridad antisistema.

Los movimientos sociales continúan a pesar de la violencia que se sigue ejerciendo contra ellos, aunque casi no existe un esfuerzo de articulación y coordinación que los transforme en una fuerza lo suficientemente potente como para reinvertir la relación de fuerzas, ahora a favor de las clases dominantes. Se tiene más confianza en la legislación nacional e internacional y en el reconocimiento formal de los derechos de los pueblos por los gobiernos y las organizaciones internacionales. De manera que, por ejemplo, las luchas contra la minería, las hidroeléctricas, etc., se centran en que el gobierno no ha hecho una consulta a las poblaciones, como lo indica el convenio 169 de las Naciones Unidas (ONU), y/o porque las regalías que dejan las transnacionales mineras son demasiado pocas y no en el pillaje del que están siendo objeto los guatemaltecos en el marco del sistema capitalista y la necesidad de cambiar dicho sistema. A pesar de ello, los movimientos, personas y organizaciones que tratan de trabajar fuera de la lógica del sistema capitalista se desarrolla en forma subterránea, construyendo la esperanza de que una Guatemala diferente es posible.

Constantes que podemos determinar en este proceso histórico

La democracia vacía de la burguesía no es más que la ficción bajo la cual está oculta su dictadura y totalitarismo. Las formas que adopta se adaptan a los diferentes contextos socio-económicos y a todo tipo de regímenes políticos (liberalismo, servidumbre, esclavitud, dictaduras, democracia representativa, social democracia, populismo), siempre y cuando los objetivos de acumulación de capitales y dominio político de las clases dominantes y transnacionales no se encuentren en peligro. Cuando esto ocurre, los gobiernos representantes del Estado no dudan en derrocar regímenes, militarizar la sociedad, y masacrar poblaciones con tal de conservar el poder de las clases dominantes y permitir que sigan enriqueciéndose; Desde la

independencia y aún durante los regímenes dictatoriales de la liberación, la ficción de la democracia representativa se ha jugado como una pantalla para ocultar la verdadera naturaleza de los diferentes gobiernos. En todo el proceso las clases dominante han sometido a la población gracias a la colaboración de individuos o grupos pertenecientes a las clases medias e incluso a las mismas clases oprimidas y explotadas (los caciques en los pueblos de indios eran generalmente antiguos miembros de la nobleza prehispánica que colaboraron con los españoles, mientras que en la actualidad El Estado sigue cooptando a los caciques (líderes del pueblo) para que colaboren con los gobiernos de turno, mantengan a la población adormecida y negocien sus derechos.

El Estado Guatemalteco nunca ha sido un Estado independiente ni soberano (ni política, ni económica ni militarmente) y cuando trató de serlo lo derrocaron. Siempre ha dependido de las potencias imperialistas, España, Inglaterra, Estados Unidos y de las grandes empresas multinacionales interesadas en extraer las riquezas minerales y agrícolas del país, mientras que las políticas públicas son diseñadas por la AID, el BID, el Banco Mundial, etc.;

El Estado como acompañante del proceso de modernización tampoco ha sido nunca el garante del bienestar del pueblo. A pesar del crecimiento económico logrado durante los años '70 en Guatemala y los intentos de modernización industrial y agrícola que se han hecho, los despojos de tierras campesina, las desigualdades y el descontento no han cesado de acrecentarse y el Estado nunca ha dejado de ejercer su función represiva cuando necesario;

La violencia, aunque se la llame revolucionaria no ha sido un instrumento eficaz para transformar al sistema capitalista en un sistema socio-económico que no explote el trabajo de los seres humanos, que no destruya la naturaleza y permita a la población en su conjunto satisfacer sus necesidades y ser feliz (lo que en el fondo son las expectativas de los oprimidos). Las luchas violentas, protestas y manifestaciones nunca han tenido éxito, salvo cuando se derrocó al dictador Ubico abriendo vía a los gobiernos de la revolución entre 1944 y 1954. Ya que a parte de ese momento que se dio en un contexto

histórico excepcional de post II Guerra Mundial (Ubico el dictador derrocado era pro-nazi), no existe ni ha existido nunca la correlación de fuerzas necesaria para llevar a cabo dicha transformación ni por la vía violenta ni por medio de elecciones ya que, las elecciones cada 4 años de un nuevo presidente no son tampoco un instrumento eficaz de cambio social radical.

La gran capacidad de lucha y sacrificio del pueblo guatemalteco que a pesar de la represión y la violencia vuelve a levantarse para defender sus tierras, sus bosques y sus territorios. El rol cada vez más importante de los medios de comunicación, ONG, iglesias y otras instituciones nacionales e internacionales que conforman la rama ideológica del Estado, en tanto que herramientas de control social y domesticación de los seres humanos en su papel de feligreses, consumidores, ciudadanos-electores y trabajadores.

El constante papel represor y de control social ejercido por el Estado sobre los indígenas, campesinos y todos aquellos que se atreven a cuestionar la explotación, el racismo y las injusticias, quienes son criminalizados y tachados de comunistas por los grupos de derecha y ultraderecha. Tomando como partes constitutivas del Estado a su brazo armado, el ejército, a su aparato ideológico y a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

II Incursión del neoliberalismo y cambios en el Estado (1985-2003)

Esta época está marcada por tres hechos importantes que han cambiado completamente la faz del país y abierto la vía al neoliberalismo, aunque no necesariamente concuerdan exactamente con las fechas mencionadas. El primero es la terrible represión de la segunda guerrilla y masacre de comunidades enteras a principios de los años 80. El segundo empieza con la llegada de los gobiernos civiles en 1986, iniciando un proceso que debería llevar a la fin del conflicto y a la firma de los acuerdos de paz “firme y duradera”. Y, el tercer hecho es el desenvolvimiento del narcotráfico y de las

mafias⁸, incluso a nivel gubernamental, así como toda suerte de tráficos y actividades criminales a medida que el tejido político-social se desintegra.

El fin de los regimenes militares, que venían sucediéndose desde 1963, se da el 14 de enero de 1986 cuando asume la presidencia Vinicio Cerezo después de más de 30 años de gobiernos militares, empezando la “transición hacia la democracia”. A partir de entonces se dio una sucesión de presidentes civiles electos democráticamente, aunque siempre bajo la tutela del ejército y de los Estados Unidos, mientras que al mismo tiempo se dieron los pasos para terminar el conflicto armado e instituir la paz⁹. El Estado contrainsurgente toma poco a poco a los ojos de la población la naturaleza de un Estado democrático que funciona a favor de toda la población en su conjunto; La llamada sociedad civil se organiza y consolida también durante ese periodo. Cerezo fue permisivo con las manifestaciones de los trabajadores y de los estudiantes y la represión del ejército en las comunidades desapareció casi completamente¹⁰.

El sucesor de Cerezo, Serrano Elías, inicia su presidencia el 14 de enero 1991 y empieza oficialmente el proceso de paz entre la guerrilla y el gobierno, proceso que culminará en el gobierno de Álvaro Arzú en diciembre 1996. Se introduce un discurso en el que se suponía que la simple firma de los Acuerdos de Paz que se firmaron en diciembre 1996 por el Estado, el Ejército y la Unidad Revolucionaria Nacional guatemalteca (URNG) (organización que reunía a las 4 organizaciones guerrilleras) con el acompañamiento de la ONU iban a traer la Democracia y hacer valer los Derechos Humanos en Guatemala, por lo que se decía, sobre todo en la izquierda, que los Acuerdos de paz eran “la única

⁸ Al hablar de mafias en Guatemala no nos referimos a las familias mafiosas convencionales sino a carteles, grupos o camarillas de poder que se forman a todos los niveles para ejecutar actividades ilícitas y ganar grandes cantidades de dinero.

⁹ “Debido a que el imperialismo y las burguesías del área no pudieron imponer una victoria militar aplastante, que restaurara el viejo orden existente antes de 1979, fueron forzados a recurrir al auxilio de las direcciones guerrilleras, que tenían un peso decisivo sobre el movimiento obrero y de masas, para encauzar el descontento social, no por la vía de la lucha armada, sino a través del espejismo de la democracia burguesa. Los antiguos enemigos mortales, las guerrillas, eran necesarios en la nueva etapa, sin ellos no funcionaría el nuevo orden que el imperialismo quería imponer”. PSOCA, “25 años después Esquipulas II: tragedia social, neocolonización, saqueo imperialista”, en *Revista centroamericana de teoría, Política, Economía e historia*, 2012, N°13, p.15.

¹⁰ OLIVA, Roberto, *Caso Rosemberg, Una conspiración en Guatemala donde la realidad supera la ficción*, Guatemala, Produce, 2012, p.47.

solución” a los problemas del país.

Analizando más a fondo esta situación, nos encontramos que el proceso de descomposición social que sucedió a los Acuerdos de paz correspondió a un cambio importante en la naturaleza del Estado que según los términos del Banco Mundial (BM) se convierte en un Estado capturado en forma casi absoluta por individuos o grupos ilegales, mafias, narcotraficantes, grupos paramilitares y/o subversivos. *“Durante la etapa de encaminamiento del régimen autoritario a la democracia y a la paz política (1986 a 1996), las operaciones clandestinas de las viejas estructuras del orden contaminaron el sistema institucional civil. Ese periodo coincidió con la conformación de la geopolítica del narcotráfico en la región, que identificó a Guatemala como eslabón estratégico de acceso a los grandes mercados de la droga en Norteamérica”*¹¹. Esto abrió las puertas al crimen organizado al interior del Estado democrático.

La población guatemalteca, cansada de la violencia acoge favorablemente la firma de los Acuerdos de paz y, falta de un programa y objetivos políticos claros (que nunca han existido, ni siquiera durante el conflicto armado¹²) acepta también las políticas que bajo la pantalla de la democracia tratan de neutralizar y paralizar a los movimientos sociales. Así como los cambios anunciados por los Acuerdos de paz. *“Los movimientos sociales, en el afán de democratizar la gestión estatal y poder satisfacer las demandas más sentidas de su base social, han incursionado en una dinámica de relacionamiento con el Estado que no deja de tener sus dilemas y contradicciones, sobre todo, cuando estas demandas son refuncionalizadas y*

¹¹ GUTIÉRREZ, Edgar, “Guatemala hoy, la reconfiguración cooptada sobre instituciones fallidas”, en VVAA *Narcotráfico, corrupción y Estados, Como las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y México*, México D.F., Debate, 2012, p.113.

¹² Durante el conflicto armado la formación política fue muy superficial y se reducía generalmente a promover la lucha de los pobres contra los ricos. A pesar de ello hubo en algunos lugares una cierta explicación de las formas de funcionamiento del sistema capitalista y la necesidad de remplazarlo en forma revolucionaria por un sistema socialista (tipo Cuba), lo cual se creía se lograría cuando se tomara el poder. Al mismo tiempo existía una verdadera aspiración al cambio social entre indígenas y campesinos.

reapropiadas por las élites en el poder, con el afán de legitimar su modelo de dominación"¹³.

Al mismo tiempo que las políticas neoliberales y la apertura al mercado internacional se realizaban, los otros objetivos de los Acuerdos de Paz perdieron su importancia, dejando decepcionados a los que creyeron en ellos *"Desde 1997 el proceso de paz comenzó a agotarse, las instituciones gubernamentales nacionales e internacionales participan menos y se relacionan menos con la sociedad civil, tal es el caso de organismos como el BM, el PNUD, el BID y la cooperación alemana particularmente a través de la GTZ, entre otros, que inicialmente crearon espacios de consulta pero en un segundo momento, eventualmente por presiones del propio gobierno de la república, se han replegado y no están dando el debido seguimiento a los proyectos que inicialmente contrataron con diversas organizaciones de la sociedad civil. Esto ha implicado que, en la fase de ejecución de programas y proyectos no se tome en cuenta activamente a la sociedad civil, lo que es sumamente preocupante pues implica la pérdida de tiempo y el desperdicio de múltiples esfuerzos que desde la sociedad civil se han dado a fin de hacer propuestas concretas y plenamente consensuadas de participación"* (Tsuk-Kim)

A pesar de ello, algunos siguen creyendo y afirmando que los Acuerdos de paz son la única solución y atribuyen el que la situación en Guatemala se ha agravado es porque los diferentes gobiernos no les han dado cumplimiento: *"En nuestra primera declaración del 27 de diciembre del 2008, en ocasión del 12avo aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz afirmamos que éstos, constituyen el primer pacto político de gran importancia entre la sociedad guatemalteca, los Pueblos Maya, Dinka y Garifuna y el Estado guatemalteco después de 500 años de despojo, exclusión y explotación hacia los pueblos indígenas y, de 36 años de enfrentamiento armado interno. Hoy lo reafirmamos y, denunciamos que al no haberse apegado a ellos durante estos 13 años, ha hecho que las causas históricas, estructurales y coloniales del conflicto armado*

¹³ YAGENOVA, Simona (coord.), *La protesta social en Guatemala: Una aproximación a los actores, demandas, formas, despliegue territorial, límites y alcances*, Guatemala, FLACSO, 2007, p.50.

interno se hayan agravado, con otros grandes y graves problemas como son, entre otros, la inseguridad ciudadana, la desnutrición infantil crónica, los cíclicos períodos de hambruna, el deterioro ambiental, la corrupción, el descrédito y la impunidad en los distintos organismos del Estado de Guatemala”¹⁴.

Agencias de cooperación y financiamiento extranjero cooptan a los líderes, creando y financiando ONG cuyo objetivo explícito es incidir en las causas de la pobreza y las injusticias, haciendo valer los Derechos humanos, la solidaridad, la igualdad de género y la cooperación internacional, mientras que su objetivo implícito es hacer pasar el discurso democrático sin analizar las estructuras del Estado ni del sistema económico-social; ni tampoco las causas de la dominación, por lo que desarman ideológica y políticamente a las poblaciones campesina e indígena, urbana y rural desviándolas de su objetivo de transformación social hacia objetivos puntuales y reformistas.

Desde 1989, el Gobierno de Vinicio Cerezo implementó un modelo neoliberal de crecimiento económico y modernización de la economía, impulsando las exportaciones no tradicionales en agricultura, la Revolución Verde y la teoría del derrame, trickle-down. Dicho modelo neoliberal, en el que se insertaban los acuerdos de paz, venía a remplazar la necesidad de tomar el poder en forma violenta; Las luchas se enfocaron en pedir un cambio de leyes y reformas al Estado, al mismo tiempo que se establecía que fuera de la democracia, del libre mercado y del crecimiento económico era imposible desarrollar al país, por lo que absolutamente había necesidad de atraer la inversión extranjera, concentrándose los movimientos, generalmente liderados por ONG y/o por la Iglesia Católica, en la lucha por la democracia representativa, el cambio o modificaciones de la Constitución y de las leyes.

¹⁴ CONSEJO POLÍTICO 13 BAKUNIN, “La Paz Firme y Duradera comprometida hace 13 años sigue siendo la meta de los sectores sociales y fuerzas políticas, comunidades y organizaciones revolucionarias, democráticas y progresistas de Guatemala”, en Albedrío, Guatemala, 30 de diciembre 2009, s/p. Disponible en: <http://www.albedrio.org/hm/otrosdocs/comunicados/cp13-004.htm>

A principios de los años noventa comienza a hablarse más concretamente de la privatización de las empresas estatales, tomando la construcción de carreteras e infraestructura un gran impulso, Álvaro Arzú (1996-2000) privatizó las empresas públicas más importantes “Las joyas de la abuela como se las bautizó, fueron la Empresa eléctrica de Guatemala con sus entes de distribución en el interior del país y la telefonía estatal”¹⁵. En el 2001 los presidentes centroamericanos y el presidente de México firmaron el Plan Puebla Panamá (PPP), ahora Plan Mesoamericano; En el 2003 se inician las negociaciones del Tratado de libre comercio entre los Estados Unidos y Centro América (CAFTA). Al mismo tiempo que comienza a desarrollarse una gran corrupción al interior de los diferentes gobiernos que seguían y siguen dependientes de los Estados Unidos, de la oligarquía guatemalteca y de las transnacionales.

Al tiempo que avanzaba la modernización de la agricultura, avanzó también otro fenómeno silencioso, que tendría repercusiones en las luchas posteriores y en las demandas que se le harían al Estado. Los campesinos seguían siendo sacados de sus tierras y emigraban, ya sea a Petén (departamento más grande del país cubierto hasta fines de los años 60 casi totalmente de bosque), a las ciudades donde procuraban mano de obra barata a la industria maquiladora o a los Estados Unidos y debían comprar con dinero los alimentos que anteriormente producían ellos mismos en sus parcelas. El neoliberalismo naciente los empezó a introducir a la sociedad de consumo y el Estado se abrió a las empresas transnacionales que los abastecen. De pequeños productores que producían los alimentos necesarios para el sustento familiar pasaron a ser consumidores (aunque fuera a un nivel muy bajo) de los productos chatarra de las grandes transnacionales agroalimentarias, lo que los subordinó al dinero obtenido de cualquier forma con tal de poder comprar lo que les parece necesario, aumentando la desnutrición y malnutrición de toda la población. El país, hasta entonces autosuficiente en granos básicos (Frijol y Maíz) comienza a importarlos y la deuda externa que desde los gobiernos revolucionarios se había mantenido muy baja comenzó a aumentar. El Estado

¹⁵ OLIVA, Roberto, *Caso Rosemberg, Una conspiración...*, op. cit., pp. 47.

entra en un proceso de pérdida creciente de soberanía y autonomía económicas y los gobiernos se subordinan completamente a los intereses del capital nacional e internacional.

La izquierda substituye el discurso sobre la lucha de clases, la toma violenta del poder por el discurso conciliador de las mesas de dialogo y la formación de partidos políticos para participar en las elecciones. Las organizaciones representantes de la población, conceptualizada como sociedad civil, buscan resolver sus problemas por medio del consenso y la concertación con el Estado y la clase dominante. Al final de varios años se comprobó que la decisión final la tomaban siempre estos últimos y que la función del Estado en tanto que instrumento de las clases dominantes seguía intacta. *“Tras la necesidad de recomposición del Estado contrainsurgente para resolver sus crisis de legitimidad internas y externas (surgidas en 1982-1983), lo que existió a partir de 1986 hasta principios de los años 90 puede describirse como una versión civil del Estado contrainsurgente, con sus particularidades propias, pero que dejó al Ejército una gran cuota de poder -si bien no era un poder absoluto- sobre las autoridades civiles. En esencia lo que no cambió fue la prevalencia de un Estado eminentemente coercitivo sobre una base continúa (no excepcional) y de la dominación militar en contraste con la hegemonía o creación del consenso social. El Estado contrainsurgente no es solamente un proyecto del Ejército sino también de la coalición dominante (incluyendo las élites económicas) como un todo. Pero los Estados contrainsurgentes tienen sus contradicciones propias, en particular en sus respuestas a la protesta popular. En lo formal el gobierno civil post 1986 restableció el imperio de la ley, pero en la práctica los guatemaltecos no se sintieron protegidos por ella ni se comportaron como si sus derechos estuvieran protegidos. En papel la Constitución de 1985 contenía garantía democráticas básicas, pero esa misma Constitución codificaba las instituciones contrainsurgentes (por ejemplo las Patrullas de autodefensa civil (PAC) bajo control del Ejército y las aldeas modelo) que violaban en la práctica tales garantías, en particular en las zonas rurales previamente bajo conflicto. Durante la mayor parte del periodo comprendido entre 1986 hasta mediados de los años noventa, los presidentes*

civiles le permitieron al Ejército el dominio tras bambalinas y no se atrevieron a desafiar sus prerrogativas. En suma, la coalición gubernamental cedió, y los políticos aceptaron, espacios muy restringidos para la acción autónoma”¹⁶.

El Estado finquero al servicio de la oligarquía latifundista, fuertemente militarizado, que desde la Liberación, había guardado la pantalla de ser un Estado social (seguridad social, educación gratuita para todos, etc.) está desapareciendo paulatinamente para no guardar más funciones que las de propulsar el neoliberalismo, proteger a las clases dominantes y reproducir al sistema, comprometiéndose con las políticas neoliberales y la transformación neoliberal de la economía guatemalteca; Al mismo tiempo que la oligarquía agroexportadora se transformó en una oligarquía empresarial (conformada por las mismas familias que la anterior) aliada con los bancos, las grandes corporaciones transnacionales e incluso con el narcotráfico. Además, la construcción de infraestructuras, carreteras, etc., incentivó la corrupción a todos los niveles y el surgimiento de mafias cercanas a los gobiernos, la construcción de edificios, colonias de lujo y el lavado de dinero. *“La feroz represión que vivió toda la región entre las décadas de los 70 y los 80 en el pasado siglo tuvo un efecto fríamente buscado por el imperio -en combinación con los factores de poder locales-, y sin dudas conseguido: amansó al movimiento popular, quebró su resistencia, lo llenó de terror. Hoy, con los planes neoliberales que se padecen, aún se siguen pagando las consecuencias de esa estrategia de terror. Las guerras sucias que en mayor o menor grado vivieron todos los países latinoamericanos, con desapariciones de personas, centros clandestinos de detención y tortura, arrasamiento de aldeas rurales y un reconocido genocidio en Guatemala (180 mil indígenas mayas muertos, 83% del total de víctimas durante la guerra interna) por el que se condenó a un ex presidente -luego absuelto-, no pasaron en vano: lograron desmovilizar. Si no, no hubiera sido posible implementar las políticas de ajuste estructural impuestas por los organismos financieros del gran capital internacional: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sobre esos*

¹⁶ JONAS, Susan, “La democratización por medio de la paz: el difícil caso de Guatemala” en VVAA *Guatemala historia reciente (1954-1996). Proceso de paz y contexto internacional*, Guatemala, FLACSO, 2013, Tomo 4, p.41.

miles de muertos, desaparecidos y torturados -en Guatemala y en toda Latinoamérica- se domesticó la protesta; de ahí que, en estos últimos años, aparece esta izquierda bien presentada, de saco y corbata, que prescinde del incendiario discurso de años atrás y que ve en la labor política en el marco de las democracias representativas el campo -a veces el único campo- de posible trabajo político”¹⁷.

El debate entre más Estado o menos Estado se lleva a dos niveles:

1) Las medidas neoliberales sostenidas por el Estado comenzaron en lo concreto a dismantelarlo sin hacer mucho ruido (acabando con toda la ayuda estatal a los pequeños campesinos o dejando con muy poco presupuesto a los ministerios sociales, por ejemplo y privatizando, incluso grandes sectores de la policía);

2) Todos aquellos considerados de izquierda o revolucionarios afirman que lo que se necesita es más Estado, un Estado fuerte, atribuyendo la incapacidad a resolver los problemas del pueblo a que El Estado guatemalteco es un Estado débil o un Estado fallido al servicio de las clases dominantes; Se dice que no pueden existir ni democracia ni desarrollo si no existe un Estado fuerte que los implemente y haga posible la modernización del país, el crecimiento económico “equitativo” y el desarrollo político, social y cultural.

III Modificaciones del Estado entre 2003 y 2014

El Estado moderno en tanto que estructura que asegura la reproducción del sistema de dominación actual, ha ido tomando diferentes formas a medida que el sistema de dominación ha ido cambiando. Aunque los líderes e intelectuales de izquierda siguen presentando al Estado como una entidad

¹⁷ COLUSSI, Marcelo, “Latinoamérica, ¿va hacia la izquierda?”, en *Revista Análisis de la Realidad Nacional*, Guatemala, Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, mayo 2014, Año 3, N°49.

política neutra encargada de resolver los problemas y conflictos sociales, lo cierto es que durante los últimos 10 años, cada vez ha sido más manifiesto su carácter de instrumento de poder de las clases dominantes para someter al pueblo, así como la necesidad, no de refundar ni de fortalecer al Estado, sino de comenzar a disolverlo al mismo tiempo que se construyen y consolidan poderes populares a todos los niveles (local, nacional e internacional). Sin embargo, son muy pocas las personas que se percatan de esto.

En las luchas actuales contra la minería y las hidroeléctricas, en las que según parece se han infiltrado elementos de la URNG con fines electoreros los conflictos sociales se siguen desviando de su carácter revolucionario y transformador para llevarlos a luchar por la interlocución con el Estado y las clases dominantes (mesas de dialogo y concertación). Se le sigue pidiendo al Estado que modifique o mejore determinadas políticas públicas y leyes y “consulte a la población” antes de autorizar los megaproyectos o la extracción minera en sus territorios. Incluso algunos movimientos que luchan contra el racismo estructural, la explotación económica, la discriminación de género, etc., no salen de la lógica reformista ni llegan a considerar al sistema capitalista como un todo multidimensional al que hay que transformar en forma radical para construir un nuevo paradigma socio-económico. No llegan tampoco a vincular lo que está pasando en Guatemala con los movimientos sociales a nivel planetario. Aunque se han realizado intentos de vincular el caso guatemalteco con lo que pasa en otros países y unificar las luchas y la esperanza por medio de encuentros latinoamericanos, esto avanza lentamente y uno de los retos para la población que lucha es inventar y edificar una o múltiples organizaciones populares capaces de articular/coordinar los procesos a todos los niveles y en todas las dimensiones, cosa que las tecnologías de comunicación actuales podrían favorecer.

Las políticas neoliberales propulsadas por PPP y el CAFTA han cumplido con su misión de preparar la legislación, las infraestructuras y las instituciones necesarias para que las grandes corporaciones internacionales se instalen en el país bajo sus propios términos y normativas, convirtiendo al

antiguo campesino autosuficiente en un consumidor, no solamente de granos básicos importados y comida chatarra sino también de telefonos celulares (que tienen casi todos) y otros aparatos eléctricos que tienen los más acomodados y las familias que reciben dinero de la migración, incluyendo juegos electrónicos, telefonos inteligentes y “tabletas”.

Las luchas que desencadenaron las medidas neoliberales fueron bastante fuertes pero no lograron depasar el estadio reformista. Eran luchas de oposición y resistencia pero buscaban solamente influir en los gobiernos para que, por ejemplo, cambiaran la legislación o no firmaran los tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Se buscaba, y se sigue buscando todavía, presionar al Estado, exigir al Estado que haga tal y tal cosa porque aparentemente su función es trabajar por todo el pueblo sin distinción y tiene la obligación de satisfacer las necesidades de todos los guatemaltecos, por lo que se requiere una mayor presencia del Estado para que retome las tareas sociales que han sido transferidas al mercado.

Esta nueva concepción del Estado hizo que el pueblo guatemalteco dejara de visualizar la posibilidad de un cambio social radical y entrara de lleno, guiado por sus líderes, en el juego de las ONG (que también hicieron correr dinero e impulsaron el consumismo), la cooperación extranjera, las mesas de dialogo y consertación etc. Un ejemplo de esto es la iniciativa de ley de desarrollo rural integral (DRI), discutida por más de 15 años en las mesas de dialogo con el gobierno, empresarios y varias organizaciones campesinas y ambientalistas, que los diferentes gobiernos obviamente se han arreglado para que no pase. Ya que, aunque es completamente inocua, las clases dominantes y las ONG la hacen parecer como sumamente revolucionaria y peligrosa para las clases dominantes¹⁸ los mismos Acuerdos de Paz, sobre todo el de

¹⁸ Según estimaciones oficiales de la SAA, para el 2012 existe una demanda total de 500 mil familias que piden tierras y en los últimos 15 años sólo se ha “solucionado” dicha demanda para 20 mil familias (Prensa Libre, 4/09/2012) –yo me pregunto si realmente se ha solucionado, o si sólo se ha reconvertido en otro problema: el de la deuda–. Según la misma fuente, oficialmente estos datos equivalen a 1 millón 55 mil campesinos y campesinas reclamando 338 mil 935 hectáreas de tierra en el país. Es en este contexto que se suscriben las actuales luchas por la aprobación de la “Ley de Desarrollo Rural Integral”, que lejos de ser anticapitalista y de promover una reforma agraria –como señala el empresariado guatemalteco–, solamente

Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, fueron demasiado tibios y Pro-capitalistas, hablando en términos de inversión y modernización del campo, pero sin tocar el “sagrado” derecho a la propiedad privada de los terratenientes y sin reconocer los derechos ancestrales de los pueblos originarios sobre sus territorios. Si bien dicho acuerdo contempló programas de acceso a la tierra (el Fondo de Tierras), ésta se dio dentro de un “mercado de tierras” totalmente desregulado con el que se especuló y que, durante la crisis del café en los años 2001 y 2002, benefició a buena parte de los terratenientes quienes lograron deshacerse de sus peores tierras vendiéndolas a precios exageradamente elevados. Se creó también la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), con la finalidad de atender la conflictividad agraria, pero se le despojó de funciones sustantivas para garantizar la resolución de la conflictividad en términos de justicia para los campesinos (en Guatemala no existen ni “código agrario” ni “tribunales agrarios” como sí sucede en México y Brasil, por ejemplo), y todos estos años ha operado como simple mediador entre las dos partes enfrentadas, además está atada a que ambas partes deben estar de acuerdo con la mediación de la SAA. La mayoría de los casos que ha resuelto la SAA no se basan en la justicia de las demandas de los campesinos (por ejemplo, reclamos de tierras como parte de prestaciones laborales adquiridas a lo largo de décadas de trabajo semiesclavo), sino en la pura “negociación” con los finqueros, que es lo que saben hacer bien¹⁹.

Las fuertes protestas, lucha y manifestaciones de los pueblos indígenas y campesinos afectados por el despojo de tierras, la minería, las hidroeléctricas, las compañías de electricidad, los monocultivos, etc., según algún líder campesino, siguen siendo luchas sectoriales dirigidas en gran parte por organizaciones financiadas por la cooperación extranjera o la iglesia, aunque este “*es un argumento que repite el prejuicio que hacen los medios de comunicación contra las luchas de resistencia*” (comunicación personal con Mario López)²⁰; El narcotráfico, la criminalidad, las extorsiones y la corrupción

suscribe un camino más moderado para atender las demandas campesinas. LÓPEZ, Mario, *Las luchas comunitarias en la Guatemala de hoy*, Guatemala, Guardabarrancos, 2012.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Porque en las comunidades cuando se pregunta ¿Quiénes son los actores que han causado

en los diferentes gobiernos no ha dejado de crecer, creando un ambiente de inseguridad y miedo terribles en la población, por lo que es ella misma la que exige al Estado que utilice cada vez más al ejército (excluido del gobierno desde 1985). Pero, no todo es miedo, también hay dignidad y ganas de luchar. Hay resistencia, hay inconformidad, hay rebeldía. Hay ganas de decir “*ya no tenemos miedo*”. *“Muchas comunidades se organizan, hacen asambleas, hablan de sus problemas y les buscan soluciones. Muchas hacen sus propias consultas populares y rechazan la minería, las hidroeléctricas y las áreas protegidas. En las ciudades, estudiantes normalistas salen a las calles rechazando los cambios a la carrera magisterial y el autoritarismo de la ministra de educación. Los movimientos de mujeres se pronuncian en contra del femicidio, y quince valientes mujeres indígenas son las primeras en declarar en tribunales que fueron violadas y retenidas para prestar servicios personales a militares guatemaltecos durante el conflicto armado. Y a pesar que está un militar retirado al frente de la presidencia, comienzan los juicios contra militares de alto rango por crímenes de lesa humanidad”* (Ídem.).

Las luchas del pueblo han generado desde hace unos seis-cinco años otro gran cambio en el Estado, haciendo que El Estado conciliador de los Acuerdos de paz haya ido desapareciendo poco a poco a medida que El neoliberalismo se consolida y toma, al principio muy discretamente y, a medida que la población lo permite pasivamente y se acostumbra, descaradamente, nuevamente su forma militar, retornando a implementar abiertamente métodos represivos y violentos *la actual dictadura oligárquico-militar-neoliberal en ciernes culminó su proceso de militarización del Estado, sentando así las bases para imponer la prolongación presidencial y la reelección fraudulenta, controlando al Legislativo y al Judicial para modificar la Constitución* (Mario Roberto, Morales, 2014)²¹. El discurso democrático (incluso “social-demócrata”

las divisiones en las comunidades?, responden: las iglesias, los medios de comunicación social (televisión, cine), las ONG y los partidos políticos. BA TIUL, Kajkok (Máximo), “Movimiento indígena: Estado, democracia y partidos políticos en el continente de Abya Yala”, en Simona Yagenova (coord.) *Los movimientos sociales frente al Estado, La democracia y los partidos políticos*, Guatemala, FLACSO, 2009, p.66

²¹ MORALES, Mario Roberto, “La dictadura asienta sus bases”, en *La Palabra.com*, 27 de mayo 2014. Disponible en: <http://esp.mexico.com/lapalabra/index.php?method=una&idarticulo=49292>

del gobierno anterior), las mesas de dialogo continuan como pantalla mistificadora y los gobiernos adquieren un caracter populista complementario en el que el hambre se resuelve regalando bolsas seguras con comida a la población (preferiblemente si es la que vota por el partido en el poder); el analfabetismo regalando a las familias dinero condicionado a cambio de que los niños vayan a la escuela, combatiendo la pobreza regalando fertilizantes sintéticos a los campesinos mientras que, las consultas comunitarias se dice que no son vinculantes y se ignoran²². La pantalla democrática ocultaba que a medida que el neoliberalismo iba preparando los tratados, la legislación, las infraestructuras e instituciones necesarias para atraer y facilitar la inversión extranjera en el país, se iba sigiliosa e insidiosamente apoderando de la economía del país y desplazando a las elites nacionales a las que sometió a sus intereses bajo forma de alianzas. La agroexportación pasó a un segundo plano y hay una tendencia a que el extractivismo se convierta en el motor del crecimiento económico de Guatemala.

Se expulsaron y se siguen expulsando a campesinos de sus tierras para implantar monocultivos de palma africana y árboles como la teca, para construir hidroelectricas, carreteras, puertos e implantar minas o abrir nuevos pozos de petroleo. Se modificó la legislación para ampliar las concesiones petroleras dentro de la Reserva de biosfera Maya (RBM) y el Estado, al mismo tiempo que militariza al país para reprimir a todo el que se le oponga, perdió todo vestigio de soberania e independencia al ponerse al servicio de las grandes corporaciones transnacionales, convirtiendose en un Estado títere encargado de seguir engañando y manipulando al pueblo o, cuando esto no es suficiente, reprimiendolo, criminalizandolo y silenciandolo, mientras que las migraciones

²² AVANCSO ha registrado un total de 51 consultas populares en el período 2005-2009, participando un total de 603,426 personas, de las cuales 600,831 (99.57%) dijeron "No" a la instalación de un megaproyecto (minería, represa) en su municipio o región. De las 51 consultas populares, 47 (92.17%) se han realizado en el Altiplano Occidental, mientras que 3 se han realizado en las Tierras Bajas del Norte y 1 en Oriente. Por su parte, el Colectivo Madreselva apunta un total de 59 consultas, desde 2005 al 30 de noviembre del 2011; y según el Sistema Nacional de Diálogo Permanente (SNDP) del Gobierno de Guatemala, ha habido un total de 61 consultas populares entre 2005 y 2011 (Siglo 21, 13/11/2012). Las consultas populares siguen siendo un canal de lucha, y cada año se realizan nuevas consultas populares. La más reciente por ejemplo es la que se realizó en la comunidad xinka de Jalapa (Prensa Libre, 23/10/2012). AVANCSO, *Pronunciamento de la FMM en el 16 aniversario del asesinato de Myrna Mack*, Guatemala, Información-AVANCSO, 11 septiembre 2006.

hacia México y los Estados Unidos continúan. Esto también a desencadenado las luchas de las comunidades por la defensa de su territorio. Según la vicepresidenta Roxana Baldetti, en materia de minería y extractivismo, se tienen mapeados un total de 1,600 conflictos (La Hora, 20/09/2012), lo que equivaldría a un número por lo menos similar de comunidades en lucha. Si a esto sumamos los 1,214 conflictos relacionados con la titulación de la tierra – muchos de ellos con procesos de tramitación y negociación de más de treinta y cuarenta años– que actualmente maneja la Secretaría de Asuntos Agrarios (Prensa Libre, 4/09/2012), tenemos un aproximado de por lo menos 2,800 comunidades en lucha. En conclusión, para las élites políticas y económicas, “paz” equivale nada más a “seguridad” para sus proyectos de inversión y explotación²³.

Hemos vivido en los últimos 10 años el pasaje del Estado que se presentaba como un Estado de Derecho, respetuoso de la Constitución y garante de los derechos de la población en su conjunto a un Estado abiertamente represor (aunque sin descuidar el discurso democrático). Los líderes en general ya no buscan conquistar el poder para implementar un Estado socialista sino que trabajan junto con el Estado, con las ONG y con las instituciones internacionales como garantes de la democracia burguesa, buscando reformar al Estado, sus políticas y sus leyes. El discurso y el despliegue del espectáculo de dicha democracia substituyen a la lucha armada; La refundación del Estado substituye a la lucha por cambiar el sistema y crear entidades de gobierno populares; La reforma, El Congreso, las instituciones burguesas y el legalismo substituyen a la voz del pueblo, mientras que se comienza a acusar al Estado de entreguista y al gobierno de estar al servicio de las Transnacionales para quien trabaja (cosa que parece obvia pues esa es su función, pero no es obvia para todos). En tanto que la oligarquía concentra cada vez más su poder y los movimientos y luchas sociales son duramente reprimidos a pesar de su carácter reformista, como el movimiento de maestros manipulado por líderes oportunistas.

²³ LÓPEZ, Mario, *Las luchas comunitarias en...*, op. cit.

El consumismo y la necesidad del sistema económico de extraer ganancias durante la crisis aún de las capas más pobres de la población hacen que las clases medias y pobres participen activamente a la reproducción del sistema. El sueño ya no es cambiar la sociedad sino acceder cada día más y sin importar los medios a toda clase de bienes materiales. Sólo la parte de la población que sufre directamente los impactos negativos de la actividad de las transnacionales y el despojo de sus tierras manifiesta su descontento y protesta en movimientos sociales amplios.

IV Relación entre los gobiernos “post-neoliberales” y los movimientos sociales

Houtart dice: *“El neoliberalismo ha destruido muchas funciones del Estado, no lo ha destruido al Estado sino que lo ha puesto al servicio del proyecto neoliberal, del proyecto capitalista”*²⁴. La izquierda en Guatemala en ese sentido, aunque dice luchar contra el neoliberalismo lo hace no tratando de acabar con el capitalismo sino tratando de recuperar el papel del Estado benefactor y devolverle su rol social, perdido con la ofensiva del neoliberalismo. Es decir nacionalizar los servicios públicos que fueron privatizados, llevar a cabo la reforma agraria, un mejor acceso a la salud, a la educación para las clases sociales más bajas, recuperar las empresas estatales que se privatizaron, etc.

Se oculta o desconoce que los acuerdos de Paz fueron una estrategia de las grandes potencias, de las Naciones Unidas y de las transnacionales para acabar con el conflicto armado y permitir a las empresas transnacionales ocupar el territorio guatemalteco sin ninguna restricción. Se acusa a los diferentes gobiernos de no haber cumplido los Acuerdos de paz y se califica al Estado como fallido sin comprender que su función es la de embaucar al pueblo. Los líderes guerrilleros cooptados por las nuevas oportunidades de

²⁴ LARRAÍN, Javier, *Entrevista a Françoise Houtart*, ADITAL, en el marco del Observatorio de la Plurinacionalidad apoyado por la Fundación Rosa Luxemburgo y la Comunidad de Estudios JAINA, Bolivia, 2014.

insertarse en la sociedad con un buen puesto y un buen salario ya sea en el gobierno ya sea en las ONG ya sea en las instituciones internacionales pasaron del discurso de la lucha armada y la toma del poder por las armas al discurso de la democracia representativa y la reforma del sistema por vía legislativa y por medio de elecciones y ahora prácticamente se han quedado sin alternativa. Lo que hace que los movimientos y luchas sociales no se planteen, ni imaginen como salir tanto de la violencia como de la democracia burguesas para delinear, consolidar y comenzar a construir, junto con la población, una o mil alternativas que salgan de esos dos parámetros.

El nuevo Estado ha logrado neutralizar y anular todo objetivo transformador de la sociedad y ha jugado durante estos diez años entre el discurso democrático y la represión más cruel contra las poblaciones indígenas y campesinas que se oponen al despojo de tierras, a la minería, las hidroeléctricas, a la implantación de bases militares que, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, se implantan en lugares vecinos a las minas, los pozos petroleros, cementeras, etc., para reprimir los movimientos que se oponen y proteger los intereses de las transnacionales y empresarios guatemaltecos. Se califica este nuevo Estado como fallido porque no ha logrado sacar a la población de la pobreza ni darle seguridad, acabando con el crimen y el narcotráfico lo que supuestamente es su obligación. Personalmente opino que, al contrario, el Estado guatemalteco es un estado fuerte que ha sabido adaptarse a las diferentes condiciones históricas y mantener a los movimientos sociales y protestas en el límite permitido por el sistema. Ya que la función del Estado no es de ninguna manera satisfacer las necesidades de la población en su conjunto sino mantener eficientemente las condiciones necesarias para que el sistema-socio económico dominante se siga reproduciendo y las clases dominantes, ahora al servicio de las transnacionales, mantengan su poder.

Otros, principalmente en el movimiento indígena, hablan de la construcción de otro Estado o refundación del Estado, sin darse cuenta que el Estado es un instrumento al servicio del poder y que, si crean otro Estado o

refundan el actual, lógicamente tendrán que crear también nuevas formas de poder, nuevas clases dominantes y nuevas formas de dominio. Tampoco se dan cuenta de que la única forma de hacer valer plenamente los Derechos Humanos, es salir del sistema capitalista para que los pueblos, saliendo del marco lógico de la democracia burguesa o representativa, construyan sus propios organismos de gobierno y administración con sus propios valores y objetivos y consoliden los contrapoderes populares. Al manifestar que no quieren una nación multicultural, multiétnica y multilingüe (como se propone en los acuerdos de paz) al estilo del modelo liberal y exigir la construcción de Estados plurinacionales que permitan el autogobierno, la autonomía y la libre determinación los líderes indígenas no realizan que si el Estado burgués ha estado siempre al servicio de las clases dominantes la solución no es componerlo ni crear otro tipo de Estado. La única forma de resolver los problemas que nos acaban es que los pueblos tomen en mano su futuro y creen entidades de gobierno autónomas, con una lógica, funcionamiento e instituciones distintas a las del capital y la democracia burguesa.

Una vez que el neoliberalismo se implantó en el país los gobiernos se fueron volviendo más violentos y comenzaron a reprimir a los movimientos sociales empleando métodos fascisantes, hasta llegar a las últimas elecciones en noviembre del 2010 en las que quedó como presidente el general Otto Pérez Molina, quien firmó los acuerdos de paz en 1996 en nombre del ejército de Guatemala y ahora pretende dar una imagen nacional/internacional de democracia y respeto a los Derechos Humanos. Es, sin embargo, bajo su gobierno que la militarización del país se hace cada vez más obvia en todas partes y a los ojos de todo el mundo, siempre bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad pero en realidad, protegiendo a los megaproyectos, pozos de petróleo, hidroeléctricas y extracción minera²⁵.

²⁵ Según un cable de la Agencia AFP fechado el pasado 15 de abril, jefes militares de los Estados Unidos y Canadá asistieron a una reunión sobre seguridad en la frontera sur de México. Participaron los gobiernos de México, Guatemala y Belice. Trataron temas de narcotráfico, tráfico de personas y políticas de seguridad conjunta. Los acuerdos y resultados fueron considerados secretos y, con ello, se dio otro paso más hacia la estrategia de dominación vía la militarización. En Guatemala, se viven estados de excepción, suspensión de las garantías individuales, en zonas consideradas peligrosas. En diciembre de 2010 y enero de 2011, el ejército ejecutó la medida en Alta Verapaz, frontera con México, al señalar actividades

Al avanzar la militarización y la represión en vías totalitarias, surgen también fantasmas que se mantenían aparentemente apaciguados, el enemigo interno, los comunistas, etc. Las protestas y movimientos sociales se criminalizan y se convierten en amenazas terroristas a las que hay que destruir. La conflictividad social se convierte en amenaza para el Estado, mostrando a que punto las elites ven sus intereses en peligro y están dispuestas a reproducir los horrores del pasado. El gobierno sigue proponiendo el dialogo y la concertación pero cada vez menos gente cree en ellos, se comprende que no son la solución para los graves problemas del país, por lo que la militarización y la represión se hacen cada vez más evidentes. Por la misma razón, la infiltración de la religión y de las diferentes iglesias en el gobierno, la población, las escuelas, e incluso en los movimientos sociales, ONG, etc., se utiliza masivamente para manipular a los movimientos que se encuentran desarmados ideológica y políticamente y algunas veces se enfrentan al ejército con cantos y oraciones. Las teorías de transición hacia una sociedad más democrática por medio del desarrollo y del crecimiento económico y de la lucha por la democracia burguesa substituyen en la izquierda y en los líderes al discurso sobre la toma del poder, sin ningún análisis critico del contenido político-económico de esos dos conceptos ya caducos, aunque siempre vigentes en el discurso.

A pesar de ello, existen personas y organizaciones muy marginales y marginadas que hablan de la necesidad de implementar una sociedad alternativa, un cambio radical de paradigma socio-económico al que identifican con la economía solidaria y la sociedad del buen vivir como la que pregonan los movimientos indígenas en América del Sur. La Asociación solidaria de acción y propuesta de Petén (ASAPP), por ejemplo, plantea desde hace más de 10 años que la única forma de crear una fuerza y movimientos sociales capaces de socavar al capitalismo, sin hacer recurso ni a la violencia ni a la

del crimen organizado trasnacional. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricardo, "La guerra que viene: operaciones militares al sur de México y Centroamérica", en *Rebelión*, 14 de mayo 2011. Disponible en: <http://www.rebelion.org/noticias/2011/5/128390.pdf>

democracia burguesa, es la de trabajar subterráneamente en cientos y miles de proyectos transformadores para: 1) Ir construyendo otra economía y otra sociedad, en las que no existan más explotación del trabajo humano ni destrucción de la naturaleza; 2) Ir consolidando una fuerza lo suficientemente potente como para debilitar al Estado y a su aparato represivo al mismo tiempo que construye y fortalece los órganos de poder popular. 3) Ir creando redes y alianzas con los movimientos de protesta y lucha por los derechos del pueblo, de manera a fortalecerse mutuamente y ser cada vez más capaces de terminar con la violencia y represión del Estado hasta terminar con ella.

Es decir, un movimiento de socavamiento/construcción simultáneo y multifacético en el que el Estado burgués sea suplantado por el gobierno de los pueblos organizados a todos los niveles (local, nacional e internacionalmente) y en el que cada persona conciente sea una pieza importante de la transformación social: *“El movimiento solidario, se plantea ir de abajo hacia arriba, transformando a las personas mediante la construcción de empresas solidarias y la generación de relaciones solidarias. Sabido es que si las personas van transformando las condiciones de su existencia social, se van transformando a sí mismas. Pero este es un proceso que no se puede lograr desde arriba, esto es, por decreto. En este sentido el movimiento solidario no se propone la conquista del poder como tarea inmediata y prioritaria. No creemos que la sociedad, ni las personas se puedan transformar mediante la estatización de la economía. Lo cual no implica que renunciemos al control del gobierno por la clase trabajadora, pero no aceptamos delegar esta tarea a ningún partido político, por más que se digan ser los representantes de la clase trabajadora. La clase trabajadora si se puede organizar de manera eficiente para producir y satisfacer las necesidades de la sociedad, no necesita de ninguna casta parasitaria que la gobierne. Por ello, sostenemos que la democracia real y auténtica, existirá cuando desaparezcan los partidos políticos y los políticos profesionales, esto es, aquellos que viven de la política, pero no viven, ni trabajan, para servir a la sociedad, sino a sus intereses, ya sean económicos, de vanidad o de poder”*²⁶

²⁶ Aquiles Montoya, Manifiesto, compartido días antes de su muerte, el 16 de enero 2012.

Para constituirse en una fuerza, la economía solidaria requiere de conectividad social: *“Es importante que las diversas iniciativas y movimientos se conecten entre sí para fortalecer dicha economía pero, el objetivo último de esta conectividad social es el buscar crear relaciones populares de poder o, sencillamente, crear relaciones solidarias que posibiliten enfrentar las relaciones burguesas de poder, ya sea en el ámbito económico, social, político, ideológico, mediático, del conocimiento, de la cultura, etc.”*²⁷.

Para ello el reto es comenzar a dar los siguientes pasos:

- 1) Informar y concientizar a la población, multiplicando los círculos de estudio, reflexión y debate sobre la forma en que funciona el sistema capitalista y formas, que existen desde ya, de transformarlo de manera global e integral, respetando la diversidad y autonomía de las diferentes poblaciones;
- 2) Comenzar, a partir de las iniciativas que ya existen, a crear entidades de gobierno y administración populares a todos los niveles (local, nacional e internacional) en las que todos y todas participen a las decisiones que los conciernen, eliminando las jerarquías, mistificaciones y evitando todo autoritarismo y vanguardismo;
- 3) Construir redes multidimensionales y consolidar las que ya existen para unir y articular las diferentes organizaciones y movimientos a los diferentes niveles;
- 4) Consolidar a todos los niveles y en todos los lugares una correlación de fuerzas con organizaciones y personas concientes y comprometidas que luchen y trabajen en forma multidimensional contra la violencia, la explotación, el pillaje, la militarización y el totalitarismo y por la nueva sociedad.

²⁷ Aquiles Montoya, comunicación personal, 2009.

V Cambios en la conflictividad social

Las fuentes de conflictividad social que vienen desde la colonia, desigualdad, despojo de tierras, racismo, represión continúan de existir mientras que la pobreza se agudiza y transforma a medida que la minería y los monocultivos avanzan. Los campesinos pierden sus tierras, la capacidad de cultivar sus alimentos y sus recursos naturales, viéndose obligados a comprarlos, emigrar y vivir en las ciudades o trabajar como peones jornaleros en las grandes plantaciones. Esta ha sido la historia de Guatemala hasta muy recientemente, actualmente todas estas condiciones persisten, sin embargo, las fuentes de conflicto se han diversificado surgiendo una conciencia colectiva de la existencia y el poder de las transnacionales contra las que se está luchando, así como de su alianza con las clases dominantes y con el ejército (e incluso con el narcotráfico). Así mismo, con la toma de conciencia de problemas como el de la mujer, que ha dado lugar a un movimiento nacional de mujeres contra el machismo, los feminicidios y la violencia familiar pero se plantea también la necesidad transformar la sociedad: *“En Guatemala, estamos frente a un Estado racista, oligárquico, dependiente, excluyente, patriarcal. El funcionamiento del Estado está intimamente ligado al funcionamiento de la democracia. Nos abarca y somos cuestionadoras de su funcionamiento. Somos parte de ese marco social y político, lo que no implica estar de acuerdo con las estructuras de dominio”*²⁸, aunque ellas también se plantean como objetivo a largo plazo *“la construcción de un Estado feminista”*²⁹.

Poco a poco los diferentes movimientos, como el sindical comienzan a realizar que todos los problemas tienen la misma causa. A pesar de ello, los movimientos sociales continúan a actuar por separado según los diferentes gremios y territorios, mientras que la población en general observa desde lejos sin involucrarse. El dogmatismo, el sectarismo y las jerarquías heredadas del pasado por la izquierda más las rivalidades por el financiamiento y poder y el miedo e individualismo heredados del conflicto armado hacen que no se haya

²⁸ AGENDA FEMINISTA, *Reflexiones feministas en Guatemala, Memorias de un proceso*, Guatemala, Alianza política sector de mujeres, marzo 2011, pp. 59- 63.

²⁹ *Ibid.*, p. 63.

dado un paso hacia adelante, fortaleciendo la correlación de fuerzas a favor de los movimientos sociales y unificandolos en una sola lucha común. Hacen también que la solución al problema se vea como la transformación del Estado en el marco de la democracia burguesa y no como la autonomía de la población y su capacidad de crear y consolidar sus propios organismos de gobierno y administración social a todos los niveles.

Por otra parte, la violencia política durante el conflicto armado se convirtió desde la firma de los Acuerdos de paz en una violencia criminal desencadenada³⁰. Los valores y principios de una gran parte de la población pero principalmente los jóvenes se perdieron y todo tipo de tráfico ilegales se desarrollaron (armas, personas, drogas). Los jóvenes migrantes expulsados de los Estados Unidos, que habían participado y aprendieron en ese país a organizarse en grupos criminales, llamados maras en Guatemala, al llegar al país empezaron a organizar grupos similares que a menudo están ligados al narcotráfico, amenazando a todas las personas pero principalmente a la población urbana que vive en el miedo y la inseguridad.

La decadencia y descomposición se extienden en toda la sociedad y mucha gente cree de menos en menos que el Estado y las Instituciones burguesas sean la solución, pero es gente marginal, con miedo a la organización y a trabajar juntos: *“La realidad cotidiana muestra que hemos arribado a una situación de pérdida de gobernabilidad, cuya manifestación más significativa es el creciente deterioro de la institucionalidad del Estado, su falta de funcionalidad e inoperancia, y su incapacidad de ofrecer una respuesta a las*

³⁰ El año 2008 podía ser catalogado como uno de los años más violento de la historia de Guatemala. “La tasa de muertes violentas alcanzó un índice de 46 por cada 100,000 habitantes. Fallecieron violentamente 6,292 personas, y de ellas, el 83.2% murió por arma de fuego; el 89.1% fueron hombres y el restante 10.9% mujeres. Las víctimas más afectadas por este tipo de hechos son hombres y mujeres de entre 19 y 36 años de edad. Cabe resaltar que a pesar de la información estadística que muestra el impacto del uso de armas de fuego en el país, los esfuerzos por controlar la proliferación de armas de fuego y la falta de control sobre su adquisición y uso no han estado presentes en la agenda de fortalecimiento institucional y perfeccionamiento del sistema jurídico”. CISIG, “Armas de fuego y municiones en Guatemala, Mercado legal y tráfico ilícito”, *Informes temáticos*, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, diciembre 2009. Disponible en: http://www.cicig.org/uploads/documents/informes/INFOR-TEMA_DOC01_20091201_ES.pdf

demandas sociales, políticas y económicas de la población. Un factor de gran preocupación es la presión que los grupos de poder, tradicionales y emergentes, ejercen sobre las instituciones para que éstas funcionen en beneficio de sus intereses... algunas instituciones, particularmente en los ámbitos legislativos, de justicia y de seguridad, han perdido integridad, independencia y autonomía. Eso ha permitido concretar decisiones que dañan a la población, el principio de legalidad, incluso el orden constitucional. En ese mismo renglón se cuenta la penetración que sufren las instituciones a manos de operadores de la delincuencia organizada, que usan a las instituciones para ganar impunidad y expandir sus negocios; y convierten a los agentes del orden público, de la justicia, la seguridad y la defensa nacional en guardianes de lo oculto y lo criminal. En muchos aspectos, "las elites del país logran eludir los efectos negativos de esta situación, pero no es el caso de la mayoría de la población, que se hunde cada vez más en la precariedad económica y social. Las necesidades en materia de salud, educación, justicia, seguridad e infraestructura básica, por ejemplo, no son atendidas adecuadamente por quienes toman decisiones. Por el contrario, quienes ejercen poder buscan únicamente satisfactores personales, sectarios y partidarios; y se muestran indiferentes ante los millones de guatemaltecos que diariamente afrontan la inseguridad, el desempleo, la denegación de justicia y la pobreza. En materia de justicia, la población se está organizando para brindarse a sí misma un servicio que el Estado no presta, de ahí vienen los linchamientos, la creación arbitraria de tipos delictivos y sanciones, la expulsión de autoridades, el asesinato de delincuentes y presuntos delincuentes a manos de grupos sociales que actúan tanto de manera espontánea como organizada. Si bien la debilidad del sistema de justicia hunde profundamente sus raíces en el conflicto armado interno, también hay otros factores que la exacerban. Por ejemplo, la falta de voluntad política para ofrecer un real acceso a la justicia y avanzar en la democratización del sistema; la ausencia de visión estratégica, la falta de eficiencia y transparencia en el gasto sectorial. Con el sistema debilitado, saturado, sometido a presiones de los grupos de poder y carente de procesos efectivos de coordinación, la impunidad encuentra terreno fértil para reproducirse, aún en casos que no tienen alto impacto ni en lo social ni en lo

*político. En materia de seguridad, la característica fundamental es la militarización y la existencia de prácticas contrarias al ideal democrático. La respuesta es represiva y con tendencia a replicar modelos contrainsurgentes que ponen en riesgo los derechos y las libertades inherentes al ser humano. En términos generales, la seguridad que debiera proporcionar el Estado está quedando bajo el control de empresas y cuerpos armados privados, que en su mayoría actúan fuera del marco legal. Mientras tanto, la Policía Nacional Civil está sumergida en un mar de corrupción, comportamientos delictivos, debilidad institucional y otros factores que le impiden cumplir con la tarea asignada. Y no hay esfuerzos realmente sólidos por rescatar a la institución policial del estado en que se encuentra, ni por desarrollar estructuras que podrían ser herramientas valiosas en materia de combate al crimen, como la Inteligencia Civil, cuya implementación continúa rezagada*³¹.

Esta situación descrita por AVANCSO en el 2006, a los diez años de haberse firmado los Acuerdos de paz, no ha dejado de empeorar y hace que la conflictividad social en 2014 haya pasado plenamente del plano político al criminal, utilizándose la criminalidad para reprimir los movimientos sociales, personas que denuncian o se oponen a la situación y cualquier contrincante político, en forma completamente fascisante. Por otra parte, se sigue repitiendo que si las cosas no se hacen es porque “no hay voluntad política” para hacerlas, sin considerar los importantes intereses político/económicos que determinan cualquier decisión del Estado.

Las instituciones del Estado democrático burgués ya no funcionan como se pudo ver claramente cuando La sentencia condenatoria de 80 años de prisión contra Efraín Ríos Montt, jefe de Estado de facto por genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, emitida por un tribunal del sistema de justicia guatemalteco el 10 de mayo de 2013, fue anulada por la Corte de Constitucionalidad diez días después³². “A pesar de que en las

³¹ AVANCSO, *Pronunciamiento de la FMM...*, op. cit.

³² El juicio y condena de Ríos Montt no significan que haya democracia en Guatemala, significan que las luchas y protestas del pueblo guatemalteco son lo suficientemente fuertes como para asustar a las clases dominantes y hacer que éstas, antes de que dichas luchas y

*audiencias públicas emergió con toda su crudeza la verdad de lo sucedido, los jueces y abogados, en el marco de la justicia burguesa, lograron la proeza de condenar a Ríos Montt para, algunos días después, anular el juicio y la condena, burlándose de las personas que con gran valentía y dolor dieron su testimonio, así como del conjunto de guatemaltecos y de la comunidad internacional*³³.

Hay, sin embargo dos funciones que el Estado no ha abandonado y continúan operando abiertamente para reprimir la conflictividad social: a) la respuesta inmediata y sumamente violenta a toda manifestación de descontento o de toda demanda del pueblo que ponga en peligro los intereses de las transnacionales y/o de la clase dominante; b) El apoyo incondicional a las corporaciones transnacionales, a la banca y a las clases dominantes nacionales e internacionales, tanto de punto de vista de la legislación como del uso de la violencia o los favoritismos político-económicos. Ante esto, los líderes de izquierda añoran al Estado de bienestar, pidiendo políticas que mejoren al Estado y reflejen las demandas del pueblo; No se oponen al capitalismo en cuyo marco dejan entender puede existir un Estado no excluyente, no racista, justo y equitativo en que no haya miseria ni discriminación de ningún sector social. El trabajo directamente con las bases para informarlas, compartir conocimientos y experiencias y definir junto con ellas alternativas es ignorado y minimizado, dirigiéndolo únicamente hacia fines electoralistas y reformistas. Su visión es a corto plazo, puntual e incapaz de comprender al sistema actual en su globalidad y las interrelaciones que existen entre lo político, lo económico, lo socio-cultural y lo ambiental por lo que sus estrategias no pueden salir del marco de lo local-nacional ni delinear a largo plazo una teoría y unas acciones dirigidas a transformar el sistema de explotación/destrucción en forma radical.

protestas constituyan un verdadero peligro, estén dispuestas a hacer algunas concesiones y a jugar el juego de la democracia para, desviando la atención del pueblo de las cosas verdaderamente importantes que continúan sucediendo: desalojos, asesinatos de líderes campesinos, militarización, etc., que se extienden en el país. VALENZUELA, Ileana, *Algunas reflexiones sobre el juicio a Ríos Montt*, Guatemala, mimeo, 24 de junio 2013.

³³ VALENZUELA, Ileana, *El sofisma de los Acuerdos de Paz (el caso de Guatemala)*, Ginebra, UNRISD, 1999.

Por otra parte, la lucha de los pueblos continúa, ya sea manifestando, ya sea en forma subterránea trabajando en contra de la lógica consumista, explotadora y destructora del sistema capitalista: las iniciativas de agricultura ecológica y rescate de las tecnologías (por ejemplo las semillas criollas) y conocimientos de los campesinos, nuevas formas de intercambio solidario, consumo responsable, relaciones de respeto entre los seres humanos y entre ellos y la naturaleza.

Aún no se ha llegado a conceptualizar ni teorizar la importancia de todas estas iniciativas como parte integral de un nuevo paradigma socioeconómico en el que no haya más ni explotación ni destrucción, en el que la diversidad natural y cultural sea vista como una riqueza y en el que todos puedan participar a la toma de decisiones que les conciernen a todos los niveles. Las ilusiones en la democracia burguesa todavía son muy fuertes

VI Los movimientos sociales

Es difícil, en un espacio pequeño dar cuenta de la complejidad y diversidad de los movimientos sociales en Guatemala, por lo que trataré de abstraer los elementos que me parecen principales:

- 1) Guatemala está asistiendo a un momento importante de organización comunitaria que se aprecia en la movilización en defensa del territorio contra las actividades extractivas. El Estado ha respondido actualizando las formas de represión supuestamente abandonadas con el fin del conflicto armado interno.
- 2) El sistema de dominación capitalista, así como crea una dicotomía entre el trabajo y los poseedores de los medios de producción, entre los seres humanos y la naturaleza y entre la política y la economía, entre la agricultura y el bosque, entre hombre y mujer, etc., ha logrado también dividir y separar a los movimientos sociales en compartimentos ficticios que no corresponden a la

realidad. Los campesinos y los indígenas en Guatemala son las mismas personas; Los ladinos son descendientes de indígenas; La degradación del ambiente y la disolución de las culturas comunitarias están íntimamente ligados a los megaproyectos, a las plantaciones y a las formas de extracción capitalistas; Las Mujeres, los hombres y los niños forman parte de las mismas familias y de las mismas comunidades, etc. Por lo que si se crea un movimiento social para construir un futuro y un mundo diferentes deberá vencerse esa dicotomía y construirse un movimiento global e integral, que incluya a todas las personas y organizaciones que luchan y trabajan contracorriente por un mundo mejor³⁴ y consolide una política estrechamente ligada a un paradigma económico alternativo basado en la solidaridad, la equidad y la ecología.

2) Al hablar de revolución global integral, obviamente es necesario reconceptualizar tanto el concepto de revolución como el de lucha de clases, sin negar que ambos continúan a ser estar vigentes, ya que la contradicción capital-trabajo continúa definiendo los destinos de la sociedad burguesa³⁵. Esto implica abandonar el concepto de revolución en tanto que enfrentamiento violento, conducido por las vanguardias de la clase obrera contra las clases dominantes con el fin de tomar el poder³⁶ y comenzar a construir y consolidar un concepto de revolución que involucre cotidianamente a toda persona y organización que sinceramente se oponen al sistema capitalista³⁷ y con el

³⁴ En la segunda década del siglo XXI no deberíamos seguir hablando de movimientos sociales fragmentados, como dijimos anteriormente, generalmente manipulados por las clases dominantes para que no transgredan los límites del sistema capitalista y no amenacen su poder, sino de un movimiento revolucionario global de todas las categorías por el cese de la forma de producción capitalista, lo que conlleva obligatoriamente a tejer nuevas relaciones entre los seres humanos y entre ellos y la Naturaleza.

³⁵ SALVIA, Sebastián, "Discusiones sobre la noción de clase y las reelaboraciones de John Holloway a fines de los '90", en *Theomai*, Buenos Aires, 2011, N°23.

³⁶ Como lo ha planteado Holloway, se trata de asumir que *lo que está en discusión en la transformación revolucionaria del mundo no es de quien tiene el poder sino la existencia misma del poder. Lo que está en discusión no es quien ejerce el poder sino como crear un mundo basado en el mutuo reconocimiento de la dignidad humana, en la construcción de relaciones sociales que no sean relaciones de poder.* HOLLOWAY, John, *Cambiar El mundo sin tomar el poder, el significado de la revolución de hoy*, Buenos Aires, Herramienta/BUAP, 2002, p.36)

³⁷ "Asistimos a una producción que compromete toda la vida social, que continúa produciendo bienes materiales pero que crea también ideas, imágenes, conocimientos, valores, formas de cooperación, relaciones afectivas... Esas características biopolíticas de la producción determinan que el poder se ve cada vez más sobre la vida misma; ya no sólo importa el control disciplinario de la fuerza de trabajo, sino un control pleno sobre toda la población. Se ha llegado a un estadio más acabado de la subsunción real para lo cual es preciso un biopoder,

cambio de sus actitudes y comportamientos comienzan a construir otro. Implica también pensar la lucha de clases contra las elites dominantes, *“no como la obra de un sujeto privilegiado históricamente determinado, como en su momento se consideró a la clase obrera, sino obra de la confluencia de fuerzas sociales críticas que han acumulado poderes y saberes para propiciar cambios sustanciales en el sistema existente”*³⁸.

4) En Guatemala, el discurso contra el neoliberalismo y por la democracia después de los acuerdos de paz, ha quedado a nivel reformista y frenado las aspiraciones implícitas de cambio social de la población, que no se manifiestan explícitamente pero existen.

En este contexto pleno de contradicciones y de luchas por el poder y el dinero a todos los niveles, el pueblo de Guatemala, principalmente los campesinos e indígenas pero también las mujeres, los jóvenes y los trabajadores que viven cotidianamente los desastres causados por el sistema dominante siguen luchando y buscando nuevas formas de democracia que *“desafían las formas capitalistas” de las relaciones sociales, interpelando al Estado nacional en su pretensión de totalidad absoluta. Por esto, las autoridades comunitarias se presentan frente a las autoridades estatales en condición de iguales, hablando de autoridad a autoridad, entre gobernantes, y no relación de sumisión y subalternidad como la que se da entre gobernantes y gobernados. De aquí emana otra forma de hacer política, otra forma de relacionarse con el poder, otra forma de resistir al embate capitalista, al embate estatal. En el caso de los pueblos indígenas y de muchas comunidades campesinas en Guatemala, por ejemplo, la opción ha sido por la comunidad y por la “democracia radical”, más allá del individualismo y de la “democracia formal”. He ahí nuestra fuerza, sin duda, la tenaz persistencia de nuestras luchas. Y no estoy idealizando las comunidades, no estoy diciendo que no*

que ante la pérdida del factor de medida en el uso de la fuerza laboral que permitía la sujeción salarial, ahora llegue a todos los espacios de la vida individual y social”. MONCAYO, Víctor Manuel, ¿Cómo aproximarnos al Estado en América Latina?, en Mabel Thwaites Rey (edit.), *El Estado en América Latina: continuidades y rupturas*, Santiago de Chile, Arcis/CLACSO, 2012..

³⁸ YAGENOVA, Simona (coord.), *Los movimientos sociales y el poder: Concepciones, luchas y construcción de contrainsurgencia*, Guatemala, FLACSO, 2010, p.18.

tengamos contradicciones, ni que todo sea color de rosa. Es lógico pensar que dentro de la comunidad hay diversidad de sentires, de opiniones, de formas de ver el mundo y pensar el cambio social, pero lo interesante es que las decisiones se toman en asamblea, luego de muchas horas de discusión y deliberación; y nadie en un puesto de responsabilidad puede hacer lo que quiera, sino que debe constantemente consultarlo, apoyándose de la experiencia de los ancianos y ancianas; nadie está exento de dar cuentas y cualquier puesto de autoridad puede ser revocado nuevamente por la asamblea. Por supuesto que hay lugares donde hay líderes “autoritarios” que quieren imponer su voluntad a la comunidad, pero este tipo de situaciones sólo reflejan cómo dentro de las comunidades se libran múltiples luchas, muchas de ellas conducidas por los y las jóvenes, reclamando su voz y haciendo sentir su presencia, aunque hacia afuera se presenten como comunidades unidas. También está el caso del ataque recurrente que pretende subordinar a la mujer adentro de la comunidad, pero nadie podría negar que son las mujeres –así como los jóvenes– el principal motor de cambio dentro de las comunidades, pujando por mejorar su situación en ellas, no sólo sobre cuestiones tan esenciales como resistir a ser casadas o defender su derecho a herencia, sino haciéndose cada vez de más espacios para hablar y para ocupar cargos de autoridad... Ya no sólo es el “juego” de la democracia burguesa desde el punto de vista de los de arriba, sino también de los de abajo. Por eso se utilizan los diferentes recursos y espacios que nos permite dicha democracia, como son las normativas internacionales de los derechos colectivos de los pueblos originarios (Convenio 169). Sólo que ahora ya no se trata de reclamar únicamente derechos culturales, como pretendía la doctrina del “multiculturalismo neoliberal”, sino de reclamar derechos colectivos sobre el territorio, incluyendo la propiedad comunitaria de la tierra y el derecho al autogobierno. De ahí que una notoria expresión comunitaria en Guatemala sean las “consultas populares” en donde las comunidades han manifestado su rechazo a la minería, las hidroeléctricas y en general a los megaproyectos³⁹.

³⁹ Las “consultas comunitarias de buena fe” y “consultas de vecinos” desarrolladas desde 2005 en unos 65 municipios del país (un 20% del total), movilizan casi a un millón de personas (en un país de 15 millones de habitantes). En cada lugar, con una participación abrumadora, han manifestado su negativa a que en su territorio se instalaran actividades extractivistas. Esto fue

“Agotadas diferentes formas de protesta, como caminatas y plantones, las vías de negociación política y puesta así la situación local, se organiza la primera consulta comunitaria respecto de la minería, como proceso social colectivo y organizado en respuesta a una agresión por parte del poder hegemónico. Las consultas comunitarias se constituyeron en una herramienta compleja, en tanto son una expresión de organización del movimiento social, en este caso maya-sipakapense para enfrentarse a los límites de la democracia, es decir cuando se han cerrado los espacios de participación y decisión”⁴⁰.

“Después de una guerra y una experiencia devastadora de genocidio y actualizando formas históricas, muchas comunidades —sobre todo, pero no únicamente, indígenas— se están oponiendo a un “desarrollo” que una vez más les deja fuera y amenaza lo poco que les queda: el mundo de vida más cercano. En este proceso se van transformando las mismas comunidades, acorde al contexto de globalización y política neoliberal, pero también a las nuevas formas de entenderse como pueblos indígenas y como ciudadanos y ciudadanas guatemaltecos. En la defensa de lo más inmediato, estas comunidades están forjando una alternativa para todo el continente. Se han convertido en la base de una propuesta política que pretende dotar de contenido participativo a una democracia moribunda y que busca nuevas formas de articulación con el Estado desde el reconocimiento de sus estructuras históricas como espacios legítimos de representación y actuación. Por eso es mucho lo que nos jugamos. Si el Estado logra ahogarlas, nos quedaremos sin una importante alternativa a este capitalismo destructivo”⁴¹. Es decir, que mientras las comunidades están cuestionando el modelo de desarrollo, se les propone como alternativa “dar un contenido participativo a la

posible porque “las consultas” supusieron todo un ejercicio de mecanismos comunitarios de información, debate y decisión a través de las instancias comunitarias, con participación de todo tipo de liderazgos: maestros, catequistas, pastores, exguerrilleros, ex patrulleros, migrantes; y mujeres, muchas mujeres y niños. LÓPEZ, Mario, *Las luchas comunitarias en...*, op. cit.

⁴⁰ GARCÍA, Rocío, “Soberanía se escribe con ‘S’ de Sipacapa” en Simona Yagenova y otros (coord.) *Los movimientos sociales y el poder: concepciones, luchas y construcción de contrainsurgencia*, Guatemala, FLACSO, 2010, p.36.

⁴¹ LÓPEZ, Mario, *Las luchas comunitarias en...*, op. cit.

democracia moribunda y buscar nuevas formas de articulación con el Estado”, en vez de analizar junto con ellas el carácter colonizador del concepto de desarrollo, la necesidad de definir estrategias de construcción del futuro que lo sobrepasen y de que el Estado vaya desapareciendo a medida que se construyen entidades de gobierno autónomas de los pueblos.

VII Los movimientos subterráneos

Al hablar de movimientos sociales subterráneos no me refiero a grupos estructurados articulados en torno a demandas que provocan una relación conflictiva con el Estado, sino a las actividades concretas que miles de personas e iniciativas efectúan cotidianamente contracorriente, fuera de la lógica capitalista, de manera que al mismo tiempo que corroen su lógica y sus principios construyen alternativas que van en la dirección de otro mundo, otra sociedad y otra vida para los pueblos. Su principal característica y su mayor debilidad es que no están articuladas ni coordinadas entre sí, sino que actúan en forma dispersa y separada y a menudo rivalizan entre ellas, de manera que no constituyen una fuerza ante las imposiciones del Estado y de las clases dominantes. La otra característica es que disocian completamente sus actividades de la construcción de un paradigma socio-económico diferente al capitalismo por lo que, ni las personas ni las organizaciones que forman este movimiento silencioso y subterráneo están siempre conscientes de que son la herramienta clave de un proceso revolucionario de transición. Razón por la que, los líderes no actúan como personas comprometidas con el presente/futuro del país, de sus familias y comunidades sino que trabajan por dinero como parte de una ONG o gobierno ante los cuales deben cumplir con los términos de referencia y rendir cuentas.

Bien que en sus orígenes se haya dado el nombre de economía solidaria a las iniciativas aisladas, que desde muy temprano y a través de toda la historia del capitalismo han tratado de constituirse en actividades económicas con una finalidad socio-ecológica fuera de la lógica de ese sistema, no se le ha dado el

contenido político radical que tiene, ya que las múltiples iniciativas de economía solidaria que existen muestran concretamente la posibilidad de construir un paradigma político-socio-económico y cultural fuera de la lógica capitalista⁴².

Por lo que la ASAPP considera que es necesario dar al concepto de economía solidaria toda su riqueza y ligarlo a los movimientos y luchas políticos contra el capitalismo y por una Guatemala mejor. Ya que, las condiciones materiales, los recursos naturales y tecnológicos necesarios existen para organizar a la sociedad en un sistema global alternativo basado en la solidaridad. A pesar de ello, la mayoría de organizaciones y líderes guatemaltecos no están preparados para ello ni trabajan en esa dirección, en gran parte debido a la fuerte represión y violencia que se ejerce contra las comunidades que defienden sus derechos y aspiran a una mejor sociedad. Las mentes siguen dominadas por el marco lógico y la ideología impuesta por el sistema capitalista/consumista mientras que, socialmente, seguimos siendo esclavos encadenados al consumismo, al sistema de poder y a su símbolo el dinero (bajo forma de salario, generalmente).

Es por ello que la ASAPP, conformada por líderes comunitarios trata de romper con ese dominio y con esas cadenas, no por medio de discursos dogmáticos ni declaraciones de intención sino con una reflexión global sobre el sistema actual, sus formas de funcionamiento y la forma de construir un sistema socio-económico alternativo con acciones y cambios de comportamiento y actitudes concretos. Los objetivos están claros, el sistema capitalista ha caducado, aunque siga siendo fuerte, poderoso y sumamente destructor, aunque haya desarticulado los mecanismos y espacios de solidaridad de las comunidades, ha claramente demostrado que no puede

⁴² Miles de iniciativas de economía solidaria existen en el mundo y contribuyen a construir una nueva manera de concebir la economía con dimensiones sociales, políticas y culturales que sitúan en el centro de la actividad económica la satisfacción de las necesidades humanas, la paz y el respeto a la naturaleza, transformando la lógica de lucro y acumulación de capitales en una lógica de solidaridad. Sin embargo, estas iniciativas están aisladas y divididas, la desunión y muchas veces las rivalidades entre ellas (muchas veces por financiamiento) hacen que a pesar de su peso no logren constituirse en una alternativa global al sistema actual y que sus esfuerzos puedan ser fácilmente cooptados por el sistema vigente.

organizar a la sociedad de modo que alcance el bienestar y la felicidad. A medida que se expande y se hace más poderoso se vuelve cada vez más destructivo y letal, por lo que no tiene una justificación histórica para seguir existiendo y la única solución sería que los mismos pueblos consoliden el nuevo paradigma socio-económico viable.

La ASAPP tienen claros también los principios y valores de la otra economía que se quiere construir, y trata de implementarla, con muy pocos medios, por medio de iniciativas concretas relacionadas con: la producción sostenible (agroecología, agroindustria,), el intercambio solidario, el consumo responsable, el rescate de tradiciones y semillas y la formación de una caja comunitaria y solidaria de ahorro y crédito⁴³. Todas estas iniciativas, aunque incipientes son muy importantes, en sí ya que no son el objetivo sino el instrumento que permite hacer una reflexión política, de información, de formación, de análisis críticos de manera alcanzar los verdaderos objetivos: 1) impulsar un cambio social integral en el que cada persona pueda participar con conocimiento de causa y responsabilidad; 2) constituir una fuerza capaz de respaldar los movimientos de protesta y resistencia de las comunidades para hacer valer sus derechos y minimizar la violencia⁴⁴; 3) comenzar a construir las bases de una sociedad, un mundo y una vida solidarios.

El problema que se plantea actualmente es entonces, no solamente, ¿Qué hacer? Sino ¿Cómo definir e implantar una estrategia no violenta de cambio social global e integral que rompa con la explotación, la destrucción y la muerte, sin depender de la “voluntad política” del Estado? ¿Cómo unir y organizar todos los esfuerzos (individuales y colectivos), proyectos y luchas que ya existen para consolidarlos en una fuerza política de socavamiento/construcción común en la que se respeten la diversidad y las diferentes cosmovisiones? ¿Cómo hacer para que todas estas experiencias se

⁴³ En tanto que a mediano y largo plazo estas actividades tendrán que complementarse con otras actividades transformadoras en el ámbito de la formación, de la ecología, del arte, de la industria, de la ciencia, de la salud, etc.

⁴⁴ Para ello, las iniciativas solidarias estarán plenamente incardinadas en el entorno social en que se desarrollan, lo cual exige la cooperación con otras organizaciones que afrontan diversos problemas del territorio y la implicación en redes, como único camino para que experiencias solidarias concretas puedan generar un modelo socio-económico alternativo.

liguen, se fortalezcan, se multipliquen y se expandan en un contexto político/económico totalitario en el que todo está hecho para que los movimientos sociales desaparezcan y siga imperando el sistema dominante? ¿Como acumular y consolidar contra-poderes, a todos los niveles, hasta llegar a tener una relación de fuerzas favorable a la transformación social e ir haciendo desaparecer la represión y la violencia?

Los elementos de respuesta los va dando el movimiento social mundial que está estableciendo redes y alianzas a todos los niveles⁴⁵. Las poblaciones locales tienen que tomar el poder de construir su propio futuro, fortaleciendo los movimientos contra la opresión y la explotación y estimulando todos los cambios que vayan en dirección de sus objetivos. Hay que reivindicar el derecho de cada persona a convertirse en albañil del futuro, de dejar la indiferencia, el miedo y la pasividad para tomar en mano sus responsabilidades, su capacidad crítica y su poder-hacer: *“Hay que recuperar el sentido profundo de la política, es decir, la práctica de un oficio colectivo y comunitario, cuyos valores fundamentales son la responsabilidad y el asombro, la honestidad, la coherencia, la humildad, el reconocimiento del Otro, la capacidad de escucha, el compromiso y la solidaridad. Estos valores deben convertirse en elementos centrales y sustantivos de las prácticas personales, comunitarias y organizativas que permitan vincular las necesidades con nuevas formas de lucha y resistencia política. Hay que Alentar y promover la generación de procesos de abajo hacia arriba y de la periferia hacia el centro”* (Plataforma, Agraria, 2004: Pág. 4). Ya que para sobrepasar al sistema capitalista y salir de la crisis multidimensional en que vive Guatemala, sin recurrir ni a la violencia ni a la democracia burguesas es necesario trabajar arduamente y dirigir el mayor número de esfuerzos, recursos culturales y

⁴⁵ Empezándose también a plantear el problema de la cooperación extranjera y sus objetivos actuales y la necesidad de que apoye la construcción de alternativas: “Para que el Centro no pueda seguir imponiendo su hegemonía, para que los pueblos de la Periferia tengan alternativas reales de autocentramiento, para que la lógica capitalista no limite ni el desarrollo humano ni el desarrollo social. Porque frente al capitalismo global hay que oponer el esfuerzo global de la esperanza, el derecho y la razón. Porque sólo con la praxis se transforma, sólo trabajando juntos transformaremos el mundo de todos. Con todos los recursos posibles, intentando desligarlos de la lógica comercial y productivista”. MARTÍNEZ PEINADO, Javier, *El capitalismo global, límites al desarrollo y a la cooperación*, Barcelona, Icaria/Antrazyt, 2001, p.107).

naturales hacia la satisfacción de las necesidades sociales y la toma de conciencia de la población. Lo que no quiere decir que las poblaciones no deban utilizar la democracia burguesa (elecciones) ni a la violencia como instrumentos o medio para hacer avanzar el proceso en una situación determinada, cuando consideren que tienen la relación de fuerzas necesaria y les permiten aumentar la conciencia y fortalecer al proceso de cambio global/integral, pero de ninguna manera esos dos instrumentos pueden constituirse en objetivo final.

Balances y perspectivas

Ya entrado el siglo XXI, tanto las clases dominantes como los pueblos se encuentran con una gran experiencia histórica, hemos visto al sistema capitalista, dominante cambiar a medida que nuevas tecnologías, nuevos mercados y nuevos contextos históricos y geopolíticos iban surgiendo. Al mismo tiempo que el Estado Nacional desaparece y se va conformando el Estado títere al servicio de las transnacionales, del narcotráfico y del crimen organizado.

Esto no quiere decir, de ninguna manera, que el capitalismo haya terminado o haya perdido la capacidad de seguir dominando, explotando y destruyendo al mundo, al contrario, su única posibilidad de seguir reproduciéndose es seguir explotando al máximo la fuerza de trabajo, no solamente obrera sino de todos los trabajadores y personas explotadas y oprimidas, así como destruyendo la naturaleza. Cada vez hay menos lugares y pueblos que escapen a su dominación, la cual utiliza los mismos instrumentos que en el pasado, la violencia y la manipulación ideológica para dominar al pueblo. En este contexto, la única vía de salida es imaginar, encontrar y edificar un nuevo paradigma socio-económico que salga de la lógica del capital y logre unir y fortalecer a los diferentes movimientos en una sola lucha. Sin embargo, la falta de un movimiento transformador en el que se comiencen a formar cientos y miles de líderes del pueblo con suficiente poder de

convocatoria y la falta de una estrategia o programa elaborado en forma participativa, que articule en forma coherente las diferentes luchas e iniciativas en torno a objetivos unificados hacen que la población esté dividida, no vislumbre ninguna salida a la grave situación en la que se encuentra y se sienta desarmada ante la violencia estatal.

Los diferentes movimientos en el país manifiestan el descontento de los pueblos y comunidades y presentan demandas al gobierno con el objetivo de que el Estado responda a sus demandas y cambie su legislación para solucionar sus problemas. Sin embargo cada vez más líderes y comunidades toman conciencia de que es el mismo Estado el que auspicia y protege a las empresas transnacionales por lo que el extractivismo nos concierne directamente a todos y es necesario apoyar los movimientos de protesta y resistencia indígena/campesinos.

Por medio de actividades concretas que sitúan a los seres humanos en el centro se consolida el poder del pueblo de organizarse, tomar decisiones, hacer cosas, producir ecológicamente, consumir diferentemente, etc. Sin embargo, estos movimientos subterráneos están limitados al no visualizarse su potencial transformador, ya que unir a todos esos movimientos e iniciativas para convertirlos en un instrumento de cambio parece ser la única forma de conformar una correlación de fuerzas a favor de la población.

Tampoco se ven estas iniciativas como una escuela de autogobierno en la que las personas y organizaciones tomen sus decisiones y creen sus propias reglas y normativas, en forma autónoma sino que siguen siendo controladas por ONG u organizaciones muy jerarquizadas, castrando su dimensión transformadora. Es decir que, como casi todo en un periodo de transición histórica, el trabajo de las ONG es también un cuchillo de doble filo, por una parte su misión es reproducir al sistema capitalista induciendo a las comunidades a ser modernas, productivas, rentables, competitivas, etc., por otra parte, al emplear un discurso y conceptos que ya no corresponden a ese sistema dan lugar a que las poblaciones den rienda suelta a sus sueños y

expectativas, comenzando a imaginar y construir relaciones diferentes a las capitalistas (sostenibilidad, solidaridad, trabajo conjunto, etc.).

Ya que, el poder popular no surge de un día para el otro masivamente sino se va construyendo por medio de iniciativas individuales y colectivas, a medida que se articulan, forman redes y coordinan sus actividades en vías de un objetivo de cambio común. Esto, desafortunadamente no existe todavía en Guatemala, es el reto que los diferentes movimientos e iniciativas se unan y articulen en órganos de poder, formando redes y coordinándolas por medio de un trabajo subterráneo, paciente y constante a nivel tanto local como nacional e internacional. Las comunidades indígenas en base a sus formas organizativas tradicionales, muchas veces sin jerarquías y muy participativas, en base a la toma de decisiones en asambleas comunitarias están construyendo otro tipo de democracia y otro tipo de movimiento social en el que se utiliza el marco democrático del Estado burgués para tratar de hacer valer sus derechos, aunque siguen subordinadas a la democracia burguesa.

En un momento de transición histórica, en el que los movimientos sociales se encuentran desarticulados y sin una estrategia clara ante ellos, es sumamente difícil afrontar la violencia estatal así como unir al resto de la población en una sola estrategia de cambio. La mayor dificultad se encuentra:

- 1) En las intervenciones de líderes de organizaciones y comunidades así como ONG que en vez de impulsar los movimientos hacia adelante, articularlos y mostrar su potencial transformador, los vacían de su contenido de cambio social y reducen sus fines a objetivos partidarios y electoralistas;
- 2) La colonización de nuestras propias mentes, haciendo que reproduzcamos al sistema con nuestra forma de pensar, nuestras actitudes y comportamientos, nuestra forma de producir, intercambiar y consumir, etc.;

3) La relación de fuerzas a favor de la clase dominante en tanto no se logre independizar nuestras mentes y actuar en tanto sujetos sociales, individuales y colectivos autónomos, responsables y comprometidos;

4) La apatía, pasividad e indiferencia de la mayoría de la población que, a pesar de verse seriamente afectadas por la crisis prefieren no involucrarse con los movimientos sociales y, talvez inconcientemente, o talvez concientemente en forma oportunista, prefieren fortalecer el poder de las clases dominantes nacionales e internacionales.

Si esto no cambia, la perspectiva es que un nuevo totalitarismo terminará de implantarse en Guatemala, las transnacionales seguirán extrayendo las riquezas que del país hasta dejarlo convertido en un desierto y los jóvenes y niños de hoy vivirán una nueva violencia y una destrucción masiva de su ambiente cultural y natural. En el caso contrario, es el pueblo el que con sus luchas y trabajo irá construyendo una nueva perspectiva en la que haya cada vez menos violencia, se respete cada vez más a los seres humanos y a la naturaleza, todos vivan bien y haya más paz y felicidad.

Bibliografía

AGENDA FEMINISTA, *Reflexiones feministas en Guatemala, Memorias de un proceso*, Guatemala, Alianza política sector de mujeres, marzo 2011, pp. 59-63.

AVANCSO, *Pronunciamiento de la FMM en el 16 aniversario del asesinato de Myrna Mack*, Guatemala, Información-AVANCSO, 11 septiembre 2006.

BA TIUL, Kajkok (Máximo), "Movimiento indígena: Estado, democracia y partidos políticos en el continente de Abya Yala", en Simona Yagenova (coord.) *Los movimientos sociales frente al Estado, La democracia y los partidos políticos*, Guatemala, FLACSO, 2009.

CAMBRANES, Julio Castellanos (edit.), *500 años de lucha por la tierra:*

estudios sobre propiedad rural y reforma agraria en Guatemala, Guatemala, FLACSO, 1992, Tomo 2, pp. 29-30.

CISIG, “Armas de fuego y municiones en Guatemala, Mercado legal y tráfico ilícito”, *Informes temáticos*, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, diciembre 2009. Disponible en: http://www.cicig.org/uploads/documents/informes/INFOR-TEMA_DOC01_20091201_ES.pdf

COLUSSI, Marcelo, “Latinoamérica, ¿va hacia la izquierda?”, en *Revista Análisis de la Realidad Nacional*, Guatemala, Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, mayo 2014, Año 3, N°49.

CONSEJO POLÍTICO 13 BAKUNIN, “*La Paz Firme y Duradera comprometida hace 13 años sigue siendo la meta de los sectores sociales y fuerzas políticas, comunidades y organizaciones revolucionarias, democráticas y progresistas de Guatemala*”, en Albedrío, Guatemala, 30 de diciembre 2009. Disponible en: <http://www.albedrio.org/hm/otrosdocs/comunicados/cp13-004.htm>

GARCÍA, Rocío, “Soberanía se escribe con ‘S’ de Sipacapa” en Simona Yagenova y otros (coord.) *Los movimientos sociales y el poder: concepciones, luchas y construcción de contrainsurgencia*, Guatemala, FLACSO, 2010.

GUTIÉRREZ, Edgar, “Guatemala hoy, la reconfiguración cooptada sobre instituciones fallidas”, en VVAA *Narcotráfico, corrupción y Estados, Como las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y México*, México D.F., Debate, 2012.

HOLLOWAY, John, *Cambiar El mundo sin tomar el poder, el significado de la revolución de hoy*, Buenos Aires, Herramienta/BUAP, 2002.

IEPALA, *Guatemala: un futuro próximo*, Madrid, Iepala, 1980.

JONAS, Susan, “La democratización por medio de la paz: el difícil caso de Guatemala” en VVAA *Guatemala historia reciente (1954-1996). Proceso de paz y contexto internacional*, Guatemala, FLACSO, 2013, Tomo 4.

LARRAÍN, Javier, *Entrevista a Françoise Houtart*, ADITAL, en el marco del Observatorio de la Plurinacionalidad apoyado por la Fundación Rosa Luxemburgo y la Comunidad de Estudios JAINA, Bolivia, 2014.

LÓPEZ, Mario, *Las luchas comunitarias en la Guatemala de hoy*, Guatemala,

Guardabarrancos, 2012.

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricardo, “La guerra que viene: operaciones militares al sur de México y Centroamérica”, en *Rebelión*, 14 de mayo 2011. Disponible en: <http://www.rebelion.org/noticias/2011/5/128390.pdf>

MARTÍNEZ PEINADO, Javier, *El capitalismo global, límites al desarrollo y a la cooperación*, Barcelona, Icaria/Antrazyt, 2001.

MELLAH, Faouez, “L’Etat dans les formations sociales périphériques: éléments pour un débat”, en *Cahiers de l’IUED: Les espaces du prince, L’Etat et son expansion dans les formations sociales dependantes*, París, PUF, 1977.

MONCAYO, Víctor Manuel, ¿Cómo aproximarnos al Estado en América Latina?, en Mabel Thwaites Rey (edit.), *El Estado en América Latina: continuidades y rupturas*, Santiago de Chile, Arcis/CLACSO, 2012.

MORALES, Mario Roberto, “La dictadura asienta sus bases”, en *La Palabra.com*, 27 de mayo 2014. Disponible en: <http://esp.mexico.com/lapalabra/index.php?method=una&idarticulo=49292>

OLIVA, Roberto, *Caso Rosemberg, Una conspiración en Guatemala donde la realidad supera la ficción*, Guatemala, Produce, 2012.

PSOCA, “25 años después Esquipulas II: tragedia social, neocolonización, saqueo imperialista”, en *Revista centroamericana de teoría, Política, Economía e historia*, 2012, N°13.

SALVIA, Sebastián, “Discusiones sobre la noción de clase y las reelaboraciones de John Holloway a fines de los ‘90”, en *Theomai*, Buenos Aires, 2011, N°23.

SOLÍS, Isabel y Lourdes Rodas, “Colonizaron nuestros pensamientos. Pero no nuestros corazones”, en *ALAI - América Latina en Movimiento*, 15 de mayo del 2007. Disponible en: <http://alainet.org/active/17471&lang=es>

TORRES RIVAS, Edelberto, *El Estado en Guatemala: ¿orden con progreso?*, Guatemala, PNUD, 2010.

URNG, *Guatemala, Propuesta a la sociedad, cuatro objetivos, nueve cambios, cuatro prioridades*, Guatemala, URNG, 1995.

VALENZUELA, Ileana, *El sofisma de los Acuerdos de Paz (el caso de Guatemala)*, Ginebra, UNRISD, 1999.

VALENZUELA, Ileana, *Algunas reflexiones sobre el juicio a Ríos Mont*, Guatemala, mimeo, 24 de junio 2013.

YAGENOVA, Simona (coord.), *La protesta social en Guatemala: Una aproximación a los actores, demandas, formas, despliegue territorial, límites y alcances*, Guatemala, FLACSO, 2007.

YAGENOVA, Simona (coord.), *Los movimientos sociales y el poder: Concepciones, luchas y construcción de contrainsurgencia*, Guatemala, FLACSO, 2010.